

RICARDO RAVELO

EL AMO DE
JALISCO

UN GOBIERNO CON ESTRUCTURA CRIMINAL



Veris.
cópia

RICARDO RAVELO



Veris.
cópia

Página del título

Derecho de autor

inefable.

El amo de Jalisco

Un gobierno con estructura criminal

Primera edición: noviembre, 2023

D.R. © 2023, Ricardo Ravelo

D.R. © 2023, Editorial Inefable, S.A. de C.V.

Tajín núm. 417, int. 101, colonia Narvarte Oriente,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03023, Ciudad de México.

Queda rigurosamente prohibido bajo las sanciones establecidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados internacionales suscritos por México, reproducir total o parcialmente esta obra en cualquier forma o medio, incluidos los mecánicos o digitales así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público sin previa autorización.

Todos los comentarios, ideas, opiniones, apuntes, documentos, información, descripciones y expresiones que aparecen en esta obra corresponden al autor y no son responsabilidad de la editorial ni representan necesariamente su punto de vista.

ISBN: 978-607-59987-1-8

Impreso en México

A YELILA:

*Si te hubiera buscado, me habría extraviado en el camino;
si, imaginado, serías aun idea.
Nuestro encuentro fortuito fue, nunca lo he dudado,
un bello regalo de la vida.*

Dedicatoria

Contenido

[“Página del título” en la página 1](#)

[“Derecho de autor” en la página 2](#)

[“Dedicatoria” en la página 3](#)

[Introducción 11](#)

[EL NARCO ENCARNADO 19](#)

[Violencia continua 24](#)

[Conflicto constante 27](#)

[Mapeo del crimen 30](#)

[Cárteles imparables 39](#)

[RADIOGRAFÍA DE LA PUTREFACCIÓN 43](#)

[Sucios poderes 45](#)

[El Chueco y compañía 66](#)

[Mafias internacionales 85](#)

[Complejo Caribe 91](#)

[Morelos adentro 107](#)

[Ni libertad ni justicia 135](#)

[CJNG: EL FAVORITO 151](#)

[Sondeo 153](#)

[“Me gusta hacerlo enojar, quiero verlo muerto” 163](#)

[El Mencho: sucesores 167](#)

[EL AMO DE JALISCO 177](#)

[CJNG: la máquina de la muerte 179](#)

[Camaleón de mecha corta 184](#)

[“Te parto tu madre” 198](#)

[Ataque misterioso 205](#)

[Del Gabinete al Poder Judicial 216](#)

[Alfaro vs. UdG 228](#)

[La red de Alfaro y Mireles 231](#)

[Barbarie, narcotráfico e inseguridad 245](#)

[Saqueo y tráfico 253](#)

[Patrullas en millones 259](#)

[Gobierno de apariencias 279](#)

Absoluto Alfaro 283

El vacío ideológico 291

“DESGOBIERNO” EN OCCIDENTE 295

La “narcofiscalía” permite robo 297

La Casa del Terror 303

Los enemigos de Alfaro 308

“Nadie salió a atender” 315

“Nunca los podrán identificar” 317

Los tráileres de la muerte 321

El Cholo, la única pista 322

En tierra de **El Mencho** 327

Alfaro mentiroso, **El Mencho** poderoso 334

Epílogo 347

INTRODUCCIÓN

Nada parece haber cambiado en el país desde los tiempos de los gobernadores de Tamaulipas acusados de proteger al crimen organizado: Tomás Yarrington, preso en Estados Unidos; Eugenio Hernández —en prisión domiciliaria desde agosto de 2023, bajo vigilancia de la Fiscalía General de la República (FGR)— y Francisco García Cabeza de Vaca, quien goza de impunidad, pese a estar bajo investigación por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, tras acusaciones de recibir sobornos de cárteles de la droga como Los Zetas y del Golfo.

Aún permanecen en el poder otros personajes tan perjudiciales como los mencionados y uno de ellos es Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, exalcalde de Tlajomulco de Zúñiga y de Guadalajara. Ha gobernado arrastrando saldos negros por sus presuntos vínculos criminales y por hacer negocios presuntamente sucios al amparo del poder político.

Este nuevo volumen registra una exploración sobre estos gobernadores —desde diferentes partidos, con disímiles posiciones, en diversas áreas de la nación mexicana—. Sobre cómo han creado una especie de basamento para el ejercicio de la corrupción a través de las instituciones gubernamentales y gradualmente se han relacionado, de modos más complejos, con el poder del crimen organizado, sobre todo con su extensión más poderosa, el narcotráfico.

El amo de Jalisco está concebido como una revisión desde lo general hasta lo particular. Desde la comprensión del complejo panorama hasta la puntualización en uno de los ejemplos contemporáneos más relevantes, problemáticos y tal vez peligrosos para el futuro abanico político y ejecutivo en México. Y dentro de esa puntualización, atisbar nuevas operaciones, procedimientos y fórmulas que se están llevando a cabo por tendencias como Movimiento Ciudadano (MC), utilizado por Alfaro y sus allegados junto a caudillos históricos que se mueven en lo invisible. Dicho partido se ha caracterizado por lanzar al poder a personajes de dudosa reputación, empezando por su líder, Dante Delgado, procesado en 1994 por el desvío de 450 millones de pesos y

encarcelado durante un año y tres meses en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, al final de su gobierno en ese estado. De acuerdo con él, no cometió esos delitos. Lo cierto es que sí los cometió, pero recobró su libertad debido a que tales ilícitos ya habían prescrito.

Además, el gobierno de Alfaro Ramírez ha permitido que organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se hayan fortalecido más que en sexenios anteriores. Esta organización mantiene un férreo control en la entidad, sus altos jefes son intocables por el poder estatal, y conforme a denuncias consultadas, se les brinda protección desde el mismo. Pero no sólo eso: también se realizan negocios multimillonarios con presuntos lavadores de dinero muy bien relacionados con la cúpula oficial.

En el gobierno de Alfaro cobra auge la justicia como negocio: jueces, magistrados y otros altos funcionarios del Poder Judicial están al servicio del mejor postor, de acuerdo con denuncias recabadas. Esas mismas acusaciones señalan que su excuñado, Rafael Martínez, es el operador del mandatario en el jugoso negocio con los fallos judiciales en favor de amigos o en contra de enemigos.

Es precisamente Martínez quien maneja los casos y turnos en el Poder Judicial, decide cuáles se entregan a ciertos jueces o magistrados aliados del grupo en el poder y sacan provecho de las anulaciones o sentencias. Uno que evidenció esta práctica corrupta salió a flote con la licitación para la compra de patrullas en el Ayuntamiento de Guadalajara —donde él es responsable jurídico—. Esto resultó un negocio descomunal para el alcalde de esa ciudad, Jesús Pablo Lemus Navarro y seguramente para ese grupo de poder que encabeza Alfaro a nivel de estado. El caso sigue impune.

De igual forma continúan impunes las miles de desapariciones ocurridas en Jalisco, pese a las presiones de los colectivos que exigen se aclare qué sucedió con sus familiares. La Fiscalía Estatal no responde a las demandas sociales para dar con el paradero de mujeres, hombres y adolescentes que han desaparecido desde hace años, presuntamente, tanto a manos de la delincuencia organizada que opera en la entidad, como de las mismas autoridades que conforman al mismo. Y así la exigencia de justicia es un grito que se ahoga en el silencio oficial. Un caso que se sumó

al drama humano es el de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno desde comienzos de agosto de 2023. Las víctimas presuntamente fueron calcinadas, pero la Fiscalía estatal, como en la mayoría de los casos, guarda silencio, un silencio cómplice.

Intolerante a la crítica periodística, Enrique Alfaro se ha confrontado con diversos periodistas que han cuestionado su desgobierno. Mediante amenazas directas, o bien alardeando con interponer *denuncias* penales, el mandatario se ha mostrado violento, insultante y bravucón ante la prensa crítica estatal y nacional. No soporta que lo cuestionen sobre sus negocios. Mucho menos que le señalen sus errores y desatinos en materia de seguridad. Porque resulta evidente que el desastre provocado por la violencia es consecuencia de la impunidad que impera en el estado.

Alfaro anunció con tono amenazante y prepotente, molesto por dos artículos que publiqué en el portal *SinEmbargo MX*, en relación con sus presuntos vínculos con el crimen organizado, que presentaría una demanda judicial en mi contra. Y que dicha demanda estaba presentada y exigiría que se tomaran medidas cautelares.

Tras su fanfarronada, interpose una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se me otorgó seguridad por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. En aquel momento fui amenazado mediante llamadas telefónicas y tuve que salir del país por unos meses, ante el riesgo de sufrir una agresión o ser asesinado.

En octubre de 2022, la CNDH me comunicó que mi caso se había cerrado debido a que el gobernador Alfaro, a través de su área jurídica, comunicó que no interpondría demanda alguna en mi contra y que, de hacerlo, sería a título personal y no como gobernador.

A mi regreso a México, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) me otorgó medidas de seguridad ante una posible agresión a mi integridad física por parte del gobernador de Jalisco y/o el crimen organizado. Esta situación me condujo a cancelar entrevistas presenciales, las presentaciones de mi anterior libro *Los narcopolíticos* y varias conferencias en universidades. Debido a la violencia criminal que azota al país, consideré muy alto el riesgo de

asistir a esos eventos. Incluso, intentaron una trampa: mediante una carta supuestamente firmada por el escritor Mario Vargas Llosa, me invitaron a participar en una bienal de periodismo que por fortuna detectamos que era falsa, no correspondía con los tiempos ni el número de emisión del evento. El objetivo era que pisara Jalisco y hacer algo en contra de mi persona.

Esta amenaza a mi integridad y a mi labor desató un escándalo nacional, precisamente porque no era la primera vez que Alfaro se proponía intimidar a un periodista. Antes había denunciado a las comunicadoras Carmen Aristegui y Anabel Hernández por revelar la existencia de un expediente criminal abierto en Estados Unidos contra el mandatario jalisciense, país donde se le investiga desde hace varios años.

El amo de Jalisco evidencia más las redes criminales ligadas al poder en la entidad. Y no descarto que se incrementen las amenazas en mi contra. Es el riesgo que corremos los periodistas en un país sin seguridad y donde, por desgracia, impera la impunidad.

Este libro detalla cómo conviven el crimen organizado y el poder político en un estado, pero indica una realidad que domina todo el país. Estos lazos parecen indestructibles debido a la inoperancia de la justicia en el territorio y al dominio que ejerce el crimen organizado en más del 80 % de los municipios. Puedo afirmar que, debido al elevado nivel de impunidad que goza el crimen organizado, este más bien opera como un brazo ejecutor del propio Estado. La frontera entre política y crimen ya no existe. E impera por todas partes un discurso plagado de cinismo y el principal promotor es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador desde su púlpito: las conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Esto demuestra fehacientemente que la política y la razón pocas veces han caminado de la mano.

Lamentablemente, prevalece la desaparición y el asesinato de periodistas en México. Precisamente, porque la prensa crítica se ha convertido en el verdadero contrapeso del poder opresor. Ante la ausencia de una oposición real —inexistente por complicidad o conveniencia— los periodistas suplimos las funciones del Estado en la realización de investigaciones delicadas, como la que se aborda

en este libro.

Sustentado en fuentes oficiales y soportado con documentos públicos, este volumen recoge parte sustancial de la historia de un gobierno y un gobernador que han sumido a Jalisco en una de sus peores crisis sociales y políticas. Jalisco es tierra de nadie.

El actual mandatario jalisciense niega sus vínculos con la delincuencia organizada; pero ahí sigue, pujante, el poder del CJNG. Nada puede ser casualidad: el corazón del crimen organizado ya está en la estructura de poder. Tanto en los gobiernos municipales como estatales, y hoy en la presidencia de la República. Más que una democracia—inexistente en el mundo y en ninguna época de su historia— lo que impera en México es una “mafiaocracia” en la que gobernadores y alcaldes actúan como verdaderos capos de la mafia.

No obstante, y pese a sus negros antecedentes, ya dueño del poder político y criminal, Enrique Alfaro mantuvo un afanoso interés por ser candidato presidencial en 2024. Se aprestaba a ser el amo del país, pero su capital político se devaluó, como el de muchos otros gobernadores, al ser devorado por sus ambiciones personales. Convirtió a Jalisco en su principal botín y su investidura de gobernador terminó reducida a la de un simple gerente de la mafia.

RICARDO RAVELO

Viena, Austria, agosto de 2023

EL NARCO ENCARNADO

Recacio a utilizar las fuerzas del Estado para abatir al crimen organizado, empeinado en “combatir las causas” de la violencia, de acuerdo con él, representadas por la pobreza y el abandono social —algo que está bajo cuestionamiento, incluso a nivel internacional, porque se asegura que la pobreza no es causal de la criminalidad— el presidente López Obrador está sumido en una madeja de fallas y fracasos en su política antidrogas, porque a casi cinco años en el poder, el narcotráfico no sólo sigue imparable en el país, sino que se recrudece junto con la violencia que genera.

Además, el gobierno de la Cuarta Transformación parece atrofiado: a nivel de su gabinete no hay coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) y para el cierre de 2022, a nivel territorial, más de 173,000 efectivos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas están desplegados en todo el territorio, pero no pueden actuar, porque tienen las manos amarradas con la decisión presidencial de no usar la fuerza contra los criminales porque, de acuerdo con el mandatario, es mejor actuar ante el crimen con “abrazos, no balazos”. Así, el país se desgarran en baños de sangre por todas partes sin que nadie ponga un alto a esta carnicería humana. El eslogan es en el fondo un doble discurso: uno dirigido hacia la sociedad que cree en su sentido mesiánico y el real que es resultado de un pacto con los poderes fácticos del crimen. En lo que se desmarca respecto a la beligerancia teatral del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En su desmedida ambición por controlarlo todo, el crimen organizado avanza e impone sus dominios en amplios territorios de México: asesina, secuestra, desaparece, roba combustible, trafica con drogas, extorsiona y corrompe sin medida, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador asume una posición de tibieza que raya en la torpeza, pues a pesar de las violentas sacudidas, sigue enfrascado en no usar con más énfasis la fuerza

del Estado. Con el argumento de que “yo tengo otros datos” y “estamos atendiendo las causas” que detonan al crimen desde el más alto peldaño del poder político, se protegen los intereses oscuros de la criminalidad. Nunca se detallan las causas que se atienden para, dizque, frenar el crimen, por lo que resultan inverificables.

A más de cinco años en el poder, la violencia se recrudece por doquier. En todo el país se contabilizaban en 2022 más de 127,000 homicidios dolosos, la mayoría, perpetrados por el crimen organizado, entre ellos, más de 3,600 feminicidios y casi 2,000 adolescentes. En promedio, son asesinadas más de 100 personas todos los días, aunque el gobierno federal desestima estas cifras y argumenta que la criminalidad decrece.

En Tamaulipas, donde gobernó el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y desde 2022 hasta 2024 está encabezado por el morenista Américo Villarreal Anaya, la violencia es generada por el Cártel del Noreste —escisión de Los Zetas— que también operan en todo el corredor Nuevo León-Coahuila. La situación también es crítica en Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde el CJNG se ha posicionado en el negocio del “huachicol”, actividad que en el primer estado ha generado confrontaciones con el Cártel del Noreste con su dominio en amplios territorios.

Pero la región más crítica fue El Bajío, durante el lapso de 2019 hasta el 2020, donde aún se pueden sentir las consecuencias de los anteriores enfrentamientos entre los cárteles que encabezan Nemesio Oseguera Cervantes —*El Mencho*— y el que lideraba José Antonio Yépez Ortiz, *El Marro*: ambos grupos criminales protagonizaron balaceras, asesinatos masivos, levantones, secuestros, entre otros delitos, además de haber sembrado una ola de terror a través de las extorsiones a negocios grandes y pequeños. Aun tras la detención de El Marro, en agosto de 2020, el Cártel de El Mencho ha dominado el área hasta la actualidad.

Violencia continua

La mayoría de los crímenes —un verdadero baño de sangre en todo

el país— son generados por los enfrentamientos entre cárteles que se disputan el control territorial, el mercado de las drogas, pero también existen fuertes choques por el usufructo de recursos naturales como la minería, el robo de combustibles, las invasiones territoriales, entre otros rubros, que los grupos criminales han incorporado a su portafolios de actividades.

De las casi 20 organizaciones criminales que operan en el país, el CJNG es de los más dinámicos actualmente, teniendo en cuenta el debilitamiento del Cártel Santa Rosa de Lima, hasta el periodo en que fueron frontales sus enfrentamientos por el control del estado de Guanajuato: la guerra se focalizó por el negocio del “huachicol”, el robo de combustibles, el tráfico de drogas y el control territorial.

Durante los peores momentos del conflicto, en menos de un mes, el CJNG difundió tres videos en los que mostraba su poderío bélico. Pero no sólo eso: a través de esos mensajes le anunciaban a El Marro que lo eliminarían junto con toda su gente. Le atribuyeron la ola de violencia que ha afectado al estado de Guanajuato, en especial, la matanza del 1º de julio de 2020 de 27 personas al interior de un centro de rehabilitación para adictos a las drogas, asesinados cuando los sicarios al servicio de El Marro buscaban a uno de sus enemigos.

Hasta hoy, la respuesta del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido no sólo tibia, sino ineficaz para contener la ola de crímenes. Violencia que volvió a expresarse desde la noche del martes 9 de agosto de 2022, hasta la madrugada del sábado 13: quema de autobuses del transporte público, vehículos particulares y comercios, se sucedieron en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán.

En casi todas las versiones, oficiales o no, se declaró que los hechos se debieron a la detención de líderes criminales en la región. El mismo jefe del Ejecutivo del gobierno actual, durante su conferencia matutina, explicó que los incendios y actos de violencia se habían desatado tras la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y policías estatales en una reunión de alto perfil entre dos bandas de la delincuencia organizada.

Conforme a esa versión oficial, en el operativo se habría detenido

a Ricardo Ruiz Velazco, *El Doble R*, lugarteniente del CJNG en la zona del Occidente y del Bajío. Pero después esto fue desmentido. Además, López Obrador confirmaba que otras personas habían sido detenidas en la reunión de estos jefes de grupos delictivos, pero no precisó la cantidad. Estas 96 horas de hechos violentos arrojaron al menos una docena de muertos, seis heridos y 20 detenidos.

Todo esto ocurre a pesar de que, como candidato primero, y presidente después, López Obrador ha dejado a un lado los recursos que le confiere la ley para enfrentar la violencia, como es el uso de la fuerza. Su política se ha basado, en palabras suyas, en los “abrazos, no balazos”, en atender la pobreza del país a través de los programas sociales, que para él son las causas de la violencia. Sin embargo, el discurso presidencial se estrella con la realidad: la pobreza no es causal de la criminalidad. Su verdadera causa es la impunidad y el vacío de poder ejecutivo. Así, todo el país es un verdadero asidero para la delincuencia, nacional o internacional. Aunque también se podría decir que el territorio mexicano es un paraíso para los mafiosos.

Hasta ahora, ha fallado. Fortalecer la economía y el empleo, pero sobre todo resolver el problema de la inseguridad pública, fue uno de los compromisos torales durante su campaña y al asumir la presidencia de la República en diciembre de 2018.

Peor aún, López Obrador no ha capturado a casi ningún capo emblemático en lo que va de su gobierno. Salvo a Santiago Mazari, *El Carrete*, líder del Cártel de Los Rojos, detenido el 1º de agosto de 2020 en Guerrero, quien por años se convirtió en una pesadilla en ese estado y en Morelos, sus feudos; y al otro día El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima desde 2014. El 5 de enero de 2023 fue recapturado Ovidio Guzmán gracias a un operativo por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La detención del miembro del grupo de Los Chapitos en realidad fue una desde Washington.

Sin embargo, continúan libres e impunes otros hijos de *El Chapo* Joaquín Guzmán Loera —Iván Archivaldo y Jesús Alfredo— quienes encabezan el Cártel de Sinaloa, el más poderoso de los grupos criminales que, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), tiene presencia en al menos

100 países.

Impune y sin mayores conflictos sigue operando Ismael *El Mayo* Zambada, a quien la DEA considera el mayor capo de México, quien operaba en sociedad con Rafael Caro Quintero en el norte del país. Este último, tras actuar desde Sonora, fue puesto en libertad en 2013 y detenido nuevamente el 15 de julio de 2022 en Sinaloa, luego de que un perro lo olfateó donde se escondía.

Por lo que respecta a Nemesio Oseguera, *El Mencho*, los informes de la SEDENA sostienen que padece una enfermedad renal avanzada. Su refugio se ubica, de acuerdo con dicha secretaría, entre los límites de Jalisco y Michoacán, donde su Cártel luce armamento de alto poder y difunde escenas de su fuerza a través de las redes sociales.

Conflicto constante

Durante al menos dos años, el choque entre los cárteles se centró en Guanajuato y la región de El Bajío. El 18 de febrero de 2020, gente del Cártel Santa Rosa de Lima fue detenida en un restaurante de Celaya en compañía de tres marinos activos y dos personas procedentes de Sinaloa.

Una fuente ligada al operativo dijo que el grupo se encontraba “en plena negociación” cuando personal de la Armada y de la Fiscalía del Estado de Jalisco ingresaron al restaurante. No había cargos contra los sinaloenses, que poco después quedaron en libertad y se esfumaron del estado.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, que seguían la pista desde hace varios años, El Mayo Zambada financia a organizaciones criminales para enfrentarlas con sus enemigos. Un dato confirmado, por ejemplo, es que El Mayo apoyó con dinero y armamento a Los Mata Zetas, quienes originalmente eran contrincantes del Cártel de Sinaloa, pero tras esos nexos se enfrentaron al CJNG.

Los estados con mayor violencia en los últimos cinco años han sido Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Morelos y Guerrero. En este último operan cárteles que se

disputan la llamada Ruta del Pacífico. En esta guerra también están implicados políticos de esas entidades.

No es todo. En los últimos diez años la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales —además del tráfico de enervantes— y su estructura también presenta modificaciones: ahora se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.

Después de la guerra fallida implementada por Calderón Hinojosa y la corrupción desastrosa que prohió el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de ser combatido, el crimen se extendió a lo largo y ancho del país e, incluso, se internacionalizó. Muchos cárteles ahora operan en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala y otras naciones o regiones latinoamericanas.

Incluso, cuentan con amplios ramajes en Europa, particularmente en España, Italia y Reino Unido, desde donde operan el tráfico de drogas hacia los mercados de Asia y África, por citar sólo esos continentes.

Un ejemplo de la expansión y de que la guerra contra el narcotráfico no ha dado resultados es el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la DEA, el grupo criminal más boyante del mundo. Tras la captura de su líder, El Chapo, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes y cambió sus operaciones: ahora es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país.

Incluso la recaptura de Ovidio Guzmán, aunque significa un golpe para el Cártel de Sinaloa y resuena mediáticamente, puede tratarse de un rasguño al grupo delincencial todavía más poderoso del orbe. Porque su estructura puede estar preparada para amortiguar este tipo de golpes, y figuras como Ovidio no son connotadas en el interior de esa empresa criminal.

De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y otros poderosos grupos criminales.

Desde 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país. Un dato que sobresale es que ahora los cárteles

gobiernan, a través de sus aliados, buena parte de los municipios de la nación; por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.

Mapeo del crimen

De acuerdo con informes de la DEA y de la FGR, más de la mitad del territorio nacional está controlado por una quincena de cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales —las más contaminadas del país— y cuyos efectivos fungen como sicarios, “halcones” o protectores de redes de secuestradores y narcomenudistas.

Esos mismos informes establecen, además, que Tamaulipas —del que los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández fueron condenados a prisión por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos— ha sido una de las entidades con mayor número de grupos criminales asociados.

Enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos que operan en esa entidad: Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos —Los Zetas y el Cártel del Golfo— cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos.

Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández —a la vez de sus ligas con el narcotráfico, dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder e impunidad— el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial. Pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controla el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a Estados Unidos con el apoyo de la policía estatal.

En Tamaulipas este escenario de total control criminal minimizó la figura del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo gobierno resultó un fracaso por sus fallas y desatinos en el

combate al narcotráfico. Durante su mandato hasta el 30 de septiembre de 2022, las redes del delito se incrementaron y la violencia se hizo imparable en todo el territorio y el propio mandatario resultó ser una cabeza de la mafia.

Tanto de día como de noche, Tamaulipas se convirtió en un verdadero escenario de guerra. La metralla no cesaba en diversos municipios. Los más sangrientos, los ubicados en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras pasaron a ser parte de la realidad cotidiana.

Los informes oficiales señalan también que, después de Tamaulipas, en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con al menos seis bandas locales en cada uno. Sin embargo, un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) titulado “Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero”, elaborado en 2011, señalaba desde entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales cuyas cabezas eran personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.

En sus partes medulares el informe sostiene que la crisis de inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la organización Beltrán Leyva.

Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, que convirtieron a Guerrero en un territorio de muerte, en un cementerio de la impunidad.

El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese territorio. Sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial —uno de los más codiciados, porque se ubica en la Ruta del Pacífico— al enfrentarse a los hombres del Cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009, durante un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los Pelones

continuaron al servicio de Héctor Beltrán Leyva, *El H*, enfrentado a Édgar Valdez Villarreal, *La Barbie* —detenido en México tras un percance de tránsito— y posteriormente, extraditado a Estados Unidos. Desde el 11 de junio de 2018 *El Güero* o La Barbie purga una condena de 49 años de prisión, debe pagar 192 millones de dólares y al cierre de 2022 se comenzaron a revelar informaciones sobre sus nexos con la DEA y una presunta “desaparición” de su información en la base de datos donde aparecía como el reo 05658-748.

Pero cuando los hermanos Beltrán Leyva se vieron mermados en Guerrero, sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron los cárteles de Los Rojos y de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del Cártel de Los Beltrán Leyva, confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.

La caída y extradición de La Barbie no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, *El Melón*, Benjamín Flores Reyes, *El Padrino* (capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, *El Coreano*, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.

Al segundo grupo se le conoce como La Barredora y lo encabezan Christian Hernández Tarín, *El Cris* y Eder Jair Sosa, *El Cremas*. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al Cártel de Sinaloa.

Dicha alianza tiene razones de peso: El Cris, conforme a los reportes policíacos, es hijo de Arturo González Hernández, *El Chaky*, quien operaba una red de contrainteligencia dentro de la SEDENA, infiltrando tanto a la Procuraduría como a la Secretaría de Seguridad Federal durante el gobierno de Vicente Fox. Así El Chaky mantenía informado a Vicente Carrillo Fuentes, *El Viceroy* del Cártel de Juárez, sobre las acciones en su contra.

De este modo el hermano de *El Señor de los Cielos* poseía el control sobre las corporaciones de seguridad y así evitaba sus detenciones. Esta red se desmanteló en 2002 y El Chaky pasó a ser lugarteniente de Amado y Vicente Carrillo Fuentes en la Comarca

Lagunera, que abarca parte de Coahuila y Durango —una zona con una alta incidencia delictiva y lavado de dinero—.

De acuerdo con su ficha criminal, González Hernández operó por varios años en el área, siempre al servicio de Vicente Carrillo, fue detenido y, a diez años de su encarcelamiento, fue puesto en libertad en 2013. Hasta donde se conoce opera en la zona conurbada Torreón-Gómez Palacio, considerada un territorio letal.

El diagnóstico del CISEN señala que en la región central de Guerrero, particularmente, en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera desde 2010 la escisión de la estructura de los Beltrán Leyva conocida como el Cártel de la Sierra —también hoy conocido como Los Tlacos— encabezado por José Ángel Nava Marino, *El R2*, hasta su muerte a comienzos de octubre de 2010 y luego al parecer bajo el mando de Mateo Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila.

Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico. El tío de El R2 era Jesús Nava Romero, *El Rojo*, jefe de plaza en todo Guerrero y en Morelos, ejecutado junto con *El Jefe de Jefes*, Arturo Beltrán Leyva, durante la operación de la Marina en el departamento del edificio Elbrús, del Fraccionamiento Altitude, en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009.

En la ciudad Chilapa de Álvarez, de acuerdo con el informe referido, opera Zenén Nava Sánchez, *El Chaparro*, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuye la ola de ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos años.

No es todo: en el municipio de Quechultenango están afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando su hijo Bernardo, quien fue diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Después de la guerra fallida de Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el gobierno de Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse.

A pesar de que el presidente López Obrador aceleró la puesta en marcha de los programas sociales —persistente en que se deben atacar las causas y no actuar con represión para combatir al crimen organizado— y echó a andar a la Guardia Nacional, el crimen organizado sigue en ascenso, generando violencia e inestabilidad.

Es el caso del Cártel de Sinaloa. Tras la caída de El Chapo, la organización criminal entró en una disputa interna, al parecer ya zanjada.

El grupo se dividió en cuatro frentes. Los hijos de El Chapo —Iván Archivaldo y Jesús Alfredo— encabezan un bloque. Otro lo operaba su hermano Aureliano, quien se enfrentó a sus sobrinos por el liderazgo de la organización hasta que tomó su parte. Presuntamente, fue detenido entre el 24 y el 25 de febrero de 2023, en un operativo de 200 elementos de las Fuerzas Armadas en la zona serrana de Tamazula. Tras haber pasado 28 años de prisión por varias condenas y ser liberado el 9 de agosto de 2013, Rafael Caro Quintero estaría al frente de otra pieza del Cártel de Sinaloa, hasta su nueva detención el 15 de julio de 2022, como parte de un operativo de la Marina y la FGR en San Simón, municipio de Choix, Sinaloa, en los límites de Chihuahua y Sonora.

De acuerdo con el informe “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas”, dado a conocer por la DEA, Caro Quintero habría retomado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y una cuarta posición — para muchos la más importante— es la que mantiene El Mayo Zambada, vigente en el crimen organizado desde hace más de cinco décadas. Nunca ha sido detenido ni molestado.

Empleado de una mueblería en Culiacán antes de engancharse en el narco, Zambada es tan viejo en el negocio del narcotráfico como Juan José Esparragoza Moreno, *El Azul*, el mejor negociador que ha tenido el crimen organizado. Se asegura que Esparragoza murió el 7 de noviembre de 2014, presuntamente, debido a un infarto, pero las autoridades federales nunca confirmaron su muerte. Hábil en el arte de la mentira, El Azul pasó a formar parte del misterio, igual que Amado Carrillo, pues de ambos se afirma que no están muertos:

De El Azul se ha dicho que se “autodesapareció”. Mientras que de El Señor de los Cielos se rumora que opera en Rusia y que su

muerte pudo ser parte de un acuerdo con el Gobierno Federal. Lo que sí fue un hecho es que antes de presuntamente morir, Carrillo Fuentes negoció con altas autoridades federales.

De acuerdo con los informes oficiales, el Cártel que más creció durante los dos últimos sexenios fue el de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera. Actualmente, tiene presencia en las 32 entidades federativas del país, su principal feudo es Jalisco y se extiende como mínimo a diez países latinoamericanos, además de América Central y en las Antillas, toda Norteamérica, varias naciones europeas, al menos cuatro africanas, cinco asiáticas y otras de Oceanía.

La lista de organizaciones que se mantienen de pie y sobrevivieron a la guerra de Calderón Hinojosa es larga. Muchos de estos grupos han permanecido mediante la alianza y han extendido sus redes hacia Centro y Sudamérica. Es el caso del Cártel de Tijuana o de los Arellano Félix, actualmente encabezado por Enedina Arellano Félix, *La Jefa*, quien controla toda la estructura financiera del mismo.

En 2014 se pensaba que Fernando Sánchez Arellano —hijo de Enedina— sería el heredero del “narcoimperio” construido por sus tíos Ramón y Benjamín, pero ese año fue detenido en su casa mientras veía el partido de fútbol entre México y Croacia en el marco de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014.

Tras el vacío que dejó su captura, el Cártel de Jalisco irrumpió con fuerza en Baja California, colocando “narcomantas” mediante las cuales anunció su aparición y también por medio de la violencia.

Pero se impuso Enedina, quien para la DEA es la jefa del Cártel de Tijuana, impune hasta la fecha. En 2002 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser incluida en la lista de líderes de organizaciones criminales y prohibió hacer negocios con ella. Por ello sus cuentas fueron congeladas y varias empresas suspendieron sus actividades, al menos, por un tiempo.

En julio de 2015, la revista *Time* se ocupó de su perfil. Al describir su forma de ser, la prestigiada publicación indicó que “es menos asidua a las fiestas, sin la conducta de asesino sádico [a diferencia] de sus hermanos” y en ella se destaca “un perfil de negocios que pudiera ser la clave de su éxito”.

El texto publicado refiere una cita de Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien al referirse a Enedina mencionó que ayudó a reducir la violencia al traer de vuelta el esquema tradicional de traficar drogas de México hacia Estados Unidos.

Explicó: “Ella no está interesada en provocar guerras, como sus hermanos lo hicieron en sus tiempos. [...] realiza alianzas y genera dinero. Su belleza quizá la ayudó a realizar pactos con poderosos narcotraficantes, como Joaquín ‘*El Chapo*’ Guzmán”.

Cárteles imparables

Tras su arribo al poder el 1 de diciembre de 2018, López Obrador encontró un escenario nacional plagado de criminalidad y violencia generada por al menos quince cárteles bien cimentados en todo el territorio.

De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la FGR y otras fuentes de actualización, dichas organizaciones criminales superan la veintena y son las siguientes: los cárteles del Golfo y Los Zetas; Tijuana, Juárez, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos y de la Sierra, los Beltrán Leyva, familia Díaz Parada (traficantes de marihuana en Oaxaca), los hermanos Valencia, la Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, los Arellano Félix, Tláhuac, Unión Tepito, Los Viagra, Santa Rosa de Lima y el Cártel del Noreste.

De todas estas organizaciones derivan decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de territorios y han establecido alianzas —políticas y criminales— con autoridades municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión.

Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas. Han diversificado sus actividades y las autoridades estadounidenses los describen como organizaciones “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos por todas partes.

Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora

tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y probablemente, en otras naciones latinoamericanas.

En suma, el narco mexicano ya es internacional y por ello, difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano carece de estrategia y herramientas que posibiliten un combate efectivo.

De hecho, su gobierno empezó a negociar con el crimen organizado y grupos armados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con una declaración que hizo Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación de 2018 a 2021. Sin embargo, López Obrador la desmintió y aseguró que su gobierno no negocia ni pacta con criminales. Pero conforme a otros datos consultados por este reportero sostienen que las negociaciones sí se efectuaron.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad del país”, afirmó el presidente.

Pero el territorio sigue violentado por el crimen organizado, pues el mandatario no quiere usar la fuerza como vía para enfrentar a los cárteles. Como hemos referido en varias ocasiones, explica que su política se basa en atender las causas que originan la criminalidad. Mas a pesar de la puesta en marcha de los programas sociales de la llamada 4T —medidas que de acuerdo con él frenarán la violencia—, el país sigue incendiado por la tensión criminal.

En menos de un mes, el CJNG difundió tres videos amenazando al Cártel Santa Rosa de Lima y a su líder, El Marro. Se anunció la batalla en Guanajuato por el control del estado y ninguna autoridad actuó para impedirlo. La captura de El Marro no solucionó nada, sólo avivó la ola de violencia de 2019 a 2022 y sirvió para otros repartos de poder dentro de la estructura de los cárteles.

Y es que son demasiados los errores cometidos frente al crimen por incapacidad o intencionalmente. Lo real es que, como he planteado en otras ocasiones, tras casi cinco años de gobierno, López Obrador sigue siendo un presidente fallido.

RADIOGRAFÍA DE LA PUTREFACCIÓN

Sucios poderes

Víctimas de la corrupción que ellos mismos prohicieron durante sus respectivos gobiernos —vivían como virreyes impunes—, al menos una decena de exgobernadores están presos, próximos a estarlo o bien enfrentan investigaciones dentro y fuera de México por nexos con el crimen organizado, lavado de dinero, abuso de poder, desvío de dinero público, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.

Todos, sin excepción, compraron mansiones en México, Estados Unidos o Europa; carros de lujo, ranchos y ganado de alto registro, la ostentación sin límites; el abuso del poder en su máxima expresión, la locura vuelta vorágine, mientras la sociedad padecía —y padece— los embates de la violencia causada por los enfrentamientos entre bandas del narcotráfico a las que ellos mismos protegieron.

Su herencia es lastimosa, lastre vil para la sociedad, pues todos sin excepción, incluso de partidos, prometieron cambios: combatir la corrupción, enfrentar a la delincuencia, sanear las instancias oficiales, cuidar las arcas, velar por sus respectivos pueblos, pero al final de sus mandatos heredaron la miseria fundida en ellos mismos.

De la cauda de gobernadores que lo mismo incurrieron en actos de corrupción que brindaron protección al narcotráfico, faltan por ser enjuiciados varios de ellos: Graco Ramírez Garrido (Morelos), Silvano Aureoles Conejo (Michoacán), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Jaime Bonilla Valdez (Baja California). La lista parece tan interminable que la sociedad se pregunta quién cerrará la puerta, pues ni bien un gobernador termina su periodo cuando otro ya está empoderado saqueando las

arcas.

Entre otros posibles candidatos a la cárcel estarían Omar Fayad (Hidalgo), Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa), Claudia Pavlovich Arellano (Sonora), Antonio Echevarría García (Nayarit), Héctor Astudillo (Guerrero), Carlos Joaquín González (Quintana Roo). Hasta ahora parecen haber librado investigaciones criminales y cárcel porque, tras las elecciones intermedias de 2021 —cuando salieron a flote presuntos apoyos del Cártel de Sinaloa en favor de los candidatos de MORENA (Movimiento Regeneración Nacional)— entregaron el poder a esta fuerza establecida por el presidente López Obrador.

Sin embargo, estos exgobernadores, por ahora “a salvo” de pisar la cárcel, no tienen ninguna razón para evadir la justicia. Sus respectivas administraciones terminaron en un verdadero caos, envueltos, como otros políticos, en una corrupción ante la cual el presidente cerró los ojos por conveniencia política.

No sólo eso: López Obrador premió a algunos exmandatarios con embajadas y consulados. Es el caso de Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich, quienes fueron nombrados embajador de México en España y cónsul en Barcelona, respectivamente. Ambos traicionaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI), de donde surgieron, a cambio de sus sobrevivencias políticas. Por ello fueron expulsados de ese partido.

De la larga lista de exmandatarios bajo investigación, el caso más escandaloso es el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sometido a una investigación criminal, primero, y a un juicio de procedencia para ser desaforado, después, el exgobernador parece haber salido “avante” en su proceso de librar la cárcel en México. No así en Estados Unidos, donde pesa en su contra un expediente criminal por brindar apoyos al crimen organizado, compra de propiedades con dinero de dudosa procedencia y lavado de activos.

García Cabeza de Vaca terminó cuestionado y calificado como un “narcogobernador”. Existen razones de peso que justifican el estigma que carga a cuesta desde que empezó a ser investigado por presuntos vínculos con los cárteles del Golfo y Los Zetas, cuyos miembros habrían financiado sus tareas políticas desde los tiempos de Tomás Yarrington Ruvalcaba, el primer gobernador tamaulipeco

encarcelado por servir a los intereses de la mafia, a grado tal que está considerado en Estados Unidos como un capo que se valió del poder político para traficar droga, lavar dinero y enriquecerse a manos llenas. En la actualidad García Cabeza de Vaca fue premiado con impunidad: es el asesor en materia de seguridad de “Va por México” y hasta quiere ser presidente por esta alianza. El cinismo en su plenitud.

Pero su proceso se ha complejizado, pues la FGR informó haber obtenido, a fines de agosto de 2023, la revocación del amparo otorgado al exgobernador a través del Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, con lo que se reactiva la orden de aprehensión en su contra. Como en otros casos, las protecciones y negaciones a las mismas sobre estos presuntos corruptos, en diversos estados de la Federación, abren procesos a favor y en contra de cada uno que alimentan a los medios, a los intereses políticos de los partidos en pugna por el poder y, al final, denotan la inoperancia del sistema, protector del crimen organizado en cualquiera de los bandos.

Existen antecedentes que pintan de cuerpo entero a Yarrington como capo del PRI en funciones de gobernador y precandidato presidencial en 2006. El procurador de esa entidad durante su gobierno, Francisco Tomás Cayuela Villarreal, era el responsable de recolectar dinero en todo el estado para financiar la campaña de Yarrington a la presidencia de la República. El efectivo provenía del narcotráfico. Los recorridos los hacía en toda la “frontera chica”, en municipios como Camargo, Miguel Alemán, entre otros, asiento de los cárteles del Golfo y Los Zetas —este último brilló con su esplendor durante aquel “narcogobierno” encabezado por el político priista—.

De acuerdo con las investigaciones consultadas, Cayuela entregaba maletas repletas de dólares a Yarrington. Con el apoyo criminal, el entonces mandatario tamaulipeco preparaba su proyecto rumbo al 2006, pero las investigaciones por su relación con el narcotráfico tambalearon su plataforma y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a obtener más evidencias de sus nexos criminales.

En 2008, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces a cargo de la

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), me confirmó que Yarrington era investigado por narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Explicó, además, que la subprocuraduría a su cargo había iniciado la indagatoria incluyendo a funcionarios menores: mandos policíacos, subprocuradores, entre otros. “Iremos de abajo hacia arriba”, indicó Vasconcelos sin negar que en la ruta de la investigación estaba implicado el entonces mandatario priista.

Yarrington enfrentó su proceso legal y se defendió de las acusaciones, pero el cerco se fue cerrando y el rumor de una posible orden de aprehensión permaneció latente largo tiempo. Esto significó una amenaza incluso para sus propios prestanombres, que no eran pocos.

Tras concluir su mandato, Yarrington dio la pelea legal por corto tiempo, ya que con el apoyo de sus complicidades políticas y criminales huyó del país y se afincó en Florencia, Italia. Tras cinco años de permanecer como prófugo, en abril de 2017 fue localizado y detenido en ese país gracias a la ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por su acrónimo en inglés) y a la cooperación entre autoridades, principalmente, italianas y de Estados Unidos. La captura ocurrió al salir de un restaurante, una *trattoria*, donde convivía con un socio suyo.

Al ser aprehendido, el político tamaulipeco se identificó de inmediato con credenciales falsas: portaba una del Instituto Nacional Electoral (INE) con su fotografía y el nombre de José Ángel Márquez Pérez. También mostró una licencia de conducir con el mismo nombre y otra más de la Asociación Cristiana de Jóvenes (mejor conocida como la YMCA, por su sigla en inglés) a nombre de Tomás Chapa. Pero no pudo evadirse. Fue apresado y sometido a un juicio de extradición.

En un principio peleó por ser llevado a México, pero el gobierno de Estados Unidos presionó para que enfrentara las acusaciones de las cortes norteamericanas. Actualmente está preso en Texas, Estados Unidos. Los cargos que pesan en su contra son: lavado de dinero, narcotráfico y fraude bancario.

En marzo de 2021, fue declarado culpable del delito de lavado de

dinero. La sentencia fue de aproximadamente 20 años. Al declararse culpable de ese delito, el gobierno de Estados Unidos desestimó las otras acusaciones: tráfico de drogas, extorsión, fraude bancario, entre otros, que también pesaban en su contra.

Declaró haber aceptado 3.5 millones de dólares en sobornos, los cuales usó para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, conforme expuso la fiscal interina del caso, Jennifer B. Lowery. Con base en el expediente, el exgobernador también reconoció haber recibido sobornos de personas en México para hacer negocios con el gobierno de Tamaulipas mientras él fungía como mandatario estatal.

Su heredero —Eugenio Hernández Flores— también terminó devorado por la corrupción institucional y criminal. Amasó una fortuna descomunal mediante el tráfico de influencias, favores al crimen organizado, lavado de dinero, fraudes, desvío de fondos públicos, entre otros delitos, que lo mantuvieron en prisión hasta 2023 y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde tiene abiertos dos expedientes: uno por asociación delictuosa y otro por lavado de dinero por un monto de 35 millones de dólares. Aún se mantiene el juicio de extradición, ahora bajo su condición de prisión domiciliaria y con vigilancia de la FGR.

Tras su encarcelamiento en octubre de 2017, fue acusado de fraude en la causa penal 67/2017 en perjuicio de las finanzas del gobierno de Tamaulipas. Adquirió a través de testaferros dos terrenos de 1,600 metros en el puerto de Altamira y los costos fueron “castigados” a favor de los compradores.

En septiembre de 2021 Hernández Flores fue declarado libre por un juez federal, al otorgarle un amparo contra aquella aprehensión. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo al exmandatario. Por lo que en ese entonces no pudo abandonar la prisión debido a que aún tenía pendientes dos carpetas: una por enriquecimiento ilícito y otra por lavado de dinero.

Tras más de cinco años, en octubre de 2022 un juez de control ordenó su liberación al no encontrar elementos para mantener al exgobernador en prisión. Pero se mantuvo recluido pues su juicio de extradición a Estados Unidos seguía en proceso, reclamado por

asociación delictuosa y blanqueo de capitales.

Con base en la resolución emitida en 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que en el juicio de extradición no hay temas de constitucionalidad que discutir, los días de Hernández Flores en México parecían estar contados, su extradición posible y viable hacia Estados Unidos.

La SCJN avaló el proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso declarar la constitucionalidad de los Artículos 3 y 13 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, así como el Artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional.

Después del fallo, el caso quedó en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Décimo Noveno Circuito, el cual resolvió a favor de Hernández Flores su condición actual, en espera del juicio de extradición.

Los magistrados del Tribunal referido han manejado la improcedencia de la petición formal de extradición según los términos que establecen las leyes; entre otros argumentos esgrimen la violación del derecho a una adecuada defensa y deben evaluar el antecedente sobre la opinión jurídica de un juez federal.

El caso de Hernández Flores tiene historia: la Corte Federal del Distrito Sur de Texas solicitó la extradición del exgobernador priista de Tamaulipas por las mencionadas acusaciones de asociación delictuosa y lavado de dinero. Pero existen otros dos expedientes por fraude bancario y operaciones sin licencia en un negocio de envío de dinero de México a Estados Unidos. Esas transacciones sirvieron de base a las autoridades estadounidenses para abrir el expediente por blanqueo de activos.

En la solicitud de extradición se menciona que, de 2004 a 2010, Hernández Flores presuntamente se asoció con su cuñado, Óscar Manuel Gómez Guerra, para lavar dinero supuestamente del crimen organizado. También crearon una plataforma y esquemas financieros para desviar fondos del erario y enviarlos a Estados Unidos.

Además, de acuerdo con la acusación, entre 2005 y 2015 celebró contratos falsos elaborados con un banco ficticio de alimentos y otros medios ilícitos para obtener cientos de millones de pesos, los cuales fueron blanqueados tanto en México como en Estados

Unidos a través de transacciones financieras elaboradas y estructuradas con información falsa que derivaron en engaños y fraudes.

En 2017, la entonces PGR cumplimentó la orden de detención y el 2 de marzo de 2018 el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, emitió el acuerdo que concedió la extradición del exgobernador a Estados Unidos.

Hernández Flores fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Antes de su captura, el también empresario de la construcción solía pasearse impunemente por todo el país. Viajaba con frecuencia de Nuevo León a la Ciudad de México. También a Cancún, Quintana Roo, donde posee un palacete.

Tras abandonar el cargo, el presidente Peña Nieto lo protegió. Hernández Flores se entrevistó con el entonces mandatario en un yate que flotaba en las aguas del Pacífico. Ahí, Peña Nieto le ordenó a Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, que archivaran su expediente.

El extitular de la PGR obedeció sin oposición alguna. Hoy Murillo Karam se encuentra detenido, desde el 19 de agosto de 2022, acusado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con el conocido e irresuelto Caso Ayotzinapa de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014.

De ese modo Hernández Flores recibió un documento en el que la PGR negaba el ejercicio de la acción penal en su contra por falta de pruebas. Es decir, la PGR no lo perseguiría por delito alguno. El exgobernador había quedado totalmente blindado en México. Todo esto ocurría mientras que en Estados Unidos era buscado debido a los delitos referidos. Las autoridades estadounidenses habían ordenado su captura. Por varias ciudades del Valle de Texas aparecía pegada en paredes y postes su fotografía con la leyenda "Se busca".

Es cuando en octubre de 2017 García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, lo encarceló por un fraude en contra del gobierno estatal, tras comprar el terreno mencionado por el puerto de Altamira. El precio fue disminuido para que los testaferros de Hernández Flores lo compraran —como se declara en la carpeta 14/2017—. Este fue un negocio redondo, según se dijo entonces,

porque el vendedor puso el pastel sobre la mesa de los compradores.

De acuerdo con la acusación consultada, el exgobernador Hernández Flores, a través de Alberto Berlanga Bolado, exsecretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, propietario de la empresa GMC S.A. de C.V. de Altamira, compró el terreno localizado en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. El entonces gobernador pagó 16 millones de pesos por la propiedad, cuando su costo real entonces era de 584 millones.

El terreno había sido malversado desde 2002. En ese tiempo el exgobernador Yarrington Ruvalcaba había vendido las mismas hectáreas en 14 millones de pesos a la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A. de C.V., propiedad de Fernando Cano Martínez, señalado en los expedientes como otro de los prestanombres, tanto de Yarrington como de Hernández.

Cinco años después, Materiales y Construcción Villa de Aguayo vendió el terreno en Altamira a la empresa GMC S.A. de C.V., propiedad de Alberto Berlanga, que en los expedientes del caso es referido también como prestanombre de Hernández Flores.

El caso comenzó a ser investigado por la administración panista de García Cabeza de Vaca. Interpusieron una denuncia ante la entonces PGR y así pudieron recuperar el terreno vendido, propiedad del gobierno del estado. Luego continuó el revanchismo, al integrar un expediente en contra de su antecesor por fraude, peculado y otros delitos. Así pudo encarcelarlo.

Esta fue la venganza de García Cabeza de Vaca, quien en su primer intento por ser gobernador de Tamaulipas fue frenado por Hernández Flores mediante una campaña de fuertes cuestionamientos en la que salió a relucir su encarcelamiento en Estados Unidos, entre otros delitos. También salieron a flote sus negocios con los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox Quesada, con quien mantuvo un contubernio durante los gobiernos de este y Felipe Calderón Hinojosa.

La captura de Hernández Flores ocurrió cuando se paseaba por Ciudad Victoria a bordo de una motocicleta deportiva. El político priista iba ataviado con traje de piel, casco y botas hasta la rodilla.

Ya era perseguido tiempo atrás. Lo tenían en la mira. Cuando detectaron su presencia, se dispuso de un operativo y fue aprehendido. Ahí comenzó su pesadilla, la cual aún no ha terminado por su condición de prisión domiciliaria, la vigilancia de la FGR sobre su persona y la espera al juicio de extradición hacia Estados Unidos. De ser extraditado, tendría que enfrentar una pena de 20 años de cárcel y pagar una multa de medio millón de dólares, de acuerdo con el juez estadounidense, Kenneth Magidson.

Y es que en el expediente del caso declararon varios testigos en su contra. Ellos afirman que cuando Hernández Flores fue ungido candidato del PRI, los hombres del crimen organizado, prestos para seguir en el negocio, ofrecieron financiamiento para su campaña. El dinero del crimen fluyó sin freno alguno.

A cambio, el electo gobernador pagó con posiciones en el gobierno, sobre todo a nivel de la procuración de justicia y la policía. El narcotráfico tenía un enlace fijo en la Secretaría de Gobierno, quien, a su vez, informaba al mandatario sobre la buena marcha del negocio o bien pedía cambios de agentes cuando había problemas que zanjar.

Uno de los testigos estelares de este caso, que también declaró en el juicio contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, es José Antonio Peña Argüelles, un lavador de dinero de Los Zetas que se entregó a las autoridades estadounidenses luego de ser amenazado de muerte por sus enemigos criminales.

El propio testigo contó en sus diversos testimonios que un día recibió una llamada telefónica. “Era un sicario de Los Zetas”, dijo. Le reclamaban el presunto robo de varios millones de dólares y de ello culpaban a su hermano, de quien le mandaron una fotografía tras ser ejecutado.

“Sigues tú, José Antonio”, le advirtieron.

Peña Argüelles corrió a refugiarse en Estados Unidos y se entregó a las autoridades. Más tarde se acogió al Programa de Protección de Testigos para contar lo que sabía. Actualmente, tiene esa condición en la acusación que enfrenta Hernández Flores en Estados Unidos. También testificó para incriminar a Yarrington Ruvalcaba. A los dos los hundió.

Hernández Flores estaba recluido en una cárcel en San Mateo

Atenco, en el Estado de México, después de permanecer varios meses en la Coordinación General Sistema Penal Acusatorio, más conocida como el penal de Ciudad Victoria. A finales de octubre de 2022 se le concedió la libertad tras más de cinco años en prisión, acusado específicamente por estos cuatro delitos procesados desde 2017 hasta 2021: peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la presunta compra de los dos predios, antes mencionados en el municipio de Altamira (que son propiedad del estado); enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El juez Primero del Penal de Ciudad Victoria, Santiago Espinoza Camacho, hizo cumplir el amparo otorgado. La sentencia de liberación se emitió al penal Doctor Antonio Sánchez Galindo, en Tenango del Valle, Estado de México, última prisión donde se encontraba por las acusaciones del Estado que debía cumplir.

El expediente integrado en su contra en Estados Unidos sigue vigente porque la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas lo acusa de lavado de dinero por un monto mínimo de 30 millones de dólares. En este caso, la investigación atribuye esos fondos a sobornos del crimen organizado durante su gobierno, para traficar con drogas desde Tamaulipas hacia Estados Unidos.

En el expediente también se afirma que brindó protección al Cártel del Golfo y a Los Zetas, dos organizaciones poderosas durante su gobierno. Por esos favores, conforme a la acusación estadounidense, el entonces mandatario recibió millones de dólares como pagos que luego depositó en Estados Unidos. Hernández Flores, sin embargo, argumenta que su capital es producto de sus negocios en el rubro de los bienes raíces al que se dedica desde hace varios años, incluso, antes de que el PRI lo postulara como su abanderado a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, su tierra natal.

Al ser notificado de la extradición, el político recurrió a todos los caminos legales para impedir ser enjuiciado en Estados Unidos. Los recursos interpuestos recorrieron varias instancias judiciales. En mayo de 2021 la SCJN resolvió que la extradición procedía porque no existían impedimentos constitucionales.

En Tamaulipas la corrupción institucional y criminal no terminó con el caso de Eugenio Hernández Flores. En las postrimerías de su

gobierno, en 2010, fue ejecutado el candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, quien se aprestaba entonces para sustituirlo en la misma. El abanderado priista recorría el estado y en un tramo de su periplo fue interceptado por varios hombres armados que le dispararon a corta distancia con armas de alto poder. Torre Cantú recibió varios impactos de bala en el cuerpo y cabeza, la sangre chorreaba al interior de su camioneta. Su muerte fue instantánea.

Las autoridades federales concluyeron que el candidato fue asesinado por el entonces líder del Cártel del Golfo, Eduardo Costilla Sánchez —sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en septiembre de 2022, al no haber llegado a un acuerdo para seguir con el negocio—. El famoso capo conocido como *El Coss* estaba muy bien arreglado con la administración de Hernández, pero se afirma que tuvo diferencias con quien sería el nuevo gobernador por la continuidad del negocio.

En vísperas de las elecciones, Rodolfo Torre fue sustituido por su hermano Egidio, quien concluyó la campaña y ganó las elecciones. Su gobierno fue gris y no ajeno a la corrupción, pero al cierre de su administración no tuvo problemas: le entregó el poder al Partido Acción Nacional (PAN) y García Cabeza de Vaca ganó la gubernatura. Ahí parecía que concluirían los sexenios del saqueo y las ligas con el crimen; pero no ocurrió así.

Por el contrario, a la mitad de su gobierno salieron a relucir tanto en México como en Estados Unidos sus vínculos criminales, sus negocios con la compra de propiedades y el lavado de dinero, todo ello documentado en un voluminoso expediente integrado por la FGR. De igual forma, Tamaulipas se convirtió en un territorio sin ley, dominado ampliamente por los criminales.

Todo esto resultó más que evidente. Las matanzas se multiplicaron todos los días, las ejecuciones de migrantes, como la ocurrida en Camargo, donde varias personas fueron incluso calcinadas, ponían en claro que el gobierno de García Cabeza de Vaca ya no gobernaba la entidad y esta se encontraba a merced del crimen.

Las sospechas trascendieron como escándalo nacional cuando oficialmente la FGR informó que integraba un expediente criminal en

contra del mandatario y que se abriría un juicio de procedencia para lograr su desafuero. García Cabeza de Vaca tendría que enfrentar a la justicia por su descomunal enriquecimiento (no ajeno a sus ligas con el crimen ni al saqueo del erario). Tendría que explicar entonces el origen de su fortuna y cómo había adquirido decenas de propiedades, tanto en México como en Estados Unidos. Luego se supo que el político tamaulipeco era investigado desde hacía varios años dentro y fuera del país. En territorio nacional la indagatoria corrió a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, dependiente de la FGR. En Estados Unidos por la DEA, que le seguía los pasos. Los delitos que desde entonces pesaban en su contra eran lavado de dinero, ligas con el crimen, enriquecimiento ilícito. Se asegura que buena parte de su fortuna proviene del narcotráfico.

Los datos respecto a sus presuntos lazos con el crimen organizado salieron a relucir luego de diez meses de investigación realizada por parte de la DEA. Los agentes estadounidenses realizaron un seguimiento del exmandatario mediante intervenciones telefónicas. Se indicó que las pruebas eran irrefutables.

A esta indagatoria se sumó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, que contribuyó con pruebas y logró documentar que el político panista incurrió en presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado. La investigación incluyó a su círculo familiar, ligado también a los negocios sucios. De acuerdo con las pesquisas, García Cabeza de Vaca construyó su patrimonio inmobiliario con recursos que no podía justificar como legales.

Avanzada la indagatoria, en julio de 2021 la FGR envió a la SEIDO el expediente por corrupción. Con esa información se integró la carpeta correspondiente y a la indagatoria se sumó una denuncia del morenista Alejandro Díaz Durán, quien acusó al exmandatario de tener lazos con Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Los señalamientos de que García Cabeza de Vaca estaba relacionado con la delincuencia no son nuevos. Tienen una larga historia. En 2016, por ejemplo, en plena campaña por la gubernatura de Tamaulipas, Héctor Crescencio de León Fonseca, *El R3*, líder del Cártel del Golfo, lo acusó de recibir pagos cuantiosos del grupo

criminal.

Detenido el 7 de enero de 2016 en Altamira, Tamaulipas, el capo declaró ante policías federales:

“Tengo conocimiento de que mi jefe, ‘El R2’ y/o ‘El Toñín’ [identificado por las autoridades con el nombre de Marco Antonio Haro Rodríguez] le entrega dinero a un político de nombre Francisco Javier Cabeza de Vaca”.

No sólo eso: en 2019 el Cártel del Golfo lanzó acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca a través de “narcomantas”. En ellas, la organización criminal acusó al exmandatario de haber recibido quince millones de pesos del grupo criminal. El objetivo: financiar su campaña política. Todo a cambio de permitirles paso libre para el tráfico de drogas en la entidad.

Cuando asumió la gubernatura en 2016, García Cabeza de Vaca ya contaba con una fortuna cuantiosa. En ese tiempo hizo pública su declaración patrimonial junto con la de su esposa, Mariana Gómez Leal. Declaró en ese tiempo contar con doce propiedades —casas, departamentos y terrenos— en la Ciudad de México, Reynosa, Tamaulipas y McAllen, Texas.

Pero los bienes fueron aumentando en su primera etapa, como legislador, y después como gobernador. En 2012, él y su esposa adquirieron cinco propiedades más, conforme a las investigaciones federales; en 2013, cuando fungía como senador de la República, compró un departamento de 481 metros cuadrados en el exclusivo Club de Golf Bosques de Santa Fe, en Cuajimalpa, Ciudad de México. La propiedad fue valorada en 14.3 millones de pesos. En ese tiempo, García Cabeza de Vaca habría recibido sobornos de Emilio Lozoya Austin, según denunció el exfuncionario, entonces director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que él y otros legisladores panistas aprobaran la cuestionada Reforma Energética impulsada entonces por el presidente Peña Nieto.

De acuerdo con Rojas Durán, el denunciante de García Cabeza de Vaca, el monto del exmandatario en propiedades es de aproximadamente 104 millones de pesos, mientras que el salario que podría haber obtenido por sus cargos como funcionario público, entre 2000 y 2016, habría sido de unos 13.2 millones de pesos. Esto, explicó, considerando que no hubiera gastado un solo peso de

sus ingresos para vivir. La diferencia entre sus bienes y sus ingresos es descomunal.

Al término de su mandato, García Cabeza de Vaca fue blanco de cuestionamientos por la corrupción que él mismo prohijó en su gobierno. Entre otros señalamientos, cargó con la acusación de que al cierre de su administración dejó al estado en la bancarrota, con una deuda de 15,700 millones de pesos, además de otros desfalcos que mermaron las finanzas de la entidad.

La acusación fue documentada por el equipo de transición del nuevo gobernador, Américo Villarreal Anaya, además de señalar que antes de que concluyera su mandato en septiembre de 2022, García Cabeza de Vaca benefició tanto a sus amigos como a decenas de compadres y presuntos cómplices entre quienes repartió unas 30 notarías, lo que fue interpretado como otro quebranto para las arcas estatales.

El equipo de transición de Villarreal Anaya consideró este hecho como un regalo que evidencia beneficios para las mafias que compartieron el poder con él. Una fuente consultada se refirió así al reparto de notarías:

“Me refiero al intento de última hora por el cual quiere asignar a dedo, casi como legado testamentario, treinta patentes de notarías públicas. Como si el estado fuera su patrimonio particular y, sobre la base de ese supuesto derecho, pudiera hipotecar a su favor la gestión pública del próximo sexenio”.

La diputada federal de MORENA, Blanca Araceli Narro, declaró que García Cabeza de Vaca es un político acabado, está desesperado y carece de escrúpulos, pero cree que aún tiene poder y tiempo para dañar la entidad.

Y añadió: “Francisco García Cabeza de Vaca no ha dejado de difamar y de dirigir una maquinaria de falsas noticias para perjudicar al gobernador electo y a su entorno político y familiar. Sin escrúpulo alguno sigue malversando el presupuesto para difundir mentiras y dejar la sensación de que el próximo gobernador entra marcado por la corrupción. Mantiene la misma obsesión perversa que lo descalabró electoralmente y que demuestra el resentimiento institucional y la pobreza de principios que lo caracterizan”.

No sólo eso. El saqueo de García Cabeza de Vaca siguió hasta el

cierre de su gestión. Y es que, junto con el enorme adeudo, se preparó otro atraco financiero: se modificó indebidamente el Artículo 13 de la Ley de Ingresos para permitir al gobernador que en los últimos días de su administración pudiera maniobrar un crédito de 1,300 millones de pesos, contratados con Banorte desde el 23 de septiembre de 2021.

Al respecto, se acusó que esta acción fue operada indirectamente por el presidente de la Diputación Permanente, Félix Fernando García Aguiar, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local quien, al excederse en sus funciones, se asumió como Pleno Legislativo para modificar el decreto de ley, con el argumento de que existió un error en su elaboración.

El panorama de García Cabeza de Vaca es un indicador de un patrón reiterado en la mayoría de las figuras políticas de esta suerte de fauna depredadora contra la sociedad. Los resortes que ha movido y los que lo han llevado a conducirse por los caminos de la delincuencia política tienen un largo y oscuro abolengo que en el contexto mexicano supera con creces los modos de concebir el poder por encima de muchos y en contra de todos.

El Chueco y compañía

El exgobernador de Quintana Roo desde 1993 hasta 1999, el priista Mario Villanueva Madrid —conocido en el mundo criminal como *El Chueco*— fue el primer político encarcelado en la era priista.

Después de 20 años de permanecer preso, Villanueva Madrid pudo salir de prisión para terminar de compurgar su pena en casa. Este logro fue gracias a la intervención del presidente López Obrador, quien pidió al Poder Judicial que su petición fuera escuchada. Y así fue.

Pero el 12 de septiembre de 2022, la jueza del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas le negó la prisión domiciliaria, ordenando que le trasladaran al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Chetumal. Tras unos meses de alegatos judiciales, Villanueva Madrid, finalmente, logró su objetivo: ahora vive cómodamente en una residencia que ocupa como casa y

prisión, bajo vigilancia permanente.

El exgobernador quintanarroense vivió un calvario tras su captura el 25 de mayo de 2001. El día que entregó el poder a Joaquín Hendricks Díaz, no se presentó al acto: ya había huido del país. La Policía Judicial Federal lo empezó a perseguir, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) integrara varios expedientes por diversos delitos: protección al narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También se le relacionó con el Cártel de Juárez.

La investigación en su contra inició cuando le faltaba un poco más de un año para dejar la gubernatura. Al entonces mandatario lo relacionaron con ese grupo criminal, entonces encabezado por Amado Carrillo Fuentes, el cual fue fundado a comienzos de los años setenta por Pablo Acosta Villarreal, también conocido como *El Zorro de Ojinaga*. La organización criminal tenía su asiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Villanueva Madrid cursó estudios. Años después dicho Cártel extendió sus reales hacia el Caribe mexicano en tiempos de Carrillo Fuentes, *El Señor de los Cielos*, quien asumió el control del mismo de 1993 a 1997, tras la muerte de Rafael Aguilar Guajardo, expolicía de la Dirección Federal de Seguridad. Aguilar Guajardo fue asesinado en Cancún poco antes de abordar un yate que lo llevaría a la isla de Cozumel.

Supuestamente, Carrillo Fuentes falleció después de someterse a una cirugía plástica para transformarse el rostro, así como a una liposucción. Fue durante su etapa de esplendor cuando extendió sus dominios hacia el Caribe, una de las rutas de trasiego más socorridas. Para ello, echó mano de dos hombres de su confianza: Albino Quintero Meraz, *Don Beto*, quien se afincó en el puerto de Veracruz, y Alcides Ramón Magaña, *El Metro*, afincado en Cancún donde estableció nexos con Villanueva Madrid para el movimiento de droga y el lavado de dinero, según consta en el expediente de esa investigación.

Antes y entonces, dicha ruta era muy explotada por el crimen organizado. La mayoría de los cárteles operaban desde Colombia o Venezuela e ingresaban sus cargamentos por la isla de Cuba y Quintana Roo, donde han proliferado las pistas clandestinas de aterrizaje. Y hasta la fecha esa zona es una de las que tiene el

mayor número de “narcovuelos” operados, muchos de ellos, por el Cártel de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero y sus sobrinos, entre ellos, José Gil Caro Quintero, conocido en el mundo del hampa como *El Pelo Chino y/o Don José*, a quien las autoridades actualmente le atribuyen el trasiego de drogas mediante narcovuelos provenientes de Sudamérica.

Los cargamentos de cocaína entraban a Estados Unidos vía Miami o bien aterrizaban en Veracruz y subían a la frontera a través de Tamaulipas. Aunque el trayecto era más largo, quizá era más seguro.

En el expediente de Villanueva Madrid, integrado por la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, en aquel tiempo encabezada por Mariano Herrán Salvatti —el titular de la PGR era Jorge Madrazo Cuéllar— se exponen historias verdaderamente fantásticas, aunque no carentes de veracidad.

Se cuenta, por ejemplo, que los aviones cargados con droga, propiedad del Cártel de Juárez, aterrizaban en el aeropuerto de Cancún y eran descargados en el hangar del gobierno estatal. Se afirma también que las patrullas de la Policía Estatal se encargaban de su transportación y distribución en los puntos de venta.

En otros pasajes, diversos testigos protegidos cuentan que Villanueva Madrid se reunía con los miembros del Cártel en su despacho del Palacio de Gobierno en Chetumal, o bien en sus oficinas de lujo habilitadas en Cancún, donde eran recibidos como altos ejecutivos y/o empresarios.

Por estos hechos, Villanueva fue indiciado por la PGR. El delito: delincuencia organizada. El expediente se integró cuando todavía era gobernador, como ya se indicó. Por eso, al concluir su mandato se dio a la fuga, por temor a ser detenido. Cuando se enteró que era investigado quiso hablar con el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, pero este no lo recibió. Durante varios meses Liébano Sáenz Ortiz, entonces secretario particular de Zedillo, fungió como mediador. A través de Sáenz, Villanueva Madrid insistió una y otra vez en hablar con el presidente para aclarar, según dijo, las acusaciones en su contra. Nunca fue escuchado. Después, Sáenz Ortiz le cerró la puerta y, de acuerdo con la denuncia de Villanueva Madrid, no le volvió a contestar el teléfono.

Tras su captura, fue internado en el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, mejor conocido como La Palma, en el Estado de México. A lo largo de varios años escribió una suerte de diario en el que explicó las causas que, según él, lo llevaron a prisión. Aquel legajo era un testimonio escrito a mano, en el que explicó que el enojo de Zedillo derivó en una venganza porque él se había negado a otorgarle obras millonarias a su hermano Rodolfo, quien utilizaba el poder presidencial para enriquecerse.

Cuenta Villanueva Madrid que un día Rodolfo le pidió que financiara la construcción de una plaza comercial y otras obras de gran valor económico; le sugirió que obtuviera un crédito para concretar los proyectos a través de lo que se conocía como “La Línea del Rey”. Villanueva se negó. Tras el rechazo, desde la presidencia de la República se activaron los resortes de la PGR: se integró el expediente criminal y así sobrevino su desgracia personal y política.

Por los delitos que le imputaron, fue sentenciado a 20 años de cárcel. Fue el primer gobernador priista encarcelado. Luego fue extraditado a Estados Unidos donde cumplió una pena por lavado de dinero. A partir de sus antecedentes, Villanueva Madrid fue una pieza clave del expediente criminal integrado contra el Cártel de Juárez conocido como “El Maxiproceso” cuando su líder, Amado Carrillo, huyó a Sudamérica debido a la “persecución” de la que era objeto en México.

El capo se instaló entre Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y sus últimas pistas, en 1997, le ubicaron en Cuba, por aquel entonces también refugio del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Amado Carrillo rentó varias residencias para él, su familia y colaboradores en Chile, primer país sudamericano al que arribó con el nombre de Juan Arriaga, originalmente un próspero empresario algodonero de Torreón, Coahuila, a quien tras su muerte le fue usurpada la identidad para que el capo la utilizara. El responsable de falsificar los documentos y de obtener un pasaporte apócrifo para Carrillo Fuentes fue Manuel Bitar Tafich, su operador financiero.

Villanueva Madrid aparecía entre los políticos mejor relacionados con el Cártel de Juárez. Independientemente de la venganza de Zedillo, de la que Villanueva ha hecho mucho hincapié, lo cierto es

que el exgobernador sí abrió puertas en Quintana Roo para que el Cártel se posicionara en el Caribe mexicano.

Tras la huida de Carrillo Fuentes a Sudamérica, en México se siguieron varias investigaciones. La INTERPOL en México, entonces a cargo de Juan Miguel Ponce Edmonson, investigó los domicilios del Cártel de Juárez. La estrategia que siguió el exdirector fue investigar si la gente de la organización criminal había comprado mesas de billar. El investigador policíaco sabía que los miembros de esa organización necesitaban hacer alguna actividad debido al encierro permanente al que estaban sometidos.

Los hombres de Ponce Edmonson se dieron a la tarea de investigar en varias tiendas especializadas. Ubicaron una en particular, donde la empleada les entregó copia de unas facturas que amparaban la compra de varias mesas de billar. “Las compraron varios mexicanos hace menos de un mes”, les dijo. La factura contenía la dirección de las casas donde dichas mesas fueron entregadas.

De esta forma, la INTERPOL ubicó los domicilios que el Cártel de Juárez tenía en un barrio lujoso de Santiago de Chile. Ahí empezó la persecución de Carrillo Fuentes, quien semanas después viajó a México. A algunos de sus familiares y colaboradores cercanos les dijo que debía atender unos negocios; a otros no les dio explicación alguna.

En realidad, hizo el viaje para internarse en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México, donde fue operado. Ahí supuestamente le practicaron una reconstrucción facial y una liposucción. Cuando estaba en recuperación y debido al dolor que sentía le suministraron Dormicum, un medicamento que lo durmió, pero le causó un shock con la anestesia. Conforme al parte médico, esa fue la causa de la muerte del capo, la cual hasta ahora es un verdadero misterio.

Mientras Villanueva Madrid enfrentaba a la justicia, la muerte de Amado Carrillo se cubría de una espesa neblina. Surgieron las dudas de que no hubiese muerto y que tal versión fuera parte de un arreglo con la DEA y la justicia mexicana.

Todo este enigma se robusteció aún más cuando algunos de los médicos que lo operaron aparecieron muertos en tambos en la

carretera México-Acapulco.

Eran tres barriles metálicos los que se usaron como depósito para colocar los despojos de los galenos. Estaban sellados. Tenían manchas de sangre y el olor fétido atrajo la atención de la policía. Procedieron a abrirlos. Debajo de una capa de cemento, rota a golpes, había un cadáver desfigurado. Los agentes cargaron los cuerpos y los llevaron al Servicio Médico Forense de Iguala, Guerrero, donde extrajeron el resto de los despojos.

Los tres cuerpos pertenecían a varones de elevada estatura y presentaban huellas de tortura. El misterio de “los entambados” duró poco tiempo. Las autoridades los identificaron: se trataba de Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. El primero era otorrinolaringólogo y los otros dos, cirujanos plásticos.

Todos ellos habían formado parte del equipo de médicos que intervino al capo aquel 4 de julio de 1997 en la clínica Santa Mónica.

La familia de Godoy, de 37 años, había denunciado su desaparición días antes, cuando fue detenido junto con sus colegas por unos sujetos que dijeron ser policías. Con los tres médicos hallados sumaban cinco los galenos asesinados tras la operación de Amado Carrillo Fuentes. Otro más continúa desaparecido.

Y es que a la muerte de Amado Carrillo siguió una escalada de asesinatos, sobre todo en el norte del país. Se habló de una guerra entre narcotraficantes por la sucesión del jefe. En esta oleada de sangre le llegó el turno a los doctores que lo intervinieron, quienes antes habían asegurado que nunca conocieron la identidad del paciente.

El diario chileno *La Segunda* publicó un texto sobre el caso. Basado en fuentes oficiales de México, expuso que la persona que murió en el hospital no era Carrillo Fuentes sino un policía —apodado *El Chiquilín*— que le servía de doble en sus andanzas. El capo está vivo, señaló el diario, y actualmente “colabora con la DEA”.

A lo largo de cinco sexenios —desde Mario Villanueva Madrid hasta Carlos Joaquín González, quien fue sucedido en 2022 por la morenista Mara Lezama Espinosa, y premiado por López Obrador con la Embajada en Canadá—, Quintana Roo se ha convertido en asiento de mafias nacionales e internacionales. Es la gran pista de aterrizaje para recibir aviones procedentes de Sudamérica y

América Central cargados con droga; también es un centro de consumo de todo tipo de sustancias, territorio clave para el lavado de dinero y operaciones fraudulentas de mafiosos extranjeros.

Todos estos grupos criminales han operado con la protección de gobernadores, empresarios, líderes partidistas y jefes policíacos que ahora están bajo la lupa de la justicia nacional e internacional.

El escándalo de las actividades de grupos mafiosos salió a flote luego de que la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, inició una investigación que puso al descubierto las actividades de personajes de la mafia rumana en el Caribe mexicano. La indagación establece que, al menos desde hace una década, estos grupos mafiosos se afincaron en Quintana Roo y han adquirido propiedades —terrenos en áreas exclusivas, casas, empresas— para lavar el dinero que obtienen de sus actividades ilícitas.

Por su parte, en tiempos de Santiago Nieto Castillo, la UIF presentó una denuncia ante la FGR en la que aparece señalado Florian Tudor, también conocido como *El Tiburón*, un empresario de origen rumano que era la cabeza visible de una amplia red de personajes relacionados con la clonación de tarjetas, fraudes y actividades de lavado de dinero que realizaba con la presunta complicidad de políticos y empresarios.

Estas actividades —de acuerdo con lo señalado por la DEA y la UIF— llevan realizándose desde hace varios años en Quintana Roo, con la complacencia del poder político en turno, ya que aparecen implicados en la red protectora mafiosa los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, señalados en los documentos como quienes brindaron protección en la entidad a la red criminal rumana y a otros grupos.

Tan pronto la UIF concluyó sus indagaciones, la Fiscalía General de la República procedió a integrar las carpetas correspondientes. En ese proceso se filtró una lista de los presuntos implicados en la llamada red mafiosa rumana. Por ejemplo, el 9 de febrero de 2021 el Consejo Político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destituyó a su dirigente estatal, José de la Peña Ruiz Chávez, debido a que su nombre apareció en la “lista negra” de funcionarios a quienes se les embargaron las cuentas bancarias mediante el oficio 110/F/B/978/2021.

A Ruiz Chávez se le relacionó con la banda de El Tiburón. En un lacónico comunicado, el PVEM informó que la dirigencia estatal del partido sería encabezada por Pablo Bustamante, quien se desempeñaba como regidor en el municipio de Solidaridad.

En el documento elaborado por la UIF —y que ya forma parte de una carpeta de investigación integrada por la FGR— también aparece ligado el empresario Ricardo Vega Serrador, propietario de múltiples empresas, inmobiliarias y distribuidoras de combustibles.

Su auge ha sido tan fulgurante que en Quintana Roo lo llaman *El Zar de las gasolineras*: posee una red de distribución de combustibles a través de las empresas La Gas; además, es propietario de las tiendas GOMart y figura como socio, con otras gasolineras, de los consorcios Full Gas y Gulf. De acuerdo con información de la FGR, desde 2014 se le investigaba por presuntas actividades de lavado de dinero.

De acuerdo con la FGR, la DEA y la UIF, en la red de Tudor —entre las que se cuentan unas 80 personas físicas o morales— también figuran el notario público Naín Díaz Medina, el empresario de la comunicación, presidente del Grupo Quequi y promotor de boxeo, José Alberto Gómez Álvarez, así como el exsecretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza y su padre, José Luis Yong Cruz.

Por sus presuntos vínculos con Tudor, la UIF y la FGR también le siguieron los pasos a Francisco Garibay Osorio, quien fungió como titular del Instituto Estatal de la Vivienda y luego, del Patrimonio Inmobiliario del Estado, apoyado por el gobierno de Félix González Canto, ligado en este entramado criminal. El hijo de Garibay, Eliud Garibay Pulido, también figura en el esquema del mafioso rumano acusado de fraudes.

En el andamiaje dedicado a la estafa construida por Tudor, la FGR y la UIF disponen de información suficiente para relacionar a Leticia Rodríguez Lara, conocida en el mundo del hampa como *Doña Lety*: ella era cabeza de la célula delictiva conocida como el Cártel de Cancún, dedicada a la distribución de drogas con apoyo oficial, crímenes, secuestros, tráfico de indocumentados procedentes de Sudamérica, asalto y extorsión de negocios que se negaban a pagar el llamado “derecho de piso”.

Fue detenida en agosto de 2021 por elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Marina en Puebla; y absuelta en noviembre de 2022 de los cargos de venta y distribución de cocaína, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada.

Antes, Rodríguez Lara se encargaba de combatir al crimen organizado: era integrante de la extinta Policía Federal, responsable de perseguir el tráfico de drogas, entre otros delitos federales, hasta que fue destituida. Su vida dio un giro drástico. Surgió Doña Lety, la líder de una banda criminal que, con el paso de los años, se transformó en el conocido Cártel de Cancún.

A la también llamada *La Reina de la Riviera Maya* se le atribuyó buena parte de la violencia en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. El proceso judicial en su contra llevó a las autoridades a ubicar varias propiedades y bienes de la capa. Con base en información confidencial, los fiscales sabían que guardaba parte de las ganancias de sus actividades en cajas fuertes, por lo que llevaron a cabo operativos para asegurar sus bienes.

En la búsqueda de dinero, joyas y otras pertenencias de valor, la policía detectó a más de 800 personas que poseían dinero y bienes cuyos orígenes no podían acreditar. First National Security (FNS) es una empresa de alquiler de cajas de seguridad en la que sus clientes pueden guardar sus posesiones y documentos valiosos.

Una de sus sucursales es la del Centro Comercial Plaza Las Américas de Cancún, el lugar donde Doña Lety rentaba cajas fuertes para ocultar sus bienes, producto de sus actividades ilegales.

Como consta en los expedientes, un juez federal ordenó a la entonces PGR realizar un cateo a la sucursal de la empresa FNS de Cancún para seguir con las pesquisas. El juzgador de ese caso ordenó también que los bienes privados no relacionados con dicha indagatoria debían permanecer intactos.

Pero justamente ahí comenzó el problema, pues los fiscales pusieron bajo resguardo 1,500 cajas de seguridad para revisar sus contenidos y así hallar los bienes de Leticia Rodríguez Lara. De acuerdo con fuentes de la PGR, Doña Lety optó por usar esas cajas con la finalidad de mezclarlas con las de otros clientes; así buscó

desviar la atención y disponer de fondos para operar sus negocios ilegales.

Pese a la orden del juez, los fiscales decidieron tomar todas las cajas y abrirlas para saber qué contenían. Conforme algunos reportes consultados, en algunas se hallaron cifras altas de dinero en efectivo, así como plásticos usados para clonar tarjetas, los cuales presuntamente eran parte de lo que guardaba la organización criminal de Doña Lety.

Cuando los usuarios de esas cajas se enteraron de que sus posesiones fueron extraídas, estalló el escándalo: comenzaron las protestas por las violaciones legales y el allanamiento a las cajas de seguridad. En total, los fiscales abrieron 843 cajas de igual número de personas que, desde hace seis años hasta la fecha, siguen exigiendo la devolución de sus bienes. Como se pudo registrar por varios medios, los usuarios de las cajas gritaban: “No somos ricos, somos ciudadanos comunes y somos amas de casa, personas de la tercera edad, profesionistas, estudiantes, trabajadores y empresarios que llevamos años trabajando por un patrimonio”.

Las cosas se comenzaron a complicar aún más cuando la PGR les informó que para devolverles las pertenencias —joyas, dinero en efectivo en diversas monedas, entre otras— los dueños debían presentar documentación que acreditara su origen legal.

Luego de que el caso de las cajas de Cancún alcanzó nivel de escándalo nacional, la CNDH solicitó la protección de los afectados. El organismo expuso que, en este caso, hubo violaciones al procedimiento: las autoridades aseguraron decenas de cajas sin la presencia de los propietarios, que no fueron notificados, y sin orden de cateo.

La PGR, por su parte, informó que había obtenido la orden de aprehensión mediante la cual se aseguró el inmueble de una empresa dedicada al resguardo de valores, por lo que los fiscales efectuaron la apertura de todas las cajas de seguridad.

Pero otro juzgador de alzada, al que recurrieron los afectados, determinó que las operaciones de la PGR fueron ilegales, pues la orden era para allanar el edificio y no para abrir las cajas de seguridad ahí resguardadas.

El caso derivó en una lluvia de amparos para que los clientes

recuperaran sus bienes: algunos pudieron acreditar el origen de sus pertenencias, otros no y por ello les fue asegurado su dinero y sus joyas.

Doña Lety operó impune durante varios años; tenía la protección de policías y mandos de alto nivel del gobierno de Carlos Manuel Joaquín González, el exgobernador que le permitió al crimen organizado afincarse plenamente en ese estado del Caribe mexicano, igual que lo hizo el rumano Florian Tudor.

En el centro de la red de este también fue mencionado José Antonio de Anda Turati —un experto en temas fiscales y conocido como prominente contable— que fue relacionado con el fraude perpetrado en perjuicio de la empresa Oceanografía que, al igual que Odebrecht, golpeó la estructura financiera de PEMEX. Tras dos años de investigaciones, en 2023 de Anda Turati fue deslindado de las indagatorias, no se le reconoce relación con los fraudes indagados por la autoridad ni vínculo con una red delictiva.

Además de la lista de empresarios y políticos, la hoy FGR le sigue los pasos a los dueños de varios bares y centros nocturnos que operan en Quintana Roo, particularmente, en Cancún y Ciudad del Carmen, pues se le ha señalado como centros de distribución de drogas y lavado de dinero. Estos son los casos de los bares Tobao, Tantra, Rosa Negra, Funky Geischa y ChambaoSon, entre otros.

En la lista de la UIF y en manos de la FGR figuran otros nombres: Héctor Ortiz Solares, a quien llaman *H-1* o *Bandido Boss*. Las autoridades federales lo señalan como jefe de la banda Los Bandidos Revolución Team, un grupo criminal afincado en el estado de Guanajuato, experto en ciberataques a los software que enlazan a los bancos con el denominado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Mediante el uso de *hackers* como operadores del fraude, este grupo criminal obtuvo ganancias multimillonarias, conforme revelan las pesquisas federales, por un estimado de 100 millones de pesos mensuales.

Otro nombre bajo investigación de la FGR es Jonathan López Salazar, identificado por las autoridades como representante del Movimiento Nacional por la Esperanza. Esta organización presuntamente ha sido operada por René Bejarano Nieto —exsecretario particular de López Obrador cuando fungió como jefe

de Gobierno de la Ciudad de México—. Estuvo implicado en los sobornos tras los “moches” o “gratificaciones” que el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz ofreció por los contratos que obtuvo del gobierno capitalino mexicano.

Tras estallar el escándalo de la mafia rumana, Nieto Castillo, en su rol de titular de la UIF, negó que Bejarano Nieto formara parte de la lista de cómplices de los presuntos criminales rumanos. Pero él sí admitió que había tenido tratos con alguno de ellos, aunque nunca precisó con quién.

En el complejo entramado con la mafia rumana también figura Eddy Pérez Escobar. Fue identificado por la UIF como el abogado de los empresarios europeos ligados al fraude con tarjetas bancarias. Defendía los intereses de varios consorcios, entre otros, del Corporativo de Asistencia de Salud Gama, ubicado en la Ciudad de México. Gama es proveedora del gobierno que encabezó Claudia Sheinbaum hasta 2023.

Aunque no forma parte de la lista criminal, el nombre de Jesús Alberto Capella Ibarra —exsecretario de Seguridad Pública de Baja California, Morelos y Quintana Roo— fue acusado por el mafioso rumano Tudor y otros empresarios de encabezar una red de extorsión en perjuicio suyo y de otros de sus socios. Capella fue despedido del cargo en Quintana Roo tras ordenar la represión a tiros de una marcha de mujeres que en noviembre de 2020 protestaban contra la violencia de género tras el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como *Alexis*, una joven de 20 años que desapareció y fue encontrada muerta.

El 10 de febrero de 2020, ya perseguido por la justicia, El Tiburón publicó un desplegado periodístico que también firmaron sus socios —Adrian Cosmin Nicolae y Chakib Naif Al Boustany—, en el que reiteró las acusaciones por extorsión en contra de Capella Ibarra. También indicaron que la red que él encabezó extorsionó a varios empresarios de Quintana Roo.

En ese tiempo, autoridades estadounidenses y mexicanas ya le seguían los pasos a Tudor: se le investigaba por ser el cabecilla principal de la empresa criminal dedicada a la clonación (copia) de tarjetas de crédito mediante una red de cajeros automáticos de su propiedad conocida como Intercash. La organización —de acuerdo

con la FGR— operaba en Europa, Estados Unidos y México. Fabricaba cajeros automáticos y los vendía a los bancos. Con tecnología de punta, clonaban las tarjetas y defraudaban a turistas, principalmente extranjeros.

De acuerdo con las autoridades, el *modus operandi* era el siguiente: al momento que una persona introducía su tarjeta de débito o crédito, el sistema clonaba los datos, después la información robada era usada para proceder a disponer del dinero de las cuentas. Una de las estrategias de Tudor era la de colocar sus cajeros en zonas estratégicas, principalmente, turísticas.

En Quintana Roo los cajeros que vendió Tudor a bancos e instituciones financieras estaban colocados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Tulum. En Europa, Asia y Estados Unidos la mafia rumana sigue la misma estrategia para cometer sus fraudes.

El seguimiento a Tudor, El Tiburón, no empezó en 2020: se le investigaba desde hacía varios años y, cuando arreció su búsqueda, interpuso dos juicios de amparo mediante los cuales pretendió frenar su persecución.

El primer amparo fue aceptado por el Juzgado Segundo de Distrito (expediente 10/2020) el 8 de enero de 2020 y surtió efecto contra actos privativos de la libertad que pudiera reclamar la Secretaría de Relaciones Exteriores. También ganó otro amparo (expediente 1624/2019). El caso se hallaba en el Juzgado Tercero de Distrito y tenía que ver con su extradición. El recurso fue concedido tras pagar 35,000 pesos.

Resultó un misterio cómo Tudor obtuvo la suspensión de los actos en su contra, pero se dijo que repartió mucho dinero entre los jueces que conocieron su caso. Su objetivo siempre fue obtener un amparo definitivo que lo blindara ante cualquier acto legal en su contra y así mantener su estancia en México. Para ello, amplió su demanda contra actos que pudieran reclamar dos nuevas autoridades; presentó alegatos e hizo objeciones de los informes previos de las autoridades que lo acusaron de nuevos delitos.

Algunas de sus propiedades fueron cateadas en mayo de 2020 por la FGR, pero las acciones se frenaron: supuestamente los agentes incurrieron en abusos de autoridad al momento de ejecutarlas.

Esa orden de cateo sólo contemplaba el aseguramiento de armas de fuego. Entre otras irregularidades que se atribuyeron a los agentes, figuran la sustracción de diversos objetos de valor; incluso detuvieron al empresario rumano, pero un día después un juez lo liberó tras considerar que la aprehensión no cumplió con los controles adecuados y hubo violaciones.

Otro de los cateos, esta vez ejecutado en la residencia de Tudor ubicada en la calle Óvalo 59, manzana 9, en Cancún, se realizó el 11 de agosto de 2020. La intervención se efectuó en cumplimiento a una orden concedida por un juzgado federal de control, solicitada a través de la carpeta de investigación del caso CUN-IV-852/2019, a cargo del fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra.

La necesidad de este cateo se sustentó sobre el hecho de que era investigado por una presunta portación de arma de fuego, por la cual se integró la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000151/2019. Para entonces, las autoridades federales ya disponían de información sobre su implicación en varios delitos financieros.

De acuerdo con la denuncia que él presentó ante la FGR, los agentes que ingresaron en su domicilio —cuatro agentes federales y un fiscal— no sólo buscaron armas, sino que terminaron, incluso, saqueando la casa. La denuncia señala que arribaron al lugar y lanzaron amenazas contra el empresario, quien fue obligado a abrir una caja fuerte de donde sustrajeron, además de los objetos ya referidos, pulseras, relojes, documentos diversos y unos 2 millones de dólares en efectivo. También se llevaron diferentes equipos electrónicos.

En su denuncia afirmó que, además de las amenazas en contra de su hijo y esposa, los agentes le “sembraron” un arma de fuego. Durante el cateo, arguyó ser una víctima; no obstante, las autoridades mexicanas y estadounidenses ya lo tenían en su radar por los múltiples fraudes cometidos.

Mafias internacionales

No sólo los rumanos se afincaron en ese trozo paradisíaco del

Caribe que presume ser Quintana Roo. Otros grupos criminales internacionales también se abrieron espacio en ese territorio y aún siguen operando con absoluta impunidad.

En el caso de la mafia israelí, los informes mencionan a personajes como Alon Azulay y Benjamín Yeshurun Sutchi, quienes estaban asentados en la región caribeña mexicana. Ahí fundaron Bucay Soluciones Empresariales. Tenían oficinas centrales en la Ciudad de México y Oaxaca. Su giro ficticio era la distribución de materiales de papelería y servicios de asesoría legal y administrativa.

Conforme a los reportes de inteligencia, la faceta empresarial de los ciudadanos israelíes era una fachada absoluta, la cual tapaba el negocio principal: el lavado de dinero. La FGR investigó a la empresa porque también se involucró en la venta de drogas y armas; sus ganancias eran invertidas en varios giros mercantiles.

Los nexos de los israelíes con cárteles y empresas mexicanas para lavar dinero fueron detectados por el gobierno federal hace 22 años. Tan sólo entre 2000 y 2010 se registraron operaciones entre israelíes y el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva: este grupo criminal era abastecido con armas de alto poder y blanqueaba las ganancias ilegales en bares, restaurantes y en la industria de la construcción, esta última, por cierto, una de las más socorridas por la mafia.

Los israelíes enfrentaron problemas en 2009. Dejaron de operar tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, *El Barbas*. Pero en 2013 retomaron sus actividades y se conectaron con otros cárteles. Sus principales actividades giraban en torno al tráfico de armas, venta de protección, tráfico de mujeres de Europa (principalmente, rusas), fraude con tarjetas bancarias y tráfico de drogas.

De acuerdo con informes de la INTERPOL (que sigue los pasos de diversos grupos criminales internacionales), la mafia rusa opera en América Latina a través de células y, de acuerdo con las descripciones oficiales, “manejan sobre todo un bajo perfil” para evitar la detección de sus actividades. En los informes se establece que los rusos actúan en México, particularmente en Cancún, Tijuana, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Entre las células de rusos que han sido detectadas por las

autoridades, los informes mencionan a la organización Tambovskaya. Entre sus giros está el tráfico de heroína y cocaína. Tienen contactos en África, conforme diversos informes referidos en medios informativos y otros no públicos, así como en Europa occidental. Se han dedicado también al robo de autos, los cuales han traficado a África y cuentan con varias redes que cometen otros delitos como secuestro, pornografía infantil, trata de personas y tráfico humano.

Más datos: los informes de inteligencia mencionan otro grupo ruso afincado en México, identificado como Solntsevskaya Bratva. Las autoridades sostienen que se dedica al blanqueo de activos desde varios centros turísticos; cuentan con empresas en el Caribe mexicano, trafican con cocaína y armas; además, explotan el lucrativo negocio de la trata de personas.

Hay otras tres organizaciones criminales identificadas, también de origen ruso, que operan en Quintana Roo y otros estados del país. Se trata de los Mazukinskaya, una célula ligada a los Izamalovskaia y a los Podoskaya. Sus tentáculos llegan a Yucatán y delinquen con la complicidad de las autoridades.

Otro es conocido como Solstseuskaya y es un brazo de la mafia ucraniana. Esta organización también tiene líneas de entendimiento en Chechenia, Georgia, Alemania, Lituania, Polonia, Croacia, Serbia, Hungría, Rumania y Albania.

Uno de los negocios con el que operan prósperamente es la renta de suites de lujo con vista al mar, ubicadas en la zona hotelera y en la Riviera Maya. Desde ahí planean operaciones de tráfico de drogas. También trafican con diamantes, armas, robo de vehículos e importación de precursores químicos que luego envían a España, Italia y Portugal a través de diversos puertos mexicanos, entre otros, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Algunos cárteles mexicanos, de acuerdo con informes de la INTERPOL, están estrechamente vinculados a estas redes internacionales; y existen otros procedentes de China que se dedican a la venta de droga y al blanqueo de capitales.

Con base en los mismos reportes, los grupos chinos son los que más territorio dominan. La DEA confirmó lo anterior desde 2007: en ese entonces expuso que los mafiosos chinos disponen de células

en las principales capitales del mundo —Nueva York y Los Ángeles, por citar sólo dos— y suelen manejar mucho flujo de dinero en efectivo, así pagan sus operaciones y servicios sin ser detectados. Por ello, juegan un rol clave en el lavado de dinero.

Paraíso de mafias, el Caribe mexicano también alberga a grupos criminales de Venezuela. Los informes de inteligencia los describen como “grupos muy versátiles que operan con bajo perfil” y se dedican al tráfico de enervantes, lavado de dinero y trata de personas.

Por si fuera poco, en el Caribe también está la mafia coreana. Los informes sostienen que este grupo criminal invierte mucho dinero en negocios disfrazados de karaokes que funcionan también en las colonias Roma, Juárez y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, centro principal de operaciones de los llamados “negocios de giros negros”.

Los reportes de inteligencia refieren que los rusos buscan, sobre todo, establecer un puente de tráfico de drogas, comercio ilegal de armas, lavado de dinero y trata de mujeres hacia Estados Unidos. También están contempladas otras modalidades de tráfico humano. Uno de sus negocios más explotados es la prostitución, el secuestro y la usura. Este último giro lo manejan a través de casas de empeño.

Al revisar los informes, sobre todo los que se refieren a sus áreas de influencia, los datos son sorprendentes: la mafia rusa se mueve desde Quintana Roo hasta Baja California. En esta entidad están afincados en la ciudad de Tijuana, cuna del Cártel del mismo nombre, así como en la Ciudad de México.

Operan con un esquema sofisticado y discreto, aseguran los informes. Carecen de una estructura vertical: no cuentan con un sólo jefe. Tienen relaciones con varios cárteles mexicanos y garantizan la discreción, porque operan desde suites o departamentos lujosos, o bien suelen reunirse en la casa de sus amigos, socios y cómplices.

Tienen muy buena organización de sus actividades, además de que funcionan diversificadamente. Los albaneses, por ejemplo, manejan la prostitución con mujeres procedentes de países sudamericanos, de Albania y Europa del Este. Sus ganancias,

aseguran los informes, se destinan en buena medida a la compra de armas.

En los países exsoviéticos, conforme a estimaciones internacionales, operan aproximadamente 10 mil grupos criminales de la mafia rusa. Sus integrantes más importantes, en su mayoría, tienen el antecedente de haber sido agentes del Comité para la Seguridad del Estado (conocido como KGB).

De acuerdo con los análisis respecto a sus comportamientos, todos estos grupos trabajan como lo hacen los socios y directivos de cualquier empresa legal, lo que complica su localización y la aprehensión de sus integrantes. Son dados a formalizar alianzas con otros consorcios legales, con lo que cubren sus verdaderas actividades: tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y comercio de diamantes.

En Cozumel, por ejemplo, donde están asentadas varias joyerías, está afincada la empresa Diamond Part, la misma que en diciembre de 2001 fue implicada en un escándalo: el contrabando de diamantes y oro asegurados por agentes de la extinta Policía Federal Preventiva.

Fueron detenidas tres personas: el israelí Ezra Gad, el colombiano Fabio Alexander Vargas y el mexicano Aníbal Rivero Escalante. La policía les decomisó dos maletas donde escondían nueve lotes de diamantes africanos, aretes, 96 dijes y cinco mancuernas. Cuando los interrogaron, explicaron que pertenecían a la empresa Diamond Part.

De acuerdo con la INTERPOL, los cárteles mexicanos han establecido alianzas con estas organizaciones transnacionales y sobresalen los nexos con la mafia china y rusa, que han convertido sus actividades ilegales en todo un emporio internacional que en México funciona con protección política, particularmente, de gobernadores.

Complejo Caribe

En Quintana Roo esta protección política al crimen organizado nacional e internacional ocurre desde hace al menos cinco sexenios.

Desde Mario Villanueva Madrid hasta Carlos Joaquín González, el narcotráfico ha operado impunemente. Con Villanueva Madrid se afincó el Cártel de Juárez y convirtió al entonces mandatario en su empleado. La presencia de los cárteles aumentó en los gobiernos de Joaquín Hendricks Díaz, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo. Organizaciones criminales como Los Zetas y el Cártel del Golfo, por citar sólo dos de las más temibles, actuaron con toda libertad e incluso con protección de dichos exmandatarios. Tal como también lo hizo el exagente de inteligencia argentino, Raúl Martins Coggiola, radicado por más de una década en Cancún y llamado *El Rey de la trata de blancas* durante los gobiernos de González Canto y Borge Angulo, a quienes presuntamente financió.

Actualmente, el estado está convertido en el principal trampolín del narco para enviar droga a Estados Unidos. Sin mayores restricciones, en Quintana Roo opera el Cártel de Sinaloa y también el de Jalisco Nueva Generación. En otros territorios de la entidad también destaca la presencia del Cártel de Los Rojos y el de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero y familiares suyos, a quienes las autoridades atribuyen los llamados “narcovuelos”: aviones provenientes de Sudamérica que traen principalmente cocaína, aterrizan con protección policíaca en pistas clandestinas e incluso en el propio Aeropuerto Internacional de Cancún.

En ese centro turístico también ha crecido exponencialmente el mercado de consumo de drogas. La oferta de estupefacientes es abierta y escandalosa. Se hace ante los ojos de las propias autoridades. En Playa del Carmen, por ejemplo, la cocaína la ofrecen los vendedores a los turistas afuera de los hoteles, en bares, cantinas y *table dance*, todo ocurre incluso con la presencia policíaca.

Nadie se inhibe. El mercado es abiertamente boyante. En el gobierno de Carlos Manuel Joaquín González el narcotráfico vivió uno de sus sexenios de esplendor: en el estado ocurrió de todo, pero para el mandatario no pasaba nada, no obstante, las balaceras y los crímenes ocurridos a plena luz del día, incluso al interior de los hoteles de lujo.

A lo largo de 30 años, en Quintana Roo se afincaron diversas expresiones de la delincuencia organizada que explotan una de las

rutas más socorridas por los mafiosos. Por ese territorio han desfilado cárteles como el de Juárez. Más tarde arribaron Los Rojos y sembraron violencia y terror.

Como ya se expuso, la expansión del crimen organizado en el Caribe, con aquella relación entre Villanueva Madrid y Carrillo Fuentes, marcó una etapa de esplendor del Cártel de Juárez. La organización dominaba buena parte del país y se aprestaba a controlar la ruta del Caribe. Rafael Aguilar Guajardo había muerto. Presuntamente, Amado Carrillo Fuentes ordenó su ejecución para asumir el mando del grupo criminal.

Pronto vino la expansión del Cártel de Juárez: su representante en Quintana Roo era Alcides Ramón Magaña, *El Metro*, quien habría hecho el enlace directo con Villanueva Madrid para permitir las operaciones del Cártel en la entidad caribeña.

Otra pieza clave del mismo operaba desde Veracruz. Su nombre: Albino Quintero Meraz, *Don Beto*, quien a su vez estaba asociado con Osiel Cárdenas Guillén, el entonces poderoso jefe del Cártel del Golfo y fundador del brazo armado, Los Zetas. Ambos introducían cocaína al país por Chiapas. La movían por Veracruz, llegaban a Tamaulipas y luego a Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones de la entonces PGR, Villanueva Madrid amasó una importante fortuna durante su mandato. Los datos oficiales establecieron entonces que recibía 500 mil dólares por cada cargamento de cocaína que el Cártel de Juárez movía a través del estado. En el libro *De Cancún a Almoloya: el imperio roto de Mario Villanueva*, el periodista José Antonio Callejo Anzures afirma que cuando arribaban los cargamentos de cocaína a Quintana Roo, la droga era transportada desde el hangar del gobierno del estado, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en patrullas de la Policía Estatal. Así lo ordenaba Villanueva Madrid.

También se permitía que diversas aeronaves con droga arribaran a la terminal aérea de Cancún a cualquier hora del día o de la noche. Estas tenían preferencia, porque provenían de Colombia, Panamá o Venezuela para entregar cargamentos al Cártel de Juárez. Era claro que esta mafia controlaba el espacio aéreo caribeño.

Las cosas no cambiaron cuando Villanueva Madrid entregó el

poder en 1999. Su relevo Hendricks Díaz se comprometió, al tomar posesión como gobernador, a combatir el creciente narcotráfico mediante operaciones conjuntas con la Federación. Pero fracasó en sus intentos. El crimen siguió operando a través de otros cárteles poderosos como Los Zetas y el Cártel del Golfo, posicionados durante su gobierno en Quintana Roo.

En su discurso de toma de posesión, Hendricks Díaz afirmó, contundente: “que quede claro: la intención que tengan las organizaciones criminales de narcotraficantes por establecerse en Quintana Roo, se verán frustradas”.

Expuso, además, que los cárteles de la droga serían enfrentados con organización, coordinación y orden en los sistemas y operación de los programas de seguridad pública. En otro momento, indicó: “es fundamental que el orden legal tenga plena observación. Es preciso que las autoridades actúen con apego a las normas, que los derechos sean reconocidos y las discrepancias resulten conforme a la ley”.

Pero uno era el discurso y otra la realidad: los baños de sangre continuaron en el estado debido a los enfrentamientos por el control de la plaza entre los cárteles de Juárez, del Golfo y Los Zetas.

En 2005 las autoridades antidrogas reportaron la presencia de varios cárteles en Quintana Roo, pero la “narcodinámica” no se comparaba con la que se observaba en el norte del país, donde las masacres ocurrían todos los días.

Cuando Félix González Canto arribó al poder se presentó una suerte de *boom* criminal en el estado. El crimen se dispersó por toda la entidad descontroladamente. Y por ese caos de inseguridad se dijo que el mandatario había “vendido la plaza” a más de un cártel, lo que derivó en disputas y matanzas.

Un caso evidenció que el crimen organizado había infiltrado la estructura de poder: el 3 de febrero de 2009, Mauro Enrique Tello Quiñones, general de brigada retirado del Ejército Mexicano, fue ejecutado de manera brutal 24 horas después de haber sido nombrado asesor en materia de seguridad pública del entonces alcalde de Cancún, Gregorio *Greg* Sánchez.

Otros datos oficiales, particularmente, de la extinta PGR, establecían desde entonces que el crimen organizado se había

empoderado de la entidad desde el sexenio de Salinas de Gortari. Uno de los más desastrosos de la historia, pues se le atribuye el origen del infortunio que hasta ahora padece el país.

Desde ese tiempo, Quintana Roo era utilizado por los cárteles del narcotráfico de Colombia y México como trampolín para el cruce de drogas hacia Estados Unidos. Las sustancias provenían de Sudamérica y arribaban al Caribe en aviones privados y comerciales. Durante el gobierno de González Canto —mentor político de Borge Angulo, en cuyo gobierno el narcotráfico se entronizó en el estado— la entidad registró un total de 798 casos de delitos contra la salud, signo claro de que la dinámica del narco iba creciendo. La mayoría de los casos fueron por posesión de enervantes.

En ese periodo gubernamental —uno de los más polémicos que se recuerden por la violencia y la corrupción institucional— la tendencia de los delitos relacionados con el narcotráfico cambió definitivamente: el consumo interno creció y con ello las modalidades de tráfico y comercio. Todo al amparo del poder político, no se podía entender de otra manera el triunfante crecimiento del poder criminal.

Al siguiente año, en 2007, Quintana Roo rebasó la barrera de los mil delitos contra la salud. Se declararon 1,043 casos, de los cuales 992 fueron por posesión. En cuanto al tráfico, se registraron 41 por comercio de drogas diversas, una especie de succulenta carta para los consumidores.

La violencia había llegado para quedarse, producto de las disputas entre grupos criminales por el control de la distribución y el comercio de drogas, particularmente, cocaína y marihuana, las de mayores demandas entre el público consumidor. Luego sobrevino la fiebre de las drogas sintéticas, las más adictivas y se colocaron en la preferencia de los adictos por ser más baratas, aunque más dañinas y destructivas. Por ejemplo, el “viaje” de fentanilo, de acuerdo con ellos, es pleno, pero dura muy poco. Por lo que necesitan más dosis para mantenerse fuera de la realidad, aunque en cualquier momento pueda sobrevenir el colapso: una muerte instantánea.

Tras el arribo de Borge Angulo al poder —llevado de la mano por

González Canto, pues este pretendió seguir gobernando a través de su alumno político—, al mandatario quintanarroense se le relacionó con el consumo de cocaína. También con personajes del narcotráfico y de otras modalidades criminales. Cuentan que asistía a los partidos de béisbol pasado de tragos y, en cosa de minutos, estaba totalmente sobrio pero eufórico, con la mirada luminosa, el rostro rígido y evidentes destellos de incoherencias.

Tanto Borge Angulo como González Canto fueron vinculados con Raúl Martins, el empresario de origen argentino ligado a la trata de mujeres. Se asegura que apoyó las campañas políticas de ambos y, de esa forma, se mantuvo impune por varios años, los suficientes como para construir un emporio de la prostitución en Quintana Roo, hasta ahora vigente.

Durante el gobierno de Borge Angulo, Quintana Roo se sumió en el caos. Además de la corrupción, el mandatario desató una orgía con negocios ilegales: venta de terrenos de alta plusvalía a bajo costo, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, abierto saqueo del erario a través de empresas fantasmas que beneficiaron a amigos y compadres. En esa etapa gubernamental, se afincaron los cárteles del Golfo, Los Zetas y el CJNG. Este último con mayor poder debido a su belicosidad. Las tres organizaciones criminales se apoderaron de ciudades como Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, entre otras, las más florecientes en el turismo internacional.

El 10 de noviembre de 2021 se le dictó prisión preventiva a Borge Angulo, y en diciembre de 2022 un juez de Control la dejó sin efectos. Esta medida había sido emitida antes, el 27 de octubre de 2022, por el juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México. Tras el fallo se ordenó su libertad inmediata, pero continúa en prisión en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, de Ayala, Morelos, debido a otros procesos penales que enfrenta.

Con Joaquín González, quien dejó la gubernatura en septiembre de 2022, el número de grupos criminales aumentó de forma escandalosa: arribaron al menos cinco de los más violentos y cómodamente se instalaron en el estado. Desde entonces ahí operan, impunes, las redes de Sinaloa, el CJNG, del Golfo, Los Zetas

y Los Rojos. Este último llegó al territorio después del nombramiento de Alberto Capella Ibarra como director de Seguridad Pública —herencia de Graco Ramírez Garrido para Quintana Roo—.

No se olvida que Capella Ibarra fue encargado de la seguridad pública en Tijuana y Morelos, con resultados negativos. En ambas entidades instauró el llamado modelo “Mando Único” para atajar a la delincuencia, según presumía a boca llena, lo que derivó en rotundo fracaso. En la tierra de Emiliano Zapata se le relacionó públicamente con la protección de Santiago Mazari Hernández, *El Carrete*, jefe del Cártel de Los Rojos. Por lo que más que combatir el crimen, lo protegió. Mazari Hernández operó en Morelos durante el gobierno de Graco Ramírez —el llamado miembro distinguido de la “izquierda progresista” que resultó la más retrógrada— y se afirma que fue detenido en 2019 en el municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, tras escalar con mayor fuerza su confrontación con Guerreros Unidos, su rival.

De vuelta a Quintana Roo, en el último tramo del sexenio de Joaquín González la dinámica del narcotráfico fue aun mayor: el estado se convirtió en uno de los preferidos para mafiosos sudamericanos. Utilizaron a Cancún como su principal pista de aterrizaje de cuantiosos embarques de droga provenientes tanto de Colombia como de Panamá o Venezuela. La violencia fue el principal flagelo de su gobierno, la cual se extendió a lo largo y ancho del estado. Por incapacidad o complicidad con el crimen, este fue imparable. No obstante, fue premiado por el presidente López Obrador con su nombramiento como embajador.

Tan sólo en 2020, la SEDENA detectó unas 20 avionetas cargadas con droga. Algunas fueron aseguradas con sustancias. Pero en la mayoría de los casos las aeronaves se incautaron vacías: los narcotraficantes las abandonaron en las pistas o en carreteras luego de descargar la mercancía.

Sin una política de control para evitar los llamados “narcovuelos” ni la presencia de cárteles, el gobierno de Joaquín González no supo o no le interesó evitar que el crimen utilizara al estado como centro de operaciones. Por otra parte, la Federación también fracasó en su política antidrogas en todo el país.

Por ello el comercio de estupefacientes es imparable y la actividad

criminal opera en completa impunidad. Así, la herencia de Joaquín González retrata un estado que actualmente es el más importante refugio de capos y mafiosos nacionales e internacionales. Lo mismo trabajan con el tráfico de drogas que con extorsiones, trata de personas, venta de protección, cobro de piso y secuestros. Estas redes siguen intactas y están a la espera de establecer pactos con las nuevas autoridades. Y con ese preocupante desastre en materia de seguridad, Quintana Roo fue entregado el 25 de septiembre de 2022 a la nueva gobernadora Mara Lezama Espinosa, del partido MORENA.

La nueva mandataria no sólo heredó un estado mafioso. Su reputación está en entredicho debido a que ha sido cuestionada públicamente como presunta protectora de grupos dedicados al narcomenudeo desde que fue alcaldesa de Cancún.

Pese a estar bajo el reflector de la justicia por su evidente enriquecimiento, aparentemente sin justificación, Lezama Espinosa terminó convertida en la candidata de MORENA porque, de acuerdo con varias fuentes consultadas, es la consentida del presidente López Obrador.

Debido a un incremento descomunal de su fortuna, vista como desproporcionada con respecto a sus ingresos legales, la UIF y la FGR comenzaron a investigar a la entonces alcaldesa del municipio de Benito Juárez, Cancún, por delitos financieros: lavado de dinero y presuntos vínculos con grupos locales del crimen organizado.

Las investigaciones mostraron avances. Tantos, que la FGR pudo integrar tres carpetas por la probable responsabilidad en los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y abuso de autoridad, lo que pintaba su panorama político y personal todavía más grave.

Las carpetas, cuando estaban en la fase de integración, fueron enumeradas de la siguiente manera: FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000372/2020, FED/FECC/FECC-QR/634/2020 y FED/FECC/FECC-QR/538/2020. Todas plagadas de datos financieros personales que, en ese momento, no se explicaban ni lógicamente ni legalmente. Esto llamó mucho la atención de las autoridades, pues el patrimonio de la actual gobernadora ya era más que sorprendente.

Las investigaciones incluyeron registros de transferencias bancarias millonarias. Además, había copias de escrituras públicas y declaraciones patrimoniales presuntamente falseadas, conforme a las autoridades, con el objetivo de ocultar el patrimonio amasado por la entonces alcaldesa de Cancún. La investigación seguía avanzando conforme Lezama Espinosa construía con mucha celeridad su camino hacia la gubernatura. Tanto invirtió en ese proyecto, que en ese tiempo ya era considerada como la favorita para ganar la elección, debido a que contaba con el respaldo del presidencial y del entonces mandatario, Joaquín González. Este nunca se opuso a su candidatura. Jugó según el son que le tocó López Obrador: la obediencia por encima de todo.

De acuerdo con la indagatoria, las pesquisas se centraron en el análisis de los movimientos financieros de la empresa Desarrolladora Cumpal, la cual registró actividades financieras atípicas en los últimos años.

La UIF sospechaba, con base en datos y evidencias, que esa compañía era utilizada para ocultar movimientos financieros. De igual forma, al entonces titular de la dependencia le llamó la atención el desorbitante movimiento de dinero en efectivo por parte de la entonces alcaldesa Lezama Espinosa, así como de su esposo, Omar Terrazas García.

Las sospechas de las autoridades federales se robustecieron todavía más porque Lezama Espinosa adquirió, cuando estaba en funciones como edil, un vehículo Mercedes Benz CLA 250 Sport con un valor aproximado de 700,000 pesos, el cual fue pagado en efectivo y en una sola exhibición.

No es todo: Terrazas García hizo lo propio con un vehículo de la misma marca: clase GLE 43 AMG 2019 Coupé valuado en 1.4 millones de pesos, el cual también se pagó en “cash” de la misma forma.

El primer indicio que tuvo la autoridad federal de este inusual manejo de recursos y del incremento patrimonial de la pareja se tuvo el 8 de septiembre de 2020, cuando la alcaldesa fue denunciada por la activista Flor Tapia Pastrana. La denuncia de la que partió la FGR para integrar las tres carpetas fue ratificada el 14 de octubre de 2021. Las investigaciones continuaron también con

informes aportados por la DEA, en los que se menciona que Lezama Espinosa presuntamente entró en negociaciones con grupos locales del crimen organizado, en particular con células del CJNG, que controlan el mercado del narcomenudeo en ese municipio turístico y que pagan cuotas millonarias mensuales por operar libremente y con impunidad.

Los reflectores se encendieron contra Lezama Espinosa cuando se descubrió que cedió grandes extensiones de terrenos de alta plusvalía a una empresa y, a cambio, recibió en donación una residencia conocida como “La Casa Blanca”, valuada en 4 millones de dólares, de acuerdo con algunas versiones, aunque otros datos establecen que su costo es de 4 millones de pesos.

Conforme lo establecido en las carpetas de investigación, sobre esta propiedad se realizó una permuta con la empresa Tarjetel del Sureste S.A. de C.V., que la transfirió definitiva e irrevocablemente mediante el acta de cesión de derechos P.A112.433 e involucra también al Buró Inmobiliario América S.A. de C.V., ligados en negocios inmobiliarios con la entonces alcaldesa de Cancún.

En las investigaciones se explica que el Ayuntamiento de la ciudad solapó la anexión de 15,000 metros cuadrados de área protegida por Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) al terreno donde estaba un club con 18,000 metros cuadrados. Y esa propiedad de 33 mil metros la permutó la autoridad municipal al Buró Inmobiliario América para la aprobación de Tarjetel del Sureste.

A cambio, Lezama Espinosa recibió “La Casa Blanca”. Sus escrituras públicas enumeradas 4724 y 1 122 403, al ser dos inmuebles, formaron parte de las investigaciones que realizaron tanto la UIF como la FGR.

La denuncia inicial contra la exalcaldesa de Cancún se presentó ante la SEIDO, con el número 373/2020 y fecha del 2 de julio de 2020. Y de manera paralela la UIF inició sus propias pesquisas.

Estas investigaciones se frenaron. Y es que Hugo Alday Nieto, quien era el secretario técnico del Ayuntamiento de Cancún, resultó ser primo de Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF y responsable inicial de las investigaciones contra Lezama Espinosa. Nadie sabe qué pasó realmente, aunque se infiere que todo fue negociado para que la alcaldesa fuera ungida como candidata a la

gubernatura. La indagación terminó en un archivo muerto.

Todo esto ocurrió a pesar de que los presuntos sobornos que Lezama Espinosa habría recibido de la delincuencia organizada explicaban, conforme a la FGR, el incremento cuantioso de su patrimonio. En ese momento tanto la UIF como la Procuraduría General de la República centraban sus pesquisas en el mecanismo de corrupción y lavado de dinero —a partir de lo que aseguraron entonces, ya que había evidencias de la participación de la exalcaldesa, cuyo nombre completo es María Elena Hermelinda Lezama Espinosa—.

Las investigaciones se enfocaban en las actividades desarrolladas por la empresa Desarrolladora Cumpal, integrada por Omar Terrazas García, esposo de la exalcaldesa, y sus hijos: Daniel Barrón Lezama, Omar Terrazas Lezama y María Terrazas Lezama, quienes, de acuerdo con la FGR y la UIF, sirvieron a Mara como instrumentos para adquirir propiedades que registraron con precios subvaluados.

La lista de propiedades que acreditó la FGR y la UIF se refieren en las carpetas integradas. Se trata, por ejemplo, de una propiedad en Puerto Morelos, en Cancún, con un valor de 4 millones 800,000 pesos; otra adquirida en la avenida Yaxchilán, el 31 de agosto de 2016, con valor de 1 millón 900,000 pesos; un terreno en la avenida Guayacán, comprado el 27 de abril de 2018, con un costo de 3 millones 400,000 pesos.

Los expedientes incluyeron diez propiedades más, cuyas ubicaciones no se mencionaron, pero en conjunto daban cuenta de una inversión de más de 200 millones de pesos. Ante esta danza millonaria de dudosa procedencia, el presidente López Obrador cerró los ojos como lo hizo con Ignacio Ovalle Fernández, el saqueador de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

El *modus operandi* de Lezama Espinosa para adquirir tantas residencias se explica por sí solo. A partir de las investigaciones hay varias hipótesis: venta de terrenos federales, negocios con contratistas, pagos del crimen organizado, en particular del CJNG, y lavado de dinero.

De acuerdo con la FGR, en todas las operaciones de compraventa de departamentos, edificios y residencias, participó como valuador

el síndico municipal, Heyden Cebada Rivas. Para dar fe de la compraventa de inmuebles la exalcaldesa siempre contó con los servicios del notario 62, su preferido, quien a su vez fungió como director municipal de Desarrollo Urbano.

El mapa criminal diseñado por la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ilustra cómo operaron, durante la administración de Lezama Espinosa en Benito Juárez, Cancún, cuatro cárteles que siguen en actividad y tienen dominada la plaza: el de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas y el legendario Cártel del Golfo.

En las investigaciones que conjuntamente realizaron tanto la FGR como la UIF, con la colaboración de la DEA, a la exalcaldesa de Cancún y actual gobernadora de Quintana Roo se le relacionó con las dos primeras organizaciones criminales, las que habrían establecido un pacto de no agresión a cambio de que les permitieran operar en el municipio; pero principalmente en la zona hotelera, donde está la mayor dinámica de venta y consumo de estupefacientes debido a la alta afluencia de turistas, en su mayoría, extranjeros.

Sin embargo, los tentáculos de estos grupos criminales se extendieron a Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, entre otros puntos de auge turístico, incluyendo hoteles de lujo.

Este presunto vínculo de la exalcaldesa con el crimen, conforme a las pesquisas de la FGR, podría ser una de las fuentes de su enriquecimiento, aunque no se descartaron otras como la corrupción institucional con proveedores del Ayuntamiento de Benito Juárez, venta de terrenos de alta plusvalía y actividades de lavado de dinero. Todas estas hipótesis fueron consideradas en las carpetas de investigación que se integraron en 2020.

Sin embargo, ninguna de las carpetas procedió. De buenas a primeras los expedientes fueron sepultados por la FGR. La UIF guardó silencio. En medio del más completo hermetismo, al caso le dieron literalmente carpetazo. Lezama Espinosa fue cobijada con el manto de la impunidad y, peor aún, fue lanzada como candidata de MORENA al gobierno de Quintana Roo y ganó las elecciones con amplia ventaja. Actualmente gobierna ese pedazo de territorio del Caribe mexicano, uno de los más codiciados por el crimen organizado nacional e internacional.

Morelos adentro

El panorama criminal no fue, ni es en la actualidad, diferente en Morelos, cuna de cárteles que se afincaron con el apoyo de gobernadores, y paso obligado de la droga que proviene de Guerrero, Michoacán y el Estado de México para llegar a su principal destino: la Ciudad de México, el más grande centro de consumo de drogas del país.

Morelos tiene larga historia en materia de narcotráfico. El territorio fue escenario de una cumbre de capos en los años ochenta, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo —el llamado *Jefe de Jefes*— fue detenido tras el crimen de Enrique *Kiki* Camarena. En ese entonces el territorio fue repartido entre varios grupos criminales. Más tarde todos terminaron enfrentados debido a la lucha de poder en la que se enfrascaron.

En los años noventa, cuando era el amo y señor del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes —*El Señor de los Cielos*— vivió en Tetecala, Morelos. Ahí tenía una hacienda fastuosa con su inmensa barda de más de cinco metros de altura. Toda construida con piedra, adentro hay residencias, albercas y hasta un cementerio privado donde están enterrados familiares de Carrillo Fuentes. Entre otros, se cree que Amada, hija suya que murió ahogada.

Operó desde Morelos con el respaldo del entonces gobernador Jorge Carrillo Olea, de acuerdo con lo establecido por las investigaciones de entonces. El Señor de los Cielos vivía a sus anchas en esa entidad. Un hecho así lo ilustra: en 1996 partieron aviones —uno desde el aeropuerto de Temixco— rumbo a Culiacán. En ellos viajaban invitados a la boda de la hermana de Carrillo Fuentes, celebrada en Navolato, Sinaloa. Los aviones fueron rentados en el Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos o Aeropuerto Internacional de Toluca. Se afirma que el capo estuvo a punto de ser detenido en la fiesta, pero fue alertado a tiempo. Abandonó el pueblo disfrazado de viejito y montado en una carreta cargada con leña. Así pasó desapercibido ante los agentes policíacos.

Desde Morelos, Carrillo Fuentes se movía abiertamente hacia la Ciudad de México. Acudía a sus residencias, algunas adquiridas en

el Pedregal de San Ángel y otras zonas de postín. Siempre rodeado de agentes de seguridad, de miembros de la extinta Policía Judicial Federal cuando era encabezada por Adrián Carrera Fuentes, uno de sus principales protectores.

En 2006 el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva también se asentó en Morelos. Arturo Beltrán Leyva, *El Barbas*, fue abatido en 2009 al interior de su departamento de lujo, en la ciudad de Cuernavaca. La muerte del capo fue producto de un enfrentamiento entre sicarios y miembros de la Marina. Ahí fue acribillado Beltrán, jefe del Cártel que antes estuvo asociado con el grupo Sinaloa.

Tras ser declarado oficialmente muerto, el lugar de Carrillo Fuentes en Morelos lo ocupó su exsocio, Juan José Esparragoza Moreno, *El Azul*, el silencioso y discreto capo que, se asegura, se “autodesapareció”. Sus familiares dijeron que había muerto el 8 de junio de 2014 y tras su presunto deceso se efectuaron varias misas en la parroquia del Espíritu Santo, en la colonia Las Quintas, en Sinaloa. Aunque las autoridades mexicanas y estadounidenses no han podido confirmar, hasta ahora, si está vivo o muerto. En una entrevista realizada en España al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el funcionario afirmó: “no tenemos elementos para afirmar que esté muerto ni para decir que aún está con vida”.

El misterio de su muerte se ha robustecido, pues son ampliamente conocidas las habilidades del capo. Sin embargo, sus familiares entablaron un proceso legal. María Guadalupe Gastelum y Brenda Esparragoza Gastelum, esposa e hija de Esparragoza Moreno, promovieron dos juicios de amparo con los que buscaban recuperar unos 58 millones de pesos asegurados por la Unidad de Inteligencia Financiera hace una década.

Ambas promovieron la demanda de garantías el 6 de abril de 2019, para impugnar el bloqueo y aseguramiento de un contrato de inversión del 19 de marzo de 2019 por un monto de 30 millones de pesos y de cualquier otro que se encontrara a su nombre. Conforme con datos del expediente, el 4 de junio de 2018, el entonces titular de la UIF —Santiago Nieto Castillo— ordenó eliminar a Brenda de la lista de personas bloqueadas.

El 10 de junio de ese año la Unidad Especializada en

Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR notificó que la averiguación UEIORPIFAM/AP/059/2013, y su acumulada aún se encontraban en integración. Por ello, seguía vigente el aseguramiento de la cuenta de inversión, por lo que realmente no se había ordenado el desbloqueo.

Por su parte, Brenda interpuso un juicio de amparo para intentar revertir el aseguramiento de sus cuentas bancarias en Banorte, así como de tres cheques de caja, cada uno por la suma de 6 millones 800,000 pesos y otro por la cantidad aproximada a 7 millones de pesos. Todos con fecha del 13 de abril de 2013. Sin embargo, al respecto la FGR informó en su momento que no solicitó el desbloqueo de los fondos, cuyo origen legal se desconoce, aunque sobre estos dineros pese la sospecha de ser producto de actividades ilícitas.

El Azul vivió una etapa de esplendor en Morelos, quizá la última de su carrera delictiva, en tiempos del gobernador Sergio Estrada Cajigal, un panista que, se asegura, por un tiempo fue yerno del capo al entablar una relación con una de las hijas del narcotraficante: Nadia Patricia Esparragoza Gastélum.

Todo esto ocurrió a principios de 2000, cuando el panista arribó a la gubernatura. Eran tiempos de jauja. Estrada Cajigal fue ampliamente apoyado por el entonces presidente Vicente Fox Quesada tras estallar el escándalo de su relación con El Azul y su hija, quien en ese tiempo comenzó a ser investigada por presuntas actividades de lavado de dinero tras detectarse depósitos por más de 80 millones de pesos.

El semanario tijuanense *Zeta*, fundado por el periodista Jesús Blancornelas, publicó la historia de este episodio en su edición del 5 de febrero de 2016.

En el texto, el semanario da cuenta de que la hija de Esparragoza era investigada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La nota inicia con estos pormenores: “En menos de dos meses cumplirá cuarenta abriles. Es morena y elegante. Arriesgada en los negocios. Desde temprana edad aprendió a mover el dinero. Estudió la Licenciatura en Mercadotecnia en el Tec de Monterrey, en Nuevo León. Ha recorrido el mundo como viajera y como su casa. Buenos

Aires y Boston le adoptaron por un tiempo”.

Nadia Patricia Esparragoza Gastelum —contó Blancornelas— tuvo una juventud soñada. Es una mujer de sangre “azul”, hija del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, *El Azul*, como le dicen (o decían) por lo oscuro de su piel.

La indicación que hizo sobre ella el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en julio de 2012, la puso en la mira de las autoridades mexicanas. Fue entonces cuando las dependencias federales actuaron. Por ello le fueron congeladas sus cuentas bancarias y las instituciones financieras le prohibieron abrir nuevas cuentas, pues la extinta PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la investigaron por actividades de lavado de dinero.

El 24 de abril de 2013 la UIF formuló una querrela en contra de la familia Esparragoza Gastelum ante la entonces PGR, donde se inició la averiguación previa por hechos relacionados con blanqueo de dinero depositado en una cuenta bancaria de la hija de El Azul que después se reenviaba a cuentas de personas físicas y empresas con el objeto de ocultar su origen.

La orden de boletinar a los Esparragoza Gastelum y sus negocios, por parte de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, e impedir a los estadounidenses realizar transacciones con ellos, metió presión a las instituciones mexicanas para iniciar una investigación. En la indagatoria se asentó un dato ya conocido: que El Azul fue uno de los principales líderes de la organización criminal del Cártel de Sinaloa y también era considerado de los principales cerebros financieros desde que militó en el Cártel de Juárez, allá en los años noventa.

El parentesco no fue el único motivo de la pesquisa contra la hija del presunto criminal, aunque sí el principal. La alerta internacional generada por la OFAC motivó que el 8 de agosto de 2002, Banorte, en la sucursal Plaza del Sol de Zapopan, en Jalisco, decidiera concluir la relación con Nadia Patricia como titular de una cuenta que abrió dos meses antes. Para justificar sus fondos y aperturar su cuenta, argumentó dedicarse a la industria de la construcción.

Y es que en ese tiempo Esparragoza Gastelum tenía en su cuenta un saldo de 27 millones 19,685 pesos con 99 centavos. Al cancelarle, la institución expidió un cheque de caja a la

excuentahabiente por dicha cantidad. La hija de El Azul intentó abrir una nueva cuenta en Banorte, pero le fue negada. Entonces las autoridades detectaron que la mujer depositó ese mismo cheque en una cuenta de Banco del Bajío en León, Guanajuato, el 16 de abril de 2013.

Para entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ya contaba con un expediente abierto para seguirle los pasos a la sospechosa. La dependencia había documentado movimientos bancarios inusuales desde el 26 de julio de 2011 hasta la fecha de la cancelación de su cuenta Mujer Banorte por más de 79 millones de pesos.

A las autoridades también les llamó la atención la facilidad que Nadia Patricia tenía para retirar efectivo a través de la expedición de cheques, generalmente por más de 2 millones de pesos, que se depositaban en empresas investigadas desde entonces dentro y fuera de México. También se detectó un depósito en su cuenta por 27 millones de pesos por la venta de fondos Cetes. Esa misma cantidad fue retirada al poco tiempo.

Tras recibir la denuncia hacendaria, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO, ordenó las diligencias e investigaciones que fueran necesarias.

El mismo 24 de abril de 2013, cuando recibió la denuncia, el fiscal federal del caso ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el aseguramiento provisional de todas las cuentas bancarias (de intermediación, depósito, ahorro, inversión, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, crédito con o sin garantía, valores bursátiles) en las que apareciera como titular la indiciada.

De las constancias se advirtió que el total de las operaciones detectadas y analizadas se realizaron con cheques de caja negociados a diversas personas, distintas a los beneficiarios de los mismos. Ello, no obstante que este tipo de instrumento monetario se emite en favor de personas físicas o morales, determinadas para su cobro o depósito con cuenta a su nombre.

Las pesquisas dejaron en claro que las transacciones detectadas, todas realizadas con cheques de caja, se operaron con la

contribución especial de una ejecutiva del banco. Conforme algunas operaciones detectadas por la UIF, se observó la inversión de dinero en efectivo a muy corto plazo, ocultando o pretendiendo ocultar el origen o destino final de los recursos operados. Esto ocasionó una afectación al sistema financiero mexicano.

Además de los movimientos reportados durante 2012, cuando le fue cancelada una de sus cuentas, se dio seguimiento a otras transacciones. La UIF realizó una búsqueda en su base de datos para identificar las operaciones relevantes o sospechosas relacionadas con la indiciada y que no fueron reportadas por las instituciones de crédito implicadas. Se detectaron varias que encendieron los focos rojos:

—El 9 de enero de 2013 hizo un depósito en cuenta, expedido por Banca Mifel, por 1 millón 670,717 pesos.

—Una operación reportada por Bansí S.A., el 20 de marzo de 2013, que involucra el depósito en cuenta de un cheque emitido por Banco Santander México el 15 de marzo de ese año, por 5 millones de pesos.

—El 25 de marzo de 2013 Nadia Patricia depositó en su cuenta cinco cheques de caja expedidos por Banco Mercantil del Norte, por un monto de más de 20 millones de pesos; luego transfirió los recursos a otra cuenta.

La investigación estadounidense también incluyó a María Guadalupe Gastelum Payán, esposa de El Azul; así como a los hermanos de Nadia: Cristian Iván, Brenda Guadalupe y Juan Ignacio Esparragoza Gastelum. De este último se afirma que está muerto.

El entonces gobernador morelense, Sergio Alberto Estrada Cajigal, atrajo los reflectores de la DEA por sus nexos con Nadia Patricia y su padre, Juan José Esparragoza Moreno. Y es que en ese periodo gubernamental El Azul se afincó en el estado con protección policíaca. Uno de sus aliados era el jefe de Seguridad Pública, José Agustín Montiel, señalado por utilizar los vehículos oficiales para mover cargamentos de cocaína desembarcados en el Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros, conocido como aeropuerto de Temixco.

Dicha terminal aérea fue utilizada por Esparragoza como pista de aterrizaje. El jefe policíaco Montiel —recluido bajo cargos de

delincuencia organizada dentro del Penal Federal de Máxima Seguridad El Altiplano, mejor conocido como La Palma, donde murió — era no sólo su aliado, sino el enlace con la máxima autoridad estatal.

De entonces a la fecha las cosas no han cambiado mucho en Morelos. La protección al Cártel de Los Rojos durante el gobierno de Graco Ramírez Garrido fue ampliamente documentada mediáticamente, tanto a nivel local como nacional. Tras finalizar su mandato el estado entró en una etapa de mayor descomposición. El gobernador entrante, Cuauhtémoc Blanco Bravo, recibió una entidad plagada de crimen organizado, matanzas, secuestros, “levantones”, balaceras y ajustes de cuentas que incluso se han cometido en velorios, bares, cantinas y prostíbulos. Impotente o cómplice, la Policía Estatal ha sido espectadora del desastre.

Entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco la pugna política inició desde que el exfutbolista era alcalde de la ciudad de Cuernavaca. Los conflictos escalaron más alto. El odio por encima de las negociaciones. Al cumplirse tres años del gobierno de Blanco Bravo, el pleito subió de tono y llegó a niveles insospechados. Graco Ramírez Garrido está acusado de desvío de recursos públicos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, al igual que Cuauhtémoc Blanco Bravo, también es señalado por brindar protección al narcotráfico. En ese tiempo la mitad de los ayuntamientos eran gobernados por presuntos miembros del crimen organizado. Actualmente, no hay ayuntamiento que no tenga como cabeza visible a un presunto criminal.

Tras concluir la administración de Graco Ramírez Garrido, en octubre de 2018, el nuevo gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ordenó investigar a su antecesor y, con una celeridad inusitada, presentó doce denuncias por presuntos actos de corrupción: fraudes con obras públicas, desvío de recursos, presupuestos inflados y compras amañadas. También se acusó a varios exfuncionarios de realizar conciertos con artistas famosos cuyos pagos fueron triplicados. Todos estos manejos turbios implicaron a una docena de exservidores públicos estatales, algunos de los cuales ya están en la cárcel. Sin embargo, Ramírez Garrido se mantiene impune.

Al exgobernador perredista también se le acusa de fraudes contra

el erario por más de 500 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos más conservadores de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que tiene a su cargo las investigaciones.

El exjefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, detalló hace más de un año algunos pormenores sobre las acciones fraudulentas de Graco Ramírez. Expuso, por ejemplo, que la empresa Magnos Comercialización de Entretenimiento — activa durante su gobierno— contrató al músico británico Sting para un concierto que se efectuó en octubre de 2015, en la conocida Arena Teques, localizada en la comunidad de Tequesquitengo. El costo de su presentación fue presupuestado en 100 millones de pesos. Sin embargo, las investigaciones descubrieron que el cantante no recibió el pago.

Gerardo Becerra Chávez, asesor anticorrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, indicó al respecto que la venta de entradas para dicho concierto fue calculada en unos 9 millones de pesos, los que serían destinados al Fondo Pro Cultura. Sin embargo, en las arcas sólo se hallaron 99,000 pesos.

No fue todo: Sanz Rivera agregó más datos sobre los fraudes y desvíos en el gobierno de Graco Ramírez. Refirió que por un concierto que ofrecieron los cantantes Mijares y Emmanuel, se pagaron 120 millones de pesos y, para ello, fueron contratadas dos empresas inexistentes.

A una de ellas —explicó— se le pagaron 2 millones de pesos por la supuesta compra de repelente para mosquitos y a la otra se le cubrieron 3 millones por el gel antibacterial.

Además de todo este atraco, al exgobernador Graco Ramírez se le atribuyeron acusaciones por obras “infladas” o inconclusas, desvío de fondos públicos, entre otros delitos.

Y entre los imputados figuran, además del exmandatario, José Michel Luna —exsecretario de la Secretaría de Hacienda estatal—, Armando Sanders de Mendoza, Jorge Sánchez Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Gerardo Ruiz Solano y Salvador Méndez Medina.

Las respectivas denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por conducto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos. Otras

denuncias fueron turnadas al ámbito federal y están bajo investigación de la FGR.

Todo lo anterior ha derivado en una fuerte disputa política entre el exgobernador Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco. Al primero se le acusa de haber formado un grupo con poder político y económico para denunciar al segundo por desvío de fondos públicos, nepotismo y vínculos con el crimen organizado. Por lo que ya se interpuso una solicitud de juicio de procedencia ante el Congreso del Estado de Morelos a fin de que el actual mandatario sea castigado. Hasta agosto de 2023 ninguna autoridad ha actuado al respecto.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos solicitó al Congreso del Estado de Morelos que iniciara el juicio de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco por siete delitos diferentes que se investigan desde 2014. Además del relacionado con el crimen organizado, el cual se robusteció más tras el escándalo que desató la publicación de una fotografía, en enero de 2022, en la que el mandatario aparece con tres integrantes de la delincuencia.

La imagen fue encontrada en un teléfono celular que fue asegurado tras el arresto de Esther Yadira Huitrón Vázquez —o Rosario Herrera, como se hacía llamar— conocida en el mundo criminal como *La Jefa*. Esto ocurrió el 6 de noviembre de 2021.

Era una fotografía de comienzos de 2019 donde se ve posar para la cámara a Cuauhtémoc Blanco con Irving Eduardo Solano Vera, *El Profe* o *El Gato*, identificado por las autoridades como jefe de plaza del CJNG y líder de Guerreros Unidos; Homero Figueroa Meza, *La Tripa*, jefe del brazo armado Los Tlahuicas o Comando Tlahuica y Raymundo Isidro Castro Santiago, *El Ray*, líder regional del CJNG en Morelos.

Además, la dependencia tiene abiertas cinco carpetas más contra el mandatario morelense. Entre esas pesquisas se encuentra la que se integró por la fotografía referida en la que Cuauhtémoc Blanco posa con integrantes de cárteles y presuntos gatilleros, con quienes supuestamente sostuvo una reunión privada para acordar la entrega de la plaza.

El entonces secretario general de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, salió en su defensa ante los cuestionamientos por

la polémica fotografía: “Es una simple foto espontánea de hace varios años. No sabemos cuándo fue ni dónde se tomó, no es más que eso, no es una reunión, no es un acuerdo y mucho menos es una relación”.

También negó que fuera en su casa: “Eso es totalmente falso, no es la casa del gobernador”. Aunque no desconoció la imagen: “Es una foto muy vieja porque uno de los detenidos [sic] su complexión es muy diferente a la que tuvo al momento de su detención en febrero del 2021. Es una foto de hace varios años...”, concluyó.

Y es que surgieron versiones de que el sitio donde se tomó la imagen era la propia residencia de Blanco, en el fraccionamiento Tabachines, en Cuernavaca. Otra sostiene que el encuentro ocurrió en un restaurante y la más certera señala que la sede fue la iglesia parroquial de La Asunción de María, en Yautepec.

Ahora se sabe que dicha fotografía fue tomada en la oficina parroquial de esa iglesia, acorde con lo publicado por el diario *El Sol de México*, el 4 de enero de 2022. Blanco Bravo negó su relación con los criminales, pero estos respondieron con “narcomantas” en las que le recriminaron su dicho: “Los amigos no se niegan”, le dijeron.

Representantes de la Iglesia Católica también hicieron su parte para atizar la polémica. Esta expuso mediante un comunicado que el encuentro entre Blanco Bravo y los presuntos delincuentes se llevó a cabo en una parroquia de Yautepec. Ahí se vieron, aunque los religiosos negaron haber intervenido como mediadores en el encuentro y rechazaron tener conocimiento de lo que hablaron el gobernador y los presuntos miembros de la delincuencia organizada.

A todo esto se sumó otro choque entre Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez. El primero acusó al segundo de haber orquestado esta campaña en su contra.

Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicesfiscal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, quien presentó ante el Congreso morelense la solicitud de juicio de procedencia, expuso que entre otros delitos que se deben investigar —y que presuntamente cometió el gobernador Cuauhtémoc Blanco— figuran el de ejercicio indebido de funciones y falsificación de documentos.

También se persigue el de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones ante la autoridad. Indicó, además, que la solicitud de juicio de procedencia tiene lugar, porque existen elementos probatorios por la posible comisión de delitos cometidos por el exfutbolista de los clubes América, Tiburones Rojos de Veracruz, entre otros.

De acuerdo con el documento entregado al Congreso del Estado de Morelos, familiares y amigos de Cuauhtémoc Blanco, así como servidores públicos de la entidad, estarían en la red como presuntos sospechosos del delito de enriquecimiento ilícito.

Se menciona, entre otros, al medio hermano del mandatario, Ulises Bravo Molina, quien fue dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) y desde julio de 2023 nombrado delegado en funciones de presidente de MORENA; Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular del gobernador; Ricardo Bravo Molina, otro medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, así como Jaime Tamayo Godínez, amigo del exfutbolista.

El vicesfiscal Núñez Urquiza puntualizó, además, que el procedimiento legislativo debía contemplar, en una próxima sesión del pleno del referido Congreso, el caso del juicio de procedencia a fin de que el asunto se turnara a la Comisión de Gobernación del Senado de la República y al gran jurado que preside el morenista Arturo Pérez Flores. Hasta ahora nada ha ocurrido respecto a la camarilla encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Pero con el aval presidencial se han movido fichas en favor del mandatario morelense, como la captura en agosto de 2023 del llamado “Fiscal carnal”, Uriel Carmona, impuesto por Graco Ramírez como tapadera suya —detención presuntamente ilegal, pero con una lista de posibles delitos que empiezan por el entorpecimiento de la procuración de justicia y encubrimiento de feminicidio—, la consecuente detención de ministerios públicos y fiscales morelenses también en relación con el conocido caso encubierto y manipulado de Ariadna Fernanda López, y el blindaje, a través de la manipulación del Congreso del Estado de Morelos, del magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea —acusado de atentar contra la buena administración de justicia, de violar el Código de Ética de la institución, manipular información pública referente al nombramiento

de su esposa como jueza y otras acusaciones como acoso sexual, nepotismo y presión sobre otros miembros del Congreso—, todo evidencia un aumento de los conflictos políticos por esta ligazón de corruptelas entre ambos grupos de poder.

Una vez que se defina un acuerdo en este órgano parlamentario, ya sea a favor o en contra, lo que seguiría es la redacción de un dictamen para discutirse y votarse en el pleno. Aunque Núñez Urquiza declaró que no existe un plazo que determine la ley para que esta solicitud pueda desahogarse en un tiempo específico. De esto se infiere que el sexenio de Blanco Bravo puede terminar sin acciones legales en su contra.

Para que un juicio de procedencia avance en el Congreso morelense se requiere mayoría calificada, avalada por catorce de los veinte diputados, lo que hasta el cierre de este libro no ha ocurrido.

Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, fue quien presentó las denuncias por enriquecimiento ilícito contra Blanco Bravo y funcionarios de su gobierno, a quienes también acusó por falsificación de documentos que, en su momento, acreditaron que Blanco Bravo era ciudadano morelense —sin serlo— para competir, en 2015, por la alcaldía de Cuernavaca por el extinto Partido Socialdemócrata y, en 2018, por la gubernatura bajo las siglas del desaparecido PES, MORENA y Partido del Trabajo (PT).

Hasta abril de 2022, el área jurídica del Ejecutivo Estatal no había recibido ninguna notificación sobre la apertura de alguna demanda en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, como adelantaron algunos abogados y el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

El entonces consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado —actual secretario general de Gobierno en Morelos— explicó que el mandatario no había sido notificado sobre demanda alguna. Aunque aceptó que su jefe procedió a interponer un recurso de amparo para defenderse en caso de que las demandas existieran.

Diversos partidos políticos exigieron a la FGR que investigara si el gobernador de Morelos estaba coludido con la delincuencia organizada. Hasta ahora, dicha fiscalía no ha hecho oficial si inició o no alguna investigación contra el mandatario morelense por delitos

relacionados con la delincuencia organizada.

Para aumentar las sospechas, en una nueva confirmación de sus vínculos con el crimen organizado, el 1º de enero de 2023 volvió a aparecer una “narcomanta” en un puente de Chipitlán, Cuernavaca, donde los criminales denunciaron que el gobernador de Morelos sí pactó con delincuentes locales a través de Homero Figueroa, *La Tripa*.

Registrado en diversos medios, el mensaje de la manta lo acusó de orquestar la “guerra” en el estado y por ello lo llamaron “traicionero”. En la misma advirtieron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que otro posible cómplice del entramado corrupto sería Francisco Martínez, exdirector del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). Ambos fueron relacionados como piezas claves de la reunión en la parroquia de Yautepec, donde los testigos aseguraron que estuvieron presentes otras personas, presuntos criminales, quienes se autodenominaron “Los morelenses” e insistieron que había un pacto con La Tripa y posibles funcionarios estatales.

Los gobiernos van y vienen, pero el crimen organizado, salvo la caída de algunos jefes de cárteles, sigue intacto. Lejos de debilitarse, a la vuelta de los años estos grupos se han robustecido y multiplicado por doquier. Por ejemplo, actualmente en Morelos operan Los Rojos, Guerreros Unidos, el CJNG, que tiene amplias ramificaciones en ese territorio, al igual que Los Viagras, los Caballeros Templarios y los Hermanos Valencia. Todos ellos son michoacanos y son considerados tan violentos como sanguinarios: se caracterizan por usar la crueldad contra sus rivales y ya no respetan código alguno, algo que ocurría en tiempos pasados. La saña no tiene límites: decapitan, descuartizan a sus víctimas y hasta las queman vivas. Es por ello que a estos cárteles se les atribuyen los baños de sangre que enfrentan entidades como Baja California, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Morelos, entre otras.

A la violencia imparable que enfrenta el estado —balaceras, levantones, tráfico de drogas, cobro de piso, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas— se sumó el señalamiento de que el mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, tiene líneas de entendimiento con la delincuencia organizada. Esto no resulta una

novedad en la tierra del revolucionario Emiliano Zapata.

Otros mandatarios de ese estado también fueron ligados en su momento a intereses mafiosos. Es el caso de Jorge Carrillo Olea — gobernó de 1993 a 1998—, quien fue vinculado con Amado Carrillo Fuentes, *El Señor de los Cielos*; Sergio Estrada Cajigal —con igual condición desde 2000 hasta 2006, relacionado con Juan José Esparragoza, *El Azul*—; Marco Adame Castillo también enfrentó escándalos similares. Ninguno de los tres ha pisado la cárcel.

Adame Castillo gobernó de 2006 a 2012. En mayo de 2009 el Movimiento Magisterial de Bases demandó al Congreso del Estado de Morelos un juicio político en su contra debido a los escándalos de corrupción en que incurrió. El más fuerte, el arraigo por la SIEDO de su secretario de Seguridad Pública —Luis Ángel Cabeza de Vaca— acusado de tener nexos con el narcotráfico. Como medida de protesta, los docentes sacaron a relucir pancartas plagadas de consignas: “¡Juicio político a ‘Narco’ Adame y a Sergio Álvarez ‘Rata’!”, también gritaban en coro frente al Palacio de Gobierno morelense.

De forma similar, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo se ha caracterizado por las balaceras, matanzas, robo de autos, secuestros y otros delitos. Los grupos ya citados se pelean la plaza y también han asesinado a activistas sociales. Uno de esos crímenes fue el de Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019. Era muy conocido dentro y fuera de Morelos por su activismo político y denuncias periodísticas. Antes de ser asesinado, se destacó por emprender un movimiento para impedir la construcción de la planta termoeléctrica de Huexca, proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad.

El día que lo ejecutaron —presuntamente, para que no siguiera generando polémica por la construcción de la planta— tres sujetos armados arribaron a su domicilio particular. De acuerdo con las investigaciones y los testimonios de sus familiares, los sujetos tocaron a su puerta. Cuando Flores Soberanes abrió le dispararon, casi a quemarropa; su cuerpo se desvaneció. Murió al instante. Era locutor de la Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM, en la población oriental morelense de Amilcingo. A través de ese espacio denunció injusticias que aún siguen impunes, al igual que su asesinato. Se

puede afirmar que su caso está en el olvido de las autoridades, no así de los pobladores que le conocieron que todavía exigen su esclarecimiento.

Conforme con las investigaciones, el grupo que lo ejecutó pertenece a la delincuencia organizada: se les identificó como miembros del Comando Tlahuica, el mismo cuyo líder, Homero Figueroa Meza, se fotografió con Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Tanto el asesinato del activista social Samir Flores Soberanes, como las investigaciones criminales y el caso de la polémica fotografía entre Blanco Bravo y el presunto criminal, siguen envueltos en el silencio, un silencio que huele a impunidad.

El escándalo que implica al exfutbolista tiene historia: de acuerdo con los presuntos documentos *hackeados* a la SEDENA, los Guacamaya Leaks, Morelos está totalmente infiltrado por el crimen organizado. En la estructura del gobierno estatal, así como en dependencias públicas y en las presidencias municipales, está la presencia de los hombres de la mafia. Lo mismo ocurre en las policías, que fungen como brazos armados del crimen.

Morelos se encuentra controlado por exgobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y jueces coludidos con grupos criminales que operan en la región: Los Rojos, Guerreros Unidos — con bases bien establecidas en Guerrero— y el CJNG, de acuerdo con lo que establecen dos informes de la SEDENA y de la Unidad de Inteligencia Naval elaborados a principios de 2019.

Por ejemplo, el Grupo de Inteligencia de la Secretaría de Marina (SEMAR) señalaba que, en el panorama delictivo de Morelos, la organización criminal de los Beltrán Leyva contaba con la protección de las autoridades. En ese entonces señalaron al hoy exgobernador Graco Ramírez como una pieza clave de ese esquema. El mismo informe afirma que el círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien arribó al poder por el Partido Encuentro Social, tiene estrechos vínculos con varios cárteles.

El informe extraído entre millones de documentos *hackeados* a la SEDENA, por otra parte, señala que José Manuel Sanz Rivera, José de Jesús Guízar Nájera, Uriel Carmona Gándara y Samuel Soto Salgado —jefe de la Oficina de la Gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, subsecretario de Gobierno, fiscal general y consejero

jurídico, respectivamente— están vinculados con el Cártel de Los Rojos, también con Gente Nueva y el CJNG.

Además, los reportes indican que Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, tiene nexos con los grupos de la delincuencia organizada de Guerrero, al igual que varios diputados. El senador priista en representación del estado de Morelos, Ángel García Yáñez, así como nueve jueces locales, han liberado a delincuentes por supuestas faltas de pruebas.

En este contexto de vínculos entre el poder político y criminal, el 5 de octubre de 2022 fue asesinada en Cuernavaca la diputada Gabriela Marín Sánchez. Dos sicarios a bordo de una motocicleta la siguieron y en el estacionamiento de una farmacia le dispararon a mansalva. Su chofer sólo fue herido. La legisladora de 37 años había tomado posesión apenas el 15 de julio de 2022, luego de ganar un proceso judicial contra el político Roberto Yáñez Moreno, quien le había robado la diputación plurinominal.

De acuerdo con los informes de inteligencia, a principios de 2019 en Morelos operaban varios grupos criminales, principalmente, Los Rojos que, como ya se refirió, eran encabezados por El Carrete hasta su detención en agosto de 2019 y condenado a 20 años de prisión. Su grupo criminal era aliado del autodenominado Cártel del Sur y de Guerreros Unidos, dos temibles organizaciones criminales con asiento en Guerrero y asociados con el CJNG y La Familia Michoacana. Luego las alianzas se debilitaron debido a rencillas internas.

Además, los reportes de inteligencia identifican a un grupo de doce presidentes municipales de Morelos ligados al Cártel de Los Rojos: Alberto Sánchez Ortega, exalcalde de Xochitepec y ahora diputado por MORENA; Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jiutepec por la coalición PT-MORENA-PES; así como todos los alcaldes de la zona sureste del estado —de los municipios de Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Jojutla, Mazatepec, Coatlán del Río, Tetecala y Coatetelco—, sin importar su color político, ya sean del PRI, MORENA, PAN, PRD o PES, tienen ligas con el crimen.

En el informe también se subraya que la priista Rosalina Mazari

Espín, tía de Santiago Mazari Miranda, está vinculada con el Cártel de Los Rojos. Ha sido tres veces diputada federal por el distrito de Cuernavaca y una vez fue electa diputada local. Todo lo anterior acredita que la frontera entre la política y el crimen está borrada. Son lo mismo.

Los reportes referidos citan a otros políticos vinculados con Los Rojos radicados en Guerrero: Francisco Javier García González, expresidente municipal de Chilapa de Álvarez; Mario Moreno Arcos, exalcalde de Chilpancingo; así como el expresidente municipal de Leonardo Bravo, Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez.

Los documentos también señalan al exalcalde de Yautepec y actual diputado morelense, Agustín Alonso Gutiérrez; a Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla; Francisco Erik Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, diputado local por el Cuarto Distrito en Morelos y presidente de la Mesa Directiva de la LV legislatura; Valentín Lavín Romero, expresidente de Temoac; y Rogelio Torres Ortega, de Tepoztlán, fallecido por COVID-19 en abril de 2021. Todos ellos estuvieron —o están— relacionados con cabecillas de los cárteles Guerreros Unidos y el CJNG.

El informe de la SEDENA refiere que seis presidentes municipales de la región oriental de Morelos, de igual forma, tienen vínculos con el CJNG, representado por el ya mencionado Raymundo Isidro Castro Salgado, *El Ray*. Mientras que en Yautepec el alcalde colabora con el temido Comando Tlahuica, famosos tras la publicación de la fotografía donde aparecen sus jefes al lado del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La investigación añade más ligas criminales de políticos: establece que el alcalde de Temoac, Emigdio Capistrán Velázquez, es yerno del secuestrador Antonio Aparicio. En 2018 ejecutaron a tres mujeres integrantes de su familia y después fue amenazado a través de “narcomantas” por el Comando Tlahuica al considerarlo su enemigo político. El 22 de noviembre de 2022 aparecieron dos mujeres más asesinadas, con huellas de tortura previa, y Capistrán Velázquez se desmarcó del hecho al declarar: “... no son de mi municipio, ni de la región, únicamente fueron depositadas, tiradas por ahí; pero ayer estuve hablando con el director de Seguridad Pública, y él me dijo que no son de ahí, ni de la región”. En Cuautla,

Samuel Corona Damián, hermano del alcalde Jesús Corona Damián —en funciones hasta 2021—, fue detenido por secuestro. Al realizar una revisión en su casa, las autoridades hallaron mantas y mensajes sobre “narcopolítica”.

Los Guacamaya Leaks también revelan que cuando era gobernador de Tabasco, el secretario de Gobernación hasta junio de 2023 y exaspirante presidencial por MORENA, Adán Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal a tres hombres que fueron identificados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) como miembros del CJNG.

En el reporte se refiere que uno de ellos es el supuesto líder del CJNG en Tabasco. Su nombre: Hernán Bermúdez Requena, quien sigue al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC). Un informe del CERFI sureste señaló, además, que al menos tres líderes huachicoleros de la zona hablaron, en conversaciones privadas, de las presuntas relaciones entre el delincuente Benjamín Mollinedo Montiel —*El Pantera*— y López Hernández. De acuerdo con el CERFI, Mollinedo era “prioritario” para la SEDENA, pues encabezaba la organización conocida como La Barredora.

En su informe del 30 de agosto de 2022, el CERFI señaló que Bermúdez Requena, José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Leyva Ávalo —estos dos nombrados, respectivamente, comisionado y director general de la Policía Estatal en Tabasco, por Adán Augusto López Hernández— forman parte de La Barredora.

El 23 de junio de 2023 el nombre de Adán Augusto López Hernández —estrecho amigo y pariente del presidente López Obrador— volvió a ser referido en un presunto caso de corrupción y crimen organizado:

Resulta que ese día fue aprehendido por efectivos de la SEDENA y de la FGR el empresario Ernesto *Güino* Herrera Reza, sobrino y excolaborador de Leticia Herrera Ale, actual alcaldesa de Gómez Palacio, Durango. Este personaje fue apresado por estar acusado de un fraude en SEGALMEX. Pero su reclusión duró pocas horas: el exsecretario de Gobernación, López Hernández, es mencionado como el autor de una llamada telefónica que inmediatamente puso en libertad al presunto defraudador.

La historia de El Güino es relevante, pues es hijo de Ernesto Herrera Ale, a su vez vástago de Carlos Herrera Araluce —relacionado al narcotráfico y atacado a tiros por el Cártel de Los Zetas, poco antes de morir en 2007—. Tras ese atentado fue apodado *El 17*, al haber perdido tres dedos de las manos por los rafagazos de balas. Luego de esta agresión vivió en un cuarto de pánico hasta su muerte. Después de su entierro, el crimen organizado amenazó con sustraer su cuerpo de la tumba —querían tirarlo como un bulto en la calle— y la misma pasó a ser resguardada largo tiempo, tanto de día como de noche, por un equipo de seguridad israelí.

Respecto a las ligas de políticos con el crimen, reveladas por los Guacamaya Leaks, los informes no parecen carentes de veracidad. Por el contrario, son resultado de una verificación de los sistemas de inteligencia implementados por el Estado.

Por ejemplo, los cinco CERFI distribuidos en el país agrupan a agentes de la SEDENA, la SEMAR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC. Todas estas dependencias disponen de sus respectivos recursos para identificar a los grupos delincuenciales en las regiones donde operan. La mecánica de trabajo es la siguiente: cada CERFI envía informes puntuales al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), responsable de gran parte de las tareas de la inteligencia de seguridad del país. Esto confirma que la información que vincula a políticos con el crimen, está más que acreditada.

Ni libertad ni justicia

Michoacán está tan incendiado como Guanajuato, Baja California, Edomex, Chihuahua, Jalisco o Tamaulipas, los estados más violentos del país hasta la primera mitad de 2023. Bajo el gobierno de Silvano Aureoles Conejo hasta 2021 —relacionado con el narcotráfico y la corrupción institucional—, Michoacán se convirtió en un territorio de muerte. Tampoco escapa de presuntos vínculos con los cárteles su actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, señalado de haber sido apoyado por el Cártel de Sinaloa para

arribar al poder.

La inseguridad campea por doquier desde hace al menos tres décadas. Seis cárteles del narcotráfico, fuertemente armados, azotan la entidad y provocan el desplazamiento de familias completas en municipios como Aguililla y Tepalcatepec, territorios que Nemesio Oseguera Cervantes, *El Mencho*, pretende ocupar a la fuerza, con las armas por delante, provocando terror mediante balaceras y masacres.

Este otro episodio de crisis, inseguridad y miedo en Aguililla se intensificó a principios de 2022, cuando Oseguera Cervantes irrumpió a fuerza de balazos en el territorio donde nació. El CJNG introdujo carros tanque, vehículos artillados, más de 100 hombres armados que, desafiantes, afirmaron estar dispuestos a enfrentarse con cualquier autoridad.

El segundo Cártel más poderoso de América Latina comenzó a sembrar más pánico en Michoacán desde mediados de 2022. Entonces la guerra con otros grupos criminales se intensificó. La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, los cárteles de Sinaloa, del Golfo y los hermanos Valencia, apoyados con algunas autodefensas, también le declararon la guerra a El Mencho.

Al notar la elevada tensión en el municipio michoacano, cientos de familias decidieron desplazarse, forzadas por la violencia y el miedo. Abandonaron sus casas, predios, ranchos y sembradíos. Se refugiaron en zonas más o menos seguras (aunque actualmente ningún territorio está libre de violencia).

Las autoridades de Aguililla, impotentes ante el terror del crimen, solicitaron la intervención de las autoridades federales. Arribaron al lugar efectivos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, pero de nada sirvió. La presencia de los militares no inhibió la violencia. Tampoco pudieron controlar la crisis. La razón, conforme se explicó, es que las autoridades no tienen permitida la utilización de la fuerza. “Así de nada sirve que vengan”, dijo uno de los pobladores amenazados de muerte.

La Iglesia Católica hizo lo propio. Acudieron obispos y curas a pedir paz a los criminales lanzando plegarias al cielo. Mientras estuvieron presentes en el municipio hubo concordia, pero cuando se retiraron volvió la violencia. Meses después, el Gobierno Federal

rescató el territorio, lo que fue considerado un triunfo; sin embargo, la zozobra y el miedo no tardaron mucho tiempo en regresar.

En Tepalcatepec, la situación que se vive es similar al resto de los municipios. También controlado por el CJNG, convertido en el azote de Michoacán, la guerra no cesa a pesar del clamor de la gente que le pide al presidente López Obrador que el gobierno le devuelva la tranquilidad al estado. La petición sigue sin cumplirse: el gobierno de la Cuarta Transformación parece impotente, cuando no cómplice de los grupos criminales

Y es que el crimen organizado ha impuesto su ley en la entidad. Las autoridades civiles —gobierno estatal y alcaldes— prácticamente han sido rebasadas por la violencia criminal. Esta impone, incluso, los días y horarios en que los jornaleros deben trabajar. Si lo hacen en días no permitidos, les incautan sus mercancías. Y al miedo, le siguen las pérdidas financieras.

Los productores de aguacate enfrentan el mismo drama. Tienen que “pagar piso” al crimen con elevadas cuotas, de acuerdo con las hectáreas que dispongan. De otra forma les decomisan el producto y los dejan sin obtener ingresos. Actualmente, el aguacate michoacano es de los más cotizados y de los frutos que más se exportan. Es enviado a Estados Unidos, Europa y Asia, donde alcanza precios hasta de dos dólares por pieza.

El llamado “oro verde” se ha convertido en el bien y el mal en Michoacán, entidad que hoy enfrenta un vacío legal y político que ninguna autoridad ha podido resolver.

Al cierre del sexenio de Silvano Aureoles Conejo, Michoacán enfrentó un escenario caótico: el exmandatario perredista dejó una entidad atenazada por seis cárteles del narcotráfico que se disputan el territorio, desatan balaceras, persiguen a sus rivales, desplazan a los habitantes en decenas de municipios causando terror por todas partes.

Por si fuera poco, el gobernador lanzado por MORENA, electo el 6 de junio de 2021 y en funciones desde octubre de ese año, Alfredo Ramírez Bedolla, carga dentro y fuera de México con acusaciones de haber ganado las elecciones con el apoyo del crimen organizado. Las redes sinaloenses habrían sido las encargadas de entronizarlo en la gubernatura.

Al menos eso fue lo que denunció el exgobernador Silvano Aureoles ante la Organización de los Estados Americanos, a donde acudió acompañado de dirigentes del PAN, el PRI y el PRD. Al final de su mandato, buscó al presidente López Obrador para entregarle las pruebas respecto a cómo el crimen operó en favor de MORENA; pero no lo quiso recibir. El presidente pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que atendiera su denuncia, pero el asunto, de buenas a primeras, quedó sepultado en el silencio.

De acuerdo con las acusaciones de Silvano Aureoles, el crimen organizado apoyó a MORENA y a sus candidatos para que ganaran las elecciones. En el caso de Michoacán, explicó entonces, el narco dispuso de recursos, personal armado y una amplia logística para operar la elección. Algo similar ocurrió en Sinaloa, Nayarit, Veracruz y en las entidades donde MORENA ganó las elecciones. Un dato que confirma el apoyo de Sinaloa a los candidatos morenistas es que ese Cártel ahora opera en los estados donde ganó el partido del presidente.

Otro detalle interesante que explica este andamiaje de complicidades fue aportado en su momento por Hugo Gutiérrez Maldonado, el exsecretario de Seguridad Pública en Veracruz —una de las entidades más violentas en la historia del crimen organizado en México—: él aseguró que el CJNG, rival de Sinaloa, ofrece su “franquicia” en renta para poder utilizar su nombre, equipo táctico, armas y la estrategia de esta aceitada organización criminal.

Con respecto a las elecciones intermedias de 2021, en Sinaloa las cosas se pusieron graves: hubo secuestros de funcionarios electorales y representantes de partidos, conforme a las denuncias, lo que evidenció que el crimen organizado hizo su trabajo para que triunfaran los candidatos del presidente.

Pero lo sorprendente es que después de las elecciones, el escándalo sobre las investigaciones abiertas en contra de Aureoles Conejo fue apagado. Durante su gobierno en Michoacán, el crimen mantuvo el control estatal. Pese a los llamados que hizo como mandatario para que se frenara la violencia, esta se mantuvo y en la última etapa de su sexenio la situación se recrudeció a tal grado que las balaceras llegaron a Morelia, la capital del estado, donde decenas de sujetos armados y a bordo de motocicletas lanzaron

bombas molotov para agredir a un grupo de agentes policíacos que hacían rondines en sus patrullas.

No obstante, la presencia policíaca y de miembros de la Guardia Nacional en Michoacán, la pacificación nunca llegó durante su mandato. Tampoco en el actual gobierno. El crimen organizado, en particular los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva y Los Correa —el nuevo Cártel identificado recientemente— realizaron diversos bloqueos carreteros: incendiaron vehículos oficiales y privados, realizaron ataques hacia los integrantes de la Guardia Nacional y también de la Policía Estatal.

Los hechos se presentaron en media docena de demarcaciones de la entidad y los efectos llegaron hasta decenas de municipios urbanos, causando el desplazamiento de familias enteras por miedo a morir entre las balaceras. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de su cuenta de Facebook, reconoció que el crimen organizado paralizó seis municipios. La dependencia aceptó que los grupos delictivos detuvieron y prendieron fuego a diversas unidades privadas de transporte. Aquello fue caótico.

Con estos actos de violencia extrema, que aún prevalecen, las autoridades estatales y federales fueron rebasadas nuevamente. Cada vez que se lo propuso, el crimen evidenció la impotencia del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, quien por esas fechas ya se preparaba para dejar el cargo con un saldo negativo: 1,500 asesinatos en su último año y seis cárteles en disputa.

Además de ser señalado por sus presuntos actos de corrupción, Aureoles Conejo también fue acusado de haber brindado protección en la entidad a los criminales. El mandatario no sólo quedó exhibido por la prepotencia mostrada ante un manifestante que lo increpó en la vía pública, sino por su incapacidad y fracaso demostrados durante seis años: no logró la pacificación del territorio ni la aplicación de la ley, ni hizo valer el llamado Estado de derecho; por el contrario, en el territorio siempre imperó un estado de violencia.

Como lo retratan los videos que circulan en las redes sociales, su actitud prepotente se percibió cuando descendió de un vehículo militar, se dirigió a un grupo de manifestantes y empujó a uno de

ellos, retándolo a golpes. El agredido le reclamaba, y no sin razón, que resultaba muy cómodo visitar Aguililla en helicóptero, mientras que los pobladores, atenazados por el miedo, tenían que abandonar sus casas y sus parcelas.

Impotente ante la violencia, pidió al presidente López Obrador la intervención del Ejército en Aguililla, entonces convertido en un infierno. Pero lejos de preparar un operativo que pusiera a salvo a la población, optaron por realizar una reunión en un cuartel militar con autoridades representativas del municipio. De los temas tratados, nada se dijo. La violencia ha continuado.

Luego de tres décadas sumido en la violencia criminal, Michoacán se volvió incontrolable en 2006, cuando los cárteles de La Familia Michoacana, Los Zetas y hermanos Valencia —o Cártel del Milenio— se enfrentaron por el control del territorio en una guerra campal.

A pesar de que en ese año el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa arrancó su guerra contra el crimen organizado con los Operativos Conjuntos, la delincuencia no pudo ser abatida. Por el contrario, se fortaleció a grado tal que se agudizó como no se había visto en años anteriores.

Los niveles de violencia comenzaron a escalar sin que hubiera contención policíaca ni militar. Cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Viagras siguieron enfrascados en su guerra por el control de la plaza, conflicto que prevalece hasta la fecha e implica nuevos grupos criminales.

Un ejemplo de esta batalla sin tregua —que refleja la intensidad de la pelea por Michoacán— fue el hallazgo de varias “narcomantas” que evidenciaron el grado de normalización de la violencia. Uno de estos mensajes, firmado por el CJNG, atizaba el conflicto: “Gente bonita, siga con su rutina, has [*sic*] patria y mata a un Viagra”.

El Cártel Los Viagras, uno de los protagonistas de la guerra entre cárteles en Michoacán, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es de los más importantes productores de metanfetaminas que se distribuyen en California. También se le adjudican otras operaciones delictivas como las extorsiones a productores de aguacate y a otros empresarios de la entidad.

Michoacán y Lázaro Cárdenas, su principal puerto marítimo, son estratégicos para el crimen organizado. Por el mismo arriban los cargamentos que provienen de Sudamérica. La droga llega por la zona conocida como Coahuayana de Hidalgo, región bañada por las aguas del Pacífico, donde atracan barcos cargados con sustancias prohibidas.

Los pescadores son alquilados para “pescar” la droga que flota en el mar. Las sustancias también son transportadas desde Colombia en submarinos, llamados sumergibles, aparatos que, repletos de cocaína o droga sintética, también zarpan desde Venezuela.

La ruta de trasiego es hacia Guerrero, centro turístico internacional considerado de los más altos en consumo en el país. Desde ahí, los alcaloides son llevados al norte del país y cruzan la frontera para llegar a Estados Unidos, el mercado de consumo más voraz. Otra parte se queda para el consumo interno: se lleva a Morelos y a la Ciudad de México —otro punto de alto consumo protegido por las autoridades—.

Aunque las batallas en Michoacán llevan más de 30 años, el CJNG y Los Viagras están enfrentados desde 2014. Se pelean el control de la llamada Ruta del Pacífico, el mercado de las drogas sintéticas, el negocio de las extorsiones, el tráfico humano y el robo de combustibles, otro de sus boyantes negocios.

La complejidad de estos conflictos mostró al gobierno de Silvano Aureoles Conejo como una mera figura decorativa frente al crimen. Cada vez que se lo propusieron, los cárteles desacreditaron al entonces mandatario. Así lo demostró el CJNG, por ejemplo, cuando Nemesio Oseguera Cervantes decidió tomar el control en su terruño, Aguililla. Esta acción se consumó cuando efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional abandonaron el estado.

La irrupción del CJNG en Michoacán ha sido violenta. No son nuevas las arremetidas del mismo para imponer su ley en un estado clave para el tráfico de drogas. Por ello los varios enfrentamientos entre grupos locales. Pero la guerra ahora se centra con el Cártel Los Viagras, La Familia Michoacana o bien con autodefensas financiadas por otros cárteles. Por esa razón no todas las fuerzas defienden los intereses de la sociedad, sino del crimen.

El narcotráfico, la expresión más violenta del llamado crimen

organizado, ha tenido el control de Michoacán desde hace mucho tiempo. Ha dado muestras de su poder con ejecuciones frecuentes, emboscadas a policías y militares —una de ellas en un camino que conduce a Aguililla—. Lo evidente es que en la entidad existe un vacío de poder casi absoluto. Y esa oquedad legal deriva en asideros donde proliferan los cárteles.

La impunidad que prima en el estado ha sido causante del surgimiento en los últimos años de múltiples organizaciones criminales, pues la ausencia del Estado causa impunidad y esta resulta ser una invitación permanente a delinquir. La ley no se aplica y los criminales florecen.

Con el paso de los años, el narcotráfico ha cambiado su dinámica en Michoacán. Luego de la desarticulación gradual del Cártel Los Caballeros Templarios, desde 2014 hasta 2017, principalmente quienes detentaban el poder hegemónico en la región —debilitados por las capturas y abatimientos de algunos de sus integrantes importantes—, el crimen organizado se dividió aún más. Esto dio origen al surgimiento de unidades delictivas más pequeñas que actúan en el territorio y que por sobrevivencia se han aliado a otros grupos delictivos.

Este fenómeno causa una batalla campal por el control del territorio y el boyante mercado de drogas, ya que a la entidad arriban miles de toneladas por vía marítima y aérea.

En este escenario, el Cártel Los Viagras le declaró la guerra al CJNG. Decididos a no dejar el estado en manos de El Mencho, unieron a los cárteles más pequeños que controlaban algunos territorios michoacanos, aun cuando fueran enemigos, para ir contra Osegura Cervantes, conocido en Michoacán como *El Señor de los gallos* (debido a su afición por los palenques).

Las confrontaciones dejaron un saldo sangriento y doloroso para la sociedad. El miedo paralizador atenazó a pueblos enteros. Las familias han vivido en permanente angustia y sufrimiento por sus muertos, asesinados por el narco, descuartizados o colgados en puentes peatonales de Tepalcatepec, Aguililla y otros municipios.

Con los enfrentamientos ocurridos en las demarcaciones de Buena Vista y Apatzingán, donde las balaceras han durado hasta seis horas, los sicarios han atacado iglesias, han empleado

explosivos, los pobladores abandonan sus pueblos por temor a morir debido a las balaceras. Como otros grupos de autodefensa filtrados por la delincuencia, los hermanos Sierra Santana —enfrentados a las fuerzas de El Mencho— no bajaron las armas. Por el contrario, continuaron su guerra sembrando terror y muerte en la entidad que Silvano Aureoles Conejo dejó maltrecha y en bancarrota.

Los combates generaron imágenes de horror. Decenas de cuerpos fueron colgados en el municipio de Uruapan. A otras personas las sometieron a interrogatorios y torturas. La saña no tuvo límites. Otros más terminaron descuartizados, signo inequívoco del odio y la venganza. La guerra entre cárteles dejó además cientos de desaparecidos de los que nada se sabe: si fueron enterrados vivos, sepultados en planchas de cemento, en fosas clandestinas o quemados para desaparecer rastros. Como haya sido, todo esto resulta desconcertante.

La violencia tuvo un fuerte recrudecimiento desde el gobierno de Calderón Hinojosa, quien avivó el avispero y no pudo destruir a los cárteles, tampoco encarceló a los llamados narcopolíticos. Todo su sexenio fue un fracaso y las consecuencias se padecen a 17 años de que comenzara aquella pesadilla de la llamada “guerra contra el crimen organizado”. Calderón no destruyó a ningún Cártel, y lo peor, todos terminaron fortalecidos y hasta extendieron sus reales hacia el continente latinoamericano y otros lados del orbe.

Desde entonces, la batalla entre cárteles no ha tenido tregua en Michoacán. De 2011 a 2014, Los Caballeros Templarios mantuvieron el control del mercado de las drogas en la entidad. Sanguinarios sin límite, causaron cientos de muertes y desapariciones.

El Chayo o *San Nazario* —así apodaban a Nazario Moreno González, líder y fundador de esa organización delictiva ejecutado en marzo de 2014— sembró terror y su poder delincencial se extendió incluso más allá de los límites del estado. Desde entonces los pobladores de la mayoría de los municipios michoacanos no han podido dormir en paz. Este caos lo permitió el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo. Lo dijo con estas palabras: “[el] talón de Aquiles que enfrenta el [estado] es la violencia causada por el

crimen organizado”. Y completó: “[si] hay un tema que se ha ido agudizando, es el de la inseguridad”.

Las cifras de muertes dan cuenta no sólo del escenario de guerra criminal, sino de la incapacidad gubernamental para frenarla. En 2019 se registraron 2,046 asesinatos; un año después la cifra alcanzó 2,600 muertes. Hasta noviembre de 2021, se registraban 2,016 homicidios dolosos y en 2022 se consideraba una disminución de estos en un 24 % —de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros ocho meses—.

Pero la inseguridad ha escalado, porque en 2015 las estadísticas daban cuenta de 800 ejecuciones. La “narcodinámica” aumentó y con ello, las matanzas. En esos años, tanto como ahora, la violencia se centró en los municipios de Zamora, Ario de Rosales, Jiquilpan y Tangancícuaro.

A pesar de la unión de varios cárteles, el CJNG no pudo ser derrotado. Y es que ese grupo, con asiento en Jalisco, es el que más ha crecido en los últimos quince años. Tanto, que la DEA sostiene que la organización de El Mencho es la más hegemónica con su dominio en 30 estados de la federación mexicana y una expansión que parece imparable.

En las redes sociales circuló un video que mostró el poder del CJNG y de su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes. Dicho material fue difundido por el área mercadotécnica del Cártel, responsables también de toda la mensajería bélica para sembrar miedo entre autoridades y la población. El mensaje es más que elocuente:

“Pueblo de Tepalcatepec, soy [El] *Mencho*. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra de ‘El Abuelo’, de ‘Tilín’, ‘Moi Parra’, ‘Chelo Polvata’ y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”.

El Abuelo al que se refiere el jefe del CJNG responde al nombre de Juan José Farías Álvarez y encabeza una autodefensa. Es originario de Tepalcatepec y en alguna etapa fue relacionado con ese Cártel.

De acuerdo con reportes policíacos, Farías Álvarez habría permitido que el CJNG entrara en el municipio de Los Reyes. Antes

había representado a otro grupo criminal, Los Jaliscos, de quienes se convirtió en un operador importante.

De ser aliados y socios, El Abuelo y El Mencho terminaron divididos por el odio. La ruptura ocurrió tras el intento de asesinato de un presunto narco con el que Farías Álvarez tenía una alianza. Su nombre: Miguel Ángel Gallegos Godoy, *El Migueladas*. Por ello, El Abuelo bloqueó los accesos a Tepalcatepec y clausuró a sus exsocios del CJNG la entrada a Apatzingán, Buenavista y otros territorios. Desde entonces, el choque entre ellos no ha tenido fin.

Juan José Farías Álvarez tiene historia: detenido en varias ocasiones por efectivos militares, debido a presuntas ligas con el tráfico de drogas, ha salido airoso —conforme a los argumentos oficiales— por falta de pruebas.

La ausencia de una estrategia antimafia es la razón por la que el territorio mexicano no tiene paz social. La militarización resulta infructuosa sin un plan contra los cárteles de la droga. La sola presencia de las Fuerzas Armadas no es suficiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pensando que con la presencia militar el crimen será frenado, pero eso aún está por verse.

Sin combate a la “narcopolítica” —en gran medida los gobernadores son responsables de este problema, porque han pactado con esas mafias del crimen organizado— y sin una estrategia antiguerra que combata a los cárteles, el país seguirá hundido en una crisis de seguridad que cada vez se agravará más. A esto se suma la impunidad que cobija a personajes plagados de claroscuros como Silvano Aureoles Conejo en Michoacán, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, prófugo de la justicia por estar acusado de ligas con el narcotráfico y por lavado de dinero.

A la lista se suma Enrique Alfaro Ramírez, que ha convertido a Jalisco en un botín: corrupción, desapariciones, crimen organizado, vínculos con el narcotráfico, fraudes inmobiliarios, presunto lavado de dinero, entre diversos delitos. Estas son las principales señales de que el gobierno de esa entidad del Occidente mexicano es el más claro ejemplo de una empresa criminal.

Es precisamente ese estado, gobernado por Alfaro Ramírez desde 2018 hasta 2024, la entidad que enfrenta el drama mayor con miles

de desaparecidos, fuerza del narcotráfico y descomposición institucional.

CJNG: EL FAVORITO

Sondeo

Jalisco es el territorio donde se han desarrollado dos dominios conectados, ya no tan ocultamente como aún parece ser para algunos, incluso, son bastante contemporáneos, tanto por su surgimiento, su desarrollo y apogeo. Se trata de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes y de Enrique Alfaro Ramírez. Uno narco, otro político, pero con claras líneas de entendimientos. Ambos, durante los últimos años, se han propuesto limpiar sus sendas de enemigos que les hagan sombras en el camino del poder.

Desde ese estado nació, a la sombra de potentes empresarios y políticos, el Cártel que encabeza Oseguera Cervantes, quien ya es considerado una amenaza nacional e internacional. En ese camino paralelo, de alrededor de 16 años, el Cártel que encabeza se posicionó como uno de los grupos criminales más pujantes que ya domina varios negocios ilegales en casi todo México.

Por incapacidad o corrupción —o por ambas causas—, las autoridades federales y militares se han mostrado débiles ante el poderío del CJNG, que sigue expandiendo su dominio en el país, incluso, por encima del grupo de Sinaloa, a los que ya desplazó en presencia no sólo en México, sino en América Latina y otros continentes. Los comandados por Nemesio Oseguera, *El Mencho*, ahora explotan las redes sociales, utilizan drones para preparar ataques y muestran, cada vez más, un poderío bélico nunca antes visto por el armamento que utilizan, el cual compite en capacidad de fuego, incluso, con el de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, el Cártel de Jalisco tiene un control casi total en el país. Domina en 30 estados, donde explota su amplio portafolios de actividades delictivas. En resumen, se convirtió en toda una maquinaria criminal que las autoridades no pueden, o no quieren, contener. Por eso les llaman los imbatibles, pues no hay mando que

se les ponga enfrente, lo que ya perturba a territorios completos debido a la violencia imparable que han desatado.

No existe en el continente un grupo como este. En el caso de Colombia —donde los cárteles de Cali y Medellín se significaron por su poderío— ya no hay sino células criminales más pequeñas pero mejor organizadas que trabajan con bajo perfil. Se les conoce como los “Invisibles”, precisamente por su capacidad de pasar desapercibidos para las autoridades.

Sin embargo, la “narcodinámica” colombiana no ha cambiado en cuanto a su capacidad para exportar drogas. Las decenas de células delictivas lo que han hecho es diversificar sus actividades dividiendo sus funciones. Ahora los llamados “cartelitos”, como los identifican, subcontratan la compra de insumos, la siembra de hoja de coca y lo mismo hacen con la transportación de enervantes, en la que ya no participan, pues han dejado esa tarea a los cárteles mexicanos.

Su capacidad de colocar cargamentos en cualquier parte del mundo tampoco ha variado: utilizan puertos, aeropuertos, transporte terrestre —en algunos casos— y los submarinos que, se asegura, pueden trasladar hasta tres toneladas de cocaína. Estos buques subacuáticos son construidos en talleres domésticos donde los expertos han montado pequeños astilleros para reparar lanchas, construir estos sumergibles y venderlos en el mercado del crimen organizado.

El Cártel de Jalisco, en su amplio control, domina el tráfico de drogas y unas 25 tipologías delictivas entre las que destacan el secuestro, extorsión, cobro de piso, venta de protección, control de giros negros, prostitución, tráfico humano, piratería, lavado de dinero a gran escala en la industria de la construcción y compra de tierras, así como el tráfico de combustibles robados que extraen de los ductos de PEMEX, entre otras.

Este último negocio —uno de los más rentables— lo opera desde Quintana Roo hasta Baja California. A lo largo y ancho del país, ha organizado a grupos dedicados exclusivamente al robo de gasolinas de los ductos. Todos los días cargan pipas en Puebla, Hidalgo, Veracruz, por citar sólo tres estados, que luego venden a los propios dueños de gasolineras, a quienes les conviene el negocio, porque

compran a mitad de precio y venden al costo oficial: alrededor de 22 pesos mexicanos por litro desde la segunda mitad de 2022.

A finales de ese año el grupo criminal de El Mencho emprendió la conquista de territorios en Michoacán, su tierra natal. La guerra se desató en Aguililla, pero también en Tepalcatepec, entre otros municipios, donde ha pretendido imponer su poder. Para ello, se enfrentó a los grupos criminales locales no sin consecuencias. Hasta la fecha prevalece el desplazamiento humano, familias completas huyen de la violencia y buscan ponerse a salvo en otras demarcaciones o, incluso, fuera de Michoacán. Pero en ningún lugar encuentran paz.

El Cártel de Jalisco, en una clara evolución, ha afinado nuevas herramientas para conquistar territorios. Actualmente, es el que mejor emplea los instrumentos con las redes sociales, a través de las cuales lanza amenazas, anuncia la conquista de nuevas plazas y hasta para declararle la guerra a sus rivales más asiduos.

Y es que precisamente a través de X (antes, Twitter), el CJNG anunció su irrupción en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, un territorio que, de acuerdo con informes de la SEDENA, está controlado por la Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y por los sicarios que encabeza El Mencho, líder del Cártel de Jalisco.

En un video difundido en redes, el CJNG mostró su músculo bélico. En las imágenes aparece una decena de hombres fuertemente armados. Portan uniformes similares a los que utiliza el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional; muestran su armamento de alto poder y sus equipos de comunicaciones. También sus cascos, *googles* de color negro y armas largas. Su postura es característica de los grupos paramilitares que se aprestan a anunciar una guerra contra sus enemigos.

Y no es para menos. Precisamente, lo que anunciaron en el video dado a conocer el 9 de junio de 2021, un poco atropellado en el mensaje, son sus objetivos bélicos en el Estado de México, la tierra gobernada por Alfredo del Mazo Maza hasta septiembre de 2023 — a partir del cual comienza su mandato la primera mujer gobernadora en la entidad, Delfina Gómez Álvarez, representante de MORENA, que termina con sexenios de dominio priista en el estado— y donde,

en la elección del 6 de junio de ese mismo año, obtuvo mayoría la alianza PRI-PAN-PRD:

“Gente de Naucalpan [dice la voz de un hombre uniformado con atuendo militar y el rostro cubierto con una capucha]: Ya estamos aquí: estamos aquí por un sólo objetivo: por estos lacras, mugrosos, corrientes, [...] que andan cobrando cuota a la gente de trabajo, al transporte público...”.

En otra idea, el de la voz explica que la presencia del CJNG en el municipio del Estado de México se debe a la búsqueda de Néstor Arturo López Arellano, conocido en el mundo criminal como *El 20*, a quien persiguen para ejecutarlo. También le siguen los pasos —de acuerdo con el presunto integrante del CJNG que aparece en el video— a un tal “Humberto” y a otro sujeto al que en el video sólo lo refieren como “General”, en la grabación que corre a través de los hilos de mediáticos no citan su nombre.

El vocero del Cártel de Jalisco continúa: “Nos han mandado de la oficina central para venir por ustedes. Tú no has respetado ni a mujeres ni niños ni ancianos, cobrándoles cuota y aterrorizándolos. [...] Porque te has metido con un monstruo de mil cabezas. Respetamos a la sociedad de trabajo, respetamos a las autoridades que hacen bien su trabajo. Pero a los policías que están con ustedes, que por una mísera cantidad de dinero se han vendido [...] para dejar desprotegida a la gente de trabajo. Nosotros no venimos a cobrar cuota ni a quedarnos con la pinche plaza. Sólo vinimos a desarticularte y a dejar a la gente de Naucalpan bien. Que son más que nosotros. La gente de bien son más que nosotros...”.

Para lograr sus objetivos —cazar a *El 20* y a sus cómplices— el mensaje indica que patrullarán las calles de todo el municipio hasta cumplir sus propósitos: “No vamos a parar hasta limpiar Naucalpan de Juárez”, afirma el mensaje del CJNG.

Y añade:

“Una disculpa por lo que hemos ocasionado. Nosotros somos los que hemos matado a toda su gente, a ‘El 20’. Estos amigos traen una sola bandera y la vamos a cuidar para que tengamos un mejor México, para sacar a toda esta lacra. Una disculpa al pueblo de Naucalpan”.

En su expansión imparable, el CJNG ya está presente en la Ciudad

de México, se asoció con el Cártel Unión Tepito. No le ha ido mal a Nemesio Oseguera Cervantes en el gobierno de la Cuarta Transformación. La política de “abrazos, no balazos” le ha permitido consolidarse como el segundo más poderoso de la República mexicana.

Al rendir su segundo informe de gobierno, en septiembre de 2020, el presidente López Obrador afirmó, a boca llena, que la delincuencia organizada ya no mandaba en el país como antes. Esta aseveración exhibió al tabasqueño como un personaje que miente mecánicamente, inconsciente de sus expresiones o que simplemente considera a la sociedad como ignorante, pues desde Palacio Nacional el presidente ve un escenario casi paradisíaco y no caótico como lo mira la sociedad.

No terminaba su autoelogio cuando, unas horas después, en la colonia Barona de Cuernavaca, Morelos, un grupo armado asesinó a ocho personas que asistieron a un velorio. Los criminales abrieron fuego, exhibiendo no sólo el poder que detentan, sino la impunidad con la que operan los criminales en todo el territorio nacional.

La radiografía sobre la expansión de este Cártel da cuenta de que el grupo criminal de *El Mencho* es muy bien tratado por el gobierno de la Cuarta Transformación, pues el control que ejerce en el robo de combustibles abarca desde Campeche hasta Baja California. Es el más amplio corredor controlado por un Cártel sin ser molestado por elementos de la Guardia Nacional ni por las Fuerzas Armadas, que ahora operan en todo el territorio realizando tareas policíacas y estarán al frente de las tareas de seguridad hasta 2028. En el sexenio de la más amplia militarización —ni con Calderón Hinojosa hubo tantos soldados operando en las calles—, actualmente, se dispone de más de 241,717 elementos hasta agosto de 2023. E incluso con el país militarizado, el CJNG goza de la más amplia indemnidad.

Tras la caída de El Marro como jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, el de Jalisco Nueva Generación se posicionó tras el de Sinaloa. Con apenas quince años de existencia, el Cártel de Jalisco irrumpió como un grupo ligado al de Sinaloa y a Los Cuinis. Este, encabezado por Gerardo González Valencia, cuñado de El Mencho, purgaba una larga condena en el Penal Federal de Máxima

Seguridad de Puente Grande, en Jalisco, hasta que fue trasladado en 2020 a Estados Unidos, donde luego de varios cambios de fechas de su juicio, fue sentenciado a cadena perpetua en julio de 2023. Este personaje se caracterizó por operar el narcotráfico a través de buques de carga procedentes de Europa, Asia y algunos países de América Latina como Colombia y Venezuela.

Luego de romper con Sinaloa, comenzó el ascenso de Oseguera Cervantes y su grupo criminal. Al igual que lo hicieron Los Zetas en su época, el CJNG diversificó sus actividades: puso en marcha los secuestros y a la par las extorsiones, venta de drogas químicas, robo de combustibles a PEMEX, entre otros rubros, que lo comenzaron a posicionar en todo el país.

El Cártel de Jalisco es el segundo más poderoso en la exportación de cocaína y marihuana a Estados Unidos. Cálculos de la DEA estiman que introduce aproximadamente quince toneladas de droga trimestrales a Estados Unidos de América, pero el trasiego más fuerte lo realizan con las drogas sintéticas, que tienen amplia demanda en Estados Unidos.

En el territorio nacional mexicano, el CJNG controla la mayor parte de las entidades federativas. Ahora con Guanajuato dominan una de las más prósperas entidades del país. Porque es una zona comercial e industrial donde se mueve mucho dinero. Nada máspreciado para desarrollar una industria criminal basada en el secuestro y las extorsiones.

Pero El Marro no estaba dispuesto a negociar ni a dejar la plaza y decidió pelear: esto causó que la región de El Bajío se convirtiera en la más violenta de México.

Luego de la caída de El Marro —detenido flagrantemente junto con cinco secuaces tras el secuestro de una empresaria de Apaseo el Alto, Guanajuato—, el CJNG se apoderó de esa entidad y, con ello, amplió el boyante corredor que ahora explota.

Y es que ahora dicho Cártel domina la ruta de trasiego de drogas y de “huachicol” más amplia de todo el territorio nacional. Esta entidad les interesaba porque pueden operar con todas sus actividades criminales. Sigue Jalisco, su territorio base, y continúa su red hasta los límites con Sinaloa, donde no han podido penetrar por la guerra que enfrentan con los hijos de Joaquín Guzmán Loera,

El Chapo, y con El Mayo Zambada, quien, conforme a la DEA, es el verdadero líder de ese Cártel.

Pero de acuerdo con informes oficiales —incluso, el presidente López Obrador pregonó, en su conferencia mañanera del 14 de agosto de 2020, que con la captura de El Marro, Guanajuato ya no ocupaba el primer lugar en violencia—, la estructura criminal de José Antonio Yépez Ortiz se mantiene intocable, lo mismo que su base financiera y la amplia red de clientes, principalmente, gasolineros que compraban combustible robado.

No es todo: también está intacta la base de protección política y policíaca que disponía El Marro para mantenerse impune en sus actividades criminales. Y, hasta donde se sabe, no existen investigaciones que apunten al desmantelamiento de este andamiaje de protección oficial.

Con este crecimiento exponencial, el CJNG disputa con el Cártel de Sinaloa el control de otros territorios, entre los que se encuentran Yucatán y Quintana Roo, en la ruta del Caribe.

Entre ambos cárteles hay marcadas diferencias. No se compara el Cártel de Jalisco con el de Sinaloa. Este último tiene controles solamente en América Latina, pero continúa en ascenso. Sin embargo, ambos coinciden en algo: parecen contar con la venia del presidente de la República. Por eso son intocables.

Sin que ninguna autoridad militar ni civil lo impida, el CJNG ya se posicionó en el Estado de México, ahí donde el 6 de junio de 2021 ganó avasalladoramente la alianza PRI-PAN-PRD.

Antes, en 2020, el Cártel de Nemesio Oseguera había anunciado, a través de las redes sociales, que ya había incursionado en la Ciudad de México. El Gobierno Federal, a través de su entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaña, reconoció que el CJNG ya había tomado parte del territorio en la capital del país, en alianza con el Cártel Unión Tepito.

La alianza PRI-PAN-PRD ganó en nueve alcaldías en la Ciudad de México, lo que hizo probable que el CJNG se consolidara en municipios como Cuauhtémoc —el corazón de dicha ciudad—, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón, entre otras, donde gobiernan sus presuntos aliados, sin importar partido o alianza de la

que provengan.

“Me gusta hacerlo enojar, quiero verlo muerto”

Carlos Enrique Sánchez Martínez, *El Cholo*, solía contar en francachelas con sus sicarios y con policías estatales su máximo deseo: “Si no puedo matar a ‘*El Mencho*’ a balazos, lo voy a matar a corajes [...] quiero verlo muerto”.

El otrora compadre de Nemesio Oseguera Cervantes se había peleado a muerte con su exaliado en 2018. Hasta marzo de 2021, cuando *El Cholo* fue ultimado y su cuerpo “encobijado” en pleno centro del Pueblo Mágico de Tlaquepaque.

En esta región de occidente, policías, empleados de la fiscalía jalisciense, funcionarios de gobierno, periodistas y narcomenudistas aseguran que los días de *El Mencho* están contados por su padecimiento renal, que lo obliga a someterse a diálisis diarias. Se dice que ha mermado su poder dentro de la organización. A grado tal, que dentro y fuera de México se da como un hecho que pronto podría ser relevado al frente del grupo criminal.

Esta elucubración animó a Carlos Enrique Sánchez a formar su propia organización delincuencia. Incluso, pidió apoyo al Cártel de Sinaloa para “replegar” al Cártel Jalisco Nueva Generación de su propio feudo. Lo que no ocurrió.

A Enrique Sánchez, *El Cholo*, se le responsabilizó, en febrero de 2021, de haber enviado a un grupo de sicarios para ejecutar a once civiles en la popular colonia de La Jauja, en Tonalá, Jalisco. Albañiles, herreros y comerciantes tomaban cerveza afuera de una casa particular, cuando fueron rafagueados sin explicación alguna.

El Cholo confesaría a sus amigos que su objetivo era “calentarlo” la plaza a *El Mencho* y de paso ocasionarle un coraje mayúsculo que viniera a complicar aún más su padecimiento renal. Ese mismo operativo de “matar por gusto” y por hacer “encabronar” al máximo líder del CJNG se repitió días después en las afueras de un OXXO y en un campo deportivo de Zapopan. Pero sin la estridencia llamativa que otorgan los medios de comunicación.

Un mes después de la matanza de albañiles y herreros en La Jauja, El Cholo tendría un descuido y fue capturado por sus otrora aliados. Antes de ultimarlo, lo obligaron a grabar un video en el que reconoció los homicidios que ordenó. Ahí culminó el conflicto de compadres entre El Mencho y El Cholo. Pero ya habían dejado casi 1,000 muertos en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Con El Cholo en la tumba y el jefe de plaza del Cártel Santa Rosa de Lima, El Marro, en prisión, el Cártel Jalisco Nueva Generación se adueñó de Guanajuato y Zacatecas. No sin tener pugnas internas por el control territorial, como antaño ya había sucedido:

“Tienen un problema grande. Hay purgas entre ellos, ya son muy violentos. Cero racionales. Ya reclaman otras plazas y con ‘*El Mencho*’ enfermo; y puede ocurrir lo mismo que con ‘El Cholo’, que quiso brincar al patrón. A él [*El Cholo*] le dieron Tlaquepaque, poder y máximo control y luego se la creyó [*sic*] y ya luego quería y reclamaba Tonalá. Y ahí sí la organización le dijo que no, ahí dominan Los Cuinis”, explica un periodista especialista en la nota roja, que prefiere el anonimato por seguridad.

—¿Enloqueció El Cholo?

—Pus [*sic*] pidió más, a la par del crecimiento poblacional del área metropolitana y los cambios en el gobierno. Vio muchas cantinas y palenques, se le antojó ese jugoso botín. Pero en el bajo mundo, los parámetros y códigos para dar o quitar territorios son otros.

Los Cuinis son añejos en Jalisco. Muy diversos en ramificaciones y en actividades criminales, pues son 16 hermanos con injerencia en el territorio y eternos aliados del CJNG.

Una vez que dicho Cártel se deshizo de El Cholo y que el Gobierno Federal aprehendió a El Marro, le fue “obsequiada” la plaza de Guanajuato al nuevo consentido de El Mencho, Ricardo Ruiz Velasco, *El Tripa*, a cambio de pagar 10 millones de dólares —aseguran en los pasillos de la Fiscalía de Jalisco—. La suma debería ser recuperada en los jugosos negocios ilícitos de la entidad: “huachicoleo”, trata de personas, trasiego de drogas, extorsión de políticos, empresarios y cobro de piso. Por eso Jalisco estalló en más violencia.

El Tripa se asoció con *El Apá*, Gerardo González Ramírez, ambos poderosos jefes del CJNG. Controlan los puntos limítrofes de Jalisco

con Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Cada uno en sus territorios, con la única condición de no operar en el Área Metropolitana, salvo previa autorización de El Mencho.

Mientras a El Cholo lo mandaron al panteón, a su amigo —el exalcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro o *Pope*— lo exiliaron y retiraron de la política a sus 46 años. Un emisario de El Mencho tocó a las puertas de la Casa Jalisco —donde vive el gobernador Enrique Alfaro Ramírez— para decirle al Ejecutivo Estatal que, si no retiraban ellos a del Toro, el Cártel lo iba a quitar a su manera.

Dos días antes de que tiraran el cuerpo de El Cholo en el centro de Tlaquepaque, Ismael del Toro Castro renunció a la posibilidad de reelegirse como alcalde de Guadalajara y desapareció del espectro político y empresarial.

Así quedaron en el aire, sin saberse con certeza, los acuerdos que El Cholo y Pope habían logrado tras bambalinas, en la casa particular donde solían reunirse en Tlaquepaque, repetidas veces, acompañados del exalcalde de dicho municipio y del líder transportista de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Alfredo Barba Mariscal.

El Mencho: sucesores

La persecución contra el capo Nemesio Oseguera ha sido constante después que la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, aumentó la recompensa por su cabeza. Tanto, que, incluso, la SEDENA organizó un grupo especial para dar con su paradero y capturarlo.

Sin embargo, hasta la fecha, no han podido dar con sus no pocos escondites. Presuntamente enfermo de un padecimiento renal y al parecer sometido a constantes diálisis, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación estaría alistando su sucesión al frente de la organización que fundó y convirtió en una de las más temibles de América Latina.

Aunque existen diversos nombres de posibles candidatos a sucederlo, el proceso de cambio en el mando del CJNG no es ajeno

a luchas internas, traiciones y venganzas.

Perseguido supuestamente por el gobierno de México y por el de Estados Unidos, que han unido fuerzas para capturarlo, los días de Oseguera Cervantes, El Mencho, parecerían estar contados al frente de la organización criminal, de confirmarse su enfermedad terminal.

Oriundo de Aguililla, Michoacán, El Mencho parece haber mermado sus fuerzas debido a su afección. De acuerdo con informes de inteligencia de la SEDENA, es sometido frecuentemente a tratamientos de diálisis para eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre, ya que no puede desecharlos naturalmente. Los mismos informes señalan que se atiende en un hospital de su propiedad.

Sin embargo, Oseguera Cervantes se mantiene al frente del CJNG, aunque sigue a “a salto de mata” y se afirma que suele esconderse entre la abrupta Sierra Madre del Norte, los Altos de Jalisco y Nayarit. Siempre evitando ser capturado por efectivos de la DEA o de la SEDENA que han puesto en marcha diversos operativos para capturarlo.

A mediados de 2021, la DEA metió mayor presión contra él: aumentó la recompensa, de cinco, ofrecidos inicialmente, a 15 millones de dólares para quienes aporten información y así lograr su detención. Esta es una de las cifras más altas que se han ofrecido por un capo del narcotráfico. Así el gobierno de Estados Unidos lo colocó como uno de sus objetivos prioritarios. En el caso del gobierno mexicano, el capo parece ser un objetivo clave. Por ello, la FGR anunció una recompensa de 30 millones de pesos para quien ofrezca información que permita su captura. Sin embargo, ni la DEA ni la FGR han podido dar con su paradero.

Oseguera Cervantes y el CJNG están considerados por el gobierno de Estados Unidos como una empresa criminal que domina el mercado del fentanilo y otras drogas sintéticas en los Estados Unidos de América. También introducen cocaína y heroína, dos de las drogas con mayor demanda en dicho país.

En los últimos meses se han barajado diversos nombres para sucederlo al frente del CJNG, pero hasta ahora no ha cedido el poder criminal desde que hace unos 20 años tomó las riendas del Cártel

de Jalisco. Antes fue sicario de sus paisanos, el Cártel de Los Valencia; fundó el de Los Cuinis junto con sus cuñados. Antes, en la década de los ochenta, estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de drogas. Fue deportado a México y se internó en Michoacán, donde construyó el “narcoimperio” que actualmente encabeza.

El CJNG nació primero como brazo armado del Cártel de Sinaloa; en particular, como grupo de élite al servicio de Ignacio *Nacho* Coronel Villarreal —socio de Joaquín Guzmán Loera, *El Chapo*— abatido en Zapopan, Jalisco, en 2009.

Tras la muerte de Nacho Coronel, el michoacano Nemesio Oseguera, quien es amante de las peleas de gallos, emergió como uno de los líderes más temibles del narcotráfico. Pronto colocó a su organización criminal como la más poderosa de América Latina, después de Sinaloa, con amplios lazos en Colombia y el resto del continente.

La enfermedad de El Mencho no se conocía, pero de acuerdo con informes de la DEA, la padece desde hace varios años, aunque hasta donde se ha sabido, desde 2022, el problema parece haberse agudizado, tanto, que hasta se dio como un hecho la muerte del capo.

Ninguna autoridad mexicana lo confirmó. La DEA y otras agencias estadounidenses tampoco han dicho nada oficial. Todo ha quedado, hasta ahora, en rumores a través de diversos medios electrónicos.

De acuerdo con datos oficiales, en la actualidad más de 73,000 personas reciben diálisis y hemodiálisis en México para mantener sus funciones renales en condiciones normales, pero el tratamiento no garantiza la solución del padecimiento. Sólo es útil para sobrellevar la enfermedad.

Se ignora si es atendido en un hospital o tiene atención médica directa en el lugar donde esté escondido, lo que resulta ser más probable. De otro modo se expondría a ser capturado por las autoridades.

Desde que trascendió públicamente su enfermedad, se percibió una crisis interna en el Cártel de Jalisco, pues fueron más evidentes los golpes bajos, las traiciones y la lucha por el poder. De acuerdo con informes oficiales y de la DEA, esta crisis lleva alrededor de tres años, por lo que han mencionado varios nombres para sustituirlo en

el mando del Cártel.

El relevo natural en la jefatura del CJNG habría sido Rubén Oseguera González, *El Menchito*, pero fue apresado y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020, bajo acusaciones de tráfico de drogas con la que le podrían imponer hasta una cadena perpetua.

Conforme a informes de la DEA, no se descarta que el CJNG pueda estar infiltrado por miembros del Cártel de Sinaloa, quienes se aprestan a tomar el mando del grupo criminal si El Mencho se retira o muere.

Uno de los grupos que busca afanosamente ese liderazgo está encabezado por Juan Carlos Valencia González. Le apodan *El 03* o *El JPL*. Es el hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, hijo de Rosalinda González Valencia, *La Jefa*. Lidera el brazo armado de dicha organización delincriminal, conocido como el Grupo Élite del CJNG. Opera en Michoacán y quienes lo conocen aseguran que se erige como el relevo natural de El Mencho.

Otros informes de la Fiscalía General de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, establecen que El 03 está al frente de la plaza en Michoacán, donde disputa el control territorial con la Familia Michoacana, Cártel que está bastante arraigado en esa entidad.

Valencia González es uno de los principales colaboradores de El Mencho. Algunas fuentes aseguran que es hijo de Armando Valencia, quien estuvo casado con Rosalinda González Valencia, actual esposa del primero y fundador del Cártel del Milenio.

En la carrera por relevar a El Mencho, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública, había dos personajes relacionados con el Cártel de Sinaloa, quienes estarían trabajando para unificar ambos cárteles. Uno era Erick Valencia Salazar, conocido en el mundo criminal como *El 85*, quien controlaba el municipio de Uruapan, Michoacán, y fue detenido el 5 de septiembre por efectivos de la SEDENA.

El segundo es Jorge Luis Mendoza Cárdenas, conocido como *La Garra*, quien opera el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Lleva algunos años en el narcotráfico: en 2016, la DEA se refirió a él como una de las cabezas del Cártel de Jalisco junto con El Mencho, es como su brazo derecho. Su cuñado, Abigael González Valencia, fue

jefe del Cártel Los Cuinis. Actualmente está en el Módulo Diamante del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, bajo cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Sobre La Garra hay historia. Es conocido por sus sanguinarios métodos. Se caracteriza por decapitar a sus víctimas y, en el peor de los casos, suele descuartizarlos y exhibirlos a través de las redes sociales. Así ejerce terror e intimidación entre sus adversarios.

El 25 de julio de 2008 fue señalado por las autoridades de Jalisco como responsable de un homicidio múltiple. Fueron asesinados dos niñas de 7 y 8 años, un joven de 17, así como tres adultos. Los hechos ocurrieron en Zapopan, Jalisco. Conforme al peritaje médico, todos fueron apuñalados y estrangulados.

La Garra ha andado por rutas casi paralelas a las de El Mencho. Comenzó en el Cártel de Sinaloa, en donde le enseñaron a traficar con metanfetaminas y drogas sintéticas hacia Estados Unidos. También comercia cocaína y heroína. Estuvo bajo las órdenes de Ignacio *Nacho* Coronel, quien hasta 2009 tuvo el control de Guadalajara hasta ser acribillado durante un operativo implementado por las Fuerzas Armadas.

Los González Valencia son una familia numerosa, integrada por 18 hermanos —unos afirman que 16, otros, doce—, de la que forma parte Rosalinda, *La Jefa*, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes. Quien ha enfrentado algunas sacudidas por parte de la justicia mexicana: en mayo de 2018 fue detenida en Zapopan, Jalisco. Se le acusó de lavado de dinero, pero la falta de pruebas la puso en libertad cuatro meses después.

De acuerdo con una radiografía criminal de la extinta PGR, los González Valencia encabezan el antes mencionado Cártel de Los Cuinis, considerado por las autoridades estadounidenses como una organización poderosa en el tráfico de drogas.

El nombre fue tomado de una pequeña ardilla que se caracteriza por reproducirse rápidamente. Con una larga historia en el mundo del narcotráfico, se remonta a la etapa en la que Armando Valencia Cornelio, *El Maradona*, fundó el Cártel del Milenio. En este grupo criminal trabajó El Mencho cuando fue liberado en Estados Unidos, donde estuvo preso una corta temporada por tráfico de drogas. Tras

ser deportado, se refugió en Michoacán y se empleó de nuevo como sicario.

Conforme informes de la DEA, este grupo criminal se manejaba con un bajo perfil y era muy eficiente en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Movía cuantiosos cargamentos de cocaína por la vía marítima, en barcos atuneros y grandes buques de carga. Durante años el grupo criminal pasó desapercibido hasta que un testigo declaró lo que sabía sobre las operaciones de Los Cuinis y las autoridades estadounidenses le pusieron el reflector. Tiempo después vino la aprehensión de Abigael González Valencia.

En la lucha por el control del Cártel de Jalisco también se menciona a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, *El Sapo*. La DEA lo ubica como otro de los brazos importantes de Oseguera Cervantes y, de acuerdo con su perfil, es una persona extremadamente violenta. Se le atribuyen numerosos asesinatos y secuestros.

Su radio de acción es la plaza de Puerto Vallarta, en Jalisco, bastión financiero del CJNG. Antes fue jefe de región, tanto en Veracruz como en Tabasco.

De acuerdo con informes oficiales, existen dos grupos más que también luchan a sangre y fuego por el control del CJNG. Se trata de Los Deltas, uno de sus brazos ejecutores y que mantiene una disputa a muerte por el control de la Área Metropolitana de Guadalajara con el Cártel Nueva Plaza, un ramaje del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la lista de aspirantes a dirigir dicho cártel también se menciona a Los Mata Zetas, el brazo armado del Cártel de Sinaloa, surgido en 2007 y del que nace el CJNG, cuyo objetivo era quitar del camino a Los Zetas, grupo criminal que, entonces, amenazó con invadir Jalisco, feudo de El Mencho.

Hasta ahora, su padecimiento es un rumor que corre por todos lados. La DEA ha confirmado que, en efecto, sufre una enfermedad renal. Se ignora tanto su verdadero estado de salud como el lugar en donde pueda estar recibiendo atención médica.

Lo cierto es que las versiones sobre su grave estado de salud coinciden con la agitada lucha interna que enfrenta el CJNG por la sucesión en su jefatura. Han surgido varios frentes, cabecillas que buscan el poder. Este desorden ya no es controlado por El Mencho,

quien debido a sus presuntos padecimientos, parece estar perdiendo el dominio de la organización que él mismo fundó.

No obstante la ola de rumores, que hasta lo han dado por muerto, sigue “vivito y coleando”.

EL AMO DE JALISCO

CJNG: la máquina de la muerte

La ola de violencia que azota a Jalisco tiene, entre otras posibles, tres explicaciones: la ruptura hace una década del Cártel de Sinaloa con sus otrora aliados jaliscienses —liderados por El Mencho—; la fractura en 2017 con su compadre, Carlos Enrique Sánchez Martínez, *El Cholo*, que derivó en su ejecución en marzo de 2021, con su respectivo operativo “barredor” y “depurador” de los sicarios de esta incipiente organización; y la corrupción, negligencia y complicidad de las autoridades jaliscienses con las redes criminales.

Y es que la violencia no tiene tregua en dicha entidad, sobre todo en Guadalajara y la zona metropolitana. Los datos no mienten: el 25 de julio de 2022 fueron asesinadas seis personas en un Centro de Rehabilitación de Tlaquepaque. Irónicamente el lugar se llamaba “El Cerco de Vida”. Un comando armado irrumpió en el inmueble situado en la calle Santa Isabel, también conocida como “Camino a La Cofradía”, y detonó una lluvia de balas en el interior del anexo. Varios adictos lograron escapar. En el lugar perdieron la vida cinco hombres y una mujer quedó sin signos vitales rumbo al hospital, cuando iba a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja. Una semana antes del ataque, cuatro personas fueron ejecutadas y tiradas en un predio abandonado, cerca de la colonia La Cofradía.

Mazamitla comunica con Michoacán. Esta región jalisciense es protagonista en las notas rojas de los medios de comunicación locales. Aquí es común escuchar a los voceros de periódicos dando noticias como: “cuerpos mutilados en una camioneta podrían ser de los dos policías desaparecidos”; “ejecutan a mujer en el interior de su camioneta, por no pararse en un retén de sicarios”; o “rescatan a policías secuestrados en Mazamitla”. Esto es lo usual. Nada resulta

extraordinario.

De esta región salen a protestar madres y padres de desaparecidos. Van al Palacio de Gobierno de Jalisco, a la Fiscalía Estatal o a la Glorieta de los Desaparecidos, para exigir la aparición de sus seres queridos. Porque en Mazamitla manifestarse pone en riesgo sus vidas. Como ocurre en otras regiones de Jalisco, Tala, Ocotlán o la región de Autlán de Navarro, donde pesan ominosos silencios sobre lo que pasa.

El accionar de armas de fuego y el aumento en los índices delictivos no cesan en Jalisco. Una revisión exhaustiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) abre aún más el desastroso panorama de lo que ocurre en la entidad. Enrique Alfaro Ramírez tomó protesta como gobernador el 6 de diciembre de 2018. En sus primeros 24 días de mandato hubo 247 muertes en Jalisco, de las cuales, 129 asesinatos fueron con arma de fuego. También se perpetraron cinco feminicidios.

En 2019, su primer año como gobernador, el SESNSP reportó 2,751 homicidios en Jalisco, de los cuales, 1,165 se cometieron con arma de fuego. Para entonces, el feminicidio ya empezaba a salirse de control, se abrieron 65 carpetas de investigación.

Además, los distintos Ministerios Públicos Investigadores recibieron más de 76,000 denuncias por robo, asalto a mano armada, robo a casa habitación y de vehículo con o sin violencia; más 1,734 denuncias por narcomenudeo, investigaciones que las autoridades, en su mayoría, les dieron carpetazo.

Para darse una idea, en el mismo año, otra entidad altamente violenta y vecina de Jalisco, Michoacán, registró 2,686 homicidios y 13 feminicidios. Hubo más criminalidad en el primero que en el territorio donde dominan Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana.

En 2020, año en el que gran parte de la sociedad en México se encerró en sus casas debido a la pandemia por el coronavirus, los índices criminales en Jalisco no decrecieron, por el contrario, sucedieron 2,626 crímenes, 2,000 de ellos con arma de fuego. Hubo, además, 68 feminicidios, más de 53,000 denuncias abiertas por robo, 13 secuestros y 1,067 denuncias por narcomenudeo.

En 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública reportó 2,740 homicidios, de estos, 1,115 ocurrieron con arma de fuego, 73 feminicidios, 19 secuestros, 52,000 denuncias por robo y 1,134 denuncias por distribución local de drogas. En el mismo año, Michoacán resultó más peligroso: ocurrieron más de 3,200 asesinatos.

En 2022, Jalisco se vio afectado por más de 118,000 delitos como cifra mínima. Dentro de los mismos, 2,071 homicidios. De estos, 917 con arma de fuego, 179 feminicidios de los cuales únicamente 28 se investigan como feminicidio —de acuerdo con cifras del SESNSP—, 23 secuestros hasta octubre de ese año. Otros datos se vuelven más inciertos y han sido modificados en su “metodología”, transformando las cifras claras por estimados en porcentajes. Esto, sobre todo, desde 2022, enrarece la comprensión y transparencia ante la sociedad. Por lo que para el cierre del año los datos en general han sido amañados oficialmente, sosteniendo la idea de una baja en estos índices que ofrecen mucho espacio a la duda.

Para el primer semestre de 2023, con datos de finales de agosto, al cierre de este volumen se presume —de acuerdo con MIDE Jalisco, de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, a través de su Monitoreo de Indicadores del Desarrollo— la cantidad de 88,748 de delitos registrados del fuero común. Del fuero federal, 2,544. Los homicidios registrados ascienden a 961. Oficialmente se exhibe la cifra de 24 feminicidios. De igual forma los secuestros: 8.

Los datos oficiales aplauden un decrecimiento. Pero mayormente se sabe que estos no corresponden con la realidad, son sólo aproximaciones y operaciones que responden muchas veces a los intereses gubernamentales o de otros poderes.

Y es que la delincuencia no descansa en Jalisco. Por ejemplo, el 27 de julio de 2022, un aparatoso ulular de patrullas de la Policía de Zapopan sonaba estruendosamente por los alrededores de las avenidas Patria y Tepeyac. Aunque los peatones y curiosos pensaban que se trataba de un operativo para buscar a un narcotraficante, la realidad era que el mismo se montó para tratar de ubicar a dos hampones. A bordo de una motocicleta y tras previa información sobre la víctima, asaltaron a un contador que llevaba 3 millones de pesos guardados en una mochila. El dinero correspondía a la nómina de su empresa.

Al día siguiente, el periódico local *El Informador* reportó que los asaltos en las sucursales bancarias de Guadalajara, Zapopan y Tonalá eran tan frecuentes que, en tan sólo veinte días en julio de 2022, los ladrones se habrían hecho de un botín aproximado de 4 millones y medio de pesos en diez asaltos.

En el Área Metropolitana de Guadalajara la delincuencia no cesa. Restauranteros y empleados de cadenas hoteleras de prestigio advierten a sus clientes que deben andar con “poco efectivo” en las carteras, utilizar preferentemente tarjetas de crédito virtuales para efectuar sus pagos y a no exhibir “billetes” en la calle ni presumir el celular en las zonas peatonales. El sentir popular es claro: la delincuencia común está desatada.

En cuanto al narcotráfico, el poderío criminal de El Mencho ha servido para deshacerse de sus socios anteriores, pues además de la ejecución de El Cholo, la Fiscalía de Jalisco dio por desaparecido a El 7, jefe de sicarios del CJNG en la región de Autlán de Navarro —bastión de El Mencho, quien aparece señalado en varias carpetas vinculantes con la desaparición de comerciantes en esa región—; pero, extrañamente, El 7 pasó de ser victimario a víctima. Lo cierto es que en Jalisco poco se sabe de las figuras relevantes que operan como jefes de plaza regionales.

Camaleón de mecha corta

Bravucón, prepotente y alérgico a la crítica, Enrique Alfaro Ramírez ha encabezado un gobierno plagado de corrupción que lo sumió en una crisis de credibilidad aguda. Su administración avanzó más de la mitad de su periodo entre rechazos, críticas y la simpatía de quienes fueron favorecidos. Destacan empresarios que ganaron millones con contratos amañados o sin licitación. Otros cobraron notoriedad por sus presuntos nexos con el narcotráfico —en particular, con el Cártel Jalisco Nueva Generación—. Los datos públicos proyectan a Alfaro Ramírez como un presunto narcopolítico —al estilo de Tomás Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores o Francisco Javier García Cabeza de Vaca—.

Y pese a su mal ejercicio de gobierno, abrigaba vehementemente

la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República para 2024. Con tal propósito preparaba su lanzamiento a una travesía nada fácil, sobre todo por la imagen negativa que él mismo, con sus actos, construyó. Él y Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, parecían ser las cartas fuertes de Movimiento Ciudadano, el partido que dirige Dante Delgado Rannauro y que se vincula con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Formado en el PRI —escuela de caciques, presuntos narcotraficantes y políticos corruptos—, Alfaro Ramírez “chapulineó” por distintas “tendencias” políticas, atraído soberbiamente por el poder. Después de haber sido alcalde de Tlajomulco de Zúñiga —donde empezaron sus escándalos públicos—, brincó a una diputación federal. Luego saltó al Senado de la República, que le sirvió de trampolín para rebotar en la gubernatura de Jalisco en 2012.

Pero no pudo. En el camino se le atravesó Aristóteles Sandoval Díaz (también relacionado con el narcotráfico y asesinado en 2020 por presuntos sicarios del CJNG en el restaurante-bar —antro devenido en burdel de postín— conocido como Distrito 5, en Puerto Vallarta). Tras ser derrotado en las elecciones de 2012, Alfaro Ramírez se acomodó en la presidencia municipal de Guadalajara y, desde esa posición, saltó a la gubernatura arropado por el partido Movimiento Ciudadano, conformado en esa entidad por una pléyade de políticos, en su mayoría, panistas y priistas acusados de corrupción.

Aunque hizo promesas y tejió alianzas, buscó construir su propio partido en Jalisco para competir por la gubernatura. No creó los consensos necesarios. Y con desechos de priistas y panistas conversos edificó una plataforma de intereses para atraer adeptos y así proyectarse como un candidato competitivo en 2018.

Lo cierto es que su oferta no resultaba tan atractiva como sí lo era el repudio a todo lo que oliera a PRI o a PAN, pues varios gobernadores en Jalisco habían sumido al estado en una crisis profunda de corrupción y violencia, hasta ahora vigente, que dio pie a un hartazgo social abrazado por la miopía o la conveniencia de la ciudadanía.

El periodo de Aristóteles Sandoval fue la gota que derramó la

impaciencia y el odio de la sociedad. Resultó un verdadero escándalo cómo construyó su proyecto político. Todo, con dinero del narcotráfico. De acuerdo con informes consultados —y datos públicos nunca desmentidos— recibía financiamiento del Cártel de Sinaloa para sus proyectos políticos. Uno de los empresarios ligados al lavado de dinero relacionado con él era José Luis Duarte Reyes, conocido como Tony Duarte, pieza clave dentro de los amos y señores de Puerto Vallarta, donde lavaron millones de dólares en el negocio de los bienes raíces.

Además, Duarte Reyes obtuvo jugosos contratos en el gobierno de Aristóteles y ambos también se beneficiaron de la protección que brindaron al CJNG, dueños de todo el estado y principales distribuidores de drogas de todo tipo que, al amparo del poder oficial y policíaco, creció como una industria poderosa.

El conflicto entre Aristóteles Sandoval y el CJNG surgió porque el mandatario estaba alineado con el Cártel de Sinaloa, que ya no poseía alianza con la organización de Nemesio Oseguera. Se habían divorciado después de que ambos sirvieron como brazo armado. El grupo de El Mencho se independizó y así empezó su etapa de expansión y opulencia.

“En adelante tenemos el reto histórico de lograr juntos un estado de paz y prosperidad”, afirmó Aristóteles Sandoval Díaz en su discurso de toma de posesión, en marzo de 2013.

En mayo de 2018, unos meses antes de concluir su mandato, en un discurso más plagado de retórica que de realidad, expuso: “Este combate directo [se refería al narcotráfico] ha costado amenazas a quienes encabezamos el estado, la Fiscalía estatal, así como autoridades políticas como el secretario de Gobierno [Roberto López Lara] y un servidor”.

Añadió, enfático: “A lo largo de casi seis años, el gobierno a mi cargo ha hecho frente a la organización delictiva [en alusión al CJNG], la más poderosa del país”.

Las disputas de los últimos años entre el entonces mandatario y dicho Cártel sirvieron como una de las líneas principales de investigación para esclarecer su muerte. Aunque el gobierno de Enrique Alfaro mantuvo un hermetismo casi absoluto con respecto al Cártel de Jalisco Nueva Generación, a cuyos sicarios se les atribuye

la ejecución de Aristóteles Sandoval. Por otra parte, el CJNG nunca asumió públicamente la autoría del crimen. Y otro dato sospechoso: pese a existir claros indicios de que en el crimen participó el narcotráfico, la FGR nunca atrajo el caso. La Fiscalía de Jalisco actuó en medio de dudas y no menos sospechas. Se afirma que, por órdenes de Alfaro, el expediente fue celosamente guardado.

Las amenazas que Aristóteles Sandoval refirió fueron claras desde las primeras horas de su gobierno. Unos días después de haber protestado como gobernador, el secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez fue abatido por dos sicarios del CJNG a unas cuantas cuadras de la Casa Jalisco, donde horas antes había sostenido una reunión con el entonces mandatario. Al funcionario le habían hecho un seguimiento puntual, desde días atrás, porque El Mencho, conforme al expediente del caso, decidió ejecutarlo. Incluso en una ocasión, de acuerdo con la investigación, el funcionario estatal estuvo a punto de ser asesinado en su propia oficina, pero el sicario temió ser detenido. “Lo tuve a un metro de distancia”, declaró después el matón.

Este fue el inicio formal de una guerra. En la carpeta de investigación abierta para este asunto se registra cómo varios miembros del CJNG declararon que El Mencho decidió asesinarlo porque sabía que Gallegos Álvarez estaba ligado con el Cártel de Los Caballeros Templarios y lavaba dinero para esa organización criminal.

También se expone que el gobierno de Sandoval Díaz pretendía “entregarle la plaza” al grupo michoacano y desplazar al CJNG de su principal bastión. Esta circunstancia bien pudo ser la causa de su crimen, aunque las autoridades jamás se han referido a este punto como móvil del asesinato. Y al respecto, Alfaro Ramírez ha guardado silencio.

Dos años después de la ejecución de Gallegos Álvarez la guerra de alta intensidad siguió. La llamada Operación Jalisco, con la que se pretendía capturar a Oseguera Cervantes, terminó convertida en un fiasco: el ejército de este derribó un helicóptero militar y realizaron “narcobloqueos” cada vez que veían la presencia de las Fuerzas Armadas. En esta etapa cruenta hubo cientos de muertos.

La historia del CJNG no puede explicarse sin el antecedente de la

guerra contra el crimen organizado, declarada entre 2006 y 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa —aunque se considera que esta guerra todavía no termina—.

Las autoridades estadounidenses ven dos vertientes que contribuyen al surgimiento de este grupo criminal: el Cártel de Sinaloa, la organización que fundó *El Chapo*, Joaquín Guzmán Loera, en 2001, y el Cártel del Milenio, viejos aliados de los sinaloenses y de capos poderosos como Ignacio *Nacho* Coronel, quien operaba protegido en Jalisco.

Los cárteles aliados a Sinaloa se caracterizaban primero por actuar como grupos de choque. Después, en 2007 se volvieron brazos armados y sus ataques los firmaban como Gente Nueva o La Resistencia; otro más eran Los Mata Zetas. Estos se enfrentaban al Cártel del Golfo y a su brazo ejecutor, Los Zetas, más tarde convertidos en un Cártel poderoso. Esta guerra dejó cientos de baños de sangre, tanto en el occidente, como en los estados situados en el Golfo de México.

Desde la segunda mitad del siglo xx, Jalisco se convirtió en refugio seguro para familiares de narcotraficantes emblemáticos. El territorio pasó a ser estratégicamente importante por su cercanía con los puertos del Pacífico mexicano. Consecuencia de esas complejas transformaciones, el CJNG se ha especializado en el tráfico de drogas químicas, entre otras, del fentanilo, que elabora con precursores traídos de Alemania e Indonesia y que luego de procesarlas, quedan listos para exportarse a Estados Unidos por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los cuales mantienen bajo su control a base de cañonazos de dólares y amenazas.

La lucha por las plazas tuvo su punto más violento en el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. Las matanzas se multiplicaron en Colima y Michoacán —dinámica aún vigente durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez—. El lapso ha estado marcado hasta hoy por la irrupción del CJNG en toda la estructura de gobierno. En la etapa de Sandoval Díaz se enfrentaron los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. La ruptura entre ambos fue inminente.

Como venganza, El Mencho planeó el secuestro en Puerto Vallarta de dos hijos de El Chapo —Alfredo e Iván Archivaldo—. Se

afirma que Ismael *El Mayo* Zambada los acompañaba aquella noche en el restaurante “La Leche”, pero se evadió ante la arremetida armada, hábil como lince. De acuerdo con el mismo Iván Archivaldo, El Mayo fue el operador del rescate y los vástagos, conocidos como Los Chapitos, fueron liberados. De otro modo la guerra de alta intensidad no habría tenido fin.

Con Alfaro, el CJNG ha tenido no sólo buen trato, sino protección. Muchos integrantes de esa organización criminal están incrustados en el gobierno o bien fungen como operadores en negocios millonarios. La presencia de la organización criminal es avasallante en los municipios. Sobran datos que así lo ejemplifican.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fichó a seis mexicanos de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por apoyar financieramente, con tecnología o bienes, a la organización criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación. La investigación, que profundizó en los recovecos y alianzas políticas de la organización, fue apoyada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés).

La expansión del CJNG quedó resumida en las palabras del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Brian E. Nelson: “La violencia y la corrupción han sido cruciales para el crecimiento del CJNG en la última década. Estas dos fuerzas han fortalecido la expansión territorial del Cártel y con esto una gran capacidad para traficar drogas mortales a los Estados Unidos. Mientras tanto, sus redes de apoyo ayudan a los líderes fugitivos del CJNG a que permanezcan escondidos y así evadir la justicia”.

Uno de los señalados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros fue Severo Flores Mendoza, expolicía municipal conocido en ese contexto y en el del hampa como *El Rey Mago*. Este sujeto —con amplios controles en varios ayuntamientos jaliscienses— fue jefe policíaco en Ameca, Jalisco. Y de acuerdo con los informes estadounidenses, proveía de información judicial al CJNG a cambio de sobornos. También era el enlace entre dicho Cártel y funcionarios de los tres órdenes de gobierno. La información sobre este policía también fue registrada por el Centro

de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) —actualmente, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—.

Dichos documentos también dan cuenta de otras reuniones con altos mandos de la SEDENA, entre ellos, su titular, Luis Crescencio Sandoval González y mandos policíacos de las ciudades de Guadalajara y Zapopan —Juan José Montes Ortiz y Juan Pablo Hernández González, respectivamente—. Pero los reportes no confirman si las mismas se realizaron. De igual forma, dan cuenta del presunto encuentro entre un enviado de El Mencho con dos efectivos militares, para negociar un plan de operación militar a favor de operaciones de la organización criminal como alertas sobre operativos e información respecto a investigaciones en su contra. A cambio, ofrecían una suma millonaria mensual y un supuesto *penthouse* en Puerto Vallarta “para el General”; aunque no precisaron el nombre, pero se infiere que se trata del general secretario de la Defensa del gobierno de López Obrador, Luis Crescencio Sandoval González.

Todo esto nos regresa a El Rey Mago, pues de acuerdo con su currículum también se desempeñaba como coordinador de jefes de policías para la Región Valles —ubicada en lo que se conoce como el Triángulo Dorado—, la cual está conformada por catorce ayuntamientos que conforman un corredor controlado por el CJNG.

Las demarcaciones de este radio territorial de acción —que es sólo un pequeño porcentaje del territorio jalisciense— son Tala, Tequila, Ameca, Hostotipaquillo, San Martín Hidalgo, El Arenal, Amatitán, San Juanito de Escobedo, Teuchitlán, Acatlán de Juárez, Ahualulco del Mercado, Magdalena, Cocula, San Marcos y Etzatlán.

En esta zona de Jalisco se localizan las llamadas “narcoescuelas” en las que el jefe del Cártel Oseguera Cervantes y sus aliados entrenan a sus nuevos reclutas, muchos de ellos, captados o secuestrados en esa zona. Es precisamente en el municipio de Tala donde han desaparecido varias personas que trabajaban como encuestadores, policías, escoltas o elementos de seguridad privada.

Las autoridades estadounidenses expusieron, además, que Flores Mendoza —a quien calificaron de “corrupto”— también ha desempeñado otros cargos dentro de las fuerzas judiciales en Jalisco en la última década: en 2014, por ejemplo, reprobó los

exámenes de control de confianza aplicados a oficiales de la policía, pero pese a ello se mantuvo en los cargos. Esto, debido a las complicidades políticas y al narcotráfico.

Tras el informe, que se difundió como una bomba y alcanzó niveles de escándalo, el alcalde de Ameca, Valentín Serrano Jiménez —otra presunta pieza engarzada en el crimen organizado— tomó la decisión de separar a El Rey Mago de su cargo.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez trató de minimizar el reporte del Departamento del Tesoro y salió a la defensa del jefe de policía, ampliamente conocido por sus relaciones oscuras: afirmó que sobre él sólo había el reporte de dicho departamento, pero no existía una investigación en su contra ni en Estados Unidos ni en México. A lo que no se refirió fue que El Rey Mago había reprobado los exámenes de confianza y, aun así, fue respetado en su encargo.

Había razones para ello: era uno de los enlaces entre el poder político y el criminal. Su función era clave en el trasiego de drogas, las ejecuciones e incluso, en las desapariciones forzadas ordenadas por el Cártel en la región que tenía a su cargo.

El informe señala que Flores Mendoza operó bajo las órdenes de Armando Gómez Núñez, conocido como *Delta 1*, quien encabezaba al grupo criminal en el Área Metropolitana de Guadalajara y estaba conectado con integrantes del primer círculo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, entre otros, el exsecretario de Seguridad Pública de Jalisco, Daniel Velasco Ramírez.

El documento destaca comunicaciones intervenidas por el CNI, en las que el policía le indicó a su jefe que en breve se reuniría con Hugo Luna Vázquez, jefe de Gabinete de Alfaro Ramírez, a quien había ofrecido la suma de 5 millones de pesos. En otra comunicación indicó que los escoltas del gobernador se habían comprometido a retirar unidades de la Fuerza Única Jalisco para facilitar las tareas del Cártel.

Los primeros indicios o sospechas de los vínculos de Alfaro Ramírez con el crimen organizado surgieron en marzo de 2011, cuando era presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, municipio clave para el CJNG. En ese tiempo, el entonces alcalde realizó un viaje a Cuba. Se ausentó 74 horas, rebasando lo que marca la ley. Para ello, rentó un avión Learjet 25 matrícula XB-MBW. El piloto de

la aeronave era un personaje llamado Francisco Jaime Madrid Sánchez, ligado por la DEA con Sergio Fierro Chávez —conocido en el mundo del hampa como *El Flaco*, quien a su vez fue piloto de Amado Carrillo Fuentes y de Joaquín Guzmán Loera, conforme establecen los antecedentes consultados tanto en los archivos de la extinta PGR como en informes de la DEA—.

Al viaje, realizado el 26 de marzo de 2011, acudieron además del entonces alcalde Alfaro Ramírez, los consejeros electorales Tomás Figueroa Padilla y Víctor Hugo Bernal. En el avión viajaban otros, en su mayoría funcionarios: Oscar Omar Bernal Hernández, director general administrativo y desde 2018, secretario particular del gobernador jalisciense; Willy Saavedra, director del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte y luego, hasta 2022, director general de Desarrollo de Turismo Regional, en Guadalajara; Salvador Zamora Zamora, director general de Medio Ambiente y Ecología, de 2010 a 2012, y alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, de 2018 a 2021; y el artista visual, Waldo Saavedra González.

En el plan de vuelo que en su momento dio a conocer Enrique Alfaro Ramírez, para explicar algunas razones de su veloz viaje a Cuba, omitió el nombre del piloto, Francisco Jaime Madrid Sánchez (con licencia 200110328), quien ante las autoridades mexicanas y estadounidenses está “boletinado” por ser piloto de narcotraficantes y por estar implicado en el trasiego de droga a bordo de aeronaves.

Madrid Sánchez fue detenido por primera vez en 1997 por autoridades estadounidenses. En aquel entonces un agente especial de la DEA, de apellido Courtney, advirtió a otro oficial, Armstrong —asignado al Departamento de Policía del Condado Urbano de Lexington-Fayette—, que fuentes confiables señalaban a Madrid Sánchez como el dueño de la empresa Aero Tonalá y como empleado de otra compañía desconocida que operaba jets ejecutivos para narcotraficantes.

Courtney, basado en los informes que disponía, le pidió a Armstrong revisar el avión cuando aterrizara en Lexington, conforme un documento desclasificado de la DEA. En el que se declara que los agentes reportaron la sospecha de la existencia de otra empresa de nombre Aerojal, similar a Aero Tonalá, dirigida, entonces, por Sergio Fierro Chávez.

Eso no es todo: Madrid Sánchez fue sentenciado en 2002 a diez años de prisión y 100 días de multa por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por uso de las instalaciones aéreas para actividades de narcotráfico. La causa penal 173/2002 establece los delitos de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, además de sentenciar a quien “aporte recursos de cualquier especie para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud”.

En este caso, se le atribuyó la realización de maniobras de aterrizaje en un helicóptero tipo Bell 212 Twin Huey, en una pista clandestina localizada en un paraje de Aquila, Michoacán. De esto dio cuenta la PGR en el boletín 1286/2004, emitido el 20 de diciembre de 2004.

Tras su captura, el piloto purgó su condena. De acuerdo con los antecedentes consultados, estuvo relacionado con el capo José Mendoza Soto, dueño del rancho Los Mendoza, ubicado en Aquila. El predio en realidad era una bodega donde se guardaba cocaína en grandes cantidades y luego se transportaba en taxis aéreos contratados en Jalisco para volar a Tijuana y La Paz, Baja California. Después se cruzaban a Estados Unidos.

En diciembre de 2002 ocurrió una masacre en el rancho. Presuntamente, un grupo contrario pretendió robar un cargamento de droga. Tanto el dueño del predio como sus empleados fueron ejecutados. Todos recibieron el llamado tiro de gracia, el signo de la mafia.

La omisión del nombre del piloto por parte de Alfaro Ramírez aumentó aún más las sospechas en su contra. En una de sus múltiples explicaciones, indicó que Antonio Fonseca Vaca —socio de la empresa Cgi Consulting S.C.— fue el responsable de conseguir el avión Learjet 25 para realizar el viaje a Cuba. Añadió que la aeronave fue solicitada por Fonseca Vaca a María Élica Gabriela Rodríguez Beltrán y no dio más detalles.

Lo cierto es que los aviones de la empresa Aero Tonalá terminaron asegurados por la extinta PGR porque, de acuerdo con las investigaciones originales, sirvieron para el trasiego de drogas y el traslado de capos del narcotráfico y políticos vinculados con este negocio.

Fue hasta 2018 que un tribunal federal ordenó a la PGR devolver tres aeronaves de esa compañía que, de acuerdo con las pesquisas, rentaba aviones para el servicio de traslado de capos y sicarios. En ese año, los aviones devueltos fueron un Piper Seneca matrícula XA-TJH, un Learjet XA-TII y un Cessna 206 XB-FRC.

Dichas aeronaves estaban aseguradas desde 1998 debido a que autoridades de México y Estados Unidos sospechaban, con evidencias, que el verdadero dueño de la empresa aérea era El Flaco, y su posible prestanombres era Madrid Sánchez.

“Te parto tu madre”

Enrique Alfaro Ramírez es de mecha corta. Se enfurece cuando los periodistas lo cuestionan. En diciembre de 2021 estalló contra mi trabajo y persona, tras la publicación de un par de artículos en el portal *SinEmbargo MX* en los que se exhiben sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, negocios al amparo del poder y, sobre todo, la venta de fallos judiciales al mejor postor. El esquema es descrito ampliamente en este volumen.

Fue el 27 de diciembre de 2021 cuando, en una conferencia de prensa, un periodista le preguntó al gobernador sobre las publicaciones que había realizado. Respondió que era una calumnia y que ya había presentado las demandas correspondientes, con solicitud de medidas cautelares, para hacer frente a las publicaciones que, conforme él, los difamaban. En la misma conferencia afirmó que no iba a permitir que se le calumniara ni que se le relacionara con la criminalidad, ya que en muchas ocasiones, otros periodistas y medios, habían intentado lo mismo.

Sin embargo, las demandas nunca se presentaron. Los documentos *hackeados* a la Secretaría de la Defensa Nacional, por parte del colectivo Guacamaya Leaks, desmienten al gobernador de Jalisco: estos exhiben sus vínculos con el crimen organizado. En particular, se relacionó a Hugo Manuel Luna Vázquez, jefe de su gabinete de gobierno, con personajes de la delincuencia organizada. Aunque tiempo atrás ya había sido ligado públicamente con presuntas redes mafiosas.

Al respecto hay una larga historia que a continuación se desmenuza. La prensa crítica de Jalisco no es bien tratada por el gobernador Alfaro Ramírez. No le gusta ser cuestionado sobre sus presuntos negocios ilegales y menos, respecto a sus posibles relaciones con el crimen organizado, tema que lo persigue como si fuera su propia sombra, un estigma que no se olvida. Esto ha ocasionado fuertes roces con periodistas y otros comunicadores, a quienes incluso ha amenazado, confrontado públicamente con bravuconadas o demandado después de realizar publicaciones referentes a sus negocios y presuntos nexos criminales. Son los casos de Carmen Aristegui y de Anabel Hernández, quienes publicaron una investigación basada en documentos de instancias estadounidenses. En la pesquisa fundada en fuentes, se le relaciona con la protección a miembros del crimen. Aquello desató un escándalo, ya que era candidato al gobierno de Jalisco.

El gremio periodístico vallartense se unió para dar a conocer un Manifiesto en defensa de la libertad de expresión. A la vez, anunció la conformación de una asociación de profesionales de la comunicación adherida como Capítulo Puerto Vallarta al Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

Han sido varias las razones que llevaron a los periodistas a generar ese Manifiesto, publicado el 22 de enero de 2023. Resaltan su indignación y preocupación por la falta de condiciones y garantías para el ejercicio pleno de la labor periodística, recurrentemente coartada y amedrentada desde el ámbito público, pero también desde el privado. Destacan la agresión sufrida por la periodista Susana Mendoza Carreño, el 1º de julio de 2022, tras ser acuchillada con el objetivo de quitarle la vida. Aunque el gobernador se adelantó a decir, sin bases y minimizando el caso, que se trataba de un robo.

En el Manifiesto los periodistas expresan cómo han aumentado los intentos de censura y amenazas a través de sus directivos de prensa o de dueños de los medios o incluso, directamente cuando se ha tratado del ejercicio independiente de su labor. Destacan que estas situaciones lo mismo han surgido desde el ámbito gubernamental como desde el privado, transgrediendo los límites de poder por parte de figuras políticas y empresariales que

menosprecian o ponderan al periodismo conforme a sus intereses.

Los periodistas vallartenses apelaron al derecho que poseen para realizar su trabajo con libertad y sin opacar la verdad; sin tergiversaciones o censuras. En el Manifiesto exigieron respeto y garantías para el ejercicio de su trabajo, reiteraron su compromiso de seguir informando a la sociedad con apego a la verdad, sin menoscabo de su seguridad por la importancia que tiene para todos una prensa libre.

Porque, además del crimen organizado, la corrupción de los políticos en turno y las mafias coludidas tanto con el poder como con el delito, en Jalisco destaca la intolerancia de Enrique Alfaro Ramírez hacia la prensa.

En este contexto destaca el caso público del columnista Jaime Barrera Ramírez de *Milenio* Jalisco, de quien exigió su despido porque publicó notas sobre unas obras constructivas que hizo el entonces alcalde en su casa, utilizando recursos públicos de la infraestructura municipal. También fue escandalosa la reacción de Alfaro Ramírez a las críticas al no solicitar la licencia correspondiente a su cargo cuando decidió ser candidato a la gubernatura.

Hay muchos pasajes públicos que lo retratan muy bien. Uno de ellos es una plática de 2009 vía Radio Nextel, entre el entonces candidato a la alcaldía de Tlajomulco y el periodista Gerardo Romero, del espacio noticioso *Así Ocurrió*.

Tras un inicio de conversación rutinaria para romper el hielo — incluso cordial— Alfaro estalló de repente y recordó una información publicada días atrás en ese espacio:

“Acepto todas las críticas... pero fíjate lo que te voy a decir: Si vuelves a inventar una pendejada de mí te voy a romper tu madre, así de claro, [...] y es la última vez que te lo digo y ahí le dejamos”.

Segundos antes, Romero hizo hincapié al político jalisciense sobre algo que el periódico consideraba importante:

“Sí, bueno, aquí también una cosa... Tú estás hablando de la crítica. Y de hecho, yo lo que menciono es lo que ha sido tu paso cuando fue tu campaña como candidato [...] por el PRI, [...] es a lo que yo hago mención. [...] Yo creo válido que también tengas tú el derecho de réplica”.

Pese a que el reportero se puso “a las órdenes” desde el inicio de la llamada para la información político-electoral que el candidato deseaba difundir, este inició y terminó la llamada de forma hostil. Y le espetó:

“Lo primero que te agradecería sería que ya no inventaran tantas chingaderas de mí. [...] Creo que la crítica es correcta, y se vale, pero denostar e inventar cosas creo que no es correcto. [...] Entonces, yo, por supuesto, con todo el ánimo de tener una relación correcta con ustedes, no más pido un trato en los mismos términos [...] que no se esté denostando sin elementos...”.

Se cuenta en el gremio periodístico de Jalisco, lo que también desnuda a Alfaro Ramírez y su animadversión con la prensa y con la oposición, que el consultor político y exmilitante de Movimiento Ciudadano, Koskuauhtémok Días decidió, en octubre de 2012, presentar su renuncia como miembro de Movimiento Ciudadano al líder nacional, Dante Delgado. La razón: Días estaba inconforme con la designación de Alfaro Ramírez como candidato a gobernador y con el “dedazo” de Merilyn Gómez Pozos como diputada federal plurinominal —aunque en su currículum se declara que estudió derecho y lo ha ejercido en diversas funciones, pero se rumora que su oficio en realidad era el de una edecán—.

El propio Días contó los pormenores del exabrupto en redes sociales y en su blog *El Respetable*. El 5 de octubre de 2012, ya objeto de un plan de desplazamiento de sus funciones dentro de Movimiento Ciudadano, por oponerse a la línea de Alfaro Ramírez principalmente, asistió a un evento del partido en la Mansión Clover Lawn, en avenida La Paz, en la colonia Americana. Era el acto simbólico en el que el poder de Movimiento Ciudadano en Guadalajara —y en el estado— se le entregaba a Alfaro Ramírez y a sus cercanos. Contó:

“Dante se negó a aceptar mi renuncia y me ofreció dialogar, pero Rafael Valenzuela [quien luego traicionó a Alfaro Ramírez y se refugió en el gobierno de Samuel García Sepúlveda, en Nuevo León] había escuchado todo y salió corriendo a buscar a Alfaro. [...] seguía yo quejándome con Dante cuando éste fue llamado a otro lugar y me dejó platicando con el entonces diputado federal, José Juan Espinoza Torres. Minutos después, en la estancia entraron de

improvisó Rafael Valenzuela, Enrique Alfaro y dos tipejos que decían ser los dueños de la casa y que antes me habían pedido que me retirase. Me encerraron en ese espacio y Alfaro comenzó a amenazarme tal como en el video de YouTube [en referencia al hecho ocurrido con Gerardo Romero en 2009]. ‘Si vuelves a venir a un evento mío te voy a partir tu madre. Y si vuelves a decir algo de Marilyn te vas a morir’, amenazó el ahora alcalde de Guadalajara. Luego me preguntó ‘¿Te quedó claro?’. A lo que respondí ‘Sí, me quedó grabado’.

Enseguida, Rafael Valenzuela, que estaba a mi lado, comenzó a estrangularme al pensar que había grabado la escena con mi celular. El diputado Espinoza Torres intervino para liberarme y en el forcejeo, los dos rufianes que decían ser dueños de la casa me quitaron mi celular y una memoria USB que tenía. Cuando logré salir de la casa el diputado volvió para buscar mi celular y me lo devolvió, pero sin chip ni memoria.

Para entonces Valenzuela ya había reunido una horda de porros e iba en mi busca, pero varios de los viejos militantes del partido me vieron, entendieron la situación y me acompañaron hasta mi vehículo. Levanté parte de lesiones pero eran menores y decidí no presentar denuncia pues el diputado se negó a fungir como testigo a mi favor y, dado que Emilio González todavía estaba en el poder, consideré ocioso hacer querrela careciendo de evidencia”.

Este testimonio de Koskuauhtémok Días evidenció parte de la personalidad psicótica y enferma de poder de Enrique Alfaro Ramírez, también su modo de amenazar y agredir. De igual forma denotó su intolerancia hacia activistas, opositores y periodistas. Peor aún, exhibió sus contradicciones y mediocridad, con lo que se ha ganado el rechazo social en Jalisco.

Ataque misterioso

Consciente de su circunstancia, el propio Alfaro suele comentar en tertulias con sus subordinados de confianza, a quienes incluso les lanza veladas advertencias, que la política y el gobierno de Jalisco son “como la rueda de la fortuna”: hoy se está arriba y —sin

pretenderlo— mañana se puede estar abajo.

“Yo ya llegué, ya es su pedo lo que suceda [...]. No le temo a la persecución. Por mis huevos llegué y por mis huevos voy a salir adelante”. Espeta con frecuencia ese Alfaro lejano de ser una persona con vocación por el bien social, porque delata la podredumbre de un personaje que hace de la política todo lo contrario: se convierte en un enemigo de la misma. Suele advertir en su discurso que, a futuro, cada subordinado habrá de defenderse como pueda.

Pero más allá de esos choques, en ese estado pasan hechos que nunca se esclarecen o que desde el propio gobierno se han intentado tergiversar. Es el caso del ataque sufrido, en Puerto Vallarta, por la periodista Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara y corresponsal del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, una de las figuras más críticas del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.

Fue atacada por un sujeto que empuñaba un arma blanca. Minutos antes había cerrado la transmisión remota del programa radial *Todas las Voces Cuentan* en las instalaciones del ejido Puerto Vallarta. Estaba acompañada por el señor Esteban García Aréchiga, el nuevo presidente del comisariado de dicho sitio. Había tratado el tema del medio ambiente, la corrupción de las empresas que pretenden apoderarse de grandes extensiones de tierras protegidas y la ligazón de intereses y funcionarios públicos implicados en ese jugoso negocio.

Al término de la emisión, la periodista abandonó la estación junto con uno de sus auxiliares. Abordó su camioneta y no había avanzado ni diez metros cuando otro vehículo le golpeó la defensa trasera. Se bajó a ver lo que ocurría y en ese momento el sujeto armado, de 1.80 metros de estatura, se le fue encima y la apuñaló en el estómago, dañándole el vaso. Luego, en otra embestida, le cortó el cuello y la herida fue tan profunda que alcanzó la yugular. También le hirió el brazo cuando trató de cubrirse para evitar más cuchilladas.

La hemorragia era abundante e imparable. Susana alcanzó a tomar una de sus prendas y, como pudo, se apretó el estómago y el cuello para detener el fuerte sangrado. Algunos minutos después

perdió el conocimiento y fue trasladada a un hospital donde de inmediato la intervinieron quirúrgicamente.

Pasó casi dos meses internada. Hasta octubre de 2022 su porcentaje de recuperación era del 80 %. Gracias a la rápida atención y a la habilidad de los médicos, la comunicadora salvó su vida.

En medio del escándalo por el atentado y pese a que ni siquiera se había integrado una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco, el gobernador se adelantó a decir, a boca llena, que el ataque había sido consecuencia de un intento de robo.

Nada más falso: a la periodista no le robaron ninguna de sus pertenencias. Los agresores se llevaron su camioneta, pero la abandonaron unas cuadras más adelante del lugar de los hechos. Su reloj Bulova no se lo quitaron, aunque está valuado en varios miles de pesos. Era claro que el propósito no era robarle.

Lo que realmente ocurrió fue un ataque directo para asesinarla, aunque todavía se desconocen las causas y la existencia o no de un autor intelectual. La Fiscalía estatal no ha resuelto quién o quiénes fueron los atacantes, por ello Susana exigió al gobierno federal que su caso fuera atraído por la FGR, donde hay decenas de expedientes de periodistas que han sido amenazados, atacados o asesinados. Hasta septiembre de 2023, no existían detenidos relacionados con este caso ni tampoco una claridad sobre el móvil del ataque.

Susana Mendoza Carreño conoció a Enrique Alfaro Ramírez cuando era diputado del PRD. La periodista había ocupado durante tres años la dirección de Radio Fórmula Jalisco. En ese tiempo Alfaro había protestado como presidente municipal de Tlajomulco, donde empezó a construir su historia de escándalos. En ese lapso fue cuando comenzaron a conocerse sus presuntos vínculos con personajes del crimen organizado. Tlajomulco, de acuerdo con informes de la SEDENA, es un bastión del CJNG.

En 2012 buscó ser gobernador del estado, pero no pudo concretar su proyecto. El entonces presidente, Enrique Peña Nieto, decidió que el candidato fuera Aristóteles Sandoval Díaz, político priista también vinculado al crimen organizado. Alfaro perdió la elección en 2012 y se refugió en la presidencia municipal de Guadalajara, más

tarde, su trampolín político y plataforma de negocios.

En ese año la situación de inseguridad en Puerto Vallarta ya era muy grave. El territorio estaba tomado por la delincuencia organizada, cuyos miembros mandaban hasta en la presidencia municipal. Diversos cárteles ligados a políticos se afincaron en ese centro turístico, donde operaron con toda impunidad, como hasta ahora ocurre.

El municipio “era una inmoralidad”, cuentan quienes conocieron esa etapa negra. Había mucho saqueo de dinero público y negocios al amparo del poder. La línea que dividía a la política y al crimen se borró totalmente. Esa descomposición se agudizó en los últimos 25 años y aún no tiene solución. Por el contrario, se agudiza tal y como lo muestran los múltiples hechos de sangre que han ocurrido en ese puerto turístico.

En ese tiempo Alfaro Ramírez contactó a Mendoza Carreño, quien trabajaba en las estaciones La Explosiva 590 y Radio Fórmula. El llamado ocurrió a propósito de un evento que ella realizó: una exposición regional con productores del estado.

Se le ocurrió esa idea después de visitar algunos municipios, donde vio que la gente vendía sus productos regionales: rompopo, dulces y salsas en botellas de cerveza Corona con corchos. Entonces decidió invitar a los productores a organizarse y así montaron la primera exposición en una plaza. Fue un éxito. Tanto, que el evento se repitió durante ocho años. Lamentablemente, se dejó de organizar por culpa del alcalde Javier Bravo Carbajal, un político ampliamente conocido por sus actos de corrupción y sus relaciones con grupos de braceros.

Pero el éxito logrado con los productores y las exposiciones regionales provocó que algunos políticos se fijaran en ella y la invitaran a participar en la política. Uno de ellos fue Enrique Alfaro, quien le pidió que lo apoyara. Según se pudo saber, ella le respondió tajantemente que no disponía de tiempo.

En ese periodo pretendía fundar un partido político, pero no pudo. Un primer paso fue crear Alianza Ciudadana, sin embargo, no le dio tiempo de construir el partido y, después, apareció públicamente con el sello de Movimiento Ciudadano. También le consultó a la periodista sobre quién podía ser candidato a la presidencia

municipal de Puerto Vallarta. Ella le sugirió que Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como *El Mochilas*. Los presentó y trabaron una relación de amistad que hasta la fecha prevalece. Hasta ese momento, Susana tenía claro su desinterés por la política. Su destino era el periodismo.

Pero las circunstancias cambiaron. Poco antes del proceso electoral le comunicaron desde la radio que tenían serios problemas económicos. El despido parecía inminente. Ante el panorama, decidió participar en política y aceptó ser regidora municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Ahí vivió una experiencia que le puso en perspectiva el perfil de los personajes que rodeaban el entorno inmediato de Enrique Alfaro. La mayoría eran de la peor ralea: corruptos, cínicos, mentirosos y, no pocos, tenían ligas con grupos mafiosos.

Lo cierto es que el PAN había sufrido una debacle histórica en Jalisco tras el triunfo de Aristóteles Sandoval. Pero los panistas, incluso los más recalcitrantes, hallaron refugio en Puerto Vallarta con el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez, el aliado de Alfaro.

Llamó la atención que en el grupo cercano a este aparecía un personaje tan polémico como oscuro: el empresario José Susumo Azano Matsura. Conocido entre sus cercanos como *Susu*, el hijo del hombre de negocios Susumo Azano Moritani, líder de Grupo Azano, de ascendencia japonesa y que creció en Jalisco. Sus antecedentes sostienen que fue detenido en Estados Unidos en 2014, tras ser acusado formalmente de canalizar ilegalmente dinero para financiar campañas políticas en San Diego, California.

El juez magistrado Mitchell D. Dembin, entonces a cargo de la causa, fijó una fianza de 5 millones de dólares para que Azano pudiera llevar su juicio en prisión domiciliaria. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) lo investigaba, ya que el empresario, afincado en Jalisco, había hecho donaciones millonarias entre 2012 y 2013 en favor de campañas locales y federales. A cambio se pedía el nombramiento de funcionarios aliados a sus intereses. Era uno de sus negocios corruptos. El escándalo se desató porque las leyes de Estados Unidos, hasta ahora, prohíben a los candidatos recibir dinero de extranjeros.

La historia de Susu también está ligada a otros negocios sospechosos. Por ejemplo, estaba relacionado con Eliseo Martínez Elizondo, abogado defensor de negociantes vinculados a los casinos. Antes de ser ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León, Martínez Elizondo defendió a Atracciones y Emociones Vallarta, empresa dedicada a las apuestas.

Al empresario también se le vinculó con Juan Iván Peña Nader, señalado como líder de una mafia casinera ligada a la SEGOB, cuyos altos funcionarios traficaron en el sexenio de Felipe Calderón con permisos para abrir casinos en el país (estos establecimientos han sido relacionados al lavado de dinero).

Azano Matsura inició su carrera como contratista en los gobiernos panistas de Jalisco, entre ellos, el de Francisco Ramírez Acuña, quien fue secretario de Gobernación durante un lapso del gobierno calderonista.

Meses antes de que concluyera dicho gobierno, en 2012, *Susu* Azano Matsura también se vio envuelto en otro escándalo: la SEDENA gastó 5,000 millones de pesos en equipo especial para interceptación de comunicaciones telefónicas y en dispositivos de cómputo. Esta compra, que se realizó sin licitación pública nacional de por medio, se concretó con la empresa de la cual se dice que era propietario, Security Tracking Devices, S.A. de C.V., entre el 25 de marzo de 2011 y el 29 de marzo de 2012, en la Ciudad de México y en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El amplio portafolio tecnológico en venta era para la intervención de llamadas telefónicas privadas, es decir, para espionaje.

Como se dijo, Azano Matsura estaba ligado con el entonces alcalde de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, Ramón Guerrero Martínez, socio de Alfaro Ramírez. Lo que llamó la atención en ese tiempo es que varios políticos panistas, caídos en desgracia, se refugiaron en el Ayuntamiento, uno de los municipios más prósperos de Jalisco.

De esta manera, en Puerto Vallarta se instauró una especie de cogobierno entre Movimiento Ciudadano y el PAN. El nuevo alcalde tuvo que aceptar como colaboradores a un séquito de políticos azules que arribaron de la mano de Abraham González Uyeda, exdiputado panista, quien enfrentó acusaciones y hasta una orden

de aprehensión por otorgar permisos irregulares para la operación de casinos.

Acomodado en el poder municipal, González Uyeda comenzó a realizar reuniones y a girar órdenes en el Ayuntamiento como si fuera el alcalde. Muchos regidores se incomodaron y hasta se presentaron varios “cortocircuitos” que ni el mismo Alfaro Ramírez—dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano en el territorio—pudo resolver.

Según se pudo saber, Susana Mendoza Carreño no entendía qué hacían los panistas en un Ayuntamiento gobernado por Movimiento Ciudadano. Una fuente consultada contó que la periodista llamó a Alfaro para preguntarle, enfática, qué ocurría en Puerto Vallarta. No obtuvo una respuesta satisfactoria. Este fue evasivo y ambiguo, por ello la periodista decidió deslindarse de Movimiento Ciudadano y se acogió a las filas del PRD.

Fue una manera de protegerse personal y políticamente: ya había recibido amenazas por un presunto integrante de la delincuencia organizada, quien le mandó a decir que la iba a colgar. Esto hizo crecer sus malos presagios, ya que existía el antecedente criminal de la desaparición del regidor Humberto Gómez Arévalo, en 2015, quien presuntamente fue víctima de la delincuencia organizada. El regidor independiente también se oponía a que los fondos federales terminaran en manos de presuntos lavadores de dinero.

En el Ayuntamiento de Puerto Vallarta estaban enquistadas las redes de la delincuencia, en particular del CJNG, que alcanzó auge en el gobierno de Alfaro Ramírez. Todo esto salió a flote y se confirmó luego de que la Federación envió un presupuesto de 6 millones 300,000 pesos para impulsar proyectos culturales para el municipio.

Para asignar dichos fondos se buscaba que fueran equitativos y que realmente se utilizaran en proyectos importantes. Por ello, se realizó una sesión de cabildo para discutir el tema. En la reunión, algunos ediles pidieron que todos los recursos se asignaran para apoyar a dos empresas, una era Espectáculo Fandango y la otra, Teatro Vallarta, presuntamente ligadas con el CJNG.

Después de una acalorada discusión entre los regidores, Susana Mendoza Carreño decidió no votar a favor de que los fondos

federales se les asignaran a dos empresas de las que desconocía qué actividades realizaban. Eran como dos compañías fantasmas. Sin embargo, algunos días después recibió una llamada telefónica que la sorprendió. Era Hugo Manuel Luna Vázquez, actual jefe de Gabinete del gobernador y uno de sus hombres más cercanos. Luna Vázquez está relacionado con el narcotráfico en los informes militares *hackeados* por el colectivo Guacamaya Leaks. Los mismos establecen que funge como vínculo entre algunos miembros del CJNG y su jefe, el gobernador de Jalisco.

En la llamada telefónica, Luna Vázquez presionó a Mendoza Carreño para que aprobara la asignación de los fondos federales en favor de las compañías mencionadas. “Es lo que me pide el jefe”, le dijo, refiriéndose presuntamente a Alfaro Ramírez, aunque también se infiere que “el jefe” pueda ser otro mafioso.

En el fondo de las presiones se hallaba una fractura más compleja, la que trajo como consecuencia que los grupos criminales preponderantes en el estado y en la ciudad cabecera, procedieran a quemar la empresa La Covacha, Gabinete Audiovisual, en marzo de 2021.

Esta es un búnker donde se alojan dos empresas de marketing. Las mismas eran manejadas por Rafael Valenzuela, personaje ligado a Alfaro Ramírez. A este negocio también está vinculado Hugo Luna, además, responsable de las operaciones financieras personales del gobernador, así como de los permisos inmobiliarios para el desarrollo de edificios y todo tipo de construcciones que forman parte de un negocio descomunal al amparo del poder en Jalisco. Otro aliado del clan es el exdiputado Iván Argüelles Sánchez.

Las fuentes consultadas sostienen que el ataque a esas instalaciones fue una venganza del crimen organizado. Ocurrió en marzo de 2021 cuando cuatro hombres armados ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la empresa proveedora de los servicios de comunicación del gobierno de Jalisco y de todos los municipios ligados a Movimiento Ciudadano.

El ataque armado ocurrió en la sede de la empresa, en Circunvalación Norte, cerca del cruce con Santa Ana, en la colonia Las Fuentes, en Zapopan. Los agresores aprovecharon que la

cochera estaba abierta e ingresaron al lugar. El guardia de seguridad fue sometido a golpes. Los hombres armados llegaron hasta el recibidor, exigieron a los empleados que se arrojaron al piso e hicieron dos disparos al aire. Luego rafaguearon la fachada del inmueble.

Los socios que manejan la empresa, se asegura, están en el gobierno de Jalisco. Han recibido de manera directa más de 300 millones de pesos desde 2020 por el manejo de redes sociales y producción de contenidos publicitarios. El ataque fue producto de una ruptura entre criminales y políticos en Tonalá. Los criminales sabían que detrás de La Covacha estaban sus propios enemigos, que detentan el poder político en Jalisco.

La historia de Susana Mendoza Carreño y el presupuesto cultural en Puerto Vallarta tuvo un cierre esperado. Pues ella seguía oponiéndose a la entrega de los recursos en favor de las empresas Espectáculo Fandango y Teatro Vallarta. Así comenzaron las amenazas de muerte. En medio de ese clima de tensión desapareció el regidor Humberto Gómez Arévalo, de quien no se supo nada más. Datos consultados señalan que sufrió un “levantón”.

Con base en tres fuentes informativas y debido a la desaparición del regidor Gómez Arévalo, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Jalisco arribaron a Puerto Vallarta con una declaración ya preparada para que Mendoza Carreño la firmara. Ella se negó.

El presupuesto cultural de Puerto Vallarta finalmente quedó en manos de Fandango y Teatro Vallarta. Así se cumplieron las órdenes de Hugo Luna y así se hizo, aunque sin el voto de Susana.

Del Gabinete al Poder Judicial

“Es la mente más perversa después de Enrique Alfaro”. Así describen periodistas y políticos locales al jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Hugo Manuel Luna Vázquez. Expresidente de Movimiento Ciudadano, tiene el control de varias Secretarías de Despacho del gobierno jalisciense. Sobre todo, el control del Poder Judicial del estado, donde —aseguran sus críticos— se hacen los

negocios millonarios mediante “pactos” con la justicia para beneficiar a los “amigos” inmobiliarios.

Luna y Alfaro trabaron relación en el salón de clases de la preparatoria. Desde hace varios años han estado juntos en tareas de gobierno desde que el segundo despachara como alcalde de Tlajomulco. Pero siempre ha estado detrás del hoy gobernador: como asesor, protector, administrador de las finanzas de su amigo, gestor y financiero en millonarios negocios inmobiliarios.

Luna Vázquez es hijo de padres divorciados. Tiene dos hermanas. Su madre, Guadalupe Vázquez, es maestra y con fama de ser brillante. Es también considerado un hombre hábil, pero arrastra la mala fama de ser corrupto. Aunque no se declara en su currículum oficial, cercanos a él confirman que estudió medicina y se especializó en microbiología en Cuba y que antes estuvo becado en Londres, donde vivió una pesadilla personal tras una ruptura sentimental, conocida entre sus allegados, que casi le cuesta la vida. Quienes lo conocen afirman que es un hombre rencoroso y vengativo; sabe tejer fino en la política y en los negocios, pues suele hilar relaciones estrechísimas con muchos de sus aliados.

Sus presuntos vínculos con personajes de la criminalidad se conocen desde hace varios años. Cuando fue presidente de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, le dejó el cargo a Luis Guillermo Medrano, originario de Ahualulco de Mercado, quien fue alcalde y siempre se le ha ligado con presuntos criminales.

Ambos apoyaron la candidatura de Juan Antonio González para presidente municipal de Tonalá —uno de los refugios de Nemesio Oseguera, *El Mencho*— y fueron los jefes del narcotráfico quienes decidieron la elección. Luego los puestos en el Ayuntamiento se repartieron entre aliados: la Tesorería municipal se la dieron a Iván Antonio Peña Rocha; la Comisaría de Seguridad Pública se la entregaron a Miguel Magaña Orozco, implicado primero, y exonerado después, por el crimen el 24 de abril de 2007 del director de Mejoramiento Urbano de Tonalá, Carlos Romo Guízar.

El municipio de Tonalá es el centro de operaciones políticas y criminales más importante del estado. Se asegura que ahí se deciden casi todos los planes de negocios, tráfico de drogas, lavado de dinero y contubernios con políticos. Fuentes consultadas

explicaron que Hugo Luna Vázquez incumplió acuerdos con autoridades oficiales y no oficiales y sobrevino la ruptura.

“Los funcionarios de Enrique Alfaro son muy corruptos. [...] Hugo Luna es la mente siniestra para la operación de recursos; porque a Alfaro [presuntamente] no le ha llamado la atención el dinero. Lo suyo es el poder y la necesidad de reconocimiento”, exponen fuentes que lo conocen bien.

Con aspiraciones a gobernar Jalisco, Hugo es incluyente en los negocios sucios. Y también ha reclutado a su esposa Paulina Cervantes Flores, hasta 2024 directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, quien tiene contratos millonarios en el aparato estatal a través de empresas dedicadas a la mercadotecnia y la consultoría política.

Ningún secretario ni coordinador de algún área del Gobierno de Jalisco, puede promocionarse en la prensa o medio alguno ni resaltar su trabajo con organizaciones civiles, o aspirar a alguna candidatura a diputación federal o local, sin la autorización primero de Enrique Alfaro y después de Hugo Luna:

—El dedo chiquito [*sic*] de Alfaro, Hugo Luna, administra el asunto inmobiliario. Ahí se ha “inflado” de billete; pero también controla el Registro Público de la Propiedad Privada, tiene gente ahí.

—¿De qué le sirve controlar una oficina menor?

—Eso pareciera, pero desde ahí, se sirven para adueñarse de tierras que no tienen dueño. Para adueñarte y expropiar viejas casonas del centro —su gran problema es decidir si la rehabilitan o es mejor demoler y construir una torre—, o para agandallarse [*sic*] casas intestadas.

Asegura extraoficialmente un empresario que prefirió el anonimato y me citó en la zona de los bares en el Sector Chapultepec. Lo “delicado” de la plática se perdía entre los ruidos estridentes de música norteña, el reguetón, los choques de copas y las risas femeninas.

En Jalisco, salvo honrosas excepciones de diputados y algunos políticos, hay un miedo a hablar por temor a represalias en un estado donde la aparente anarquía es una de sus principales leyes.

Otro de los “ingresos alternativos” del jefe de Gabinete Hugo Luna Vázquez son los sobrepagos de las obras. Los empleados

estatales no tienen duda. Sobre todo, en relación con el ambicioso programa de carreteras del gobernador.

Servidores públicos jaliscienses insisten: “El programa agresivo de obras sirve para pagarle favores a los constructores, sobre todo a los de la CMIC [Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción]; pero también para solicitar el 25 % de los contratos [...] y este, lo piden por adelantado. Total, aquí con la adjudicación directa de contratos todos ganan”.

La muestra clara es la Línea 4 del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, la cual habrá de concluirse tentativamente en el primer trimestre de 2024 y en la cual Hugo Luna y los cercanos a Alfaro Ramírez “concesionan” y controlan todos los contratos a su círculo de amigos. El Congreso del Estado de Jalisco sólo obedece. Pues el expanista José María Martínez —coordinador legislativo de la principal fuerza opositora, MORENA— ya fue controlado política y económicamente.

“El propio Hugo Luna lo trae cortito a Chema [*sic*] Martínez. Cuando le ha querido respingar, le saca los trapitos al sol [...] del coordinador y lo somete. Hay ahí una relación franca de interés y conveniencia. Por eso MORENA le aprueba a Alfaro lo que le tiene que aprobar, vía negociación de Luna”.

Como opositor, cuando Aristóteles Sandoval Díaz era gobernador, el entonces presidente de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna Vázquez, tenía una columna política en donde, irónicamente, criticaba todo lo que hoy realiza. Hay un texto: “La corrupción es hija de la ineficiencia” que no tiene desperdicio en sus líneas, pues raya en el cinismo:

“Confesémoslo, todos conocemos de primera mano un caso de corrupción, pero lo peor no es eso, sino que los mexicanos demos por sentado que es una característica natural del sistema con la cual tendremos que lidiar toda la vida. En el fondo, la corrupción (un problema que existe incluso en los países de primer mundo, aunque en menor grado) es producto de un largo historial de administraciones e instituciones ineficientes, opacas y no una cuestión cultural. Afortunadamente, los ciudadanos tenemos cada vez más instrumentos para vigilar el poder y exigir gobiernos honestos, transparentes y que rindan cuentas”, escribía en junio de

2014. En 2023 se debe estar carcajeando del anterior Hugo Luna.

El actual jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco tiene como operadores en el Poder Judicial a Rafael Martínez Ramírez, excuñado de Alfaro Ramírez, hermano de Lorena Martínez, la primera esposa de este hasta 2017; y a Oscar Omar Bernal Hernández, *El Morro*, secretario particular del gobernador y operador judicial.

Martínez y El Morro son los encargados de la “ruleta” de la corrupción en los juzgados de Jalisco, para favorecer a los empresarios inmobiliarios, quienes entienden cómo se “aceita” la justicia mercantil en la entidad.

“Rafael Martínez coordina, acomoda y tuerce los sorteos. Es decir, de ver qué expediente, de tal o cual asunto le va a tocar a determinado juez. El cual ya irá con una línea jurisdiccional hacia dónde inclinar la balanza; los expedientes que no llegan apadrinados por el excuñado o por ‘El Morro’ son acomodados al azar”. Cuenta un directivo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien no tiene duda en asegurar que pesa más la palabra de Rafa Martínez o la de El Morro que la de un magistrado:

“En estos sorteos siempre se busca que las sentencias sean favorables a los fines y afines de los negocios que la clase gubernamental tiene”.

El Morro y el excuñado tienen dentro del organigrama judicial a su “titiritero”, el consejero de la Judicatura Iván Novia Cruz, quien preside la Comisión de Administración y desde ahí opera todos los encargos gubernamentales de Alfaro Ramírez y compañía.

La aceitada corrupción de Novia Cruz es conocida, incluso en marzo de 2021 el Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua acudió al Congreso de Jalisco a promover un juicio político en contra del funcionario judicial. Mostraron pruebas de que el consejero favoreció con una resolución a la familia De Anda, quien con un proyecto inmobiliario en Colomos III, pretende quedarse con un área natural protegida que abastece el 30 % del agua del Área Metropolitana de Guadalajara.

En estos enjuagues empresariales de corte judicial, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, es un abogado de ornato

dentro del inmueble judicial. A sabiendas que los juzgados de la entidad se mueven bajo la premisa de “las cuotas y cuates” del gobernador.

En la avenida Miguel Hidalgo y Costilla 190, en el Palacio de Justicia de Jalisco, abogados mercantiles y penales ya saben que la adscripción de sus casos a determinado juez tiene un costo en voluminosos billetes con cifras de miles. Si no hay numerario de por medio, los litigantes ya saben que su “asunto” se irá a la fila.

Al respecto, un juez civil del Poder Judicial de Jalisco me revela:

—Hay una camada de empresarios que tenían fondos de inversión, y que, en un juicio normal, lo natural es que te embargan tus propiedades. Si tú como abogado quieres resolver, lo ves con Rafa [el excuñado de Alfaro] o con El Morro, y ellos interceden con el gobernador.

—¿Cómo se da esa negociación?

—Pues como antaño. Eso no cambia. Por debajo del escritorio [...]. Le notifican a [Iván] Novia que tal asunto trae línea, y ya él [...] dicta la línea jurisdiccional a seguir a determinado juez. Son negocios de millones de pesos.

—¿El moche es del diezmo?

—No, normalmente El Morro y Martínez cobran el 8 %. Pero si el asunto es de millones, ¡cálculale cuánto se llevan! La tajada a los jueces que se prestan al contubernio es aparte.

Mientras, el juez prende un cigarro y espejea con la mirada a quienes se encuentran en la cafetería del centro de Guadalajara. Es el temor a ser escuchado, en un estado donde la rebelión contra el autoritarismo se castiga severamente.

En el gabinete de Alfaro Ramírez, con el aval de Luna Vázquez, también hay otros funcionarios que hacen negocios al amparo del poder. Como el director de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor. Este aprovechó el lanzamiento del programa Mi Transporte para sacar beneficio económico de las nuevas licitaciones de transporte y el cobro de licencias a las rutas piratas que pedían regularización.

Incluso, en rueda de prensa, el expresidente de MORENA en Jalisco, Hugo Rodríguez, denunció un esquema bien aceitado de corrupción con este programa:

“Es un plan para regularizar todo el transporte ilegal, que no tenía permiso, concesiones, ni subrogaciones. Mi Transporte se está utilizando para obtener beneficios económicos y políticos para seguir haciendo negocios a costa de bienes del estado con un objetivo claro: recaudar más, sin transparentar”.

Ante los índices de impopularidad de Enrique Alfaro y su caída en las encuestas de aceptación, el gobierno de Jalisco tuvo que tomar una decisión populista el 2 de septiembre de 2022: inyectar del erario 500 millones de pesos a los camioneros locales, en aras de evitar que estos subieran su tarifa actual de 9.50 pesos el pasaje.

Esta inyección financiera fue presumida por el propio gobernador en sus redes sociales —su medio de comunicación favorito, pues suele soltar monólogos en donde mientras habla nadie lo increpa ni lo desmiente—. En ellas aseguró que ese subsidio se logró gracias al “apretón” de austeridad del estado y a que se volvieron más enérgicos en el programa de fotomultas. Por lo que el costo de 9.50 se mantendrá hasta 2024.

Otro personaje tenebroso en Jalisco, aunque no pertenece al gobierno, pero vive de él, es el primo del gobernador: Miguel Alfaro Aranguren. Es una “bisagra” del grupo político del gobernador con todas las cúpulas empresariales. Alfaro Aranguren ha sido presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y presidente del Consejo Consultivo de la Banca de NAFIN en Jalisco. Nacional Financiera es un banco gubernamental orientado a apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas.

Desde ese andamiaje empresarial, Miguel ha construido su capital político. Por ejemplo, postuló, sin éxito, a su hermana Margarita para ser candidata a diputada local por el distrito de Zapopan, en 2015. Ya con el tío como gobernador, fue nombrada directora de Fomento Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco.

En la entidad es *vox populi*, en oficinas estatales y en los círculos de periodistas, que el gran beneficio para el primo Alfaro Aranguren es la regulación de la agroindustria. Junto con amigos y familiares tienen una concesión para explotación de agua subterránea por 60,000 metros cúbicos anuales en el ejido La Manzanilla (en la zona serrana de Jalisco), donde tienen innumerables hectáreas de cultivo de aguacates.

Los negocios de su familia, los de sus amigos —como Hugo Luna Vázquez y esposa, más los de su mentor, el exsenador priista, entre otras cúpulas empresariales— han influido en Enrique Alfaro Ramírez para detener un convenio que en julio de 2019 firmó con el entonces titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo: crear una unidad local con atribuciones similares a la federal para —se dijo y multipublicitó en medios de comunicación— combatir el lavado de dinero y la corrupción en Jalisco. Pero tras casi cuatro años la promesa del gobernador no se ha cumplido.

Vale recordar que en el operativo Agave Azul la UIF federal bloqueó en dos ocasiones las más de 1,500 cuentas bancarias de personas vinculadas al CJNG, Los Cuinis, La Nueva Plaza, el Cártel del Pacífico y Los Mata Zetas.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco tiene congeladas o pausadas carpetas de investigación abiertas por presuntos vínculos con el crimen en contra del actual director de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Madrigal Díaz. Su hermano Marco Antonio Madrigal Díaz, *Tony Madrigal*, fue ejecutado en 2002 por un ajuste de cuentas del otrora poderoso Cártel del Golfo hacia Los Cuinis. En dicha ejecución, también fue privado de la vida el entonces alcalde del municipio de Aquila, Michoacán, Eusebio Velázquez Mora.

Otro funcionario que es seguido de cerca por la Fiscalía es el director del Reclusorio Metropolitano del Estado, Alejandro Serrano Cervantes, quien incluso ya cuenta con antecedentes penales por crimen organizado. Aunque en el gobierno de Alfaro Ramírez administra los entretelones de uno de los centros penitenciarios más importantes de la entidad.

En contraste, el Gobierno de Jalisco, al ser una administración de “transición”, aceitó y copió esquemas de otras entidades del país, donde para legitimarse, el gobernante en turno —en este caso, Enrique Alfaro Ramírez— suele encarcelar a cercanos de su antecesor. Y así envía el mensaje ciudadano de que se dice “adiós” a la corrupción y a la impunidad.

Muchas de esas carpetas de investigación son “hechizas”, fabricadas dolosamente e incluso multipublicadas para hacer más

estridente el escándalo. Pero en realidad, dichos servidores públicos están pocos años en la cárcel.

Alfaro Ramírez ha encarcelado al exsecretario de Educación de Jalisco, Francisco de Jesús Ayón López, quien en agosto de 2022 se presentó a una audiencia para declarar sobre el desvío de 603 millones de pesos de los fondos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, bajo la modalidad de aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Sin embargo, en dicha audiencia el juez no lo dejó salir y le dictó prisión preventiva oficiosa por seis meses, en lo que se desarrollan las investigaciones complementarias.

El exdirector de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo Arias, también se encuentra en prisión acusado de malos manejos financieros en el organismo autónomo y encarcelado por no haberse presentado a unas audiencias.

En una cárcel también se encuentra recluido el exsecretario de Salud, Antonio Cruces Mada, imputado por el uso indebido de atribuciones y facultades en la compra irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias.

De acuerdo con versiones en el Palacio de Gobierno, el siguiente en vestir el uniforme penitenciario naranja podría ser el exsecretario de Planeación, Administración y de Finanzas del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz y actual rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.

Alfaro vs. UdG

La situación de confrontación de diversas fuerzas, civiles, estudiantiles y de la base social, aumentaron desde la segunda mitad de 2022 en la escena jalisciense. Fue mediático el conflicto entre Enrique Alfaro Ramírez y el rector de la Universidad de Guadalajara (UdG), Ricardo Villanueva Lomelí —no puede olvidarse que el padre de Alfaro fue rector de esta universidad de 1983 a 1989 y en la base prevalece un conflicto de intereses y poder—.

Dicha universidad de Guadalajara se ha convertido, como bien se plantea, en rehén de las peleas entre ambos grupos y políticos. Lo

real es que la UdG se ha visto afectada, desde hace más de cinco años, por una disminución de su presupuesto, consecuencia de los desencuentros entre el rector y el gobernador actuales. Por lo que se ha percibido, se trata de una lucha de liderazgos por la dominación de infraestructuras ligadas al ámbito universitario con intereses en negocios que datan de años. Sino todo, mucho se resume en ansias de dominio y manipulación de la verdad para obtener mayores ganancias, tanto de unos u otros.

En medio de este conflicto, la sociedad estudiantil se lanzó a una protesta abierta. La consecuencia: fue reprimida por fuerzas policiales tras cientos de días de estar acampados en los terrenos del Parque Natural Huentitán de la ciudad. La razón del conflicto fue que el gobernador ha pretendido vender el terreno a inmobiliarias con “sobrepuestos”, esto como “pago” por sus contribuciones a su campaña a la gubernatura.

Este territorio ha sido codiciado desde hace décadas. En los años ochenta fue protegido bajo la idea de una reserva natural. Pero ya en 2008 la Presidencia Municipal de Guadalajara rompió el decreto que lo protegía y aprobó otro. De ese modo cedieron 13.6 hectáreas a una inmobiliaria extranjera para la construcción de *departamentos* de lujo.

A cambio, el gobierno de Guadalajara se beneficiaría con obras de áreas verdes. Al vencer el convenio en 2012, sin hacerse nada de lo prometido, el Ayuntamiento en ese lapso firmó otro contrato en 2016, precisamente, bajo la gestión de Alfaro Ramírez. En ese entonces se vendieron más hectáreas para desarrollo inmobiliario y al parecer en 2019 el segundo convenio venció. Los vecinos y activistas exigieron la recuperación del parque.

Desde 2021, activistas, vecinos y estudiantes de la UdG decidieron rescatar el parque con un plantón e intentaron su rehabilitación sembrando árboles, organizando cursos y actividades para niñas y niños, entre otras acciones civiles y culturales. Fueron desalojados con violencia por un grupo armado no identificado. Las protestas no cesaron y en 2022 se inició un proceso penal por el delito de despojo de inmuebles y aguas contra los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas.

Felipe de Jesús Rivera Gallegos —de los allegados a Alfaro

Ramírez— encabezó el proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de los tres estudiantes. Esto aumentó las protestas y los reclamos de justicia. El gobernador apoyó el proceso y la sentencia como legítimos, argumentando que, por el convenio firmado en 2008, este predio es propiedad privada.

Ni los convenios se cumplieron ni las constructoras cedieron lo que prometieron ni tampoco consta la entrega de los recursos. Por lo tanto, no parece haber pruebas de que el terreno, hoy llamado Parque Resistencia Huentitán, haya perdido su condición de espacio público.

Los estudiantes fueron liberados el 10 de enero de 2023, tras casi seis días de estar detenidos, en gran medida gracias a las presiones, a la exhibición mediática del caso tornado en escándalo nacional, pero sobre todo como resultado de una larga audiencia en la que estuvieron presentes representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB. No obstante, el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos decidió mantenerlos vinculados a proceso penal llevando su causa en libertad. Aunque la empresa demandante nunca solicitó la retención de los estudiantes, Rivera Gallegos decidió enviarlos tras las rejas por órdenes “de arriba”.

Un elemento llamativo es, como aquí se refiere, la cercanía de este con Alfaro Ramírez. Es parte de su engranaje de poder. Y por lo mismo actúa.

Porque con estas y otras acciones manipuladas por el gobernador, el mensaje político enviado para la oposición ha sido contundente: quienes se sublevaran a su gobierno podrían ver interrumpida su libertad.

Esta elucubración ya fue ventilada incluso con columnistas afines y críticos del actual gobierno de Jalisco.

La red de Alfaro y Mireles

Bajo el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez han salido a flote sus relaciones, y las de funcionarios de su gobierno, con personajes del crimen organizado.

Un testigo de nombre *Edgar* rindió testimonio ante autoridades de Estados Unidos y reveló en 2021 detalles sobre una amplia red de tráfico de influencias, ligas con el crimen organizado y negocios al amparo del poder estatal en la que están implicados, además de Alfaro Ramírez, colaboradores suyos y múltiples cómplices: jueces, magistrados y familiares. Estos últimos encabezados por David Alfaro, su hermano, y Rafael Martínez, su excuñado.

De acuerdo con el testigo, estos negocios implican a altos funcionarios del Poder Judicial, a piezas clave del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, despachos jurídicos y notarios que, a cambio de fuertes sumas de dinero, influyen en las decisiones judiciales cuando se trata de asuntos relacionados con herencias, propiedades, temas de lavado o narcotráfico, licitaciones—como las de las patrullas en el municipio de Guadalajara, en la que nos detendremos posteriormente— por citar sólo algunos de los más jugosos.

Sostiene el testigo que Leonardo Mireles Escobedo, presunto lavador de dinero del narcotráfico, es otro enlace del gobernador Alfaro. Las conexiones saltan a la vista en los expedientes de la FGR y de la DEA. También los documentos *hackeados* a la SEDENA dan cuenta de que las relaciones entre Alfaro Ramírez y el crimen organizado llegan hasta su gente más cercana, como su jefe de Gabinete, Hugo Luna Vázquez.

La historia de Mireles Escobedo está salpicada de pasajes incluso siniestros. Informes de inteligencia lo ligan desde hace varios años con el narcotráfico y el blanqueo de capitales, pero en su haber también hay asesinatos y desapariciones, hasta de familiares suyos, a quienes ha despojado de propiedades mediante el esquema de empresas fantasmas constituidas con probables “narconotarios”, mediante falsificación de documentos, crímenes y traiciones.

El testigo *Edgar* trabajó cerca de Mireles Escobedo y conoció pormenores de sus estafas, engaños y crímenes. En su relato ante la DEA contó que Leonardo Mireles conformó su estructura criminal con María de los Ángeles López Bravo, conocida en Jalisco como *La Loba*. Presuntamente, ella es enlace entre jueces, magistrados, notarios, abogados y del propio Alfaro Ramírez con el CJNG. Además, funge como mediadora para los negocios y también para

empujar los fallos judiciales a favor o en contra de amigos o enemigos.

La otra pieza del esquema era su esposo, Camilo González Lara, exmandante de la Policía Municipal de Tlaquepaque que operaba como brazo ejecutor del CJNG. Como consecuencia del COVID-19, falleció en abril de 2021.

De acuerdo con el testigo, entre Leonardo Mireles, González Lara y María de los Ángeles, establecieron una sociedad criminal dedicada al lavado de dinero del narco, tráfico de influencias, secuestros, extorsiones, asesinatos y para montar falsos positivos que luego eran despojados de sus bienes.

Narra *Edgar* desde su experiencia:

“Yo trabajaba con Leonardo [Mireles]. Al principio todo parecía normal, pero todo empezó a ponerse muy feo a comienzos del año 2002 cuando Camilo González y María de Los Ángeles López Bravo, La Loba, le ofrecen a Leonardo la oportunidad de aliarse para despojar de varias propiedades al tío de Leonardo, don Pedro Mireles Félix, así como a su primo, Eduardo Mireles.

El plan consistía en eliminar primero a Eduardo Mireles y en segundo lugar crear documentos con firmas falsas de Pedro y Eduardo Mireles para hacer actas de asamblea y compraventa de acciones, todo con apoyo de notarios que se prestaron al fraude, como es el caso del notario 64, Alejandro López Rivera, de Guadalajara.

Otra parte del plan consistía en crear falsos positivos para encarcelar a Pedro Mireles [Félix], como lo hicieron, por el delito de portación de armas y sustancias ilícitas. Esto con el fin de atacarlo por todos los frentes y desgastarlo tanto física como emocionalmente. El plan funcionó: Pedro Mireles murió el 7 de julio de 2009 por problemas cardíacos, pero Leonardo y La Loba se jactaban de haberlo envenenado”.

El plan criminal no terminó ahí:

“Al señor Eduardo Mireles lo mataron el 29 de noviembre de 2002 en un Bolerama de Guadalajara. Los problemas no terminaron para Leonardo: el hijo mayor de Pedro Mireles no se quedó en paz. El señor Ismael Mireles Bañuelos comenzó a tomar varias acciones legales en contra de Leonardo y este, muy enojado y enfadado, le

pidió a Camilo González Lara, esposo de La Loba, que se deshicieran del problema y el 15 de septiembre de 2010 Ismael es hallado muerto. Apareció colgado en un puente. En ese momento el grupo criminal había logrado su objetivo: tenían la posesión física y legal del Centro Comercial Independencia, valuado en varias decenas de millones de dólares”.

Los problemas continuaron. Por órdenes de Jorge Osuna Salazar, quien le lleva todas las acciones a Leonardo, la plaza comercial pasó a ser administrada por Santiago Ochoa Ramos. Leonardo Mireles Escobedo, como cerebro de la organización, siempre tras bambalinas, nunca ha sido nombrado en las demandas ni expedientes: él sólo ha dirigido los hilos y organizado los operativos. Es igual que La Loba: mueven las influencias con los jueces, magistrados, policías y políticos.

El testigo *Edgar* continúa en su testimonio:

“Pero como todos estos sujetos son puros criminales y son desleales y deshonestos, un día se le ocurrió a Santiago Ochoa Ramos tratar de traicionarlos. [...] En 2011 fue desaparecido por órdenes de Leonardo [Mireles Escobar]. Aquí quedó más que claro que a Leonardo, a Camilo [González Lara] y a La Loba no les importaba la vida de nadie. Ya habían llegado muy lejos y nadie podía detenerlos.

Jorge Osuna Salazar buscó un arreglo con Leonardo Mireles para cobrar su parte del pastel, pero no lograron ponerse de acuerdo en las cantidades pactadas. Entonces el hijo mayor de Jorge Osuna Salazar puso a la venta, [...] una de las propiedades que le habían robado a Pedro Mireles: se trataba de un predio ubicado en Periférico y Calzada Independencia de más de 15,000 metros cuadrados, valuado en varios millones de dólares.

Cuando Leonardo se enteró de la venta, de inmediato interpuso una denuncia ante la Fiscalía para tratar de frenar el abuso de Jorge Osuna Tovar, pero actuó demasiado tarde: el joven ambicioso logró vender la propiedad. Esto enfureció a Leonardo y le ordenó a La Loba eliminar al joven. El 27 de febrero de 2015 Osuna Tovar fue ejecutado de un balazo en la cabeza cuando estaba en una licorería de la calle López Mateos. El autor fue Camilo González Lara.

Esto enfureció a Jorge Osuna Salazar, padre de la víctima, y

rompió con la organización criminal. Después ordenó la ejecución de Leonardo, La Loba y Camilo. No lo consigue y prefirió huir del país para no ser asesinado”.

El ascenso criminal de Leonardo Mireles Escobedo, de acuerdo con el testigo *Edgar* y otras fuentes consultadas, ocurrió en 2008: “En ese año entró a las grandes ligas y le piden lavar dinero para El Mencho por conducto de sus testaferros”.

Por esa razón hubo un encuentro entre Leonardo Mireles, Juan Carlos Nava Valencia —*El Tigre*— y su hermano Óscar Nava Valencia, *El Lobo*, piezas del crimen organizado. Tras varias negociaciones, el testigo afirmó que Mireles Escobar aceptó el negocio, consistente en lavar dinero, y de esa forma se incorporó a uno de los cárteles más poderosos y sanguinarios del país.

Algunos meses después, él y sus cómplices tramaron su primer negocio multimillonario: falsificaron documentos y actas de asamblea con sus notarios aliados. Entre ellos, vale mencionar al notario público no. 64 de Guadalajara, Sergio Alejandro Rivera López; el notario público no. 1 de Poncitlán, Carlos Alberto González González; el notario no. 126 de Guadalajara, Álvaro Guzmán Merino; el juez Segundo de lo Civil de Zapopan, Alan Rafael Acosta Navarro; el juez Décimo de lo Civil de Jalisco, Juan Pablo Hernández Venadero; y el notario no. 47 Enrique Macías Chávez, de Los Paraísos en León, Guanajuato.

Uno de los objetivos de estas acciones criminales en contubernios con todos estos agentes del campo jurídico y legal era la empresa Zafiro S.A. de C.V., propietaria de un predio ubicado en Zapopan, Jalisco, que cuenta con una extensión de 30,000 metros cuadrados y se localiza en una zona privilegiada: avenida Patria y Real de Acueducto, una de las zonas con mayor plusvalía.

De acuerdo con el testigo *Edgar*, el plan era simple: con documentos falsos, Leonardo le vendió a Óscar y a Juan Carlos Nava Valencia una empresa fantasma denominada Consorcio Acueducto S.A. de C.V. Y agrega:

“Tan es fantasma esta compañía que fue creada por el notario 64 [Sergio Alejandro Rivera] el mismo día de la operación; a esto se sumó que el nombre de los compradores también [...] resultaron falsos: el mismo notario consiguió las credenciales del IFE falsas. Y

así, en las escrituras aparecen como dueños Víctor Carlos Leño Lozano [nombre ficticio que usó Óscar Nava Valencia] y como apoderado de la empresa fue registrado Juan Nava Begines, padre de ‘El Lobo’ y de ‘El Tigre’. De esta forma comenzaron las actividades de lavado de dinero”.

La transacción falsa derivó en consecuencias. Los verdaderos propietarios del predio interpusieron una demanda —la 1474/2019— en el Juzgado 7; así como una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Jalisco en contra de todas las personas que intervinieron en la operación.

El testigo *Edgar* enriquece más su testimonio:

“Para zafar el tema legal, Leonardo [Mireles Escobedo] y ‘La Loba’ movieron sus influencias directamente con el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro y Pablo Lemus [desde 2021, alcalde de Guadalajara y aliado del gobernador] para tratar a toda costa de tumbar la demanda y la denuncia y así favorecer a los Valencia; con artimañas jurídicas el municipio inventó que por falta de pago predial remataría dicho inmueble y, con toda la ilegalidad jurídica, Enrique Alfaro mandó a invadir el predio con patrullas de la policía, un acto totalmente ilegal.

Todo esto fue al margen de la ley, ya que el municipio primero debía ganar el juicio de remate, luego rematar la propiedad para cobrarse el adeudo del predial. Pero nada de esto ocurrió. Alfaro respondió a los intereses de su aliado Leonardo Mireles y de ‘La Loba’.”

De acuerdo con el testigo, Enrique Alfaro Ramírez y Lemus Navarro han manejado una red de tráfico de influencias con esquema similar al que operan Mireles Escobedo y La Loba.

Un caso que puso en evidencia el lavado de dinero y la obtención de dinero ilegal ocurrió el 19 de marzo de 2014. Ese día Mireles Escobedo le vendió a La Loba una propiedad valuada en más de 40 millones de pesos. Está ubicada en Paseo del Zoológico 538, en Huentitán El Bajo, Guadalajara, Jalisco. Cuenta con una superficie de 15,000 metros cuadrados. La escritura fue elaborada por el notario no. 1 de Tuxcueca, Jalisco, Antonio Macías Aldana. La propiedad quedó registrada en la escritura 425, tomo 1, libro 10 del Registro Público de la Propiedad.

Edgar se pregunta en su testimonio: “No es posible que María de los Ángeles López Bravo, como servidora pública, tuviera los recursos económicos para comprar esa propiedad, es por eso que pido a la UIF que la investigue a fin de que se aclaren las fuentes de sus ingresos”.

Añade: “Se preguntarán cómo sé todo esto. Bueno, es muy simple: cuando trabajé para Leonardo [Mireles Escobedo] fui su apoderado en varias operaciones, incluida la de Zafiro S.A. de C.V. y me buscaron los de la Fiscalía y tuve que acudir a declarar. Dije todo lo que sé. En esos momentos, cuando trabajé con él, yo creí que todo era legal, pero no fue así. Todo fue cobrando forma y ahora sólo pido que se me respete la vida. Ya fui amenazado varias veces por Leonardo y ‘La Loba’. Mi familia corre peligro. No estoy en Guadalajara. Estoy en el extranjero cooperando con las autoridades y me dan protección a cambio de dar toda la información. Ya cayeron dos: ‘El Lobo’ y ‘El Tigre’. Ya están tras las rejas, pero faltan Leonardo y ‘La Loba’. Espero que con la información que he dado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pronto presione a la Fiscalía General de Justicia de México, a la UIF y al SAT, para que estos criminales paguen por lo que han hecho”.

De acuerdo con el testigo, “Leonardo tiene que lidiar con sus propios problemas. Se enteró que su esposa, Angélica Ortiz Guerrero, le fue infiel con un mesero. Enfurecido, Leonardo dio órdenes a ‘La Loba’ de crear un falso positivo para Angélica y desde el 2014 está acusada de robo. Fue encarcelada por más de 18 meses mientras él comenzó a tramitar el divorcio y pidió la custodia de sus hijos. Ella perdió todo. Se quedó en la calle. El expediente que da cuenta de esta historia es el 713/2014 y está radicado en el Juzgado Séptimo de lo Familiar, a cargo de la licenciada María del Carmen Mejía Tostado [...]

Esta fue una fechoría más de Leonardo. Hay más historias. En otra ocasión supo que el administrador del Tianguis del Sol, Pedro Pulido Montalvo, le estaba robando fuertes cantidades de dinero. Lo llamó para que le rindiera cuentas. Pulido propuso regresar el dinero en dos meses, pero todo resultó una farsa. Inmediatamente, comenzó los trámites para obtener una visa para irse a Estados Unidos. Cuando Leonardo se dio cuenta de que pretendía huir del

país sin pagarle, se enfureció y le pidió a La Loba que se encargara de él lo antes posible. El 9 de abril de 2018, Pedro Pulido Montalvo es brutalmente asesinado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta Italika. Lo acribillaron cuando salía de una oficina donde tramitaba su visa. Y al mismo tiempo, le armaron un falso positivo a su esposa para encarcelarla por robo.

Todo este influyentismo de La Loba deriva de sus relaciones con altos funcionarios del Poder Judicial. Cada año ella organiza eventos en su salón de fiestas, ubicado en Paseo del Zoológico 538, en Huentitán El Bajo, Guadalajara, para todos los jueces, magistrados y policías corruptos que le apoyan. A esta red también está ligado el mismísimo presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón.”

En este estado se ha construido una red criminal al amparo de la impunidad constituida por jueces, magistrados, notarios, abogados y miembros del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco que obedecen a los intereses del gobernador, su hermano David y su excuñado, Rafael Martínez Ramírez. Este último actualmente es el responsable jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara, a cargo de Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara.

De acuerdo con este esquema. David Alfaro también ha podido realizar jugosos negocios en materia civil, conforme algunas denuncias consultadas, con la jueza Ana Paulina Camacho Mendoza. En materia familiar opera con Ernesto González Maragued, titular del Primer Juzgado Familiar del Poder Judicial del Estado de Jalisco y con Gabriela Sánchez Cabrales, del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Mercantil. Estos jueces también responden a los intereses económicos del gobernador, pues acomodan los juicios de su interés desde la Oficialía de Partes para que luego el consejero de la Judicatura, Gabhdiel Iván Novia Cruz, se ponga en contacto con dichos jueces y les dé instrucciones sobre cómo resolver las sentencias conforme al monto de dinero recibido por este notario que opera desde la avenida La Paz.

Pero el asunto no ha quedado sólo con los jueces: también ha aprovechado las coyunturas de cambios de magistrados para infiltrar en las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco a los magistrados afines a sus despachos. Tal es el caso de

José Luis Álvarez Pulido, Georgina del Real Vizcaíno, Carlos Trejo Herrera, Adrián Talamantes Lobato, Ruth Gabriela Gallardo Vega, Ana Cristina Espinosa Valadez y Ana Elsa Cortés Ureña.

De acuerdo con las denuncias consultadas, los hilos del Poder Judicial se mueven desde la oficina del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. El mandatario nombró a Enrique Castellanos Ibarra como secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal. Este es quien decide el turno de los asuntos de las salas y se asegura que se acomoden a sus cómplices —todos ellos, afines al partido Movimiento Ciudadano— dependiendo de las instrucciones que giren el hermano del gobernador, David Alfaro, y su excuñado, Rafael Martínez.

Hay premios para la obediencia. Por ejemplo, ellos le otorgaron a Adrián Talamantes Lobato una magistratura que resultó cuestionada por el proceso amañado que se usó para favorecerlo.

El negocio de la justicia es bastante jugoso en Jalisco; tanto, que David Alfaro, su excuñado y Carlos Arias Madrid —exempleado del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco— de acuerdo con fuentes consultadas en Jalisco, poseen un bufete que, aseguran, es uno de los más influyentes dentro del Poder Judicial “debido a las corruptelas”.

Una de las fuentes que conoce los entresijos de este andamiaje de corrupción sostiene:

—Este despacho es poderoso. Le ponen precio a cada uno de los juicios que se llevan en el ámbito judicial estatal, a tal grado que suelen subastar entre las partes y los litigantes la decisión de los jueces identificados con ellos.

Los magistrados y jueces que se han resistido a estos actos de corrupción son amenazados y castigados, pues el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco atiende los negocios que realiza el gobernador junto con sus cómplices, entre otros, su hermano y su excuñado.

—¿Cómo le hizo Alfaro para doblar a los jueces que se resistían a entrar al círculo de la corrupción? —se le pregunta a la fuente.

—Los acusó de corrupción y los amenazó no sólo con destituirlos, sino con la cárcel. Así dobló a los magistrados Ricardo Suro Esteves y Daniel Espinosa [Licón]. Ahora son sus aliados. Tuvieron que

entrarle a los negocios por temor a las represalias del gobernador.

Los integrantes del Poder Judicial estaban temerosos. Pero después de las amenazas se volvieron cómplices. Crearon jueces de los llamados de conveniencia a modo y afines a los intereses de Lemus Navarro, del gobernador y del despacho jurídico que encabezan Rafael Martínez y David Alfaro. Este último, además, es notario público. Este esquema les ha permitido fraguar asuntos importantes y obtener cuantiosas ganancias. En el despacho que encabezan se atienden asuntos penales, mercantiles, familiares y civiles bajo la política corrupta del mejor postor.

Entre los juzgadores con los que “se puede negociar la justicia” están, de acuerdo con las fuentes consultadas, los consejeros Tatiana Esther Anaya Zúñiga y el referido Iván Novia Cruz. Tatiana fue subalterna de Rafael Martínez Ramírez en el Ayuntamiento de Zapopan. Gracias a esta relación pudo ser nombrada consejera de la Judicatura del Estado de Jalisco.

Otro de los operadores de Martínez Ramírez es Daniel Isaí Salas Ornelas, conocido en el mundo judicial como *El Cobra y/o El Cobrador*. Despachaba en una oficina ubicada en las salas de juicios orales de lo que fue el Centro Penitenciario de Readaptación Social Puente Grande, conocido como “Puerta Grande”, desde enero de 2001, cuando El Chapo fue “liberado” bajo el esquema de una fuga maquinada.

Salas Ornelas es muy conocido, sobre todo, porque es quien directamente se reúne con diversos litigantes para después girar indicaciones a jueces penales identificados con el partido Movimiento Ciudadano. En 2022 fue designado como parte de los 38 jueces laborales del nuevo sistema de justicia laboral del estado, en lo que se considera en los medios “un reparto de cuotas y cuates”.

En la lista de jueces afines a los intereses del gobernador y sus presuntos cómplices también se encuentran Juan José Rodríguez Velarde, Juan Paulo Dávalos Navarro, Sergio Peña Sánchez, Raúl Valdez Arredondo, Gildardo Joel Landeros Parra, Javier García Muñoz, Felipe de Jesús Rivera Gallegos —quien encabezó el proceso contra los tres estudiantes de la UdG—. Todos ellos, de acuerdo con las denuncias, forman parte de la estructura de

negocios y poder corrupto, ya que suelen vender sus resoluciones al mejor postor.

Otro personaje ligado a la red es Abel Martínez Delgado, administrador distrital del Juzgado de Control y Juicio Oral: “Este sujeto —dice otra de las fuentes entrevistadas— es el responsable de los turnos de procesos penales. Está ligado a Rafael Martínez y designa a los jueces a modo que confirme los negocios que tienen en puerta. También recibe instrucciones de Daniel Salas Ornelas”.

En el Poder Judicial todo se maneja con opacidad. Por ejemplo, no existe un mecanismo claro y transparente aprobado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco para la asignación de turno que le corresponde a un expediente judicial. También se carece de información sobre la competencia de las causas penales. Hay desinformación sobre el mecanismo para designar a un juez que pueda conocer de un asunto penal.

Conforme con datos consultados, el 95 % de los expedientes penales por delitos patrimoniales de alta cuantía —como fraudes, despojos, abusos de confianza y robos— caen en manos de jueces afines a Movimiento Ciudadano. Los opera directamente Rafael Martínez Ramírez, aunque también participó el exfiscal general de Justicia del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez —quien renunció al cargo en febrero de 2022 bajo razones de carácter personal—, desde cuya oficina se favorecieron intereses oscuros.

Barbarie, narcotráfico e inseguridad

La Fiscalía del Estado de Jalisco vive una realidad paradójica: los fiscales especializados en indagar las desapariciones, en realidad deben investigar a policías municipales, estatales, Ministerios Públicos y otros fiscales porque presuntamente están implicados en la desaparición de jóvenes en la zona metropolitana de Jalisco.

El 31 de agosto de 2022, la portada de *El Informador* fue elocuente: “Indagan a 203 policías por desaparición forzada”. En una nota sin firma, el rotativo aclara que estas carpetas de investigación contemplan sólo a oficiales municipales, en el lapso

comprendido desde el primer día de 2018 hasta marzo de 2022.

En contraste, durante ese mismo lapso, el Poder Judicial apenas había otorgado cinco condenas en contra de policías municipales por desaparición forzada. Estudios hechos por la Universidad de Guadalajara registran que el municipio con más casos de desaparecidos es Zapopan. Le siguen Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Tepatlán de Morelos.

En Jalisco hay una nula procuración de justicia hacia delitos cometidos contra mujeres y esto facilita la impunidad. Basta abrir un periódico local para darse cuenta de lo vulnerables que son en esa entidad occidental. El 2 de septiembre de 2022, *Milenio Jalisco* exhibió que en agosto hubo once feminicidios en el estado y que superó a julio, con ocho.

Sin embargo, la Fiscalía de la entidad envió otras estadísticas —al mando de Alfaro Ramírez—. Así, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no contabilizaría ni un sólo feminicidio.

La sociedad jalisciense se había estremecido el 24 de abril de 2019, cuando Vanesa Gaytán Ochoa llegó en un taxi muy alterada a Casa Jalisco, ubicada entre las calles de Manuel Acuña y Montreal. Deseaba pedir de primera mano el apoyo del gobernador, pues su esposo, Irwin Emanuel Ramírez Barajas, de quien se estaba divorciando, pretendía arrebatarse a su hijo de dos años.

Mientras un policía estatal le comunicaba lo difícil de que el gobernador la recibiera por su “apretada agenda”, su esposo la embistió a gran velocidad con el automóvil en el que la seguía. Tras ella recibir el golpe del vehículo se levantó para intentar detener la agresión e Irwin Ramírez descendió del mismo y con un cuchillo dejó sin vida a Vanesa, quien se desangró sobre la banqueta frente a la residencia del mandatario estatal.

Uno de los oficiales de la residencia gubernamental disparó al agresor, quien fue detenido y trasladado a un hospital, donde falleció por las heridas de proyectil. Esta tragedia ocurrió en el quinto mes del gobierno estatal de Alfaro Ramírez. Así comenzaban las matanzas a mujeres durante su periodo de mandato.

En Jalisco la violencia exacerbada supera a la ficción. En la

colonia 20 de noviembre, en el municipio de Tonalá, sobre un canal de aguas negras que atraviesa la calle Federico Medrano, dos perros fueron sorprendidos jaloneando un brazo humano. Era el “botín” para no pasar hambre en la tarde soleada del 29 de agosto de 2022.

Los vecinos reportaron el hecho a la Comisaría General de Tonalá. Llegaron forenses, ministeriales, policías estatales, prensa local y nacional para documentar el peculiar hallazgo. El brazo tenía varios días de “evolución cadavérica” y diversos tatuajes apenas visibles. En el canal de aguas residuales, casi seco por el ardiente calor, las fuerzas policíacas buscaron sin éxito el resto de las extremidades humanas. No se logró averiguar nada.

Ante el aparatoso operativo, los perros callejeros optaron por seguir su camino y buscar el alimento del día en alguna carnicería o fondita de dicha colonia popular.

Con las nuevas alianzas criminales, los policías estatales y municipales de Zapopan ya saben que, si quieren evitarse problemas, se abstengan de parar vehículos o camiones sospechosos en la carretera que va de Tesistán a Saltillo. Mucho menos un carro de súper lujo. Porque ya saben que pueden llevar armas o drogas hacia Zacatecas.

En algo más de cuatro años y medio de administración estatal, el “desgobierno” de Alfaro Ramírez se puede resumir así: recibió a Jalisco con 7,000 desaparecidos y hasta mediados de 2023 aumentó la cifra a más de 13,000.

Su administración acumula, hasta agosto de 2023, 10,830 homicidios. Un incremento del 82 % respecto a su antecesor, Aristóteles Sandoval Díaz, y aún Alfaro Ramírez no ha terminado su mandato. Durante la gestión del político proveniente de Movimiento Ciudadano, que ha abrigado aspiraciones presidenciales, hay en promedio 7.4 homicidios y 6.7 desaparecidos por día. Por ello, a Jalisco se le considera la “fosa clandestina más grande de México”.

Al cierre del primer semestre de 2023, la entidad que gobierna ocupaba el tercer lugar nacional en delitos denunciados, con más de 11,000 carpetas de investigación abiertas en el Ministerio Público de la Fiscalía jalisciense.

Más aún, tal circunstancia de letalidad se evidenció con los

escenarios de terror vividos durante la segunda semana de agosto de 2022, cuando el CJNG demostró el poderío de su “músculo criminal”, organizando “narcobloqueos” en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan, donde incendiaron tráileres y camiones del servicio urbano, robaron a punta de pistola vehículos compactos para escapar de las autoridades. Todos estos hechos se hicieron virales en las redes sociales y esparcieron el miedo.

Fueron escenas de la realidad y no de una película de terror, derivadas de acciones violentas para evitar la detención de los narcotraficantes adscritos al CJNG: Gerardo González Ramírez, *El Apá* o *El Gera* y Ricardo Ruiz Velazco, *El Doble R* o *El Tripa*, conocidos líderes criminales al servicio de Nemesio Oseguera Cervantes, *El Mencho*.

“En Jalisco vivimos en una ‘narcosociedad’”, es una frase recurrente entre familiares de desaparecidos, académicos, políticos de oposición, representantes de la iglesia, periodistas y empresarios. Y es que esos miles de desaparecidos y los múltiples homicidios “a punta de bala” sólo se pueden entender con la complicidad del gobierno alfarista, de la Fiscalía de Jalisco y de elementos policíacos estatales y municipales que están al servicio de diversas células del Cártel de Jalisco Nueva Generación, conforme a varios testimonios consultados y lo que se comenta comúnmente.

En el estado abundan los “levantamientos” y reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas de “El Cártel”, “La Maña”, “La Empresa” —como le llaman los lugareños al poderoso CJNG—. También la trata de personas con fines de prostitución, el tráfico de órganos de niños y jóvenes, el lavado de dinero en torres financieras y departamentales, así como en bares y restaurantes, así como, el lavado de dólares y metales preciosos en pleno centro de Guadalajara, a escasas cuadras del Palacio de Gobierno.

Peor aún: la circulación permisiva de droga en barrios bajos y en *table dances* de la zona metropolitana, pero también en discotecas de las zonas pudientes de Zapopan, Puerto Vallarta, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Porque hay otros focos rojos: regiones que son auténticos territorios sin ley en las sierras y costas de Jalisco, donde nada se

mueve sin el permiso de El Mencho, uno de los capos más buscados por las autoridades estadounidenses y de los que más ha empleado los canales mediáticos a través de videos que envía de forma anónima a la prensa.

Sin embargo, en México las autoridades federales y estatales no parecen buscarlo. Ni lo molestan. Por el contrario, le permiten vivir y delinquir con total libertad entre las regiones de Autlán de Navarro y Villa Purificación, una brecha serrana separada por apenas 60 kilómetros, en donde los mismos elementos de la Fiscalía de Jalisco admiten que no pueden entrar “por lo caliente que está la plaza” y para no importunar sus actividades.

Hace unas décadas, Jalisco era conocido por ser la cuna del mariachi y el buen tequila. Lugar de mujeres hermosas y un alto arraigo religioso. Famosa por sus bellas playas del Pacífico mexicano, como Puerto Vallarta y Barra de Navidad. Con una de las capitales de mayor importancia del país por sus grandes centros comerciales, su rica gastronomía, su universidad pública e instituciones privadas de alto prestigio y la feria del libro más famosa de Latinoamérica, Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Su capital, Guadalajara, era tierra boyante para invertir en el ramo inmobiliario, industrial y gastronómico. Incluso, varios artistas de talla internacional consideraban a esta región una “parada obligada” para dar un concierto en sus giras por América Latina y Sudamérica. Pero hoy todo ha cambiado.

Desde el sexenio del priista Aristóteles Sandoval Díaz —ejecutado de forma salvaje en el interior del bar Distrito 5, en Puerto Vallarta, el 18 diciembre de 2020— y durante el tiempo transcurrido del emecista Alfaro Ramírez, las cosas en Jalisco comenzaron a descomponerse: se salieron de control con el crimen organizado, la delincuencia común y el alto índice de impunidad.

Retratarlo no ha resultado difícil. El actual gobernador del estado de Jalisco ha sido secretario del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga —hoy epicentro de las fosas clandestinas en “casas de seguridad”—, regidor, diputado local y alcalde de esa demarcación y de Guadalajara, y durante el primer tramo de su gobierno mostró una clara fijación por suceder a López Obrador en la presidencia de la República.

Sus críticos y cercanos lo pintan como explosivo y concentrador voraz de poder. Se dice que ningún secretario se puede mover o tomar decisiones sin su autorización. Es inteligente y astuto. Pocas veces sonríe, es rudo y directo. Detesta la prensa crítica, pero “apapacha” con dinero a sus plumas aliadas. Se creía dueño de Movimiento Ciudadano. “Dante Delgado puso la marca, pero Alfaro puso el capital humano y económico”, dicen sus cercanos en forma anónima.

También mencionan que “tiene anotados a los funcionarios que él creó e impulsó y lo traicionaron, por irse al equipo político de Samuel García [Sepúlveda] en el gobierno de Nuevo León, [...] ubica también a periodistas que lo cuestionan de forma férrea y a quienes le ‘ponen la bola’ para que Alfaro batee y humille en espacios públicos [sic] a sus opositores”, conforme afirman funcionarios estatales de la calle Pedro Moreno y avenida Ramón Corona, donde radica la sede del estado.

Incluso, de Alfaro hay un claro “resentimiento” hacia Rafael Valenzuela, a quien cobijó siendo edil de Tlajomulco y luego de Guadalajara. Ahora Valenzuela trabaja con Samuel García y hace negocios con él, a través de las empresas Euzen Consultores, Indatcom y La Covacha, corporativos que trabajan en “apuntalar” la carrera presidencial del gobernador de Nuevo León, pese a que este y el propio Valenzuela fueron “impulsados” por Alfaro Ramírez.

“El gobernador quiso crear grupo político rumbo al 2024, y terminó, sin quererlo, creando competencia”, señalan sus críticos.

Sus subordinados sólo ven en el gobernador dos debilidades: que le gusta la farándula y mezclarse con la alta sociedad, artistas y deportistas jaliscienses, y que eso lo distrae de sus quehaceres políticos y administrativos. Su otro punto débil es el Club Deportivo Guadalajara o Chivas, pues también es un enfermo del fútbol. Sólo en el Estadio Akron se le puede ver sonreír cuando anotan gol los rojiblancos.

Y hay que decirlo, siempre ha tenido una relación cercana con el poder. Es conocido que su padre, Enrique Javier Alfaro Anguiano, fue rector de la Universidad de Guadalajara, una de las más prestigiosas del país y destacada como la casa de los “Leones Negros” por su club de fútbol. Su madre es Bertha Ramírez Fruchier,

propietaria de Laboratorios Nordin, actualmente, Química Franco Mexicana Nordin, S.A. de C.V. De acuerdo con el mandatario jalisciense, la venta de esta empresa, fundada por su abuelo, fue la que permitió el incremento de su fortuna, no los desvíos de recursos cuando fungió como alcalde en Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y ahora en el gobierno estatal.

Saqueo y tráfico

Corren los últimos días de julio de 2022, las protestas en contra del mandatario estatal son diarias, pero con diferentes actores y víctimas. Enfrente, la indiferencia institucional y las vallas metálicas color negro para contener a los “rijosos” son las mismas.

Raúl Argáez es activista del Colectivo Justicia para el Pueblo, participa en las redes de apoyo para los colectivos de desaparecidos en Jalisco. Argáez se sienta en una banca frente al Palacio de Gobierno. Es una tarde de verano. El calor está “picoso”. Acaba de concluir una manifestación, en donde una vez más, y después de tres horas de espera, ningún funcionario del gobierno de Alfaro Ramírez quiso atender las demandas ciudadanas.

Se acaricia la barba, voltea a ver a su interlocutor y suelta a rajatabla:

—Ni Ramírez Acuña ni Emilio González ni Aristóteles Sandoval habrían sido tan indolentes ante la crisis humanitaria, la devastación ambiental y la descomposición política y social, como lo es Alfaro.

—¿Y aun así le da para tener aspiraciones presidenciales?

—Tenemos un gobernador que es omnipresente, que controla organismos autónomos y fiscalía y demás poderes; pero que va de mal en peor con sus antecesores. La crisis humanitaria y la violación a derechos humanos es insostenible. Sus aspiraciones sólo reflejan un problema mental, realmente Alfaro no tiene ninguna posibilidad, en su megalomanía tiene sus aspiraciones [...] ¿Quién le hizo creer que podía? Tal vez sus asesores [...] Esa es parte de su problemática.

En la Casa de Gobierno de Jalisco es *vox populi* que el gobernador ha cultivado su grupo político desde las escuelas

preparatorias 5 y 7, adscritas a la UdG, donde estudió. Como se ha referido, fue ahí donde conoció a su jefe de Gabinete, Hugo Manuel Luna Vázquez, a quien sus propios empleados tachan de perverso y sin escrúpulos. Su “alfil” en la capital del país es el senador Clemente Castañeda Hoefflich, quien es “bisagra” entre la relación Enrique Alfaro-Dante Delgado. Estos últimos políticos son explosivos y viscerales, pero con poder han sabido ir escalando posiciones en el servicio público.

Otro político, exiliado del régimen jalisciense como se sabe, es Ismael del Toro Castro. Su vida política no se explica sin el cobijo de Enrique Alfaro, pues del Toro Castro o Pope fue secretario general del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y alcalde de ese municipio metropolitano de Guadalajara. Pero también fue diputado del Congreso del Estado de Jalisco y alcalde de Guadalajara, cargo en el que pensaba competir por una reelección municipal, hasta que decidió declinar a ese cargo de elección popular el 16 de marzo de 2021, anteponiendo “causas familiares”.

Causalidades o casualidades de la vida, del Toro Castro declinó su aspiración un par de días antes de la ejecución de Carlos Enrique Sánchez Martínez, *El Cholo*, cuyo cuerpo con varios impactos de bala fue colocado en pleno centro del pueblo turístico de Tlaquepaque.

Como se explica en este volumen, era el jefe de plaza más cercano a Nemesio Oseguera Cervantes y fue su “compadre”. Sin embargo, Sánchez Martínez se alió con ministeriales de la Fiscalía y policías municipales de Jalisco y se distanció de El Mencho. Incluso, intentó fundar su propia organización criminal con protección política: el Cártel Nueva Plaza. Sus intenciones criminales sólo quedaron en eso.

Un mensaje dejado sobre el cuerpo del excompadre de El Mencho decía al calce: “Quienes están protegiendo al Cholo, váyanse a cuidar a su familia”.

Desde marzo de 2021, diversos políticos cercanos a Alfaro Ramírez se exiliaron del régimen y del poder político. El más visible, del Toro Castro. En Jalisco, El Mencho comenzó una cacería de los cercanos a su “compadre”. La violencia, como muestran los datos duros, ha sido imparable.

Otro de los mensajes “clavados” en el cuerpo inerte de El Cholo, advertía que era un “traicionero”, una cartulina más agregaba que iban a “pagar” [sic] todos los que habían mandado a “calentar” la plaza.

Menos de un mes después, habitantes de El Parián, en San Pedro Tlaquepaque, reportaron la aparición de una “narcomanta” en respuesta a El Mencho, por parte de las pequeñas células que activó El Cholo:

“Soy Fiumencio, alias *Fiume*, de San Pedrito, y mataste a mi compadre Cholo. Que también somos: La Nueva Plasa [sic]. Cuídate, Mencho. Tenemos sed de venganza”. Para que el mensaje llegara a su destino, los sicarios “advirtieron” a policías estatales no retirar la lona de una alambrada, hasta que llegaran las cámaras de la filial de Televisa en Jalisco.

En esa vorágine de saldar cuentas, Salvador Caro Cabrera, excomisario general de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara y diputado federal cuando empezaron los ajustes de cuentas, optó por pedir licencia. El mensaje fue entendido en la opinión pública como que se fue “a cuidar a su familia”.

El Colectivo Justicia para el Pueblo y su vocero, Raúl Argáez, exponen que hoy la violencia de los cárteles, la descomposición social y política están llegando a límites insospechados:

“Estamos sumergidos en una economía en donde todo es susceptible a obtener una ganancia lícita o ilícita. Unas instituciones corrompidas que desencadenan en una espiral de violencia y anarquía. Aquí en Jalisco, lo mismo se trafica con drogas, con personas, con terrenos, con sembradíos, con extorsiones, hay un saqueo brutal”.

Fustiga que hoy el desarrollo urbano es un caos: “surgen torres por todos lados...”, con capitales financieros de dudosa procedencia, alimentados y estimulados por el “lavado de dinero”:

“Aquí todo se hace en función de un pequeño grupo de empresarios, unos legales y otros ilegales. Hay millonadas que se inyectan a torres en Tlajomulco o en Zapopan y que están vacías [...] y que, durante mucho tiempo, mientras siga la violencia, [advierte], continuarán vacías”.

También pone el ejemplo tácito de esa obsesión gubernamental y

empresarial por construir con los casi 1,600 departamentos de lujo en 28 torres. Es el conocido Proyecto San Rafael, el cual se está edificando sobre mantos acuíferos.

En diversas avenidas de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga se aprecian grandes construcciones de hoteles cuyas franquicias no son reconocidas. Se abren nuevos restaurantes de inversionistas surgidos de la nada y autoridades municipales que dan todas las facilidades en los cambios de uso de suelo. Sin grandes cuestionamientos, se otorgan licencias de construcción y permisos para la apertura de empresas. “Dejar hacer y dejar pasar” es una política pública en los municipios de Jalisco para que continúe floreciendo el lavado de dinero. Pero también es una forma fácil de no meterse en problemas.

En Jalisco, a la euforia de la construcción, también se suma el fraude inmobiliario. En Puerto Vallarta unas 45 familias, propietarias de igual número de departamentos, ahora enfrentan un *vía crucis* por las fallas y posibles daños arquitectónicos en sus viviendas, compradas con costosos créditos bancarios en el Desarrollo habitacional Isla 115. El Grupo Crecento, uno de los consentidos del gobernador Alfaro Ramírez, está acusado de defraudar a estos condóminos, luego de haberse descubierto fallas estructurales en la edificación de los inmuebles.

Los peritajes obligaron a las familias a desalojar sus viviendas por riesgo de derrumbes. El suplicio es todavía más grave, pues la mayoría, ahora, tiene que pagar rentas elevadas y además, las hipotecas. No obstante, haber presentado las denuncias correspondientes en la Fiscalía del Estado de Jalisco, el Grupo Crecento goza de absoluta impunidad.

Con más fuerza, desde la actual administración estatal, se refleja como una forma de operar que se repite en Jalisco: se permite a constructoras edificar fraccionamientos o departamentos sin cumplir con los planes parciales de desarrollo, sin contar con información sobre estudios de impacto ni con permisos de los Ayuntamientos donde ocurren estas situaciones. Todo esto deriva en estragos constructivos, por falta de agua y luz, entre otros tantos problemas como la violación de derechos humanos y económicos.

Patrullas en millones

Jesús Pablo Lemus Navarro, alcalde de Guadalajara hasta el cierre de este libro, en 2023, cargo al que llegó después de haber ocupado dos veces el mismo puesto en el vecino Zapopan. Aunque en octubre de 2023 cumplió dos años como alcalde de La Perla Tapatía, ya da zancadas para suceder a Alfaro Ramírez en el gobierno jalisciense; sea con la ayuda de Movimiento Ciudadano o de MORENA, si los “alfaristas” le negaran el apoyo.

Hoy es conocido en la política como parte de esa mafia que detenta el poder. Pero antes fue un empresario de “medio pelo” con severos problemas financieros y locutor de radio. Fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Jalisco y director general de Credicampo.

“Pablo estaba en bancarrota. Había tronado su empresa que se llamaba Musical Lemus, tenía muchísimos problemas financieros. Hasta que llegó a MC [Movimiento Ciudadano], gracias a que el hoy senador, [José] Clemente Castañeda, no quiso competir por Zapopan. El partido, con poca estructura en aquel entonces, le dio la oportunidad a Lemus, porque tenía mediana fama por ser empresario, en bancarrota, pero empresario al fin y un comunicador con un programa de radio de mediana audiencia”, cuenta un emecista del Gobierno de Jalisco, quien pidió omitir su nombre para no abrir más la grieta entre Alfaro Ramírez y el propio Lemus Navarro. Ya ambos traen roces políticos, pues el primero no está convencido de que el actual edil de Guadalajara pueda ser su sucesor.

Con un ascenso vertiginoso, pasó de administrar el negocio de su padre —en donde se vendían discos de acetato y casetes— a dirigir al llamado Cártel de COPARMEX —denominado así en el occidente mexicano—, por estar compuesto por empresarios a quienes les gusta hacer negocios con el gobierno y el erario.

Así como es benevolente y espléndido con sus amigos, es implacable y vengativo con sus enemigos. Como sucedió con Jaime Moreno Cardeña, representante de la firma Green Life Capital y de las Villas Panamericanas —hoy, el complejo residencial Avaterra— con un proceso detenido por el odio del alcalde de Guadalajara

hacia Moreno Cardeña. Este demandó a Lemus Navarro por un fraude superior al millón de dólares. El pleito data de una década atrás, pero él nunca pudo superarlo.

“La Villa se desarrolló, urbanizó, edificó y a la fecha cumple con todos los permisos al amparo de las leyes vigentes en aquel tiempo. Y hoy cuenta con todas las autorizaciones de las autoridades federales, estatales y municipales. No le hace falta un sólo permiso, cumple con todos los estándares, no sólo de calidad, sino de ley en materia ambiental”, asegura Moreno Cardeña.

Sin embargo, en 2021 y aún como edil de Zapopan, Lemus Navarro se encargó de bloquear a través de sus direcciones la apertura de dicha Villa, que representa 650 departamentos con poco más de 2,500 residentes. Alegó alta densidad poblacional y afectaciones al Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera.

Mientras, está detenida una inversión de 1,500 millones de pesos: el negocio de Avaterra —combinado de recursos estatales y privados, pues participó el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y el Instituto Promotor de Vivienda—, por el conflicto-odio de Lemus hacia Moreno.

Aunque el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco dio su fallo a favor del uso de la Villa Panamericana como vivienda, Lemus Navarro plantea que es un “cochupo” entre el magistrado Laurentino López Villaseñor y el empresario Moreno Cardeña. El exedil de Zapopan y actual alcalde de Guadalajara ha dicho ante la prensa que no se entregará el permiso ni ahora ni en administraciones futuras:

“Hemos dejado los candados necesarios para evitar que, en cualquier tiempo, en cualquier momento, cualquier presidente municipal [...] pueda otorgar la habitabilidad a la Villa Panamericana”. Fue una de sus últimas declaraciones.

Después pidió licencia para, mediante una argucia jurídico-electoral, competir por el municipio vecino y cabecera del estado.

Hoy se encuentra en el ojo del huracán por la “gran estafa tapatía”. El PAN acusó que el gobierno municipal de Guadalajara aceitó de forma fraudulenta y para desviar recursos, la licitación del arrendamiento —no compra— de 290 patrullas para la Policía Municipal, con un precio superior a los 790 millones de pesos.

Es decir, con equipamiento y aditamentos especiales, cada una habría costado, sólo en renta, más de dos millones y medio de pesos mientras dure la administración emecista. Al finalizar la administración municipal, las patrullas habrán de ser devueltas a su concesionario.

“Exigimos una explicación detallada, máxima difusión y transparencia sobre este contrato por parte del alcalde de la ciudad de Guadalajara del partido de MC [Movimiento Ciudadano]. Debe quedar claro cualquier señalamiento de corrupción por parte de las autoridades municipales o incluso estatales de esta gran estafa tapatía”, recriminó el exalcalde de Guadalajara y actual regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando Garza Martínez.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, pidió la anulación del contrato de 792 millones de pesos para renta de patrullas a la empresa Integradora de Apoyo Municipal, al existir —indicó— un hecho de corrupción por parte de Lemus.

La licitación nacional fue asignada por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara por el monto declarado a una empresa en el Estado de México. La misma que también arrendó patrullas a Zapopan cuando Lemus Navarro fue alcalde. Dos de las empresas no beneficiadas con la licitación —y competidoras con un presupuesto que daba a mitad de precio cada patrulla— se inconformaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Fernando Garza Martínez insistió ante la prensa que lo que se continúa buscando es invalidar la licitación a través del recurso de nulidad del acto administrativo:

“Estamos solicitando al Tribunal se admita la demanda y se reciban las pruebas, se dicte medida cautelar en los términos que este Tribunal, conforme a su estudio, determine precedentes; y se decrete la nulidad lisa y llana de los actos que se reclaman. Estamos muy claros en lo que queremos, que se investiguen los hechos, pero que en vía de mientras se suspenda totalmente esta adquisición, que a todas luces es irregular”.

El contrato multimillonario por el “arrendamiento” de 290 patrullas, significa un daño al erario superior a los 400 millones de pesos, han indicado políticos de la oposición.

“No vamos a permitir este saqueo tan burdo por parte del municipio gobernado por el partido de MC [Movimiento Ciudadano] y que se quede sin investigar. Nosotros pedimos que se sancione a los probables responsables y para que además no quede simplemente impune”. Ha insistido Marko, cada vez que visita Guadalajara.

A inicios de 2022, el presidente del Consejo de MORENA Jalisco y Regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, también solicitó que la sindicatura iniciara un juicio de lesividad contra los actos administrativos aprobados en el Comité de Adquisiciones.

“Todo aparenta que con el sobreprecio —del arrendamiento de las patrullas— quiere recuperar 300 millones para pagar su campaña electoral. Esto no es un tema personal, y en verdad, yo le quiero hacer un llamado respetuoso a Pablo Lemus, [alcalde] de Guadalajara, a los regidores de MC: rectifiquemos, hay mucho que hacer, con 300 millones les puede lucir mucho el trabajo”.

Una vez que estalló el escándalo, el gobierno de Guadalajara envió un comunicado en el que se justificó que el arrendamiento no son sólo 290 patrullas, ya que la licitación incluye 100 motocicletas, 300 bicicletas, 40 patines eléctricos y 20 autos eléctricos para vigilancia del Centro Histórico y de la zona turística.

En entrevista con la fuente municipal, visiblemente molesto, Pablo Lemus reprochó de un modo cínico y poco creíble que a sus opositores no les importara la seguridad de los ciudadanos y que, por el contrario, buscaran boicotear los esfuerzos municipales, anteponiendo intereses políticos y económicos:

“Es una lástima que, siendo el tema de seguridad el más sensible para los ciudadanos, traten los regidores de MORENA, y muy en especial el regidor Carlos Lomelí, de meterlo a la arena político-electoral. Se ve que no les preocupa la seguridad en la ciudad. Lo que le preocupa son los intereses políticos y el golpeteo. Y segundo: nos quiere meter a su mismo costal. Él piensa que, como durante toda su vida se enriqueció personalmente con licitaciones amañadas y dando ‘mordidas’ a funcionarios públicos, piensa que en Guadalajara va a ser lo mismo y no, aquí las licitaciones son transparentes”.

Como antecedente, cabe mencionar que esta no es la primera vez que Lemus Navarro realiza este tipo de maniobras y aprovecha las influencias de Rafael Martínez Ramírez en el Poder Judicial.

Fue presidente municipal de Zapopan en dos ocasiones y, conforme consta públicamente, también efectuó licitaciones para negociar patrullas con las que, como ahora, resultó ganadora la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A de C.V. —al parecer una de sus preferidas— entre 2016 a 2018, por un monto superior a los 293 millones de pesos. En aquel momento se compraron 325 vehículos: 248 pick-up de doble cabina, con características similares a las que se pretenden adquirir para Guadalajara; quince unidades de emergencia, 60 motos, entre otros vehículos.

En el caso de Guadalajara, la licitación amañada atrajo en su momento los reflectores locales y nacionales. No sólo por las presuntas irregularidades, sino porque un juzgado de Distrito ordenó la suspensión de dicho concurso, por estar viciado de origen, lo que puso en evidencia una suerte de “quiebra jurídica” en el Ayuntamiento que encabeza Lemus Navarro.

Una fuente consultada dentro de esa institución municipal, que conoce los pormenores legales, sostiene en entrevista:

—Dentro de un juicio de amparo, las autoridades responsables deben rendir un informe sobre los actos reclamados. En este caso, el acto reclamado es el desacato, al incumplir una orden del Tribunal Local de Justicia Administrativa que indica que detengan provisionalmente la licitación de patrullas, que se resuelva el juicio de nulidad que interpuso una de las empresas afectadas. Al respecto, el Ayuntamiento debe informar si es cierto o no. Se debe precisar que no hay discusión sobre si se detuvo o no la licitación, porque es público que el fallo lo otorgaron después de recibir la notificación de la medida cautelar.

—¿Ante la suspensión de la licitación, ordenada por una autoridad judicial, qué debe hacer el Ayuntamiento?

—El Municipio tiene tres opciones: negar el acto, reconocerlo u ofrecer una resolución manipulada o, en su caso, ser omiso al responder. Si lo niega, mentiría, porque es evidente que mentir ante un juez federal es delito penal. Si ofrece como estrategia de deslinde la resolución manipulada de la Sala Superior, donde se

resolvió sin tener el expediente del caso, incurrirían en fraude procesal, otro delito. Y si son omisos y no responden nada, se daría por sentado el acto, el desacato, en este caso, lo que constituye delito penal.

—¿Entonces qué ruta seguiría el caso desde lo legal?

—Lo que hagan, respondan u omitan, considero que este asunto terminará formando parte de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Esto colocaría el caso lejos de las manos del operador político y jurídico, Rafael Martínez, el excuñado del gobernador y ahora sí las autoridades federales tendrían la gran oportunidad de regresarle la esperanza a los jaliscienses de que la justicia es para todos y no sólo para los amigos [y cómplices] de Enrique Alfaro.

A pesar de que el juez Décimo Noveno en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo ordenó, en conjunto con el magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, Armando García Estrada, que se suspenda la licitación respecto al arrendamiento de patrullas en el municipio de Guadalajara, el alcalde Pablo Lemus aseguró que no se va a detener el proceso. Su expresión evidenció un abierto desacato a la autoridad judicial en Jalisco, al afirmar que no acataría el fallo para suspender el arrendamiento de patrullas:

“El proceso para tener 763 unidades nuevas en Guadalajara no se detiene [expresó Lemus], es más, tenemos ya la primera entrega programada para la próxima semana. Todo va en ruta, simplemente, se le informará al juez que el proceso ha sido concluido, contratado, pagado y, por lo tanto, no hay forma de revertir absolutamente nada”.

En otros puntos, el alcalde de Guadalajara aseguró que lo solicitado por el juez —la suspensión de la adquisición de patrullas— no puede ser, pues es un acto consumado el hecho de que los contratos ya fueron adjudicados y pagados.

Sin embargo, la adquisición de las patrullas, de acuerdo con las bases de la licitación, no serían pagadas por adelantado, sino mediante el esquema de arrendamiento, entre enero de 2022 y el 30 de junio de 2024. Lo que indicó, a juicio de las fuentes consultadas, que para nada constituía un acto consumado.

Con todos estos detalles e irresoluciones, el escándalo de corrupción alcanzó una dimensión nacional, tanto, que la Secretaría de la Función Pública revisó el expediente. La Fiscalía General de la República pudo intervenir en el caso debido a la dimensión del tema, considerado un asunto de corrupción del más alto nivel. Pero nada se hizo.

Una precisión más detallada de esta operación indica los modos como se mueven muchos hilos de poder, no ya a nivel de Guadalajara, sino del estado de Jalisco y posiblemente, en el plano decisor nacional.

De diciembre de 2021 a la fecha, el tema pasó por varias etapas administrativas y judiciales desde que el Comité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara adjudicó la licitación pública local LPN-010/2021 a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V., pese a que presentó la propuesta más cara con el monto superior a los 792 millones. La irregularidad que salió a flote fue un sobreprecio de casi 400 millones de pesos.

Ante los vicios y anomalías evidentes en dicha licitación, el 14 de diciembre de 2021 una empresa participante en el concurso acudió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco e interpuso una demanda de juicio de nulidad.

Esta quedó radicada en la Cuarta Sala Unitaria, a cargo del magistrado Armando García Estrada. Dos días después, el 16 de diciembre de 2021, la instancia judicial notificó al Ayuntamiento de Guadalajara la suspensión provisional del proceso de licitación para adquirir 763 vehículos; entre otros, 290 patrullas equipadas.

Los enredos y manejos oscuros comenzaron cuando José Ramón Jiménez Gutiérrez, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, emitió un fallo en contra de la suspensión a pesar de no tener el expediente del caso a la vista. Esto colocó al juez contra la pared y, por ello, estuvo a punto de enfrentar un delito contra la administración de la justicia que se castiga con diez años de cárcel. Sin embargo, fue cobijado con impunidad.

De igual forma, salieron a relucir versiones del propio magistrado respecto a que la demanda de origen se encontraba en la Cuarta

Sala, lo que evidenció que la Sala Superior nunca atrajo el caso, como quedó demostrado posteriormente. Otra anomalía mayor fue que, al parecer con documentos falsos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento desacató la suspensión emitida por la Cuarta Sala y, así, el alcalde Lemus Navarro le adjudicó la licitación a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V.

En las demandas que siguieron, interpuestas en el Ayuntamiento por la fracción de MORENA encabezada por Carlos Lomelí Bolaños, salió a relucir que una empresa participante en el concurso hizo una oferta con un 40 % menos que Integradora de Apoyo Municipal, pero fue desechada por barata.

A todo esto, siguieron otros recursos legales. Una de las compañías inconformes interpuso el oficio de amparo IV-4524/2021, el cual fue radicado en un Juzgado 19 de Distrito en Materia Administrativa y que otorgó la suspensión provisional el 3 de enero de 2021.

Los enredos en los que incurrió el magistrado presidente de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, José Ramón Jiménez Gutiérrez, lo hundieron aún más en la confusión y en el descrédito, al salir a flote sus falsedades. En enero de 2021, este le informó al juez federal haber resuelto anular la suspensión el 15 de diciembre de 2020, al tener a la vista el expediente del caso. Sin embargo, su versión resultó ser falsa, pues el expediente todavía continuaba en la Cuarta Sala.

La evidencia de lo anterior se debió a que emitió un fallo sin tener el expediente en sus manos, todo ello, para favorecer la licitación del Ayuntamiento, cuestionada por los 400 millones de sobreprecio.

Caben las preguntas: ¿por qué el magistrado resolvió anular la suspensión sin conocer el expediente?, ¿se lo ordenaron?, y de ser así, ¿quién se lo habría exigido?, ¿y con qué fin incurrió en el delito de actos contra la administración de la justicia? Las respuestas se pueden inferir, pero a más de tres años del caso, no se conocen las verdaderas razones de estas acciones del alto mando del Poder Judicial.

Jiménez Gutiérrez se vio envuelto en un problema mayor y, por ello, utilizó cuanto recurso tuvo en sus manos para exigirle a la

Cuarta Sala el expediente original 4524/2021, así como los sellos y el reloj checador.

Este asunto derivó en amenazas, acosos y presiones de todo tipo por parte del Ayuntamiento y de la Fiscalía de Jalisco para que dicho expediente le fuera entregado al magistrado Jiménez Gutiérrez, sin el cual no tendría elementos para justificar su veredicto de anular la suspensión de la licitación.

Por ejemplo, el magistrado presidente de la Cuarta Sala Penal, Rubén Bravo Ortega, acudió al Ayuntamiento de Guadalajara para entregar el oficio que acreditaba la suspensión del proceso de licitación. Pero fue recibido con insultos, amenazas y un acoso feroz por parte de elementos de la Fiscalía Investigadora de Jalisco que portaban armas.

Además, se le abrió una carpeta de investigación por parte de esta Fiscalía, que también participó en los acosos y presiones en este caso. El notificador del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco fue informado de un citatorio emitido por la Fiscalía del Estado de Jalisco. No le dijeron de qué lo acusaban ni en qué calidad acudiría a la Agencia 7 del Ministerio Público. Así de fuertes fueron las presiones en Guadalajara por el caso de las patrullas.

Quedó en evidencia el desacato a la ley por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Incumplieron dos suspensiones —la de nulidad y la de un juzgado federal— y se decidió que el expediente no se le entregara a la Sala Superior —la que preside el magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez— hasta que se resolviera la suspensión definitiva.

En un chat manejado por personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y en particular de la Cuarta Sala, se expusieron algunos pormenores del acoso que enfrentaron funcionarios de dicha instancia judicial por parte del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. A continuación, algunos extractos de una de las conversaciones a las que se tuvo acceso:

“Necesitamos que todo el mundo se entere de que Pablo Lemus está amedrentando al personal que trabaja en la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco.

Haciendo uso de su poder, envió a la Policía Investigadora por

uno de los actuarios de la Cuarta Sala, que fue quien le notificó la sentencia que no le favorece a su intención de hacer negocio con la adquisición ilícita de patrullas.

No le basta con que un juez federal le reitere en una sentencia que la resolución de la Cuarta Sala era correcta, se pasa las suspensiones [estatales y federales] por el [...], sustentándose de un expediente falso para auto permitirse esa licitación y encima monta un espectáculo en el que penosamente se prestan los mediocres e ignorantes miembros del Deshonorable Congreso de Jalisco y los poco profesionales medios de comunicación.

La ignorancia está por encima de todas las personas, gracias a la ignorancia, se engrandecen personas como Pablo Lemus y hacen abuso de poder en plena luz del día, lo presumen, hacen show y la gente ignorante lo enriquece en redes sociales”.

Ha sido tanto el revuelo por el tema de las patrullas, que el expediente de este polémico asunto finalmente llegó a la Fiscalía General de la República, a las comisiones Nacional de Derechos Humanos e Interamericana de Derechos Humanos. Además, el escándalo fue ampliamente conocido en todas las instancias del gobierno de Jalisco, incluida la Fiscalía que, por cierto, estaba acéfala en ese tiempo, tras la extraña renuncia del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, presuntamente, por problemas de salud.

El escándalo de corrupción en Guadalajara llegó a su máximo de ebullición luego de que el regidor de MORENA en el Ayuntamiento de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, interpusiera una demanda en contra del alcalde tapatío Pablo Lemus. La demanda fue aceptada el 26 de enero de 2021 en el Juzgado Segundo de lo Civil, cuyo titular es el juez Alan Rafael Acosta Navarro.

Presentada originalmente el 17 de enero de 2021, la querrela fue denunciada por el coordinador de los regidores de MORENA luego de que el alcalde Lemus Navarro declaró que el regidor morenista lo pretendió extorsionar al pedirle, supuestamente, que a cambio de aprobar la licitación de las patrullas y motocicletas para la policía municipal, gestionara ante el gobierno de Zapopan algunos permisos para la operación de unas bodegas —presuntamente, propiedad de Lomelí Bolaños— ubicadas en Periférico Poniente, a la altura de la colonia El Colli.

El tema de las patrullas se convirtió en un vodevil con el que salen a la superficie las corruptelas de funcionarios y altos mandos del Poder Judicial de Guadalajara, como reproductor de una escala mayor que es Jalisco.

En la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el magistrado presidente Armando García Estrada hizo evidentes las anomalías que hay en dicho arrendamiento, los documentos falsos y las firmas apócrifas. La valentía del magistrado para hacerlo público provocó el estallido de Lemus Navarro —al estilo de Enrique Alfaro Ramírez—. Y presentó una demanda en contra del magistrado García Estrada por diversos delitos, incluyendo acoso sexual.

El magistrado grabó un video que subió a Facebook el 20 de junio de 2022. En el mismo destacó las diversas irregularidades en las que incurrió el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara. Declaró que la denuncia en su contra fue un distractor creado por el alcalde para omitir el origen de la causa de lo que el magistrado representa.

Recordó que una empresa participante acudió a presentar un juicio de nulidad. Este correspondió a la Cuarta Sala presidida por él y, tras un análisis jurídico exhaustivo, se dispuso la admisión de la demanda. Así lo explicó en dicho video:

“Un proceso que desafortunadamente fue muy desaseado desde su origen, con documentos falsos. Prueba de ello es que los propios regidores de su municipio [en referencia a Lemus Navarro] impugnaron y ejercieron las acciones legales correspondientes [...] en la renta de patrullas y equipos de seguridad, por más de 790 millones”.

El magistrado insistió en que su deber y sus funciones para la sociedad han sido “para erradicar la delincuencia que inunda la ciudad, [...] dentro de lo que marca la ley [...] se debe comprar lo mejor y lo más barato”. Pero en este caso no fue así.

El alcalde Lemus Navarro presentó su querrela en su contra en mayo de 2022. Acudió con su equipo jurídico a la Fiscalía de Jalisco. Y en una amplia convocatoria mediática expuso que demandaba al magistrado por cuatro delitos señalados:

“Enriquecimiento ilícito, previsto en el Artículo 153 del Código Penal del Estado de Jalisco. Acoso sexual, contemplado en el numeral 176-*Bis* del Código Penal del Estado de Jalisco. Delitos cometidos en la administración de justicia, que prevé el Artículo 154, Fracciones I, VII y XI del Código Penal del Estado de Jalisco. Y abuso de autoridad, previsto en el numeral 146, Fracción VIII del Código Penal del Estado de Jalisco”.

Envalentonado con su denuncia presentada ante la Fiscalía, Pablo Lemus informó que el Ministerio Público determinaría si procedía la solicitud de juicio al Congreso del Estado de Jalisco para entablar un proceso contra el magistrado Armando García Estrada. Y en su arrogancia sostuvo:

“Una vez que la investigación se encuentre más adelantada, vamos a regresar al propio Poder Legislativo del Estado de Jalisco para solicitar que, con base en estas pruebas, a esta denuncia penal, se pueda hacer ya por fin el procesamiento del magistrado Armando García Estrada, pues para retirarle, no solamente el fuero, sino retirarle definitivamente de su cargo”.

Tras los alegatos de Lemus Navarro, la UIF afirmó haber comprobado principalmente la adquisición de bienes inmuebles por parte de García Estrada, los montos eran superiores a sus ingresos.

Pero más adelante, el propio Tribunal determinaría que el Ayuntamiento de Guadalajara usó documentos falsos para justificar el desacato a la suspensión que impedía la renta de las 290 patrullas con sobreprecio.

Con base en estas resoluciones, dicho asunto quedó integrado en el expediente de un juzgado federal. También poseen conocimiento del tema la Fiscalía de Jalisco y la FGR.

El tema de las patrullas no ha dejado de sorprender con nuevas evidencias. Salieron a la luz pública documentos que prueban que el Ayuntamiento de Guadalajara compró la oferta más cara—más de 400 millones de pesos de sobreprecio— y desechó la opción más barata bajo el argumento de que la torreta de las patrullas no era la adecuada.

Esa ha sido la presunta razón por la que el Ayuntamiento de Guadalajara debió desembolsar cientos de millones de pesos por encima de lo normal.

La demanda por el sobreprecio la presentó un ciudadano, Carlos Ruiz. Al ser ratificada, el presidente municipal, Pablo Lemus, tuvo que acudir a declarar.

Él, aliado de Enrique Alfaro Ramírez, viene a representar otro eslabón más del oficio político que tienen las altas esferas de Movimiento Ciudadano. Quienes intentan legitimarse como una organización preocupada por el bienestar social y un ente democrático. Sin embargo, resulta que desde sus altas esferas es un gobierno autoritario e igual a otras administraciones del PRI y del PAN. Aunque difiere en que no se exhibe desde una tendencia derechista o de izquierda —pero dice ser de esta última dirección—.

En septiembre de 2022, los regidores de MORENA presentaron el llamado “Contrainforme”. En el que atizaron que no sólo fueron las patrullas, sino que el Ayuntamiento de Guadalajara se ha caracterizado por compras a sobreprecios:

“Tenemos una administración que está reprobada en seguridad pública, pese a las inversiones para el arrendamiento y compra de equipo y vehículos. Es muy claro que Pablo Lemus no está bien ni de buenas, su gobierno está reprobado”, expuso el edil morenista, Carlos Lomelí Bolaños.

En reunión con la prensa, estos regidores señalaron que documentaron de primera mano “evidentes prácticas de corrupción” y “excesos en la administración”.

“Lamentablemente, en el informe que nos entregó, nos pintó una ciudad que sólo él ve y su equipo, pero no corresponde a la realidad que requieren los ciudadanos”.

Aunado al escándalo de las patrullas, está el pago excesivo a la empresa SULO por el mantenimiento y limpieza para el programa Puntos Limpios y papeleras. Por 120 Puntos Limpios, el municipio realiza un pago unitario mensual de 11,542 pesos. Y de 114 restantes por cada punto (a cargo exclusivo de la empresa), se hace un pago de 32,109 pesos. De modo similar continuaron las declaraciones de cifras que evidenciaron un desorden financiero conveniente para cualquier negocio turbio. Todo representó un costo total mensual de casi 5 millones de pesos. Anualmente, el despilfarro se disparó hasta los 60 millones de pesos.

La regidora morenista del Ayuntamiento de Guadalajara,

Candelaria Ochoa Ávalos, se ha quejado de los proyectos mercantilistas de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, dedicados a autorizar la construcción de edificaciones a precios inalcanzables para la compra o renta de los tapatíos. Por su parte, el regidor de Guadalajara, Salvador Hernández Navarro, presentó un panorama de la situación que viven los 95 mercados de la ciudad y las propuestas que han promovido para su dignificación y reactivación. Hasta ahora han sido ignoradas. La regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, arremetió contra las compras a sobreprecio autorizadas por parte del Comité de Adquisiciones, como fue la adjudicación de la edificación del C5 por un monto de 167 millones de pesos, costo que no incluye la compra de cámaras de vigilancia.

Otro punto criticado fuertemente a Lemus Navarro ha sido el de los negocios turbios que tejió cuando fue alcalde de Zapopan: otorgó contratos municipales a empresas que implicaron a su jefe de Gabinete, Juan José Frangie Saade. Se trató de diez contratos por un monto superior a los 36 millones de pesos para la renta de equipo de copiado a la Distribuidora Tecno Office. Frangie Saade es accionista de la misma, aunque lo negó varias veces a la prensa.

Además, otorgó un contrato de 812,000 pesos a la empresa Tecnologías para el Espectáculo S.A. de C.V., de la que es socio el propio exalcalde de Zapopan —hoy edil de Guadalajara—, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Gobierno de apariencias

Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias es regidor por MORENA en el Ayuntamiento de Zapopan y proviene del movimiento “obradorista”. Conocido por su oposición a Alfaro Ramírez y a la corrupción naranja, asegura que la administración de este gobernador es “de relumbrón”, pues no hay causas de fondo ni una ocupación por los problemas que tienen Jalisco y sus habitantes. Su máxima en este sexenio —asegura— es beneficiar a unos cuantos, socios y amigos:

—No hay una preocupación por los desaparecidos, por la seguridad. Tampoco le preocupan los pobres ni las agresiones a las mujeres. No hay una preocupación genuina por los niños.

—¿Cómo definiría el gobierno de Alfaro?

—Tenemos un gobierno de empresarios para empresarios, dirigido por una persona intolerante. Alfaro gobierna para sus amigos. En los diversos programas de gobierno que implementa siempre busca beneficiar a alguien cercano a él.

Puerto Covarrubias acepta la entrevista en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, ciudad que sufre la violencia entre cárteles del narcotráfico. Es parte del “agujero negro” en que se ha convertido esta región, con los desaparecidos en el Área Metropolitana y el desastre inmobiliario ocasionado por los amigos del gobernador.

“Algo que ya es *vox populi* es que Alfaro gobierna para los intereses inmobiliarios. Él es hijo, sobrino y socio de los intereses inmobiliarios de toda la zona metropolitana. No vamos lejos, la constructora ‘Tierra y Armonía’ [...] es propiedad de sus tíos. Sus amigos tienen constructoras, Hugo Luna hace negocios ahí [...] Invierten en bienes raíces, incluso para sacar tajadas en la especulación”, revela el joven regidor de MORENA.

De acuerdo con una investigación de *Reporte Índigo*, desde que Alfaro Ramírez fue alcalde de Guadalajara y Tlajomulco hay empresas consentidas: Grupo Inmobiliario Mendelssohn y la mencionada por Puerto: Tierra y Armonía. Estas constructoras son propiedad de José Errejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro, tíos del hoy gobernador jalisciense.

Otro “empresario estrella”, a quien ningún funcionario jalisciense le puede decir que no, es el exsenador priista, Raymundo Gómez Flores. Se autotitula como mentor político del gobernador. Hoy es un boyante empresario en los ramos de autotransporte, construcción, alimentos y turismo. En la construcción es el dueño del Consorcio Inmobiliario GIG.

El 23 de junio del 2022, el propio Gobierno de Jalisco le otorgó un amplio reconocimiento por su “trayectoria empresarial”. El diploma hecho en fina madera y cristal antirreflejante fue entregado personalmente por Enrique Alfaro Ramírez, quien posó para la

fotografía al lado de su mentor político y hoy constructor favorito.

“El reconocimiento es de carácter honorífico para los empresarios y empresarias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los jaliscienses. Por primera vez se entrega a un hombre extraordinario, empresario ejemplar que cambió para siempre la manera de hacer política en Jalisco”. Fueron las palabras de regocijo dichas por el propio Alfaro ante la élite empresarial de Jalisco ahí presente.

El exsenador y mentor del gobernador es fundador de la organización Jalisco a Futuro. La cual se presenta como integrada por los más importantes jaliscienses del área política, económica, social y cultural.

El regidor morenista, Alejandro Puerto, encuentra una explicación a estas saluciones gobierno-iniciativa privada: “Es la primera vez que el mercado inmobiliario gobierna el estado”.

Expone que es notorio cómo el gobierno y sus empresarios afines tienen especial interés en las zonas de desarrollo de Zapopan y Guadalajara, donde es muy visible la inversión pública, en muchas ocasiones, de dudosa procedencia.

“Hay una especulación inmobiliaria fomentada desde el gobierno. Crean crisis. Tienen un interés muy especial en zonas de valor ecológico. Disfrazan proyectos autosustentables. Porque garantizan el abasto al agua, pero es un robo a la nación”. Insiste con una clara intención por hacer ver qué hay detrás de cada apariencia.

El edil morenista acusa que no sólo es la anarquía y los negocios inmobiliarios el cáncer de Alfaro Ramírez. Están los daños sociales como la represión policíaca o el problema no atendido de los desaparecidos:

“Nuestro principal problema es el flagelo de los desaparecidos y el gobernador se ha portado muy indiferente. Siempre dice que en algo [ilícito] andaban. No comprende, no cavila que eso pueda pasar en su entorno tan reducido”.

Alejandro Puerto también ve sepultadas las aspiraciones presidenciales del gobernador. Considera que hubo una mala estrategia durante la pandemia por el coronavirus. Mientras la gente sufría por la pérdida de un ser querido, por la ausencia de empleo y el encierro, Alfaro Ramírez cayó en contradicciones como ordenar o

permitir la represión social por no cumplirse con los rigores del período crítico. Pero él sí podía asistir a restaurantes a beber vino y comer pizzas:

“Hay que entender que Alfaro vino a llenar un hueco que era la oposición frente al priismo. Lo supo llenar bien. Pero cuando sucede la pandemia, él vio una oportunidad de aspirar. Pero cayó en una contradicción, porque reprimía a gente y a jóvenes por no usar cubrebocas; pero él sí salía y seguía firme con su proselitismo”.

Puerto insiste en que, a partir de ahí, algo cambió en el ánimo personal del gobernador. Su buena imagen se debilitó en las redes sociales. Empezaron las críticas en medios nacionales: “Se le empezó a ver cansado, ya intolerante”. Su proyecto político rumbo al 2024, en efecto, se derrumbó.

Absoluto Alfaro

“El gobierno de Enrique Alfaro es incompetente, indiferente y autoritario. Es la primera vez que lo digo con todas sus letras”, suelta de tajo la diputada jalisciense, Mara Robles Villaseñor.

“Creía en él, yo le pedía causas [...] no posiciones ni dinero ni poder, sino apoyar causas sociales. Trabajamos juntos en su campaña, no sé en qué momento se perdió”, explica la diputada y exsecretaria de los gobiernos de izquierda de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera en la capital del país.

Doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo en Asturias, España, Robles Villaseñor es además maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y licenciada en Economía y especialista en Planeación de la Educación Superior por la UdG. Con toda su formación y experiencia en el ámbito político, se muestra “desencantada” con el gobierno de Alfaro Ramírez. Sobre todo, porque violó el mandato constitucional de la división de poderes: “En donde el Poder Legislativo es una Oficialía de Partes de la Oficina del Gobernador y el Poder Judicial también se encuentra subordinado a Alfaro”.

Es una mañana soleada en Guadalajara, en los pasillos del viejo

recinto legislativo hay mucho ajeteo. Diputados van y vienen con el teléfono celular pegado a la oreja. La mayoría pasan indiferentes a las quejas ciudadanas. Es la víspera de la comparecencia del fiscal de Investigación Criminal, Luis Joaquín Méndez Ruiz. La bancada de Movimiento Ciudadano lo ha “blindado” para que comparezca a puerta cerrada, sin acceso de público ni prensa ni de colectivos feministas. Es el polémico caso de Luz Raquel Padilla. Una joven a quien la Fiscalía señala de haberse “suicidado” en un parque, luego de comprarse un encendedor y una botella de alcohol en la capital de Jalisco.

Este doloroso hecho sonó absurdo para miles de personas en la entidad, aun más a nivel nacional. Pero desde que gobierna Alfaro, en la Perla de Occidente suceden muchas cosas “absurdas”.

Una de ellas es la procuración de justicia. De entrada, Joaquín Méndez Ruiz llegó a la Fiscalía del Estado impulsado por su yerno, Octavio Solís Gómez, quien prácticamente le “heredó el cargo” tras presionar a diputados para que votaran por su pariente político. Y el poder a Solís se lo dio la gubernatura interina que tuvo en el periodo de 2006-2007.

Es el segundo piso del Palacio Legislativo. La diputada local del Movimiento Ciudadano, Robles Villaseñor, se sienta en una banca de acero y pone “los puntos sobre las íes” respecto a su decepción hacia el gobierno de Alfaro. Le apoyó en la campaña de 2018, en una plataforma político-electoral con la cual generaron una alta expectativa entre los jaliscienses y en el espectro nacional.

“Ustedes lo saben. Yo apoyé la candidatura de Enrique Alfaro, lo hice por convicción. Recorrimos juntos el estado. Yo voté por Alfaro porque acordamos crear el Servicio Profesional de Carrera. Acordamos combatir la obesidad y el sobrepeso infantil; otro compromiso es que la UdG saliera de la crisis financiera y uno más la refundación del estado y en todas claudicó [...] ¡Claudicó!”, lamenta Robles.

La exdiputada federal aseguró que había propuestas concretas para avanzar en cada una de las causas sociales que tanto le hacían falta a Jalisco: “En el caso del Servicio Profesional de Carrera, teníamos toda la ‘expertise’, teníamos una propuesta concreta. Y después claudicó en eso. Habíamos acordado otorgar

puestos basados en el conocimiento y en un servicio profesional y no como botín de cargos para amigos y compadres”.

La Educación fue otra de las líneas de campaña que Alfaro Ramírez abandonó apenas se entronizó como gobernador. La propuesta inicial planteaba el programa de las escuelas de tiempo completo en la educación básica y media. En la educación superior, elevar el costo por alumno de la Universidad de Guadalajara, para subir la calidad educativa. Llegando al poder, Alfaro Ramírez se desentendió.

La legisladora no entiende ni la comunidad universitaria tampoco, el encono tan grande que el gobernador tiene con la UdG, con quienes tiene un pleito y una persecución política desde el inicio de su administración.

“Yo me pregunto: ¿el principal problema de Jalisco es la Universidad de Guadalajara, sus académicos, sus aportes a la comunidad? Lo que sucede es que Alfaro tiene alergia a la autonomía universitaria. El gobernador quisiera ser gobernador y rector de la Universidad al mismo tiempo”.

Su plataforma de campaña en apoyo a la educación quedó como un catálogo de buenas intenciones y de propaganda gubernamental: ninguno de estos ideales aterrizó en el Palacio de Gobierno de la calle Pedro Moreno.

“Alfaro es muy inteligente, muy audaz, tiene una gran formación intelectual, mucha fuerza, tiene empaque, tiene callo, es preparado [...] No son pocas características. Pero luego abandonó sus causas. ¿Por qué? ¡No lo sé! Y nos abandonó, a quienes creíamos en su gobierno.”

Robles Villaseñor inhala aire. Cita al primer ministro británico y militar Winston Churchill, quien decía que hay quienes cambian de principios para estar en el partido y hay quienes cambian de partido, pero siguen con los mismos principios. Y en esa tesitura la diputada local se alejó por completo de Movimiento Ciudadano en Jalisco y del gobierno de Enrique Alfaro.

“Hay una especie de esquizofrenia en el MC de aquí, con el autoritarismo de Alfaro. Y otra cosa es lo que sostiene el Movimiento Ciudadano a nivel nacional. La agenda ciudadana del MC en [Palacio Legislativo de] San Lázaro es exactamente lo contrario a lo

que hacen acá [...] ¡Cómo extrañamos a Clemente Castañeda [Senador de Movimiento Ciudadano y cercano al gobernador]! ¿Cómo rescato yo de ese instituto político a Dante Delgado y a otros más, pero no a Alfaro?”.

Robles Villaseñor repasa con memoria fotográfica las pifias y escándalos que han manchado a Jalisco en los últimos tiempos. Recuerda la represión policíaca del 5 y 6 de junio de 2020 a los estudiantes en la Fiscalía de Jalisco, por el asesinato de Giovanni López Ramírez, un joven albañil que murió después de ser detenido por la agentes de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Fue detenido el 4 de mayo en dicho municipio, en la Área Metropolitana de Guadalajara. Su familia aseguró que la policía lo detuvo por no portar cubrebocas. Un día después de su detención, murió por traumatismo craneoencefálico y lesiones, entre ellas un balazo en la pierna. Sólo detuvieron a tres policías, dos de los cuales fueron liberados en junio de 2022.

Cristian López, su hermano, acusó que días después del asesinato, el alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, los presionó para no difundir el video de la detención. También ofreció 200,000 pesos de soborno, como una manera de frenar el escándalo por la vejación policíaca.

El Gobierno de Jalisco se convirtió, una vez más, en escándalo nacional. Este homicidio ocasionó dos días de disturbios por la comunidad estudiantil de Guadalajara, quienes protestaron en la Fiscalía de Jalisco y en el centro de la capital. La policía volvió a ejercer su fuerza y hubo más de 30 detenidos. Las imágenes de la represión, los grafitis y el incendio de algunas patrullas se viralizaron en las redes sociales. Se unieron a la indignación los actores Cecilia Suárez y Gael García Bernal con la frase: “Giovanni no murió, lo mató la policía”. #JusticiaparaGiovanni.

Otro desatino en el gobierno de Alfaro Ramírez ha sido la elección de los consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, quienes fueron puestos por él aunque no cumplían con los perfiles. Estos ya se encuentran en el ojo del huracán, pues diversos colegios de abogados los acusan de actuar con opacidad para ejercer y transparentar el gasto de esa oficina. Anualmente,

manejan un presupuesto de 1,592 millones de pesos y no han sabido explicar en qué gastan más del 20 % de ese recurso.

Alfaro Ramírez atacó al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción: “¿Y por qué los atacó? —se cuestiona Robles Villaseñor—. Fácil, porque el Comité se inconformó con una arbitrariedad, con actos de corrupción [...] y a Alfaro eso le molestó”. Se irritó, porque un comité ciudadano pugnó por una rendición de cuentas con todo el derecho de cuestionar su rendimiento.

Después vino el intento de secuestro del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Él se lo quiso dar “en charola de plata” a MORENA, como componenda política, pero poniendo a un titular completamente subordinado suyo.

En Jalisco, el coordinador legislativo de la bancada de MORENA, José María *Chema* Martínez, es un expanista que no ha tenido empacho alguno en hacer tratos con las cúpulas del Movimiento Ciudadano —provenientes del PAN— y con el expriista Enrique Alfaro Ramírez. Porque en “La Perla de Occidente” no existen colores partidistas para los negocios y componendas gubernamentales, ideológicas o políticas.

Desde la silla principal del Palacio de Gobierno de Jalisco también hay una especie de intento de “Ley mordaza”. Alfaro Ramírez no quiere que los académicos abran la boca: “Él quiere que el Centro de Estudios de Género de la UdG no diga que hay feminicidios. Que los académicos no critiquen las políticas públicas. El problema de fondo es la violación a la autonomía universitaria y una violación a la división de poderes. Pero como el Congreso [del Estado de Jalisco] está subordinado, no hay equilibrio de poderes”, lamenta Robles Villaseñor.

En el último ejercicio fiscal estatal, el gobernador le arrebató una alta suma presupuestaria a la Universidad de Guadalajara, concebida para la construcción de un museo y un centro de investigación en ciencias ambientales.

“No es el capricho de quitarnos 140 millones, lo cual ya ofende. Es el capricho de mostrarnos que él, como Enrique Alfaro, hace lo que quiera y no pasa nada. No le basta subordinar al Legislativo y al Judicial, ahora quiere doblegar a la Universidad”, prosigue Mara.

Robles Villaseñor, adscrita a Hagamos, nuevo partido inscrito desde 2020 en Jalisco, asegura que en la entidad existe una auténtica mafia relacionada con firmas, empresas o compañías dedicadas a la inversión, construcción y ocupación territorial para rentas y ventas de bienes inmuebles. La prueba está en el complejo Iconia Cubos Luxury Living, la empresa que pretende construir 13 hectáreas de departamentos residenciales sobre Huentitán, Jalisco (en el área que estaba destinada para el parque metropolitano) y que ha sido largo motivo de protestas, acciones, represiones y detenciones, como la de los estudiantes de la UdG ya referidos, que exhibieron el contubernio del gobernador con diversos poderes corruptos contra lo mejor de la sociedad:

“En el estado existe un Cártel inmobiliario que depreda áreas verdes, mi ejemplo se llama Iconia; pero hay más, en Jalisco hay empresarios y constructores que gozan de impunidad [...] ¿Por qué?, porque la Fiscalía Anticorrupción no ha dado resultados”.

En junio de 2021, Robles Villaseñor propuso desde el Congreso del Estado de Jalisco cancelar ese proyecto inmobiliario y, de paso, retomar el proyecto original para este terreno que fue entregado a particulares desde 2008.

En esas fechas, el Ayuntamiento de Guadalajara cedió el área a la firma española Mecano América para edificar, desde enero de 2009, el desarrollo inmobiliario Puerta Guadalajara. Después pasó a manos de Hoteles Salamanca para desarrollar Distrito Iconia, complejo habitacional con la inclusión de una zona comercial. Por último, fue vendido a Hoteles Riviera. En todas esas transacciones destruyeron el proyecto original, gracias al tráfico de influencias.

En procuración de justicia, Robles Villaseñor fustiga que el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz ni siquiera presentó en tiempo su plan de trabajo al Congreso del Estado de Jalisco. Y esto es derivado de la falta de autonomía de la Fiscalía estatal:

—Estamos en un punto en donde en Jalisco se trastoca la autonomía constitucional.

—¿Hay un problema severo del debilitamiento de poderes? —se le cuestiona.

—Quisiera lanzar la siguiente reflexión: todo poder, el que sea, merece resistencia. Todo poder está obligado a no ser absoluto. De

la calidad de la oposición depende el mejor desempeño del gobierno. Del equilibrio de los poderes, depende el buen desempeño del gobierno. Cuando el gobierno subordina al Poder Legislativo, se está dando un balazo en el pie, se priva de corregir sus errores.

En ese repaso y análisis sobre el autoritarismo de Alfaro Ramírez, su exaliada Robles Villaseñor ya no percibe con posibilidades concretas las aspiraciones presidenciales del gobernador, aunque las tenga:

—¿Le ve nulas posibilidades a Alfaro?

—Pensé en esa posibilidad cuando hablábamos de refundar Jalisco, pero no de refundirlo.

—¿De plano?

—Hubo una claudicación de sus causas y decidió ir por la tentación autoritaria y lamentablemente, le ha traído pobres resultados.

Y concluye de modo dilapidador:

—Salvo que las personas tengan Síndrome de Estocolmo...

El vacío ideológico

Francisco Félix Cárdenas hizo una maestría en sociología política por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Su tesis, “Sociología política de un grupo político: el Alfarismo en Jalisco”, se adentra —desde la metodología aportada por el intelectual Pierre Bourdieu, padre de la percepción relacional mediante los campos culturales— en los comienzos de un fenómeno que adquiere más cuerpo desde la segunda mitad de los años noventa del pasado siglo y posee, en el criterio investigativo de Francisco Félix, determinadas facetas o etapas; con una convergencia en Jalisco desde 1997 a 2011 —la génesis de lo que se considera el “alfarismo”—, a través de una mudanza partidista del PRI al PRD, pasando por la experiencia en Tlajomulco de 2009 a 2010; luego la mudanza del PRD a Movimiento Ciudadano, donde se consolida más el fenómeno hasta penetrar en la escena política nacional, más allá del estado.

Francisco Félix Cárdenas ahonda en los círculos de poder del “alfarismo”, en su concepción de la actividad política y del capital que se mueve en ese campo, sus estrategias y lo que pudiera sustentarse desde lo ideológico, con préstamos y reacciones a la tradición política jalisciense y mexicana.

Argumenta que el “alfarismo” en Jalisco no se puede comprender sin revisar la decadencia del PRI y del PAN. Estas opciones políticas dejaron de ser viables en la entidad y no sólo ahí, visto en una mayor perspectiva. A partir de dicha decadencia de los esquemas tradicionales, emergió un grupo político. Así surge “Tlajomulco”, que pasó a llenar esos vacíos ocasionados por quienes antes dominaban Jalisco.

En esta tesis, el autor entrevista a Jorge Federico Eufrazio Jaramillo, investigador del Colegio de Jalisco, quien explica el nacimiento del grupo “Tlajomulco”, representado por Enrique Alfaro Ramírez y una pandilla de secuaces.

Varias de las estructuras con las que él haría campaña para gobernador provenían de viejas conformaciones del PAN, del PRI y del PRD. La sociedad apenas se atrevió a participar en política. Como suele suceder, ni fue analítica ni activa respecto al engendro político que se empoderó. Sólo se afilió o apoyó a un nuevo instituto político como Movimiento Ciudadano, actualmente, tan cuestionado como el decadente PRI. Únicamente sirvió de “relleno” para este instituto político, cuyo control fue tomado en su totalidad por la gente del gobernador.

Él y sus amigos se apoderaron de Movimiento Ciudadano. Hasta entonces era un partido sin estructura ni representación en Jalisco. Alfaro Ramírez aprovechó sus redes faccionales para retomar estructuras de otros institutos políticos y así competir por cargos públicos bajo el esquema de una “buena política ciudadana”, lo que terminó en debacle.

Su círculo siempre estuvo alrededor del actual senador de la República, Clemente Castañeda Hoeflich, bajo el cobijo de Alfaro Ramírez, el exalcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, hoy en MORENA; su actual jefe de Gabinete, Hugo Luna Vázquez, aparentemente, con aspiraciones de suceder al gobernador y a Ismael del Toro Castro, *Pope* —autoexiliado de la política tras la

ejecución de El Cholo—.

Félix Cárdenas asegura que el “alfarismo” es un proyecto político caracterizado por el pragmatismo. Lo que se traduce, en buena medida, conforme su planteamiento, en una especie de vacío ideológico que permite asumir cualquier color político por carecer de bases ideológicas. El sustento es desde los intereses financieros y mercantiles.

En el documento académico se expone que Alfaro Ramírez insiste en la actual inexistencia de izquierdas o derechas. Por lo cual el hoy mandatario no tiene conflicto en acordar y negociar con quienes antes eran sus adversarios, inclusive, como se ha expuesto en esta radiografía, hasta con el narcotráfico.

Lamentablemente, en ese vaivén ideológico y lleno de intereses económicos, el “alfarismo” se perdió. Si bien mandó un mensaje que no era ni de izquierda ni de derecha, sino conducirse hacia adelante, lo que salió a flote fueron ideas neoliberales para favorecer a asociaciones político-privadas. Un claro ejemplo de ello fue la privatización de los espacios públicos por intereses inmobiliarios.

Incluso la tesis de Félix Cárdenas resalta que el gobernador utilizó como “carne de cañón” a la incipiente militancia de Movimiento Ciudadano en Jalisco, una estructura lineal, sin aspiraciones a una movilidad social. Desde tiempo atrás había quedado claro que el círculo cercano de futuros servidores públicos eran los amigos de este.

“DESGOBIERNO” EN OCCIDENTE

La “narcofiscalía” permite robo

En el Puerto de Manzanillo, en Colima, sucedió un “robo” de 50,000 dólares del cual el entonces fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, tuvo conocimiento. Ese hecho desencadenó una ola de “levantones” y asesinatos en contra de “empleados bisagras” del crimen organizado y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). En esta vorágine delincencial y criminal perdió la vida un inocente.

A través de amenazas y extorsiones del CJNG, vía celular, al padre de Rogelio Ruiz González, chofer camionero de la CTM, se logró saber que tanto Ruiz González como un sujeto apodado *El Coyote* —una “madrina” de la extinta PGR— fueron “levantados” y privados de la vida por haberse “chingado” 50 mil dólares de un cargamento —posiblemente, de droga— en Manzanillo. Ahí, un sicario del CJNG le pidió al padre de Rogelio depositar una fuerte cantidad para poderle regresar a su hijo con vida.

Y le añadió mediante mensajes: “Almaguer ya está enterado y también está muy encabronado, si quieres ver a tu hijo con vida, tienes que entrarle”. La comunicación entre el emisor del CJNG y el padre de Ruiz González se cortaría a los pocos días.

Algunos meses después, Almaguer dejaría la titularidad de la Fiscalía, pretendiendo ser diputado federal; sin embargo, perdió. Actualmente, es regidor priista del Ayuntamiento de Guadalajara, fue muy cercano a Aristóteles Sandoval Díaz, cuyo historial lo vinculó al narcotráfico y al lavado de dinero. Por eso lo mataron.

Tras el asesinato del exgobernador, Almaguer decidió dejar al PRI, pero no su cargo público, por lo que se declaró “regidor independiente” y ha bajado su perfil político y mediático.

Esta historia la narró Consuelo Elizabeth Velázquez, quien busca

a su marido Rogelio Ruiz González, chofer de la cervecería Corona, “levantado” por el CJNG desde el 23 de noviembre del 2015, junto con un amigo y El Coyote.

“Durante los primeros seis meses, todos los días iba al SEMEFO, [...] iba a la Fiscalía, al Ministerio Público. Una vez me pararon en seco los de la Ministerial y me dijeron: ‘No se arriesgue, no venga todos los días, lo que usted sabe es la punta del iceberg [...] se va a poner en riesgo’”.

Un día de enero de 2016, en los pasillos de la Fiscalía de Jalisco, Velázquez se encontró con el escolta principal del fiscal Almaguer, quien tenía la clave de *El Tiburón*, un tipo alto, robusto, corpulento, “parecido al Cochiloco, el de la película de *El Infierno*”. El empleado de seguridad la jaló de un brazo, la condujo debajo de unas escaleras y en voz baja le soltó:

“Yo no más le voy a decir una cosa, a mi compita *El Ricky* — Ricardo— se lo chingaron por ser buena persona, por andar con El Coyote [...] Él era una madrina de la PGR, por culpa de ese cabrón a mí me secuestraron dos meses. Él [Ricardo] ya está muerto. Que en paz descanse mi amigo El Ricky [...] Señora Consuelo, ya no se meta en problemas, porque más va a tardar en venir a hablar lo que sabe, que los de la plaza en enterarse”.

Ella siguió buscando y buscando rastros de su marido. Aquel consejo que le dio El Tiburón, luego se repetiría con otro emisario, pero de una forma muy hosca y de pocos amigos:

“De plano, me dijeron que yo me dedicara a cuidar a mis hijas y de ver por mí. Así textual me la cantaron: ¡Que mi marido estaba muerto!, y que en lo más que me podían ayudar era en ponerme a alguien para que me ayudara a localizar los cuerpos. Pero que ya dejara yo de buscar y de hacer alboroto en la prensa”.

Velázquez se adhirió al Colectivo Corazones Unidos y desde ahí comenzó la lucha de resistencia y búsqueda de su marido. En otras desapariciones, las madres buscan a sus hijas y jóvenes “levantados” en falsos operativos de la Fiscalía. Una dualidad extraña, porque mientras ministeriales los sustraían de sus hogares o de lugares públicos, las madres tenían que recurrir al mismo órgano de justicia que se los llevaban, para pedir apoyo a policías investigadores en la localización de sus hijos. La misma mafia era, a

la sazón, la autoridad estatal. En ese entramado, algunos elementos de la Fiscalía veían que “el fuego” del crimen organizado les pasaba muy cerca.

“Uno de los policías investigadores me dijo: ‘Yo ya no me puedo meter en tu caso, Consuelo. Me están amenazando, tu asunto está muy cabrón [...] tengo familia y mejor voy a pedir mi cambio a Vallarta’”. Y así lo hizo el investigador asignado.

El próximo averiguador al que le encargaron investigar la desaparición de Rogelio Ruiz “perdió el expediente” poco después de tomar el caso. Velázquez explotó y la mandaron a buscar de la Fiscalía con su colectivo. Ofrecieron una rueda de prensa con la confirmación de que el expediente ya había aparecido:

“Me dijeron: ‘aquí está el fiscal, aquí está el MP, aquí está el asesor jurídico’, aquí está no sé quién [...] Yo de plano les dije: Qué bueno que los tengo a todos juntos, ¡pero pa’ mandarlos a chingar a su madre!”.

Asegura que la desaparición de su esposo le desgració la vida a ella y a sus hijas. Además, se creó un círculo de desconfianza con su suegro, porque nunca se sumó a la búsqueda de su único hijo varón. Ahora Consuelo está enferma: tiene que cuidar los carbohidratos y azúcares que come y sus niveles de estrés por las amenazas que ha recibido como consecuencia de la búsqueda de los restos de su marido.

“El problema es que aquí es la mera cuna del Cártel. Guadalajara es grande, pero para ellos, es un pueblo chico y un infierno grande. En 2018 convoqué a rueda de prensa y reaccionaron rápido: Iba manejando un auto compacto, me siguió una RAM, me cierra el paso. Yo cambio de carril, se me pone enfrente, me cerraba el paso. Me meto en una lateral en Zapopan, pero la regué, yo por mensa, era una calle cerrada [...] yo dije, ya me cargó la chingada. Y que me bajan a punta de pistola”.

A Consuelo se le “enchina” la piel. Baja la voz y recordarlo la hace sonrojar. No se podía saber claramente si de miedo o de coraje. Le tiemblan un poco las manos y cuenta que de los cuatro sicarios que la cercaron, entre dos la tiraron “pecho a tierra” y uno le puso una pistola en la cabeza y sólo le gritó: “¡O le bajas de [sic] huevo o te los bajamos!”

—¿Eran del Cártel de Jalisco?

—Tal vez, pero también pienso que igual venían de la Fiscalía.

Velázquez hizo un alto en el camino. Bajó el perfil en el colectivo y con la prensa, decidió “enfriarse un poco”. De vivir con sus padres e hijas, se fue a vivir sola, cambiando continuamente de ubicación. Confiesa que muchas veces tuvo que dormir con sólo una cobija dentro de su coche.

Además, tuvo que soportar el estigma de su círculo de vecinos, quienes luego solían susurrar: “¡Por algo lo desaparecieron!”.

Velázquez me citó en la Parroquia de San Judas Tadeo, en la periferia del centro de Guadalajara. Cada 28 de octubre llegan a este templo “halcones”, sicarios, *dealers*, narcomenudistas y algún mando regional del CJNG para “celebrar” al patrono del Cártel, con tambora, mariachi y música norteña. No falta la cerveza, y, menos, el tequila. Sí, el Cártel de Sinaloa tiene a su Jesús Malverde, los de Jalisco Nueva Generación tienen a San Judas Tadeo.

De la iglesia caminamos por el barrio a una cafetería. Consuelo no se ha cansado de buscar a su marido. Ahora tiene la presión de la hija de ambos, quien se quiere involucrar en las brigadas de búsqueda y en las visitas a las fosas clandestinas: “quiere meterse, pero yo la quiero abrir por protección”.

También ha auxiliado a otras víctimas de desaparecidos para intentar encontrar a los suyos. Incluso abrió un perfil en Facebook para que ahí, mediante anónimos, se coloque información sobre predios privados donde haya fosas clandestinas.

“Muchas familias no saben ni por dónde empezar, tienen que pedir el mapeo, la geolocalización y la sábana de llamadas para empezar [...] En mi caso, desde hace más de un año me di cuenta que encontraron un ‘tinaco con pozole’ en un basurero de Zapopan. Y que tenía mucho que ver con la fecha de desaparición de mi esposo y al parecer ahí hay varias personas [...] Mandé a pedir a la Fiscalía la confronta del ‘tinaco’ y ya pasó más de un puto año y no me han dado respuesta. Ya sabemos y por qué causas, en la Fiscalía les encanta hacerse pendejos”.

La Casa del Terror

En la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en la colonia La Perla en Guadalajara, se escuchan auténticas historias de terror. Corren los últimos días de julio del 2022, policías ministeriales y agentes del Ministerio Públicos caminan de un lado a otro, botas lodosas, camisas sudadas por el intenso calor de “La Perla tapatía” y sus rostros reflejan fastidio. Es la postal común en la casa donde se procura la justicia.

Los fiscales e investigadores suben las escaleras del inmueble pasando con total indiferencia delante de las víctimas. Es una semana muy agitada. Durante dos días seguidos han encontrado en Zapopan restos humanos en bolsas negras de basura. El hallazgo de ese día corresponde a extremidades “momificadas”. Los forenses aún tratan de explicarse qué “compuestos químicos” les rociaron a las víctimas para que sus restos tuvieran tal embalsamamiento.

“Son casi 30 bolsas con un número indeterminado de cuerpos. Ya hay dos colectivos de familias de desaparecidos allá. Este hallazgo nos va a durar toda la semana”, se le escucha decir a un agente del Ministerio Público a su secretaria.

Pero el caso que más ha desajustado a los funcionarios de la Fiscalía del Estado de Jalisco es el de “la niña carnicera”. Una joven de 15 años reclutada por el CJNG que fue detenida en 2020 y luego enviada a “La Granja”, el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco.

“Tenemos comprobado que esta chava, que estaba en el colegio, [...] no privó de la vida a ninguna víctima; pero era la encargada de ‘destazarlos’ [sic]. Seccionarlos y fragmentarlos por encargo del Cártel [...] ¿Sabes cuándo vamos a poder reinsertar a la sociedad a esta joven? ¡Nunca! ¿Te imaginas el grado de envenenamiento que trae en la cabeza?”, reflexiona un agente del Ministerio Público que aceptó tomarse un café bajo la condición de anonimato.

La joven que hacía esa escabrosa y macabra tarea para el CJNG habrá de salir de “La Granja” poco antes de cumplir la mayoría de edad, gracias a lo endeble que son las leyes penitenciarias para los menores de edad. De poco servirá el encierro y las terapias psicológicas a esta chica, cuya alma ya fue dañada por el crimen organizado.

El agente del Ministerio Público saca su teléfono celular, se mete a

la galería de imágenes y muestra la última célula de secuestradores del CJNG “desmantelada” la semana anterior: cinco sicarios, uno de ellos, menor de edad. De los otros cuatro, apenas uno rebasa los 22 años. Otro con la cara afligida, tiene una incipiente barba. De los detenidos, dos sonríen tímidamente. Son jóvenes en edad universitaria, pero no estudian. Se dedican a delinquir y a traficar droga, otra forma de “capitalizarse” es secuestrar gente sólo por dinero.

“Los detuvimos la semana pasada en flagrancia, secuestraron a otro joven y su objetivo era matarlo. Llegamos poco antes que lo ‘bajaran’ [sic] [...] La constante es que son muy chavos los detenidos. Son de fácil enganche para el Cártel. Con cinco mil, seis mil pesos mensuales, un arma y poder, se reclutan fácilmente”.

Y el poder de “envenenamiento” dentro de la comunidad permea. El círculo de la “narcosociedad” se va cerrando. En una colonia marginal de Guadalajara, una joven —de identidad resguardada— fue golpeada en la cabeza y “tableada” (castigo que se estila dentro de las reglas del “narcocrimen”) por un sicario contratado por una amiga de la víctima que se molestó porque “le bajó” al novio.

“A ese grado de descomposición hemos llegado. En colonias de la periferia, [...] con pandilleros y ‘narcomenudistas’ el crimen organizado manda; [...] hacen amistades y tienen negocios y tienen novias. Una joven manda a matar a su amiga, molesta porque le quitó a un chico [...] La joven logró salvarse, porque en la casa de seguridad donde fue tableada y golpeada hasta dejarla inconsciente, su victimario estaba todo drogado y borracho. Creyó que ya la había matado, se fue a seguir la parranda y la chica, al cabo de un par de horas, despertó con fracturas y varias lesiones [...] pero viva. Y logró escapar”.

De los pocos casos que ha logrado documentar la prensa en Jalisco es conocido el del “microcártel” del hijo de *El Changel*, José Ángel Carrasco Coronel. Fue jefe de plaza en Guadalajara del Cártel de Sinaloa y su hijo reclutaba jóvenes para vender drogas en secundarias privadas de dicha ciudad.

Estos jóvenes, de estrato socioeconómico alto, vendían marihuana entre estudiantes de 13, 14 y 15 años sin que ninguna autoridad los molestara. Era el 2013, cuando los problemas de

drogadicción juvenil ni siquiera entraban en el radar de las autoridades sanitarias y de seguridad.

La “bomba” en la alta sociedad de Jalisco estalló cuando el 21 de junio de ese año se reportó la desaparición de dos menores: Luis Ortiz Guerra y Andrés Barba Olivas, de 15 años y estudiantes del colegio privado Rudyard Kipling, ubicado en la colonia Arcos Vallarta. Ambos serían encontrados muertos días después, en una fosa en medio de árboles y matorrales en las orillas de Guadalajara. Los dos fueron asfixiados por su mismo círculo de amigos, entre ellos, Andrés Vega Tovar, *El Vega*, Isaac Álvarez Buenrostro — ambos ya detenidos— y el hijo de El Changel.

Los adolescentes “desaparecieron” después de responder a una oferta muy lucrativa para unirse a una banda de delincuentes locales que los citaron en Plaza Ciudadela, de acuerdo con la versión de la Fiscalía.

El Vega, conforme la declaración de Álvarez Buenrostro, fue el medio que utilizó el hijo de El Changel para vengarse de los dos jóvenes hallados en la fosa, pues le hacían *bullying* en el colegio.

Vega Tovar utilizó el seudónimo de “Raúl Barajas” para conectar con las dos víctimas a través de las redes sociales. La Policía Cibernética de la Fiscalía de Jalisco encontró estos testimonios en el *inbox* del Facebook de Ortiz Guerra:

“El viernes va a haber una fiesta, va a haber morras que son edecanes. Ahí puedes escoger la que quieras, te voy a presentar al mero bueno [*sic*] y ya para que te dé trabajo. Como eres compa le diré para que ganes unos 20 mil al mes. Pero ocupas demostrar ser leal, wey, no le puedes decir a nadie porque no quiero que sepan de mí”, recibió en su mensajería Ortiz Guerra.

Este alcanzó a contestar: “Busco algo menos cabrón, porque la neta ahorita no puedo meterme tanto en ese pedo. Lo que sí puedo hacer es distribuir por el rumbo por donde vivo y soy noble y leal, wee [*sic*], pero la neta hay ganas de tener baro y estar cabrón [*sic*], pero también hay un poco de miedo”.

Pactado el encuentro, este acudió con su amigo Andrés a Plaza Ciudadela. Fue la última vez que sus padres los vieron con vida. Al año siguiente, El Changel sería detenido. Pero no su hijo.

El *modus operandi* de menores de edad reclutados por el crimen

organizado volvería a quedar en exhibición en 2018, cuando jóvenes secuestrados por el CJNG fueron entrenados contra su voluntad, para volverlos sicarios en campamentos clandestinos de Tala y Mazamitla —zona serrana conocida como el Bosque La Primavera—. Mazamitla empieza en Río Salado, bordea el Lago de Chapala, en Jalisco, y contiene innumerables brechas que son del tráfico continuo por el crimen organizado.

Estas escuelas del crimen “reventarían” en 2017 —en el ocaso del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz—, cuando algunos jóvenes lograron escapar y dar sus testimonios a medios de comunicación.

En la carpeta de investigación 1611/2017 se reportó la desaparición de varios chicos, cuya última pista fue una “bolsa de trabajo” para ser capacitados como agentes de seguridad en el municipio de Tala. No se volvió a saber de ellos.

Estas desapariciones forzadas continúan, incluso en pleno centro histórico de Guadalajara. En calles como López Cotilla, Degollado o la avenida Ramón Corona, entre otras. Es común ver a jóvenes repartiendo volantes ofreciendo jugosas ofertas de trabajo. Andan contratando personal y ofrecen un número telefónico para acordar las entrevistas. Pero la realidad es que varios de esos volantes son “enganches” del crimen organizado.

Apenas en mayo de 2022 fue desmantelado otro campamento de entrenamiento en Mazamitla, entre los puntos limítrofes con Michoacán.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos han denunciado que el “levantamiento” con fines de reclutamiento de jóvenes continúa. Y es irónico que, en la doble moral que caracteriza al Estado mexicano, el primer fiscal en declarar sobre la existencia de estos campamentos haya sido Almaguer, el mismo que está involucrado en la protección al CJNG en Manzanillo, la ciudad portuaria de Colima, principal “narcopuerto” del país.

Los enemigos de Alfaro

En el Palacio de Gobierno de Jalisco normalmente hay un alto blindaje con vallas metálicas y medio centenar de policías estatales

—tanto de día como de noche— para contener las manifestaciones cuando estas amenazan con salirse de control.

En una mañana cualquiera de verano, como ya es habitual, se dan airadas protestas que hacen cerrar la vialidad de la calle Pedro Moreno y la avenida Ramón Corona, en pleno zócalo de Guadalajara. Los empleados estatales ya saben que es una rutina llegar temprano y salir tarde; para no chocar con la turba de enardecidos, molestos con el actual gobierno.

“¡Sal, Alfaro puñetón!” “Yo sí tengo pantalones y doy la cara porque tengo la necesidad de buscar a mi hijo”. “¡Alfaro, pocos huevos!” “¡Culero, debes combatir a la delincuencia, no hacerte amigo de ellos!”. “¡Ustedes son los que se los llevan!” “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”, son parte de las consignas que gritan los manifestantes, megáfono en mano, frente al Palacio de Gobierno. Dentro del mismo, se impone un ominoso silencio, dolorosa la indiferencia oficial.

En esta ocasión encabeza la manifestación el Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Sus integrantes son padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos entre 2021 y 2022, la mayoría de las víctimas son jóvenes con edades de 17 a 27 años.

El joven Héctor Flores Fernández fue víctima de desaparición forzada el 18 de mayo de 2021. Tenía 19 años de edad. Un comando armado ingresó con violencia a un cuarto que alquilaba con su pareja en la zona de La Minerva, en Guadalajara. Se lo llevaron y a su pareja, una joven con embarazo de cuatro meses, le dijeron que no se metiera, que era un operativo de la Fiscalía.

Su padre, Héctor Flores González, lo buscó en los días siguientes en los separos de la policía, en la cárcel metropolitana, en el SEMEFO y nadie supo dar razón de él.

En la Fiscalía le dijeron que se lo habían llevado a Penal Federal de Puente Grande —aun cuando desde 2020 se había anunciado su cierre—. Allá también fue Héctor Flores y nada: a su hijo se lo había tragado la tierra. Un año tardó la Fiscalía en dar con el custodio del penal federal que confirmó a Flores González que su hijo estaba en la prisión.

“¿Ahora cuánto vamos a tardar para que nos digan la verdad? ¿Por qué dieron esa información y dónde están los videos? ¿Dónde

está él? ¿Por qué ellos dicen que se lo llevan al penal sin tener ninguna orden de aprehensión, sin saber a qué juzgado lo llevaron? Dicen que avisan a Derechos Humanos ese mismo día que mi hijo está en el penal. No, no nos hagamos tontos, no es que ellos se hayan equivocado sólo conmigo. También le dijeron esto a la policía y al propio fiscal general que salió a comentar que todo fue un error”.

En su incansable búsqueda, Héctor sufrió discriminación y estigma por parte del gobernador, quien en un acto de gobierno le espetó, bravucón: “A ti ya no te voy a atender. No me gusta que me griten”.

Por si al activista no le había quedado claro, la Dirección General de Comunicación Social emitió un escueto comunicado en donde consignaba que ya no se atendería al señor Flores González ni al colectivo que representa. Un par de días después, la misma oficina de prensa diría que se trataba de un malentendido.

Lo acompañamos a una manifestación que rodeó las principales calles del zócalo de Guadalajara. La reunión comenzó en las afueras de la Catedral, donde están las letras en color rosa y blanco de Guadalajara. Ahí mismo, donde los turistas se toman la foto del recuerdo, los *selfies* abrazados y con sonrisas Colgate. Pero hoy no podrán: las letras están tapizadas por los rostros de jóvenes desaparecidos entre 2021 y 2022.

Sobre las losetas de corte colonial, hay dos lonas con mensajes muy elocuentes: “Jalisco, la fosa más grande de México”. Otro reza: “Jalisco es un estado fallido”. El resto son cartulinas y pequeñas lonas con rostros, nombres y apellidos de las últimas desapariciones en la llamada “La Perla de Occidente”.

“Somos primer lugar en fosas. Hay cero investigaciones. Sabemos que el gobierno está metido por su complicidad, para que se pueda dar una desaparición, es necesaria la participación activa del Estado”, fustiga Flores González.

En el proceso de la protesta van saliendo más reproches de los familiares de las víctimas. Cuentan que es la propia Policía Estatal y elementos de la Fiscalía quienes “limpian” las cámaras del C-5 y del C-4 para borrar cualquier evidencia que ayude a la localización de sus hijos.

En el Área Metropolitana de Guadalajara la información corre a velocidades inalcanzables para los medios de comunicación tradicionales; sobre todo cuando se trata de ejecutados, desaparecidos y notas de violencia.

Tan es así, que los periódicos *Mural*, *El Informador* y *El Occidental* se han visto superados por *Jalisco Rojo*: en resumen, un espacio noticioso que emplea diversas plataformas y aglutina a casi un centenar de miles de usuarios —casi el doble de la capacidad del estadio de fútbol Jalisco, sede del club Atlas—. En el mismo circulan notas policíacas, de seguridad, sobre desaparecidos y también son más conocidas sus “campañas negras” en contra de opositores del gobierno de Enrique Alfaro.

Héctor acusa estas acciones del gobierno estatal, pues manipuló en su guerra sucia a *Jalisco Rojo* para criminalizar a las víctimas y a sus familiares.

“Hay otros dos o tres medios donde también nos atacan por instrucción del gobernador. Es una impotencia muy grande. Hay secretarios que me han amenazado, que no exhiba al gobierno y eso acompañado de escoltas armados, que no vuelva a exhibir al estado de esa manera [...] No hace falta exhibirlo, sus acciones hablan por sí solas”.

En año y medio de búsqueda de su hijo, ve con lamento cómo Jalisco se pudre cada vez más: “Somos el tercer estado a nivel nacional en tráfico de menores; en la zona metropolitana, en Chapala, hay un tremendo tráfico. Diario, diario, hay seis personas desaparecidas, cuando Alfaro [Ramírez] entró había 7,000 desaparecidos, hoy van más de 16,000, tú observa las fechas de desaparición que traen aquí las madres, hermanos, hijos en sus lonas”.

Y es cierto, en el Sector Chapultepec, a escasos metros de la zona boyante de restaurantes, hoteles y discotecas, en el Monumento a Los Niños Héroe, los familiares de víctimas lo han rebautizado como La Glorieta de las y los desaparecidos y ahí han pegado lonas, cartulinas y noticias con detalles de sus hijos ausentes. El rosario de desapariciones es interminable en Jalisco:

Emanuel Serratos Virgen, de 31 años, desapareció el 9 de julio de 2022. De 1.77 metros de estatura, tez morena y pelo lacio, sus

padres han puesto la leyenda: “¿Lo has visto? Ayúdanos a encontrarlo”. Ronaldo González Alduñez, de 24 años y tez morena, desapareció el 21 de junio de 2022, en Tonalá. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco ya emitió una ficha de localización. Carmen Araceli Mendoza Díaz, de 23 años, desapareció el 17 de agosto del 2020, en Guadalajara. Sus familiares han dejado una publicación en Facebook con información que pudiera ayudar a dar con su paradero. Fátima Lizeth Gutiérrez Ayala, de 22 años, 1.72 de estatura, tez blanca y con un tatuaje de rosas con golondrinas en uno de los brazos, desapareció el 15 de junio de 2022, en el Área Metropolitana de Guadalajara. Sarahy Guevara Escobedo, de 19 años, desapareció el 30 de septiembre de 2020, en Zapopan. Así podríamos seguir llenando páginas con los más de 300 rostros entre lonas y carteles con rostros y nombres de los últimos desaparecidos en Jalisco que hoy forman parte de este monumento a la ignominia.

Hay voces en los colectivos que indican, cuando llenen por completo el Monumento a los Niños Héroeos con rostros de desaparecidos, procedan a tomar el segundo monumento: el de La Diana Cazadora, uno de los más emblemáticos del país y de “La Perla Tapatía”.

Héctor Flores González se sienta en una banca, en una de las principales plazas de Guadalajara. A sus espaldas hay una exposición de copias impresas de obras pertenecientes a la colección del Museo Nacional del Prado, en Madrid, España. Fueron traídas a Guadalajara por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Alfaro. A veces el arte, desgraciadamente, se emplea para pretender tapar el terror y la inseguridad de un estado plagado de violencia.

“No hay ni un sólo avance en el paradero de mi hijo. Está detenida la investigación. Ya ministeriales me lo admiten, que hay una instrucción gubernamental. No han citado a nadie a declarar. La verdad esto es muy desesperante”.

Recuerda que, en los primeros cuatro meses, iba a la Fiscalía a diario a recibir siempre la misma respuesta: “no hay avances”.

Asegura que hay dos testigos, unos vecinos —una muchacha y un señor— que vieron cómo un comando armado se llevó a su hijo en

short, sin camisa y descalzo. Y que, incluso, una cámara del C-5 detectó cómo se lo llevaron con rumbo hacia el Periférico. Pero ya después, ninguna cámara sirvió.

Hoy va dos veces por semana a la Fiscalía estatal. Los demás días los dedica a la sensibilización de la sociedad, pues advierte que es momento de frenar las desapariciones en Jalisco con la proliferación de fosas clandestinas por todos lados.

La ropa que usa él y los integrantes de su colectivo consta de playeras blancas con el rostro ampliado del familiar desaparecido y lo acompañan consignas exigiéndole al Estado de Jalisco que entregue resultados.

Desde su cuenta de WhatsApp, reporta las marchas y manifestaciones que el Colectivo Luz de Esperanza realiza a diario en Guadalajara, en Zapopan, en la Fiscalía de Jalisco o a través de las redes sociales: “Yo no voy a parar hasta saber qué pasó y qué hicieron con mi hijo”.

“Nadie salió a atender”

Liliana Guadalupe Meza Gutiérrez es la presidenta del Colectivo Luz de Esperanza. Busca a su hijo Carlos Maximiliano Romero Meza, a quien sustrajeron de su domicilio presuntos agentes de la Fiscalía de Jalisco, con una orden de aprehensión por robo a una persona de la tercera edad. Desde el 22 de octubre de 2021 no ha sabido nada de él; se trata de un estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Guadalajara.

“Mi hijo es estudiante de la UdG. Pero supuestos elementos de la Fiscalía llegaron y me dijeron que andaba de ratero de colonias. Nunca me mostraron una orden de aprehensión, sólo una placa. Lo poco que hemos logrado averiguar es que sí hay dos policías involucrados en la desaparición de mi hijo. Policías que continúan en activo”.

Ha participado en marchas de desaparecidos, ha acudido a la Universidad de Guadalajara a pedir apoyo a la Rectoría para que interceda por los desaparecidos de Jalisco. Muchos son jóvenes universitarios. Incluso, ha firmado una nota dirigida al Congreso

Local para que integren una Comisión Especial de Búsqueda de Desaparecidos y que presione a las autoridades estatales y federales, pues el problema —insiste— hace rato se salió de control.

“Cuando se lo llevaron, traían una foto de él. No sé de dónde la sacaron, pero la traían. Aquí, el problema es que el gobierno está coludido con el crimen, tenemos una Fiscalía pasiva para buscar a los desaparecidos. Por eso, ellos [el crimen organizado] trabajan a sus anchas”.

Participa activamente en los actos de protesta para que el Estado dé resultados. Lamenta que, de diez desaparecidos, siete no aparecen nunca y quienes sí, son encontrados en fosas clandestinas o “destazados”.

“En Fiscalía encontramos siempre la misma basura, desde que llegan te revictimizan. Todos los desaparecidos son delincuentes, nos piden por la buena o intimidándonos que uno deje de buscarlos, que si andaba en malos pasos y andaba en drogas”, lamenta.

En más de un año de búsquedas, Lilita sólo ha acumulado sentimientos de impotencia y frustración. Le han negado copia de la carpeta de investigación de su hijo. Si quiere una diligencia de búsqueda, la tiene que solicitar en mesa de trabajo y le tardan meses en resolver. La burocracia y la complicidad con el crimen son aplastantes. Una cosa tan básica como pedir un oficio de colaboración o vinculación con la carpeta de otra desaparición, también le es negada: “Días y días, semanas de trámite, para que la respuesta siempre sea negativa. Quieren que nos aburramos, que nos olvidemos”.

Admite que muchas familias han dejado de buscar a sus seres queridos —por miedo o por ver que no hay justicia—. Por lo que añade: “Aquí en Jalisco, nosotros, madres y padres de desaparecidos, tenemos que hacer la investigación [...] hay mucha intimidación, muchos infiltrados en el gobierno. ¿De dónde sacan nuestros teléfonos, nuestra información para pedirnos que dejemos de buscar?” Es tan lastimosa la impotencia, que muchas madres rastreadoras terminan pidiendo ayuda al propio crimen organizado, en particular, al jefe del CJNG, Nemesio Oseguera, *El Mencho* o a cualquier sicario suyo.

Fueron tres horas infructuosas en la protesta de ese día en

Palacio de Gobierno. Ciento ochenta minutos de gritar consignas en contra del gobernador, de sollozos y rostros desconcertados. Pero enfrente nadie salió a atender. Una muralla de silencio fue la respuesta.

Apenas un par de mujeres policías se mostraron condescendientes y dejaron colgar las lonas con los rostros de los hijos desaparecidos sobre esas vallas metálicas negras. Esas vallas que vuelven infranqueable el acceso a la oficina donde despacha Alfaro Ramírez.

“Nunca los podrán identificar”

Hubo un completo desaseo. No cuidaron las formas ni los protocolos. La transición gubernamental en Jalisco, donde Aristóteles Sandoval Díaz le entregó la estafeta gubernamental a Alfaro Ramírez, dejará una huella imborrable en el SEMEFO de Occidente y un golpe doloroso en más de 3,000 hogares donde al menos tienen un familiar desaparecido.

Una investigación de *El Diario NTR*, hecha a través de solicitudes de transparencia por la periodista Sonia Serrano Íñiguez, puso al descubierto que en la nada tersa transición, la crisis forense se agudizó y colapsó. Se entregaron restos óseos, tejidos sin pruebas genéticas y cráneos en cajas de plástico compradas en el supermercado. Por lo cual se perdieron rastros e indicios genéticos con posibilidades de identificación.

“[...] las partes de cuerpos rescatadas de fosas clandestinas son colocadas en contenedores de plástico y resguardadas en los pasillos de los refrigeradores para que ocupen menos espacio”, publicó la periodista en *El Diario NTR* de Guadalajara, el 17 de mayo de 2021.

Las cajas transparentes de plástico fueron colocadas en los pasillos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) como si fueran cajas de archivos muertos u obsoletos de alguna biblioteca estatal.

El Diario NTR nos comparte solicitudes de información realizadas al IJCF, las cuales se convirtieron en recursos de revisión

promovidos ante el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. En ellos se demuestra el colapso forense que se padece en esta región.

El logro de *El Diario NTR* fue fundamentar su recurso de revisión y obtener los documentos “sin testar”. Tal situación puso al descubierto el caos en el SEMEFO.

La Dirección de este servicio, ya con Alfaro Ramírez como gobernador, admitió el resguardo de 3,818 cuerpos, 16,808 secciones anatómicas y 2,039 restos óseos, recibidos sólo en el periodo del 2 de abril al 8 de mayo de 2021. Los cuerpos, hasta donde se pudo saber, aún están sin identificar.

Son las cifras que muestran el colapso de varios servicios forenses en Jalisco. Y es que la estela de muerte desplegada por el crimen organizado provocó que se vieran rebasados en sus posibilidades de atención. Serrano Íñiguez inquirió con varios médicos, empleados y directivos del SEMEFO. Consultó a una doctora forense de su confianza sobre el amontonamiento de cuerpos en cajas de plástico, luego situados en los pasillos de refrigeración.

La empleada del IJCF fue sincera: “Hay cuerpos y secciones anatómicas que de plano nunca se van a poder identificar [...] no quedaron rastros que nos ayuden a su identificación”.

La ecuación es simple: se “revolvieron” los huesos, se extraviaron pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN). Los cuerpos se amontonaron. Y es el mismo desorden como ocurre en otras entidades: Guerrero, Veracruz o Michoacán.

Aunque a nivel nacional, el exsubsecretario de Gobernación y actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez —su labor ha resultado un rotundo fracaso durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación—, siempre ha centrado el tema de la crisis forense y las fosas clandestinas en Guerrero —por el caso de Ayotzinapa— y en Veracruz por el cementerio de Colinas de Santa Fe —el cual utilizaban Los Zetas, gente del CJNG y policías estatales—, la gravedad de lo que sucede en Jalisco no es cosa menor.

En esta crisis fúnebre de Occidente hay una organización, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco que optó

mejor por hacer relaciones con el área forense. En otras palabras: hacer el trabajo en el que los forenses no se dan abasto. Sus activistas trabajan en capturar datos, hacer registros de tatuajes, lunares, verrugas, vestimentas, accesorios y cualquier peculiaridad que ayude a identificar a los cuerpos que ya están en el SEMEFO.

Antes de la investigación de Serrano Íñiguez, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantuvo oculto el número de cuerpos, al parecer, por instrucciones giradas desde la Casa Jalisco. Con el hallazgo periodístico, el rezago en la identificación de cuerpos sin reconocer en dicho instituto se incrementó en un 1,474 %.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo presentó el informe “La crisis de identificación de personas en Jalisco”. El cual revela que hasta diciembre de 2021 había 6,249 personas fallecidas sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto hizo más alarmante la realidad.

Peor aún, al interior de dicho instituto, su titular Luis Octavio Cotero Bernal durante el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, vivió en carne propia la desaparición de su hija. Indira Cotero Ortiz era abogada de profesión, dedicada a los bienes inmuebles. El propio Cotero Bernal acusó de negligencia al propio gobierno al que servía:

“No me apoyaron mucho en la búsqueda de mi hijita. Estuve a punto de renunciar pero me quedé en el Instituto para ver si llegaba su cuerpo”, confesó al portal *Quinto Elemento Lab*, quienes elaboraron una serie de reportajes a nivel nacional bautizados como “Crisis forense”.

Los tráileres de la muerte

Este fue otro escándalo mayúsculo. Cuando los ojos del mundo estaban puestos en los cementerios clandestinos de Veracruz, en los “narcobloqueos” de Nuevo León y en las balaceras sin tregua en Michoacán, el escándalo de los tráileres con cuerpos no identificados en Jalisco —en septiembre de 2018— demostraron que la realidad supera la ficción: más de 300 cuerpos fueron

“paseados” en dos grandes tráileres por las carreteras federales y estatales de Jalisco, sin rumbo ni objetivo.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía del Estado de Jalisco evidenciaban de ese modo que en sus espacios forenses ya no cabían tantos cuerpos. Que sus sistemas de refrigeración habían colapsado y mandaron a cientos de cadáveres “a pasear” por las carreteras de occidente.

La descomposición del sistema de refrigeración de un tráiler atascado en el lodo en la carretera, los olores fétidos que emanaba, sumado a los líquidos que vertía, pusieron al descubierto el transporte de carga con cientos de cuerpos en un terreno baldío de Tlajomulco de Zúñiga. Los empleados temieron contraer alguna enfermedad y dejaron los cuerpos abandonados y progresiva descomposición. Aquello olía a muerte.

El contenedor fúnebre, de casi 14 metros de largo por casi dos y medio de ancho, era propiedad de Logística Montes. Empresa de transportación terrestre regional y especializada en congelamiento.

Y el problema estalló en la prensa. Tras el bochornoso escándalo, forenses y fiscales tuvieron que admitir que envolvían los cuerpos en bolsas negras —similar a las de basura— y, apenas con una etiqueta, registraban los datos básicos del difunto: fecha del hallazgo sin vida, lugar en donde fue encontrado y una escueta ficha de las prendas que vestía al momento de ser examinados por el forense en turno.

Este escándalo de los tráileres de la muerte quedó formalmente registrado al interior de la Fiscalía del Estado y de dicho instituto como “Convenio Específico de Colaboración para la Conservación de Cadáveres de personas desconocidas y/o conocidas”.

El Cholo, la única pista

Cuando Rosaura Patricia Magaña Rivera vio por televisión la noticia de la ejecución de El Cholo en pleno centro de Tlaquepaque sintió un golpe duro en el corazón. El otrora “compadre” de El Mencho era una pieza clave para que ella pudiera dar con el paradero de su hijo, Carlos Eduardo Amador Magaña –*Charly*–, de 20 años, “levantado”

junto con otras tres personas por un convoy armado de 13 elementos tácticos en el taller mecánico T-Alex de la calle Capulín, en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque.

Estudiaba el segundo semestre de ingeniería química en la Universidad de Guadalajara y en sus ratos libres apoyaba en el taller mecánico para obtener ingresos extras. Lamentablemente, en el taller T-Alex, el dueño y cuñado de Carlos también le hacía trabajos a El Cholo.

Corría el 13 de junio de 2017, Charly y otro empleado estaban haciendo un servicio de afinación y balanceo a un Toyota Yaris. También estaba el dueño del auto y un amigo de la secundaria de él, Víctor Arturo Guembe.

Un comando armado cercó el taller. La hermana de Eduardo salió para ver qué ocurría y los hombres armados dijeron que era un “operativo de la Fiscalía” y con palabras altisonantes le exigieron que abriera. Un hombre de entre 50 y 60 años llevaba una charola colgando al pecho con logos plateados del órgano procurador de justicia.

Rosaura asegura que hay videos de tres camionetas, de las placas, de una RAM gris, una Toyota Tundra roja, otra Hilux negra y rostros de los que levantaron a su hijo y a las otras personas. Pero los años pasan y las investigaciones no avanzan.

“Con mi otra hija he buscado a mi Carlos en penales, en forenses, en centros de adicción, en Vallarta, en Tepic, en otros lugares de Nayarit, en Colima, en Oaxaca, he participado en las Brigadas Nacionales de Búsqueda y nada”.

En ese 2017, refiere que en cinco talleres mecánicos de Tlaquepaque hubo “levantados” con el mismo *modus operandi*. En otros tantos, ocurrieron ajustes de cuentas y ejecutados. La madre de Carlos Eduardo asegura que las investigaciones dan pie a pensar que por el pleito entre El Mencho y El Cholo hubo una reorganización de las actividades ilícitas, pero también una limpieza al interior de la Comisaría Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, pues muchos policías fueron ejecutados.

“A los 20 días que irrumpió el comando en el taller donde trabajaba mi hijo, liberaron a dos de los ‘levantados’. Al dueño del Yaris y al amigo de mi hijo, Víctor Arturo Guembe, pero al ser menor

de edad, su mamá no permitió que declarara para poder dar con el paradero de mi hijo, pues Arturo salió con trauma”.

Tuvieron que pasar un par de años para que él se “animara” a declarar en la Fiscalía de Jalisco y ahí dijo que el yerno de Rosaura Magaña tenía amistad con Carlos Martínez Sánchez, El Cholo y que “de vez en cuando le hacía trabajos”. El yerno de Rosaura y cuñado de Charly declaró en la Fiscalía, pero ni así han encontrado pistas concretas del paradero del joven universitario.

“Hoy yo no tengo una declaración que pueda aportar sobre qué hicieron con mi hijo. En mi caso, no tuve amenazas. Me extorsionaron, me pidieron 60,000 pesos. Aquí, en Jalisco matan a los hermanos o hermanas del desaparecido que es buscado. Les llegan amenazas”, lamenta.

Su otro hijo se puso a investigar por su lado. Se fue a meter a colonias marginales y peligrosas de Tlaquepaque y Zapopan. Empezó a “consultar” con narcomenudistas y pandilleros de la zona el paradero de su hermano. “Hasta que me lo levantaron, me lo golpearon un día, me lo siguieron en motocicleta. Gracias a Dios me lo regresaron con vida”.

Magaña Rivera es de las primeras madres de desaparecidos que se unió a un colectivo de búsqueda, primero estuvo en Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y ahora se agrupó en el Colectivo Entre el Cielo y la Tierra. En la entidad hay 26 colectivos de mujeres y hombres buscando a sus seres queridos “levantados” por el CJNG o por la Fiscalía estatal o policías municipales o estatales; o una extraña combinación de estos, convertidos en entes del terror.

Expone que las madres ya tienen demasiadas evidencias de la complicidad de la Fiscalía con el crimen organizado, concatenado con el burocratismo, la escasez de protocolos de búsqueda y la insuficiencia de personal. Ya ni siquiera para castigar a los culpables de la desaparición de sus hijos, sino tan siquiera para dar con la ubicación de sus seres queridos.

“No ven una línea de investigación. Ni cuando cambiaron nuestros casos a una Agencia de Inteligencia. Un día le dije al fiscal especializado, Carlos Badillo Ceballos: ¿Si tú sabes cómo trabaja la delincuencia organizada? ¿Cómo es posible, para combatir y dar

seguridad a los ciudadanos, que su policía y fiscalía no sea organizada?” El tal Badillo sólo frunció el ceño y la boca. La señal del cinismo.

En sus diligencias con sus compañeras, han encontrado un común denominador en varios de los cuerpos hallados en los forenses: la mayoría de los jóvenes tienen tatuajes en los hombros y espaldas de códigos de barras, como si estuvieran “grafiteados” y numerados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, además de que varios de ellos tienen tatuajes del Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, el patrono del crimen organizado en Jalisco.

“Son códigos de barras, como números. Queremos pensar que es una forma de identificarse al interior del Cártel; igual sea una forma en la que reclutan a sus sicarios que son obligados a trabajar para la organización”.

La activista recrimina que apenas en abril de 2022, Enrique Alfaro tuvo a bien presentar un plan de trabajo denominado En Jalisco estamos buscando.

“Lo hace cuando ya pasó más de la mitad de su sexenio y cuando faltan menos [de dos años] para que salga. ¿Qué tanto podrá hacer? Te pongo un ejemplo: la brigada hace unos meses encontró 27 cuerpos y osamentas. De esas bolsas negras apenas salieron identificadas cinco personas. Y de esas apenas se han entregado como dos o tres”.

En Jalisco y en varios estados del país, el procesamiento de restos óseos, cráneos y osamentas es muy largo y tortuoso para las familias. Por entrapamientos burocráticos, la entrega de cuerpos puede tardar hasta un par de años.

“Lo que pasa en Jalisco es muy traumático, en [la colonia Lomas del Tizate], Zapopan, se hallaron 21 bolsas, en lo que las procesan y hacen pruebas de ADN, esos cuerpos tardarán meses o un par de años en ser entregados. Las compañeras tendrán que someterse a nuevos exámenes para hacer las confrontas”.

En tierra de *El Mencho*

En Autlán de Navarro, un municipio ubicado en la Sierra de Amula,

en Jalisco, los ojos de El Mencho se multiplican: “halcones”, sicarios, taxistas, comerciantes, policías o empleados municipales suelen reportar a los lugartenientes del máximo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación cada suceso “extraño” o cada visita “sospechosa”.

En este pueblo, donde habitan menos de 70,000 personas, son muy comunes las desapariciones. Los familiares de las víctimas no se atreven a poner denuncia por miedo a El Mencho.

Sitio estratégico de dicho Cártel para el trasiego de drogas que llegan por la costa, Autlán de Navarro se encuentra a dos horas por carretera respecto al Puerto de Manzanillo, pero también a 110 kilómetros de la zona costera sur de Jalisco, conocida como Barra de Navidad y a escasos 195 kilómetros del Área Metropolitana de Guadalajara, con una infinidad de caminos para esconderse en distintas brechas de la sierra.

En 2020, Autlán de Navarro saltó a la fama nacional cuando la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo el congelamiento de casi 2,000 cuentas bancarias vinculadas al CJNG. Fue el operativo conocido como Operación Agave Azul, hecho por sugerencia de la Fiscalía General de la República. El gobierno de López Obrador festinó el golpe financiero, pero meses después, la SHCP devolvió los fondos incautados, porque la FGR no acreditó que tenían un origen ilegal.

Las cuentas congeladas —entre las que había varias de empresarios y servidores públicos municipales— disfrazaban sus actividades criminales por actividades empresariales diversas. Incluso, algunas fueron camufladas como siembras de aguacates y manzanas.

En Jalisco todos saben que en esta región manda y se esconde El Mencho con su equipo más cercano. Ir a Autlán, pueblito de pasado colonial convertido en zona metropolitana en 2016, junto con los municipios de El Grullo y El Limón, significa andar con total cautela y no preguntar mucho. Desde la terminal de autobuses, zonas comerciales —e incluso en los pocos hoteles que hay— el CJNG tiene ojos y emisarios.

En esta región han desaparecido cinco veracruzanos. El 1 de febrero de 2018 fueron “levantados” los comerciantes de Minatitlán,

José Ángel Meléndez Luna, Juan Meléndez Pineda, José Meléndez Pineda y Juan Santos Meléndez. En estos últimos casos quedó comprobado que, además de la participación de sicarios del CJNG, intervinieron una decena de policías municipales de Autlán de Navarro, cómplices de este.

Beatriz Torres Zuleta es oriunda de Coatepec, Veracruz. Pero desde antes de la desaparición de los Meléndez toma un vuelo de Viva Aerobus cada 20 días, del Puerto de Veracruz a Guadalajara, para presionar a las autoridades en las diligencias de búsqueda de su hijo, Manuel Amate Torres. Ya lo ha buscado en fosas clandestinas, en predios utilizados por el crimen organizado, en las llamadas “casas de seguridad”.

Porque el 29 de diciembre de 2016, fue “levantado” por un comando armado. Sin explicación alguna, lo bajaron de una camioneta, mientras su novia Silvana Ramírez y sus familiares sólo podían observar, impávidos.

La madre se ha quejado de los pocos avances que tiene la Fiscalía del Estado de Jalisco para dar con el paradero de su hijo y con el de los comerciantes veracruzanos, cuyas carpetas de investigación estarían vinculadas por el mismo *modus operandi*. Aunque hay dos policías en prisión confesos y condenados a 40 años de cárcel, José Luis “N” y María Lorena “N”, nadie ha podido dar con el paradero de los cinco veracruzanos.

La carpeta de investigación 352/2016 señala que un comando armado, con palabras ofensivas y groseras bajó a golpes de una camioneta a Manuel Amate, a pocos metros del zócalo de Autlán y a unos cuantos de la comandancia de la policía. Le apuntaron con armas largas sin explicación alguna.

De acuerdo con los testigos, el hoy desaparecido alcanzó a gritar: “¿Yo por qué? ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo ni soy de aquí!” El auto del joven veracruzano, un Ford Mustang Mach azul que se hallaba estacionado junto a la banqueta de la casa de la familia Ramírez, fue retirado a petición de la suegra del desaparecido con una grúa. Las pertenencias que tenía —reprocha su madre— nunca le fueron entregadas.

Manuel había acudido a tierras jaliscienses junto con su novia, dos hermanos de ella y una cuñada. En los primeros dos días todo

transcurrió bien. Sin embargo, no fue hasta un día después que su novia notificó lo sucedido a su madre:

—Dejaron pasar las horas más fundamentales de la búsqueda. A mí no deja de darme coraje que hoy la familia sigue su vida como si nada, pero que hubo situaciones extrañas por las que yo exijo saber la verdad —reprocha Beatriz Torres Zuleta y agrega—: vivo con una agonía que me está matando internamente, yo quiero saber la verdad.

—¿Qué creé que sucedió?

—Era la primera vez que mi hijo iba para allá [Sierra de Jalisco] y la familia de la novia y la propia novia siguen haciendo vida normal. Como si nada, como si hubieran ido a entregar “la mercancía”.

La Fiscalía Especializada en Desaparecidos de Jalisco ya logró detener, en 2019, a una persona involucrada en esta desaparición: Gerardo Silva, expolicía municipal y “halcón” del CJNG. En su declaración ministerial confesó su participación en varios “levantones” a jóvenes que fueron privados de su vida. Nunca pudo aclarar si entre ellos se encontraba Manuel.

“Yo exigí esas búsquedas. Hay un detenido, él nos dijo de una brecha y que ahí se los llevaban y ahí los [des]hacían en ácido y les daban el tiro de gracia [*sic*]. En una brecha se encontró un tambo, donde hacían sus fechorías. Disolvieron personas en ácido”.

En pleno verano de 2022, Torres Zuleta concentró la búsqueda de su hijo en el predio conocido como El Camichín, del cual apenas han peinado un 30 % de la tierra y ya han logrado sacar siete cuerpos: la Fiscalía, cinco osamentas y los colectivos de desaparecidos, dos.

De los hallazgos realizados, aún no aparece el cuerpo de Manuel Amate Torres. Sin embargo, su madre no cede en su búsqueda hasta peinar la totalidad de dicho terreno, pues la sábana de llamadas del celular de su hijo, detectadas por Telcel, registra su última ubicación por esta zona, muy cercana a la cabecera de Autlán de Navarro.

En este viacrucis por el occidente del país, Beatriz retrata fotográficamente la incompetencia y la lentitud de las distintas autoridades. Relata que presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las distintas negligencias que cometen

las autoridades de Jalisco y que la CNDH “redireccionó” al Estado jalisciense el reproche para ser atendido. Sin embargo, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) sólo le dijeron que habían recibido la queja y se daban por “enterados”:

“Y así es esto, nadie hace completo su trabajo. No responden a lo que prometieron y así se van los meses y años. Incluso, volví a Ciudad de México a la CNDH y me dijeron que como de Jalisco les contestaron [*sic*] que mi queja fue atendida y resuelta [...] tendría que, ¡hazme el favor! [dice ya muy irritada], volver a presentar una queja nueva”.

Otro lastre para la búsqueda de desaparecidos son los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco. Saben poco del tema de desaparecidos, básicos conocimientos de la Constitución y poca experticia en manejo de derechos humanos. Y son ellos quienes tienen que exigir a los Ministerios Públicos agotar todas las líneas de investigación de la carpeta.

—¿Cómo es buscar a un desaparecido en Jalisco?

Y Beatriz Torres Zuleta responde:

—La decisión la tiene que tomar la familia. Las autoridades jamás te apoyan. Tienes que estar encima de la autoridad, porque no hacen su trabajo completo. Siempre hay una revictimización o te salen con que los muchachos andaban en malos pasos. Ahorita Jalisco está en primer lugar de desapariciones. Hay casos muy fuertes y severos. He buscado a mi hijo en Autlán muchas veces, no me siento segura [...] pero por tu hijo a todo te arriesgas.

En sus diligencias y búsquedas, expone que en una primera instancia el comandante de Autlán de Navarro, Francisco Contreras a partir de las investigaciones para este volumen, le negó que hubiera casos de desaparecidos. Gracias a la búsqueda de los cinco veracruzanos, esta zona serrana fue señalada como “foco rojo” en materia de desapariciones forzadas.

En las posteriores investigaciones respecto a Francisco Contreras, no se encuentran fuentes claras sobre su existencia. Lo que expresa la sospecha de manipulaciones respecto a este agente.

El “halcón” y expolicía detenido, Gerardo Silva, hoy está preso por posesión de drogas, una camioneta robada y está vinculado además

con la desaparición de Manuel Amate Torres.

“Lo único que ha dicho, es que su jefe, *El Kruger*, le dijo: síguelo y me das la ubicación de dónde estaba mi hijo. A él lo levantaron afuera de ‘Tortas ahogadas el Trompo’ [...] Silva declara que a los dos días que lo habían levantado, lo llevaron al predio El Camichín”.

De 2016 a la fecha, Beatriz Torres Zuleta sólo ha recibido una vez un telefonema extraño. Una voz grave le alcanzó a decir desde un número privado: “¡Bájale, bájale ya! Ya sé que andas por acá”.

En las pocas veces que por diligencias de su búsqueda y otras madres de víctimas se han tenido que quedar hospedadas en Autlán de Navarro, han notado cómo son vigiladas. No sólo por “halcones”, sino por drones que se pasean con total libertad por los jardines del hotel.

“Llevamos como diez búsquedas en El Camichín y en más de una ocasión hemos notado cosas raras. Se lo hemos reportado a quienes nos acompañan de [la] FGR o [el] Ejército y únicamente nos piden que no salgamos solas y que procuremos estar dentro de la habitación”.

Aunque la carpeta de investigación 352/2016 radicada en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco continúa detenida, ella sigue pendiente, cada 20 días, para presionar a las autoridades jaliscienses:

“Hay que insistir [*sic*] que la carpeta de mi hijo no sea una secuela nada más. Que no le salga polvo a la investigación, que se integren las investigaciones que hemos hecho”.

Torres Zuleta se muestra un poco desencantada con el presidente López Obrador. Señala que hubo muchas promesas para los familiares de desaparecidos, pero todo se quedó en el aire:

“Ya no recibe ni a los familiares. Pese a que en su campaña nos pidió el apoyo, nos llevó a Tlatelolco —una reunión multitudinaria en la Plaza de Las Tres Culturas, con familiares de desaparecidos de todo el país—. Se prometió una partida para búsquedas y mucho respaldo, muchas promesas, pero ninguna aterrizada”.

A Alfaro Ramírez lo pinta como “indiferente”. Con una política absurda al negar que haya desaparecidos en la entidad que gobierna: “Él sigue saliendo a su balcón a hacer promesas nada más. Su gobierno es una total mentira”.

Alfaro mentiroso, *El Mencho* poderoso

María Guadalupe Camarena Rodríguez vive a “salto de mata”, los últimos años de su vida los ha dedicado a buscar a sus hijos desaparecidos: Lucero Ávalos Camarena, de 26 años, fue “levantada” el 16 de junio de 2016 cuando acudía a trabajar a una fiesta. Sus otros cuatro hijos, José de Jesús Martínez Camarena —afectado por un un padecimiento biliar—, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena y Oswaldo Javier Ávalos Camarena, fueron víctimas de “desaparición forzada” a manos de policías municipales de Ocotlán. Los interceptaron en la carretera de dicho municipio y les robaron dinero y teléfonos celulares cuando iban a bordo de una camioneta Grand Caravan blanca, placas JKJ-2252-2003.

Los cuatro hermanos Camarena fueron “levantados” y “desaparecidos” el 19 de diciembre de 2019 —cuando Alfaro Ramírez apenas llevaba 13 días como gobernador— por policías municipales quienes los entregaron —“vendieron”, insiste Guadalupe— a una célula del CJNG. Los torturaron y golpearon sin reparar en que dos de sus hijos aún tenían los teléfonos con la línea abierta.

Ella escuchó a través del iPhone x de Oswaldo Javier cómo golpeaban y torturaban con saña a José de Jesús:

“Mis hijos eran de carácter fuerte. Yo escuchaba desde la otra línea, cómo lloraban desgarradamente por la tortura. [...] Algo le hicieron a José, él iba muy grave en la camioneta, llevaba las vías biliares tapadas. Débil por las quimioterapias. De hecho, mis otros tres hijos lo acompañaban a recoger a una de sus sobrinas que lo iba a cuidar, porque estaba muy mal [...] Algo le sucedió a José —sin decirlo, Camarena Rodríguez da a entender que lo privaron de la vida— y de ahí, policías y sicarios decidieron ‘desaparecer’ a mis otros tres hijos”.

Ella se encuentra concentrada en la búsqueda de sus cinco hijos:

“Ya como Dios me los dé, quiero encontrarlos, con lo que nos ha pasado, ya perdimos el miedo. La desesperación por saber qué

hicieron con ellos, no”.

Guadalupe no sonr e, su rostro serio tambi n mostr  ofuscaci n durante toda la entrevista. Expres  su irritaci n cada vez que record  el “tortuguismo” gubernamental y las pifias de la Fiscal a de Jalisco. Ergu a el pecho y brillaban un poco sus ojos cuando mostraba los once trofeos de fisicoculturismo de su hijo, Oswaldo Javier, quien fue galardonado con el primer lugar de Mr. Jalisco Juvenil y Veteranos a sus 24 a os.

En el cuarto de Oswaldo hay una colecci n de medio centenar de perfumes, la mayor a, vac os: “le gustaba coleccionarlos”, comenta. A un lado de los perfumes, un tomo grueso de La Biblia, abierto a la mitad, con un rosario como separador y un Cristo en la cruz de 1.2 metros de altura, colgado en la pared. Pese a las adversidades, los Camarena son muy creyentes.

En la cocina de la casa de Oswaldo hay una peque a urna de m rmol. Guadalupe cuenta molesta que la compr  su otro hijo, Jos  de Jes s, como una premonici n de que la muerte lo acechaba. “Hay que estar preparado”, le dijo Jos  a su madre por la enfermedad del c ncer y las v as biliares tapadas. El destino y la sinergia entre polic as y el CJNG le trazaron otro final.

Camarena Rodr guez concert  la cita acompa ada de su hija Noem  y su nieta —hija de la desaparecida Lucero—, en la casa de Oswaldo Javier. Las tres mujeres no viven ah , pero por seguridad pidieron que fuera en ese lugar donde se desarrollara la entrevista, en una colonia marginal del municipio de Tonal . Explic  que ya han sido seguidas por camionetas de sicarios en varias ocasiones. En 2021 un grupo de “encapuchados” se meti  al taller de su hijo desaparecido rob ndose cosas y dejando un mensaje. Meses despu s, una periodista de televisi n las entrevist  ah  mismo, la reportera envi  un mensaje al celular de Guadalupe confesando que “gente extra a” la hab a seguido por varias calles.

En su desesperaci n y a os de b squeda, decidi  grabar un video pidiendo ayuda al l der del C rtel de Jalisco Nueva Generaci n, El Mencho. En el video —que se hizo viral en YouTube—suplic : “Se or Nemesio Oseguera Cervantes, yo le pido, por favor, que me ayude a encontrar a mis cuatro hijos desaparecidos, hasta la fecha no he sabido nada de mis hijos [...] Yo s  que usted es bueno y ha

ayudado a mucha gente”.

No se arrepiente de haberle grabado el video, aunque lamenta que no haya tenido alguna respuesta positiva. Justifica que decidió dirigirse a él por “desesperación”, pero también porque sabe que es un hombre “muy poderoso” en Jalisco y en el país:

—Esa era mi esperanza, que me ayudara ese señor. No lo conozco, pero no tuve respuesta de ninguna forma. Las búsquedas que se han hecho, por parte del gobierno, son simuladas [...] hubo unas búsquedas obligadas y en puntos erróneos.

—¿Al gobernador Alfaro nunca le pidió ayuda?

Guadalupe golpea en la mesa y abre de forma desorbitada los ojos, suelta a rajatabla frases bien hiladas:

—¡Alfaro es bien mentiroso! Hace poquito dijo en la televisión que “nos estaba apoyando, que la comunicación conmigo era muy buena y constante”. No hay mentira más grande. Nunca he hablado con él ni yo ni las hijas que siguen aquí conmigo. Nadie de mi familia.

Noemí Camarena, hija de Guadalupe, muestra en su teléfono móvil una nota en internet, donde el gobernador habló ante más de 20 reporteros, camarógrafos y fotoperiodistas que no hay rezago en atención a familiares de desaparecidos y que en el caso particular de sus cinco hijos se le ha estado apoyando en la búsqueda constantemente.

“Nadie sabe lo que uno pasa, es una angustia muy difícil. He andado en Brigadas Nacionales de Búsqueda, todo por mis hijos, en Michoacán, en Sinaloa, en el norte del país, aquí en Jalisco infinidad de veces. Hubo un tiempo que no comía, no tomaba nada, ¡no sé cómo no me morí!”, expone Guadalupe.

La familia Camarena también envió un telegrama a Palacio Nacional, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiendo “ayuda” para localizar a sus cinco hijos desaparecidos. Días después la buscaron de la oficina del entonces subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, para prometerle que la ayudarían. Todo quedó en una llamada y en una promesa hasta ahora incumplida.

En las horas de entrevista y reunión, Guadalupe no deja de denunciar errores e indolencia de policías ministeriales, de

funcionarios del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz y de Alfaro Ramírez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco. Recuerda que cuando el priista Aristóteles ya no era gobernador, la buscó y le hizo una promesa:

“Aunque ya no esté, yo en el gobierno la voy a seguir ayudando’ [...] Me puso un licenciado y ese sí avanzó un poco, pero luego ya ve lo que le pasó al exgobernador y el licenciado dejó el caso”.

En 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas exigió al Estado mexicano una acción urgente para establecer un plan inmediato de búsqueda y localización de sus hijos.

Y es que el caso de María Guadalupe Camarena es emblemático, pues en la desaparición de su hija, Lucero Ávalos Camarena, hay indicios de trata de personas, corrupción de policías, políticos y fiscales mezclados en redes de prostitución en el occidente del país, así como una aceptada unión con el crimen organizado. Mientras que, en el caso de sus hijos, José de Jesús, Oswaldo Javier, Tonatiuh y Ernesto, hay ya dos policías municipales en prisión y una colusión tácita de los oficiales con el Cártel de Jalisco Nueva Generación:

“Cuando iban a recoger a mi sobrina en Ocotlán, para que cuidara de mi hijo José de Jesús, policías municipales los pararon en una supuesta revisión de rutina. Tonatiuh alcanzó a marcarme. Yo escuché todo. Les dijeron: ‘saquen las carteras, hijos de la chingada’ [...] y muchas más palabras obscenas. De mis cuatro hijos, tres no llevaban dinero, pero José de Jesús, sí, cuando a él lo revisaron y golpeaban alcancé a escuchar: ‘¡Este trae un chingo de dinero, yujuuu!’ Festejaron los policías municipales de Ocotlán”.

La garganta de Guadalupe se cierra y la voz se le quiebra, da a entender cómo fue que a partir de ahí empezaron golpes, torturas, toques eléctricos, cachazos, gritos, sollozos. Hasta que José de Jesús dejó de quejarse. Con la línea telefónica abierta, se logró saber que había siete policías presentes y luego voces de varios extraños:

“Yo creo que los entregaron o vendieron al Cártel”, asevera Guadalupe.

Por este caso hay siete policías implicados, dos en prisión, tres prófugos de la justicia y dos no identificados. Los que están en prisión, los oficiales Mario “N” y Alonso “N” no han querido declarar qué pasó con los hermanos Camarena. Incluso, cuando fueron aprehendidos el 13 de abril de 2021, ya se encontraban trabajando en la Policía Municipal de Jalostotitlán, en Jalisco. Es decir, habían mudado su *modus operandi* a 121 kilómetros de Ocotlán, esto es, sólo los rotaron de plaza.

La investigación de los policías detenidos no la hizo la Fiscalía de Jalisco. Fue la propia familia Camarena quien tuvo que hacer sus propias diligencias y entregar las pruebas al órgano procurador de justicia.

A lo anterior, agrega Guadalupe:

“Mientras nos amenazaban e intimidaban extraños, esos policías continuaban laborando en Jalostotitlán. Pese a tener órdenes de aprehensión, [sic] a allá se cambiaron. El caso ya está judicializado, están en una cárcel de Guadalajara, en la Metropolitana, presos por desaparición forzada”.

El vía crucis de la familia Camarena ha seguido igual. Han sido víctimas de intimidación y burlas de los ministerios públicos. Un tal Saúl Arámbula le dijo que “si seguían insistiendo en la búsqueda, algo les iba a pasar”; una fiscal de nombre Ligne [sic] con escolta a las espaldas, se negó a recibirles una “ampliación de denuncia” y un ministerio público de nombre Luis Humberto Cortés se burló de su dolor, llevándolas a chapear y a rascar la tierra en un cerro que nunca se reportó en la geolocalización registrada en la sábana de llamadas de los cuatro hijos de Guadalupe Camarena.

Prosigue:

“Ahí nos llevaron por la presión de la ONU. Como decir: ¡ándenle, ya les cumplimos con la búsqueda, dejen de quejarse! Fue una burla por completo”.

Un par de días antes de ser “desaparecida”, Lucero Ávalos alcanzó a hablar por teléfono con su mamá, le confesó que tenía mucho miedo, le dijo que había caído en el “lugar equivocado”. De forma extraña, se despidió de ella y le encargó a sus dos hijos.

“Me dijo bien extraña:

—Yo no soy lo que dicen que soy, una modelo [...] Cuida bien a

mis hijos.

—¿Por qué pasó esto, Lucerito? [—preguntó Guadalupe.]

—Caí en el lugar equivocado.

—¿Vamos a la policía? [—propuso Guadalupe.]

—¿Tú crees que nos van a hacer caso? Si me llevan a la cabaña [sic] y ahí hay grandes mandos de la Fiscalía, comandantes de la policía”.

Guadalupe traga saliva. Admite que fue ahí cuando se enteró que a su hija la tenían prostituyéndose en fiestas con servidores públicos, judiciales y fiscales. También la llevaban a “trabajar” a Puebla y a otros estados.

En las investigaciones que hizo la familia tras la desaparición de su hija, salió a flote que trabajaba en una estética masculina que tenía, como nombre fachada, “El Mediterráneo”. En realidad, era un prostíbulo de alto nivel en el que a Lucero le financiaron una abdominoplastia y una operación de pechos, que le sería cobrada a la joven jalisciense en más de 100,000 pesos, los cuales iría cubriendo por “goteo”, mediante sus servicios.

Quien la operó era el esposo de Elizabeth, socia de Ana Chavarín y Edna Judith Aceves Félix. Esta última regenteaba una cadena de casas de masajes y prostitución en Guadalajara y municipios metropolitanos. Su caso terminó en desgracia, pues integrantes del CJNG “levantaron” a su sobrino de 25 años, el estudiante de cine, Salomón Aceves Gastelum, y a dos amigos también estudiantes de medios audiovisuales, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García Ávalos. La desaparición ocurrió en la carretera hacia Tonalá, Jalisco, el 19 de marzo de 2018.

El 24 de abril la Fiscalía de Jalisco confirmó que los tres jóvenes fueron levantados por el CJNG y disueltos en ácido pues —conforme la Fiscalía— fueron “confundidos” con narcos. Al interior de la dependencia corrió la versión, no oficial, que Aceves Félix tenía pendientes con la organización criminal y una forma de cobrarle la deuda fue con su sobrino.

La Fiscalía, a cargo de Raúl Sánchez Jiménez, insistió ante la prensa nacional e internacional que el CJNG “detectó” que los estudiantes de cine grabaron un cortometraje en una “casa de seguridad” utilizada por el Cártel Nueva Plaza, que entonces

lideraba El Cholo.

“Los integrantes del CJNG confundieron a los estudiantes con miembros de la banda rival, los trasladaron a otra casa donde los interrogaron, torturaron y asesinaron. En otro domicilio disolvieron sus cuerpos en ácido sulfúrico para que no quedaran restos de ellos [...] en ese lugar se encontraron rastros biológicos de los jóvenes; además de 46 bidones de 56 litros de ácido sulfúrico y tres depósitos con restos del compuesto químico”, explicó la Fiscalía de la entidad y con esos argumentos le dio carpetazo al tema.

El tema indignó tanto a nivel internacional, que hasta el consagrado cineasta mexicano Guillermo del Toro se pronunció sobre esta barbarie: [sic] “Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ‘porqué’ es impensable, el ‘como’ es aterrador.”

Sólo así Edna Judith logró pisar la cárcel, pero nunca fue imputada por la desaparición de Lucero Ávalos, la hija de Guadalupe Camarena. La empresaria y líder en el negocio del servicio sexual, pasó menos de un año en prisión, pues su defensa logró la nulidad de todos los cargos.

“El último día que supe de mi hija, le habló Ana Chavarín: ‘Te están esperando en la carretera Chapala-Periférico’. La llevó un taxista de sitio amarillo. Ya ella tenía un mal presentimiento, yo me quedé toda angustiada [...] Y sí. Ya no supe más de ella”.

A Lucero Ávalos, además de su mamá y sus dos hermanas, también la busca su hija, de 18 años. Se ha convertido en una “rastreadora” en las distintas “casas de seguridad” abandonadas o en predios cuyos dueños no aparecen en Tlajomulco de Zúñiga.

“Ahí estaba mi nieta en un lugar conocido como Etapa 9, en Chulavista, en Tlajomulco. Ya nos íbamos, la Ministerial y el Forense dijeron que ya no había nada [de fragmentos óseos]. De repente, mi nieta se arrastró debajo de un predio y gritó: ‘¡Positivo!’ Se encontró con un brazo y ahí vamos de nuevo [...] Del 21 al 26 de febrero del 2022 sacamos más de 80 cuerpos en esa colonia”.

La hija de Lucero no falta a ninguna búsqueda. Con su corta edad, saliendo de la adolescencia a su juventud, ha encontrado en Tlajomulco de Zúñiga osamentas completas y restos óseos de diversas personas en varias casas conocidas como “de seguridad”.

Entre las afectaciones psicológicas que ha tenido por la desaparición de su madre y por literalmente abocarse a buscar en fosas clandestinas, suele arrancarse el cabello por ansiedad o desesperación o agarrar las tijeras y “tusarse” a mano limpia como una forma de descargar su ira. La abuela Guadalupe ha tenido que reprender a su nieta en varias ocasiones.

Hace más de un año, valiéndose de su juventud y agilidad, la hija de Lucero volvió a encontrar otra fosa en Chulavista, en una casa normal con vitropiso. La joven descubrió que había losetas de cemento removidas. Al levantar un par, aparecieron restos humanos. Tan sólo de esa casa han sacado cuatro cuerpos enteros, los cuales continúan a la espera de ser identificados.

“Hay muchas ‘casas de seguridad’ que tienen osamentas y que no han sido revisadas por la Fiscalía. Hay casas que están abandonadas, algunas con restos de bala. Nosotros tenemos que buscar a nuestros hijos en medio de alacranes, matorrales, olores fétidos y mugre”.

Guadalupe Camarena insiste en que, junto con sus dos hijas y nieta, no descansará hasta encontrar a todos y cada uno de sus hijos, en donde sea y como sea:

“Como Dios me los quiera dar”.

EPÍLOGO

“De noche, todos los gatos son pardos”. Y en la oscuridad política, el gatopardismo es hábito. Vivimos décadas de confusiones muy bien procesadas por el campo de la política. Donde se urden, bajo los manteles de las mesas negociadoras o bajo las faldas de esa prostituta que alimenta al poder, los “cantos de sirenas” que tanto engañan para devorar a los muchos en favor de unos pocos.

México es tierra maestra en estos menesteres. Incluso a la delantera de otros territorios en lo que concierne a maneras diferentes de actuar en la política. Y esto no es desconocido para quienes controlan los timones de este mundo de varias cabezas — ya no dos como en la Guerra Fría, ya no una como después, sino al menos tres o cuatro, pues no vivimos la misma polarización de hace unos 40 años—.

Aunque es más antigua la negociación principal: esta gran franja intermedia que es México entre el norte y el sur —reguladora de los hilos que durante más de un siglo han prevalecido en América— existe, se debe y respira en gran medida gracias a un “pacto” con Norteamérica respecto a todo el continente. Y ese arreglo no debe ser alterado. México es la contención necesaria de los “no bienvenidos” desde el centro, el sur, incluso desde África, Asia o actualmente, migraciones desde Europa.

Pero también es el traspasado donde caen muchas de las faltas, culpas, responsabilidades. Donde se han de mantener contenidos o frenados los problemas que no deben penetrar en el estilo de vida del norte de América. Por ser esa área de contención pactada, en ello radican muchas de las preocupaciones respecto al espectro que parece dominar actualmente: cada vez más, el país está marcado por una excesiva militarización de la vida pública y civil. Afectado gravemente por el deterioro institucional, a estas estructuras — sintomáticas de una crisis, porque responden a viejos modelos basados en una modernidad que ha dejado de funcionar en casi todo el orbe— se suma la debilidad de las alternativas de poder que establezcan un necesario equilibrio en este país de “dictaduras perfectas”, tamizadas por engañosas operaciones partidistas.

En estos años “obradoristas” ha sido creciente el discurso que

intenta responsabilizar de casi todo a ese vecino norteamericano, menos revuelto y brutal que estas tierras infestadas, bajo la idea de la intromisión imperialista. Por una parte es cierta la prepotencia, doble naturaleza y cinismo del proceder norteamericano, es algo que pudiéramos llamar “transhistórico”, por otra parte es el pretexto idóneo —bajo la vieja retórica, cada vez más falsa— para esgrimir los conceptos cada vez más vacíos de “soberanía” e “injerencia”. Porque el discurso “obradorista” está, como varios que aún perviven en el espectro occidental, desfasado respecto a ese aún informe fenómeno que en la actualidad está despidiendo lo pasado por una realidad futura que no comprenderá “lo nacional” como todavía pretende este gobierno de pensamiento y hacer estancado, obsoleto.

El siglo XXI nos ha deparado vivir en una etapa de cansancios o agotamientos. Y no parece que hayamos aprendido a reinventar otros posibles modelos y prácticas para la sociedad futura. Dentro de este colapso cada día más evidente, la concepción del liderazgo —si bien ha caído en descrédito por tantos ejemplos surgidos durante la etapa más crítica de la modernidad, tanto de izquierdas como derechas— está cada vez más lejana de lo que ha sido su modelo o definición.

Ya no son ejemplo los políticos. No poseen en gran medida los atributos de escucha y representatividad social, sino de los grupos de poder que representan. Han dejado atrás la noción del “saber decir” junto al “saber hacer”. No son veraces ni claros, son engañosos y gustan confundir a quienes creen o no en ellos. Mas esto sería pasto para largos análisis sobre la contemporaneidad que vivimos.

Los “líderes” —hoy más lejanos de su real definición— como quien dirige la nación mexicana y quienes se lo han propuesto, desde estados como Jalisco, a nivel de nación, están distantes de poseer una real empatía con las tantas realidades sociales que conforman a este complicado país. Ora populistas, ora elitistas, padecen de lo mismo en este sentido.

Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro Ramírez tienen en común, además de un perfil antisocial y sin remordimientos manifiestos, carecer de modestia y sentido de la vergüenza. Ambos

son tendientes a ignorar las normas críticas esenciales. Sean mesiánicos o pragmáticos, creen que poseen la solución a mucho, sino a todo.

Parecen defensores de la “democracia”, pero sus acciones los conducen a posiciones distantes de lo que ha sido su definición histórica y práctica —con muy pocos ejemplos reales en el orbe—. En este México que se vive hoy, unos intentan desarticular las instituciones existentes (no todas muy ejemplares en sus procedimientos por años, es cierto) y otros intentan dictar cómo se ejecuta la ley a través de su control. Sea por desmantelamiento o por imposición autoritaria, ambos se proponen dominar lo que se supone creado para la sociedad y no contra ella —siempre perfectibles, porque las instituciones son creaciones humanas—.

Vivimos un lapso de autócratas, que no permiten consensos y anhelan crear una hegemonía a la medida del poder que desean ejercer contra empresarios, que no sean parte de sus acólitos, contra intelectuales o voces críticas, contra centros universitarios y culturales, contra medios de comunicación y periodistas que no sean afines, contra organizaciones civiles, contra la oposición. Y hasta lo que pueda significar un contrapeso les incomoda.

Pero cabe preguntarse además, qué hace la prensa crítica, si en realidad hay una diversidad de enfoques fustigadores, dónde están los intelectuales como disensores, las figuras que no responden realmente a alguna posición de poder. Dónde se encuentra una real oposición que históricamente no ha perseguido escalar en el poder, sino proceder desde una ética en función de la construcción de una sociedad. Porque hoy mucho parece silenciado a través de titulaciones, becas, premios, similares prerrogativas de los poderes para acallar posibles voces y autoridades críticas ante lo establecido. Y en ello, lo que no es ajeno a la muerte provocada, al asesinato político.

Porque algo ha cambiado. Estos son tiempos de transformación y alianzas en las que los actores políticos continúan jugando con las palabras y las han vaciado de significados o sentidos. Incluso muchos ni poseen estilo o carisma y están plagados de ignorancia y embrutecimiento. Eso sí, tienen cada vez más claro que la política es una negociación permanente. Y así pretenden, pero con incultura

o desdén por la memoria colectiva —cultivada por unos pocos sin amnesia— unir extremos de esa engañosa esfera que es la política.

El periodo que se percibe es de extravío. Y de eso se valen los políticos negociadores y negociantes que distan mucho de ser honestos, honrados o congruentes. Cada vez están menos comprometidos con la sociedad. Cada vez son más mentirosos ante la misma. Pero preconizan lo contrario, que es lo que la mayoría quiere escuchar y, ciegamente, ver.

Eso también une a López Obrador y MORENA con Alfaro Ramírez y los suyos en Movimiento Ciudadano. Además de echarse las culpas unos a otros de las incapacidades o desintereses, de tildarse mutuamente con faltas, yerros y hasta ofensas, en el fondo son parecidos y parten del mismo mal de raíz. Porque tras toda aparente pelea y responsabilización, al final prevalece la impunidad. Porque hay un pacto entre las élites, hoy sin fronteras definidas con lo criminal.

Queda por ver del jalisciense qué resurgir político le depara y quienes continúan, se suman o separan de su ambición, un resurgir como el que Andrés Manuel tuvo que fraguar para sus dos intentos anteriores por llegar a la presidencia. Pero todos han pactado con uno de los estratos que más poder financiero posee en la actualidad: el crimen organizado en sus diversas facetas y el narco, uno de los más fuertes.

Como hemos planteado no pocos desde hace unos años: ya no vivimos la época en la que el crimen organizado y la ilegalidad que en torno a ellos se ha desarrollado, era un fenómeno clandestino; tampoco vivimos el periodo en el que se sabía de su presencia y era una fuerza beligerante contra la gobernabilidad mexicana; hoy vivimos el gobierno del crimen organizado dentro de las estructuras políticas y dirigentes desde las bases barriales, municipales, regionales, estatales y nacionales.

Hoy, lo que era antes ilegal, parece dominar en México. Las figuras institucionales, llamadas gobiernos de los estados, se han convertido en empresas criminales. El crimen organizado, en estos tiempos, parece un aparato, una extensión del Estado. O este es una extensión ya establecida del crimen organizado. Esta posible doble direccionalidad nos marca desde la inseguridad, hacia un

proceso aún desconocido, pero notorio.

El gobierno ha organizado sus circos, sus espectáculos mediáticos y ejemplarizantes para causar beneplácito en sus potentes vecinos y ponerle una zanahoria para andar —como al burro— a los segmentos sociales que ha manipulado. Pero ha sido con las figuras que ya no revierten un gran peso en la nomenclatura dirigida por el crimen con todos sus cárteles —unos más consentidos que otros, como se ha podido apreciar—. O manipulando a cabecillas criminales que ya cayeron en desgracia respecto a sus competidores más fuertes en la escalada del narco.

Pero la dinámica que propone y ha ensayado Alfaro Ramírez con los suyos, desde su surgimiento a nivel municipal hasta su entronización estatal en Jalisco, es de otra índole, aun interesante: hablamos de una mafia financiera e inmobiliaria sustentada en una suerte de oligarquía que comprende la presencia de cárteles, necesitados de mover sus multimillonarios recursos en esferas a donde no podían penetrar, de seguir a los viejos modelos de la política tradicional.

Y este sí es un fenómeno de nuevo tipo para la dinámica social y política. Sustentado en otro tipo de beligerancia que proviene —desde hace no más de diez años— de las estrategias de guerra que emplean al campo de las leyes, la legalidad y la jurisprudencia como armas principales. Jalisco no es el único estado, pero es donde mejor se percibe la concatenación de otro tipo de ejército. Sus soldados son los burócratas —estrato desprovisto realmente de convicción, que se mueve convenencieramente según sople el viento político, por tanto, brazo perfecto de ejecución—, jueces, fiscales, autoridades subordinadas (y dentro las policiales o de seguridad, aun el Ejército y otras facciones bélicas). Este tipo de guerra no es del todo conocida. Pero ha dado sus resultados en diversas naciones y es una modalidad contemporánea para derrocar gobiernos y regímenes completos.

A favor de esta cruzada de nuevo tipo, uno de los puntos débiles dentro del diapasón político mexicano es que, en su tradición partidista, existe desde hace mucho tiempo un “veletismo” o “chapulineo” de muchos de sus actores políticos, que mudan de un partido a otro conforme las conveniencias y negociaciones que

ofrece cada nicho, y no por la convicción ideológica que debería modelarse en aras de lo que se considera para beneficio de la sociedad. No son pocos los que se proponen postulaciones y luego deciden por cuál tendencia o coalición se dirigen, de acuerdo con su conveniencia y no principios.

Pero además se da el caso, apreciable con el fenómeno en torno a Alfaro Ramírez, de la ocupación completa de tendencias políticas como organización —una suerte de “golpe de Estado” intestino que es a la vez parte de las nuevas estrategias, porque de ese modo se hacen de un “puesto de mando” o “cuartel” ideológico—, como plataformas en ciernes y prestas a ser usurpadas ante la debilidad, inoperancia o falta de fuerza de otros actores políticos.

Es lo sucedido en Jalisco con Movimiento Ciudadano, que ha servido perfectamente para Dante Delgado Rannauro como coordinador nacional de un movimiento que pretende mostrarse como algo novedoso, aunque esconda estrategias nada originales, además de complicidades sospechosas.

Se considera que, a nivel nacional, el gobierno dejó de asumir la responsabilidad que le corresponde y se dejó de combatir la ilegalidad generada por el crimen organizado. Tal parece que el Ejército participa de esta subordinación presidencial, por lo que deja en una zona de ambigüedad su responsabilidad o no ante la ilegalidad. Y bajo esa sombrilla, varios estados son cómplices de esas estructuras criminales o ya los representan sin que muchos lo perciban aún. Tal parece que siguen la máxima que, superficial y demagógicamente, dicen combatir: *Quien se quede con el crimen, se quedará con el país.*

Movimiento Ciudadano opera, en lo que tiene sus similitudes con MORENA, manipulando una base tendiente al servilismo. Pero por conveniencias apoyadas en un capital dinámico a través de una amplia mafia financiera que oscila desde lo prohibido hasta lo permisible, desde lo criminal hasta lo aprobado. MORENA también juega en esa zona de lo no permitido y poco transparente, pero su diferencia es que tiende al populismo y así intenta “tocar base”; Movimiento Ciudadano disfraza su populismo, se viste de elitista y hasta de “legalidad”.

Ante gobiernos omisos desde hace mucho tiempo y actualmente,

con mayor evidencia, surgen estos fenómenos como en Jalisco, tendientes también al despotismo y a la usurpación de partidos, movimientos, estructuras, empresas, fuentes de capital, en combinación con una fuente potente de generación financiera como el crimen organizado; principalmente, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al parecer, nos encontramos ante la construcción de una nueva plataforma que se dice progresista, de izquierdas, pero conciliadora desde su aparente idea de disrupción ante la tradición política mexicana. Una plataforma que opera internamente con mucho capital de esa oligarquía financiera que juega muy bien con recursos e intereses locales e internacionales, desde la idea de quién es el mejor apostador en el juego que están haciendo como “nuevo poder”.

Pero esto es algo que viene desde hace más de 30 años. Lo que vemos en Jalisco es la implementación, disfrazada de izquierda, de una estrategia neoliberal que tiene en Carlos Salinas de Gortari a su gran cerebro vivo, activo desde el aparente retiro. Y ese es parte del mal de raíz. Él sigue siendo un genio mexicano, para privatizar y aumentar un capital que ahora se recicla desde el nuevo poder que se une con el anterior: el crimen organizado con la mafia del poder de cuello blanco y corbata. De ahí proviene Dante Delgado Rannauro. Veterano que practicó la usurpación de recursos y fuentes de riquezas a través de los canales legales, jurídicos y políticos en Veracruz (cuando fue gobernador).

Además, la práctica sigue demostrando que en el México contemporáneo ya no parece existir una responsabilidad constitucional por parte de quienes dirigen.

Ocurre como una inversión de ciertos factores en la balanza respecto a López Obrador y Alfaro Ramírez. El primero puede ser considerado no corrupto en sus acciones económicas —o al menos, hasta ahora no parece probable— pero en su actitud política parece serlo a diario. Su recurso principal es el doble discurso, el que explota cada día construyendo mentiras. Debemos comprender que una de las acepciones de la corrupción es la alteración de las cosas y los hechos e ir en contra de los demás y hasta de uno mismo. Alfaro Ramírez es parte de un poder empresarial más evidente.

Cada día más, representa una corrupción en sus acciones económicas. Sin embargo, es coherente, en ese sentido, en su actitud política, porque responde a la base corrompida que es la mafia empresarial a la que parece dar resultados y a través de la que, en Jalisco y tal vez fuera de la entidad, hoy se ha filtrado el capital financiero del narco.

Es interesante una relativa coincidencia temporal y es la asunción del CJNG desde 2009, el mismo año en que Enrique Alfaro resulta electo presidente del municipio Tlajomulco de Zúñiga por el PRD y el PT. Antes había tenido una actividad política visible desde 2003, cuando fue postulado por el PRI —del que fue miembro de 1999 hasta 2005— para presidente del mismo municipio. Pero no ganó. No obstante, fue uno de los regidores del municipio de 2003 a 2006. Coincidencia o no, de cierto modo, se han desarrollado paralelamente, gradualmente, se han visto más unidos y “casualmente”, tienen de estandarte a la “nueva generación”.

La de actores políticos que provienen de Jalisco y de la que se jacta el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano en los medios: esa gran mafia empoderada en el estado junto al CJNG —como bien indica su nombre—. Porque es interesante cómo ambas comparten en buena medida sus denominaciones y se unen simbólicamente, pero como queda argumentado, también en hechos.

Sin embargo, con Alfaro Ramírez en realidad se mantiene un proceder político tradicional: ser la cabeza visible de una materia gris que incluso está detrás de Movimiento Ciudadano y otros partidos políticos: el “salinato”. Una operación económica de élite a través de la política, despegada de la base social mayoritaria de México —base que sí ha sido instrumentalizada por la estrategia de la Cuarta Transformación desde su populismo barato, que no escapa de las viejas estrategias cocinadas ya en los años noventa, incluso, más allá en el tiempo—. Porque con la implementación de los llamados “programas sociales” lo que genera es un clientelismo político que, modelado mediante su discurso populista, le permite a MORENA la compra de votos a favor. La vieja fórmula que recompensa a quienes aplauden.

Frente a este escenario cada vez más ominoso, el populismo en el

poder niega y no reconoce nada. Tiende a justificarlo todo y cuando no tiene salida busca enemigos o los crea para responsabilizarlo. Para ello emplea tanto los resortes de las redes sociales y mediáticas, como igual monta peleas con otras instituciones, e incluso naciones, para crear una cortina de humo que desvirtúa a la sociedad de lo que es medular. Y entre tantos engaños a la sociedad, López Obrador esconde que no ha cumplido nada de lo que prometió combatir: no hay un sólo político de calibre preso por ello y, por el contrario, lo que realiza es un juego de apariencias, un teatro político que esconde las negociaciones ocultas con el crimen, con los presuntos oponentes a su gestión, y sobre todo sus nexos con dinosaurios políticos que influyen en más de una posición partidista.

Lo real es que, como muchos políticos, pero desde su estrategia disfrazada de “pacifismo”, evade calar en las causas reales del combate a la impunidad, protectora histórica de mucha corrupción y del crimen organizado.

Una cosa es cierta: México está, en su bregar en el mar de la política, pero no de la cultura como algo mayor, ante un peligroso “golpe de timón” que —escondido o no tanto— le espetará a Occidente y al mundo globalizado de hoy, en conjunto con otras naciones o procesos sociales, un nuevo estadio similar al que ocurrió en la antesala del siglo xv, cuando la barbarie generó un poder que se proyectó por siglos.

Sin embargo, dentro de su ferocidad, aquel periodo contenía otros fenómenos que impulsaron otras expresiones del ser humano e hicieron de aquel tiempo algo trascendental. Con la gran diferencia de que esa época trajo consigo una revolución mayor en lo cultural. Pero con tanto por cambiar desde esta inmensa realidad e interior pedestres y tan pocas expresiones de lo sublime, no parece que en México sea el caso.

